

R.3960

Rd.126359

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Derecho

Departamento de Derecho Internacional Privado



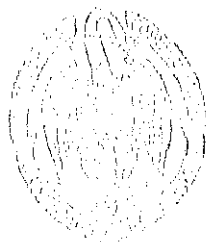
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5310351897

EVOLUCION DEL ESTATUTO DEL EXTRANJERO EN EL DERECHO HISTORICO ESPAÑOL

NOVA



BIBLIOTECA
DE DERECHO



Manuel Alvarez-Valdés y Valdés

Madrid, 1991

Colección Tesis Doctorales. N.º 312/91

© Manuel Alvarez-Valdés y Valdés

Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografía.
Escuela de Estomatología. Ciudad Universitaria.
Madrid, 1991.

Ricoh 3700

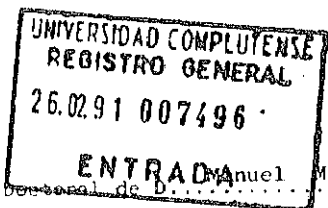
Depósito Legal: M-42069-1991

X-53-286919-1



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO



La Tesis Doctoral de D. Manuel Miguel

..... ALVAREZ - VALDES Y VALDES

Titulada: " EVOLUCION DEL ESTATUTO DEL EXTRANJERO
EN EL DERECHO HISTORICO ESPAÑOL "

Director Dr. D. José Carlos FERNANDEZ ROZAS

fue leída en la Facultad de Derecho de la UNIVERSI-
DAD COMPLUTENSE DE MADRID, el día 8... de febrero.
de 1991, ante el tribunal constituido por los siguien-
tes Profesores:

PRESIDENTE

~~XXXXXX~~ D. Eduardo García de Enterría y Martínez Cande

VOCAL 1.º D. Ignacio de la Cucha Martínez

VOCAL: 2.º D. Gonzalo Ares Alvarez

VOCAL: 3.º D. Ind. Mank. Espinosa Vicente

SECRETARIO: D. / ne Ambrosio. Thun. N. de la. Me

habiendo recibido la calificación de Apto. con
laude... por... unanimidad

Madrid a 8 de febrero de 1991

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Dr. A. H. M.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

EVOLUCION DEL ESTATUTO DEL
EXTRANJERO EN EL DERECHO
HISTORICO ESPAÑOL

Tesis de

Manuel ALVAREZ-VALDES Y VALDES

para optar al título de Doctor en Derecho

Dirigida por el Prof. Dr. D.

José Carlos FERNANDEZ ROZAS

Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense

Madrid, noviembre de 1990

INDICE

INTRODUCCION	6
I.- <i>Objeto</i>	6
II.- <i>Metodología</i>	17
III.- <i>Fuentes</i>	24
IV.- <i>Plan de Exposición</i>	26
 Parte I.- EL EXTRANJERO EN LA ANTIGÜEDAD	
Capítulo I.- El extranjero en la Edad Antigua y su tratamiento en la Península Ibérica	30
I.- <i>Consideraciones generales</i>	30
II.- <i>Examen sectorial en las antiguas civilizaciones</i>	37
III.- <i>Trato dispensado en la antigüedad greco-romana</i>	42
1. El extranjero en el mundo griego	42
2. Roma y su legado en la Península Ibérica	50
3. Influencia de la Iglesia bajo los romanos	64
IV. <i>Balance del período</i>	65
 Capítulo II.- El extranjero en la época visigótica	67
I.- <i>Consideraciones generales</i>	67
II.- <i>Estudio de los textos en presencia</i>	70
1. Falta de sistemática legal de la extranjería	70
2. Extranjeros al reino y extranjeros a la ciudad	76
3. Relaciones con el mundo exterior	78
4. Relaciones Iglesia-Estado: los concilios	87

III.- *Examen de las situaciones particulares* 88

1. Mercaderes, jueces y telonarios 88
2. Una situación especial: los judíos, ¿eran extranjeros? 91
3. Los siervos. Situación del que es vendido dos veces en tierra extraña 102

IV. *Balance del período* 104

Parte II.- EL EXTRANJERO DURANTE LA RECON-
QUISTA

Capítulo III.- Situaciones y estatutos diferenciales 111

I.- *Consideraciones generales* 111

II.- *Extranjería* 118

1. Falta de sistemática legal en el concepto de extranjería 118
2. Extranjeros al reino y extranjeros a la ciudad 119

III.- *Naturalización* 125

1. Quiénes son naturales 125
2. Régimen castellano-leonés, aragonés y navarro 129
3. Régimen de Cataluña 142

IV.- *La repoblación: La Presura. Pobladores, vecinos, aldeanos y "hombres de España"* 158

1. Referencias a pobladores y vecinos en los Fueros Municipales 158
2. Vecinos y aldeanos 184
3. Visión del "hombre extraño" en los Fueros Municipales 209
4. Pobladores extraños en los Fueros Municipales (recapitulación) 247

	<u>Pág.</u>
5. Hombres de España	258
Capítulo IV.- Derechos y obligaciones de los extranjeros	264
I.- <i>Derecho privado</i>	264
1. Aspectos generales	264
2. Viajeros, romeros y peregrinos	266
3. Mercaderes, comercio de ganados. Contratación	273
4. Ejercicio de derechos: compra de inmuebles, régimen de bienes en el matrimonio y sucesiones	282
5. Otros aspectos relevantes (derecho de naufragio y de marca)	287
II.- <i>Derecho público</i>	291
1. Aspectos generales	291
2. Aspectos tributarios y monetarios	294
3. Prohibición de ejercer cargos públicos	296
4. Documentación requerida	298
5. Relaciones Iglesia-Estado	299
III.- <i>Derecho internacional privado</i>	305
IV.- <i>Situaciones especiales</i>	310
1. Aspectos generales	310
2. Judíos y moros	312
3. Francos	348
4. Egipcianos	349
5. Vaqueiros de alzada	350
V.- <i>Balance del periodo</i>	351

Parte III.- EL EXTRANJERO EN LA EDAD MODERNA

Capítulo V. Situaciones y estatutos diferenciales 367

I.- *Consideraciones generales* 367

II.- *Una incipiente reglamentación* 369

1. Aspectos generales 369

2. Permiso para residir y ejercer oficios los extranjeros católicos y amigos 371

3. El Fuero de Extranjería y los Jueces conservadores 382

4. La jurisdicción de los Tribunales de guerra 393

5. Matrículas de extranjeros 396

6. La repoblación 404

7. Recapitulación 407

III.- *Abolición de la "extranjería entre Reinos". Situación del Derecho indiano* 411

IV.- *Naturalización* 419

Capítulo VI.- Derechos y obligaciones de los extranjeros 424

I.- *Derecho privado* 424

1. Viajeros, romeros y peregrinos 424

2. Comerciantes extranjeros y transeúntes 426

3. Industrias y oficios 432

4. Derecho sucesorio 435

5. Navegación 441

II.- *Derecho público* 446

1. Aspectos generales y penales 446

2. Aspectos tributarios y monetarios 453

3. Prohibición de ejercer cargos públicos. Situación especial de Embajadores y Cónsules 456

	<u>Pág.</u>
4. Documentación requerida	462
5. Relaciones Iglesia-Estado	463
III.- <i>Situaciones especiales</i>	476
1. Los franceses. Sus oficios	476
2. Malteses, moriscos y judíos	477
3. Egipcianos	480
4. Tratados internacionales	487
5. Derecho nobiliario, Hospitales y Colegios	492
6. El Gobierno de España ante la Revolución Francesa	494
IV.- <i>Balance del período</i>	498
CONCLUSIONES	509
RELACION DE MATERIALES UTILIZADOS	523
A) Índice cronológico de disposiciones tenidas a la vista	524
B) Cuerpos legales	545
C) Bibliografía	550

INTRODUCCION



INTRODUCCION

I.- OBJETO

La redacción de esta memoria tiene por objeto realizar una investigación sobre cuál fue la evolución del estatuto jurídico del extranjero en España. Para que se presente el fenómeno estudiado es necesario que exista un ente político o social, por pequeño y rudimentario que sea, y que dentro de su órbita aparezca una persona que no forma parte de aquél, pero que de alguna manera se relaciona con el mismo. Por lo tanto, se requiere que se den los siguientes elementos:

A) Existencia de un grupo social dotado, en mayor o menor grado, de soberanía política, de facultad de mando, de un cierto "imperium". Este grupo social se presenta con un soporte territorial, y con unas características más o menos especiales, que lo hacen ser diferente del resto de los grupos, o -por lo menos- estar dotado de independencia, de personalidad distinta de los otros grupos. No es preciso que el grupo en cuestión esté situado en el grado o vértice más elevado de la soberanía política, es decir, que constituya lo que hoy se llama el Estado, basta con que tenga participación, más grande o más pequeña, en dicha soberanía, como ocurre con la Ciudad, con la Villa, o con un determinado territorio, que es uno más de los sometidos al mismo monarca.

B) Existencia -también- de una normativa jurídica determinante de los derechos y de los deberes de los miembros del grupo, que afecten tanto al ámbito público, como al privado.

C) Aparición de un sujeto que no forma parte del repetido grupo, pero que en un momento concreto entra en relación con el mismo, de manera permanente o transitoria. Mientras no aparece esa persona ajena al grupo, y no entra en relación con él, no se crea la situación concreta que nos ocupa.

D) No es preciso que el extraño sea súbdito de un rey distinto del que lo es del grupo social político, piénsese en los "extraños a la ciudad", para cuyo "status" suele ser indiferente quién sea su rey o su príncipe; puede serlo el de otra ciudad, o incluso puede ser apátrida, sin que una u otra situación altere necesariamente el tratamiento que va a recibir de esta ciudad. Basta, para que surja la situación, con que sea "forastero", ajeno a la ciudad, para que se dé la que estamos tratando de definir o, mejor, de delimitar.

E) Como consecuencia de todo lo anterior, regulación por el ente político de la situación sobrevenida, con el criterio que se estime oportuno, en función de las circunstancias: en eso consiste precisamente la extranjería o normativa jurídica de la condición de los extranjeros, que a lo largo de la Historia será cambiante, según las variantes del lugar y

del tiempo, aunque nunca de manera caprichosa, sino en función de la postura política, filosófica, social, religiosa, económica, etc., que en cada caso adopte el ente público, dotado de "imperium", frente al extraño que aparece dentro del círculo de su soberanía. Y es aquí donde aparece el rasgo característico de la noción de extranjería: su relatividad (1). En efecto, siempre se es extranjero en relación con una particular comunidad política. Dicha comunidad experimentará notables transformaciones a lo largo del devenir histórico. Así, en las sociedades pre-estatales estaremos ante el clan o la tribu, en la Antigüedad clásica ante la "polis", en la Edad Media ante la ciudad, el señorío o el reino, y a partir de la Modernidad ante el Estado soberano. Ahora bien, tales transformaciones, sea cual sea el perfil de la institución estudiada y su denominación en cada etapa, presentan un denominador común: la situación diferencial en orden al goce de derechos respecto a los naturales de una determinada comunidad política. Tal "situación diferencial" en las distintas etapas históricas y las causas que la motivan será el núcleo central de nuestra atención en la presente Memoria. Ello implica que el término "extranjería" se utilice con un sentido intemporal, como expresión que ha adquirido carta de naturaleza en la doctrina, y no como término antitético a la noción de "nacionalidad", propia del modelo de Estado

(1) Acerca de la noción, véase J. D. González Campos, J. C. Fernández Rozas y R. Recondo Porrúa, *"Derecho internacional privado. Parte especial"*, vol. I, Oviedo, Ojanguen, 1984, págs. 161 a 162.

diseñado tras la Revolución francesa (2).

En otro orden de ideas, es forzoso recoger las del profesor José M^a Espinar Vicente (3), cuando dice, partiendo de Huber, que, en primer término, las leyes de cada Estado rigen en los límites de su territorio y vinculan a todos los sujetos, pero fuera de este ámbito carecen de fuerza; y en segundo término, se entiende por sujetos de un Estado a todas las personas que se encuentren dentro de su esfera, ya sea de manera estable o temporal; por último, los Estados, "de comitate", permitirán que las leyes de cada pueblo, tras su aplicación territorial, conserven sus efectos en todas partes, a condición de que ni los demás Estados ni sus sujetos se vean afectados en su poder o en sus derechos.

La construcción del Derecho internacional privado debe arrancar

(2) Insiste F. de Castro y Bravo, en el carácter "negativo" de la noción. Véase *"Derecho Civil de España. Derecho de la persona"*, t. II, Madrid. I.E.P., 1952. Dicho carácter, que se predica hoy por contraposición a la noción de "nacionalidad", es común en las modernas normativas de extranjería. Sin ánimo de exhaustividad, baste recordar el art. 1 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España ("B.O.E.", 3-VII-85). Respecto al alcance histórico del concepto de nacionalidad, véase F. de Castro y Bravo, *"Los estudios históricos sobre la nacionalidad (apostillas y comentarios)"*, "Revista Española de Derecho Internacional" (en adelante "R.E.D.I."), vol. VIII, 1955, págs. 217 ss.; del mismo autor, *"La legislación sobre la nacionalidad y el sentido nacional"*, "Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria", vol. VI, 1943-45, págs. 235 ss.

(3) *"La extranjería en el sistema español de Derecho Internacional Privado"*, Ediciones T.A.T., Granada, 1987, pág. 18 y sts.

del tercer principio, mientras que las cuestiones de extranjería deben incardinarse en los dos anteriores. Pero no hay que olvidar que en aquel estado de la evolución científica, la extranjería y el conflicto de leyes convergían en el vértice común del Derecho de gentes, de manera que el Derecho internacional público fijaría el mínimo de derechos que los súbditos de cada Estado deben gozar en el territorio de los demás, y señalaría las normas para resolver los conflictos entre los distintos Derechos particulares. En concreto, desde la época de la construcción estatutaria holandesa, hasta ahora, en que la extranjería cambia su función, la evolución histórica de cada uno de los sectores influye sobre el otro, si bien el Derecho internacional privado constituye un "prius" de la extranjería.

Retomando la cuestión, como consecuencia de la variedad de circunstancias, van apareciendo las diversas clases de extranjeros: de paso, establecidos o con quasi-domicilio; del exterior y del interior; nacidos fuera o dentro; de país amigo o enemigo; privilegiados (los agentes diplomáticos, los mercaderes y los peregrinos) y desaventajados (los mendigos, los vagabundos, los nómadas, los gitanos, y en cierto modo los judíos); los extranjeros al poder del rey, o al de la villa o ciudad; aquellos cuya utilidad no es cotidiana (actores, atletas, artistas), y los que están en la situación contraria (comerciantes, mercenarios, médicos), hasta llegar a los indeseables (prisioneros de guerra, refugiados comprometedores)...

Desde otro punto de vista, los ha habido en situación de espera (con referencia al principio de que "el aire de la ciudad libera a uno", después de un año y un día de permanencia); o estaban los sumisos, "ajenos a las sociedades del medioevo" -por ejemplo-: jornaleros, charlatanes, esclavos... Para Angel Sánchez de la Torre, al prologar una obra relacionada con este tema (4), el fenómeno migratorio es mucho más importante, natural, antropológica, jurídica y políticamente, de lo que podría resultar de un examen atenido a la situación actual, y pone ejemplos que van desde las invasiones germanas hacia el Occidente europeo, hasta la convivencia de cristianos, islámicos y judíos en las ciudades mediterráneas medievales (aparte de otras situaciones más próximas a nosotros en el tiempo). A su lado, están también las migraciones individuales por razones mercantiles, naturales, o de simple inquietud de los viajeros (5).

Todo ello hace que surja lo que dicho autor llama "amistad de extranjería", bajo una normativa más ética que jurídico-política, que lleva a crear lo que denomina relación de "compadrazgo", en el que la

(4) R. M^a Ferrer Peña, *"Los derechos de los extranjeros en España"*, Editorial Tecnos, 1989, pág. 15 y sts.

(5) Véase J. M^a Espinar Vicente, *"Los movimientos migratorios y su encuadre sistemático en el Derecho internacional privado"*, "Anuario de Estudios Sociales y Jurídicos", vol. VII, 1978, págs. 129-152, y J. C. Fernández Rozas, *"Los movimientos migratorios y la nueva configuración del tráfico externo"*, "Anuario del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional", vol. 8, 1987, págs. 49-74.

diferencia entre parentesco ritual (por ejemplo, por matrimonio) y amistad ritualizada (entre extranjeros) desaparecía en la práctica. No obstante, la institución, a pesar de los cambios temporales, mantiene hoy su vigencia, dentro de la inevitable variedad de las situaciones. Con lo anterior, queda puesto de relieve lo sugestivo del tema, por la riqueza de matices de su contenido así como por las dificultades que el objeto de la investigación ha de presentar necesariamente.

Hemos de empezar por reconocer que proyecto tan amplio puede ser considerado como pretencioso en demasía. Pero ahí estriba precisamente la razón que nos permitirá, quizás, salir al paso de ese reproche, del que sólo seríamos absueltos si, al final, lográramos superar con un mínimo de acierto nuestro propósito. Ante la inexistencia de un estudio que comprenda, en forma sintética, el desarrollo de la evolución global de estatuto jurídico del extranjero en lo que hoy llamamos España, abordar su realización constituye un reto difícil de esquivar, por la utilidad que puede suponer el acceso a unas conclusiones que resuman una evolución mucho más que milenaria, junto con el detalle de los pormenores de la misma.

Es cierto que la materia ha sido estudiada, ya sea incrustada dentro de los tratados generales de Derecho internacional privado junto con otros temas de esta disciplina, ya con referencia a períodos de tiempo determinados, o desde el punto de vista de aspectos concretos de

la actividad de los extranjeros (por ejemplo, el comercio o la industria), pero no existe un estudio general, sin límites cronológicos, y que trate de abarcar las diferentes facetas de la extranjería. Sirvanos de antemano, como atenuante, la dedicación que a este estudio hemos venido dedicando desde el momento de remontar la fecha ya muy lejana de nuestra Licenciatura, que nos ha permitido ir acumulando, en muchas horas -y en muchos años- sobre esta pequeña parcela del Derecho, la información que, a nuestro atrevido juicio, es hoy suficiente para, después de ser analizada, tener la osadía de presentar una conclusiones sintéticas.

En todo caso, queremos destacar que el interés actual del tema es evidente, a nuestro juicio, y ello a pesar de que el estudio tenga una delimitación puramente histórica, al terminar con el Real Decreto de Extranjería de 1852, porque la materia sigue teniendo una actualidad palpitante. Cada día saltan a las páginas del Boletín Oficial normas internas o tratados internacionales que regulan materias que aquí se analizan en su pasado: el derecho de asilo, la condición de refugiado, las inversiones extranjeras, los derechos y libertades de los extranjeros en España... *Nihil novum sub sole*. Por eso, aparte del interés en adquirir un conocimiento de las soluciones dadas a este problema en el pasado, las mismas han de servir de magisterio para resolver los existentes en el momento actual y de contraste que permita planificar las soluciones futuras.

Ese pensamiento hemos tenido presente al tiempo de ir desarrollando este estudio, y en él encontramos si no la única, sí una de sus más decisivas justificaciones, puesto que, como dice el profesor Eduardo García de Enterría (6), "la Ley mira necesariamente al tiempo futuro, con ánimo de encuadrar su movimiento incesante. Los juristas que no son historiadores, interpretan esas leyes, postulan ciertas aplicaciones o inaplicaciones de las mismas; el argumento histórico no tiene otra intención en su argumentación que extraer un vector dinámico que le permita proyectar hacia adelante una determinada interpretación de la ley actual, por continuidad o por contraste... El Derecho positivo cambia... justamente por la necesidad de adaptarse a *"la realidad social en que (las normas) han de ser aplicadas* (artículo 3.1 del Código Civil)".

Nosotros interpretamos que ello no supone una infravaloración de la Historia, sino simplemente situarla en el lugar que le corresponde en la investigación del Derecho, que es muy importante, como veremos a continuación.

En consecuencia, dicho autor se ha ocupado -por ejemplo- de "Turgot y los orígenes del municipalismo moderno" (7), estudio en el que se contienen observaciones sobre el régimen municipal histórico francés

(6) "El Derecho Administrativo en el siglo XXI", en la revista jurídica "La Ley", número 2.603 (especial aniversario), 25 de octubre de 1990, pág. 1.

(7) "Revista de Administración Pública", número 33, 1960, pág. 79 y sts.

perfectamente aplicables al español, al igual que lo era a nuestra situación política la frase de dicho ministro a su rey: "La causa del mal, Señor, es que vuestra nación no tiene Constitución".

Pero hemos de volver, de nuevo, a "El Derecho Administrativo del siglo XXI" (8), y apreciar la coincidencia de los dos principios básicos de éste con los relativos a la situación de los extranjeros, que se ven amenazados a lo largo de los siglos, principios con los que la Revolución Francesa trató de configurar el Derecho Administrativo naciente con posterioridad a la misma: el de legalidad y el de libertad (cosa distinta sería comprobar si los mismos fueron alcanzados). El círculo se completa -necesariamente habría de ocurrir así- con una llamada -también equiparable en nuestro caso- a un principio más: el de igualdad ante el estrado de la Justicia.

No podemos terminar este apartado sin referirnos a las ideas de un Maestro del Derecho internacional, como es el profesor Mariano Aguilar Navarro (9), que dice: "Lo que representa el dato histórico, el ser histórico para el Derecho Internacional es auténticamente incalculable...

(8) Eduardo García de Enterría, *"Algunas reflexiones sobre el Derecho administrativo norteamericano (a propósito de una nueva exposición sistemática del mismo)"*, en "Revista de Administración pública", número 85, 1978, pág. 241 y sts., especialmente 259.

(9) *"Observaciones críticas en torno a la Historia del Derecho Privado Internacional"*, en "Anales de la Universidad Hispalense", XIX, 1959, pág. 1-26.

Mis trabajos de Derecho internacional público están todos ellos concebidos de acuerdo a esta apreciación altísima del factor histórico."

"...Una rama jurídica de la que me siento tan próximo, tan atraído como es el Derecho administrativo han constituido un precioso "test" para demostrar hasta qué grado de intensidad ha calado la influencia historicista... Mención especial merece la obra, ya muy madura (hablaba en 1959), del Doctor García de Enterría, que ha sabido dar a sus estudios una ambientación histórica sin la cual hoy resulta imposible interpretar las categorías más esenciales del régimen administrativo."

La Memoria termina prácticamente al final de la Edad Moderna, es decir, que la investigación no continúa después de la consagración legislativa del liberalismo, que -en España y en esta materia- se produce con la promulgación del Real Decreto de Extranjería de 1852, que tuvo como virtud dar un nuevo trato al extranjero, de manera abierta y sistematizada.

Las razones que nos han determinado a ese planteamiento estriban en que el panorama se presenta de manera absolutamente distinta a partir de ese momento, en que la normativa se hace mucho más amplia y compleja, por lo que se desbordaría la pretensión inicial de acotar de manera razonable la materia, por otra parte ya estudiada a partir de ese momento por otros autores, y en que, además, la larguísima evolución

que va desde disposiciones aisladas sobre la extranjería hasta que se alcanza la igualdad de derechos entre extranjeros y nacionales (pasando por el principio de reciprocidad) se consuma ya entonces.

II.- METODOLOGÍA

Una vez delimitado el objeto del estudio, surge la necesidad ineludible de elegir el método que sea acertado para emplear en la investigación.

En este caso, en que se analiza la evolución de una institución a lo largo de los siglos, se hace inevitable acudir al método histórico, fruto de la Escuela Histórica alemana del siglo XIX, iniciada por Hugo, y en relación con la cual la aportación de Savigny es esencial (en "La vocación de nuestro siglo para la legislación y para la ciencia del Derecho", "Sobre el fin de la revista de la Escuela Histórica", etc.) y siendo Puchta su más inmediato seguidor (10).

En España, el primero en seguir su orientación es P. J. Pidal, y tras él, D. de Cárdenas y M. Colmeiro y los autores de la "Renaixença"

(10) A. Hernández Gil, *"Metodología de la Ciencia del Derecho"*, Madrid, 1971, I, pág. 90.

(Sonpots, Subirana, Martí de Eixalá, Pernmanyer, Durán y Bas, pero E. de Hinojosa es la figura más importante (11).

Para la Escuela Histórica, el Derecho no tiene existencia autónoma, sino que es algo privativo de un pueblo, como su lengua o su folklore, es el resultado de su conciencia colectiva, nace a través de la jurisprudencia, pero nunca del arbitrio del legislador, que únicamente crea un Derecho excepcional para alcanzar unos fines políticos, con el fin de eliminar contradicciones, dudas o lagunas, o para alcanzar una codificación. Está sometido a un continuo movimiento y un desarrollo ininterrumpido para acomodarse a las circunstancias nuevas creadas en la sociedad. Por eso, Savigny llega al carácter necesariamente histórico de todo el Derecho (12).

Según J. M. Pérez-Prendes (13), una cosa es demostrar que las normas jurídicas sean justas y racionales, y otra distinta explicar la historicidad de su aparición, las circunstancias, causas, necesidades y hechos que dieron lugar a su configuración.

(11) "Obras" de E. de Hinojosa, tres tomos (1948, 1955, 1973).

(12) E. Montesinos Ferrín y J. Sánchez-Arcilla, "Introducción a la Historia del Derecho", Dickinson, Madrid, 1988, I, pág. 15 y sts.

(13) "Historia del Derecho español", Parte General, Ediciones Darro, Madrid, 1973, pág. 31 y sts.

Carlos Marx se presenta ya en su juventud (1842) como enemigo de la Escuela Histórica, y tildaba de "frívolos" los postulados filosóficos conservadores, que despreciaba por su preocupación por el pasado, aunque los especialistas entienden que Savigny fue tenido en cuenta por Marx en los trabajos anteriores a la redacción de "El Capital" (14).

Para otro autor (15) se trata en realidad de algo más que una disputa entre escuelas, ya que se da en un momento decisivo de la fijación del pensamiento de Marx. Este reprocha a los integrantes de esta escuela el evitar todo roce de sus ideales con la realidad, de manera que a fuerza de respetar a aquéllos no los cumplen, sino que sólo les dan culto; y también que han interpretado el mundo de diversas maneras, cuando de lo que se trata es de cambiarlo. En la madurez, Marx llega a sus últimas consecuencia en la polémica, censurando que sus enemigos ideológicos ascienden de la tierra al cielo, pues -según él- la moral, la religión, la metafísica y todas las demás ideologías no conservan la apariencia de su autonomía. Son los hombres, al desarrollar su producción y tráfico materiales, los que modifican su realidad, su pensamiento y los productos de éste. La conciencia no determina la vida, sino la vida determina la conciencia.

(14) J. A. Escudero, *"Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas"*, Madrid, 1987, pág. 56.

(15) F. González Vicén, *"La crítica de Marx a la Escuela Histórica"*, en *"De Kant a Marx (Estudios de Historia de las ideas)"*, Valencia, 1984, pág. 175 y sts.

En todo caso, conviene puntualizar que la utilización de este método no debe limitarse a ser considerado como el medio para escribir unos simples capítulos de Historia del Derecho, sino que no hay que perder de vista que lo que se estudia son unas instituciones en constante evolución, que a lo largo de los tiempos nos llevan hasta el momento presente.

Los principios fundamentales del método histórico son (16): el empirismo, que obliga a conocer el objeto del análisis a través de la experiencia, partiendo de la negación de la existencia de unos principios jurídicos predeterminados; la causalidad, en cuanto que los fenómenos tienen siempre una causa productora que determina, en este caso, la evolución del Derecho; y una cierta irracionalidad, que nos lleva al relativismo, puesto que los cambios que se producen en la sociedad no tienen siempre una justificación aparente.

Si partimos de la idea recogida más arriba, de que la utilización del método histórico no se limita al simple desarrollo de algo propio de la Historia del Derecho, llegaremos a la conclusión de que este procedimiento no sólo puede, sino que debe ser empleado de manera conjunta con otros, para tratar de explicar las instituciones y sus circunstancias, es decir, que no es un sistema excluyente de otros, sino al contrario.

(16) A. Hernández Gil, id., pág. 95.

Esto lleva, como inevitable consecuencia, a la utilización de un método interdisciplinar, dado que la materia fundamental del estudio se relaciona con otras disciplinas, encuadrables dentro del Derecho (público o privado), o -incluso- fuera del estricto campo jurídico (17).

El primer punto a considerar consiste en que la situación a analizar se desenvuelve en el marco de una superestructura política, dentro de la cual aparecen unos intereses de poder, que se relacionan y, a veces, se enfrentan entre sí. Son los intereses de los que mandan y de los que obedecen: de los reyes y señores, de los súbditos...

Al lado, y en ocasiones frente a ellos, aparecen los intereses religiosos, no siempre circunscritos a la esfera de lo espiritual (sino que a veces invaden el ámbito del poder y de las apetencias materiales), que también se mueven, e influyen en la vida de los ciudadanos.

Tampoco se pueden olvidar, pues son el substrato de la mayoría de las instituciones, los intereses económicos en toda su variada gama, y que en este caso tienen una importancia obvia.

(17) Que ello es así se aprecia, de manera evidente, por ejemplo, en la tesis doctoral de J. A. Tomás Ortiz de la Torre: *"El régimen jurídico de la extranjería en la España del siglo XVIII y la participación del extranjero en la industria nacional"*, Madrid, 1972, la que tantas veces tendremos que citar a lo largo de este trabajo.

Desde otro punto de vista, dentro del ámbito de la superestructura política se nos presentará un esquema multiforme y cambiante de ordenación del territorio, no siempre concebido de arriba a abajo, sino que, por el devenir de los tiempos, va apareciendo como un fruto de las circunstancias de cada momento, y más a lo largo de un extenso período histórico, que pasa por muy diferentes vicisitudes políticas.

Por contraposición, aparece una infraestructura social, cuya existencia da lugar al análisis de una serie de cuestiones sociológicas, como son los movimientos migratorios (del exterior al interior, del interior al exterior, y dentro del interior), la problemática religiosa y racial (judíos, moriscos, egipcianos); las normas de entrada, paso y salida de los extranjeros, etc.

Existe, además, una estructura de índole legislativa, que regula la adquisición y pérdida de la nacionalidad, la extranjería entre los diferentes reinos o entes políticos españoles, la determinación de la legislación aplicable y el caso concreto de la jurisdicción competente para enjuiciar las cuestiones litigiosas, con su transcendencia procesal.

Todo esto son materias que corresponden a diversas disciplinas, que se relacionan con aquella dentro de la que se enmarca este estudio, y que se deben tener presentes, lo que abona la utilización, junto con el método histórico, del interdisciplinar.

Compatible con lo anterior y, además, también necesario para acercarnos a la realidad todo cuanto sea preciso, es acudir en diversos casos al conocimiento de cuál fue el tratamiento de instituciones semejantes o análogas en otros países y épocas. Ello conduce a la utilización del método del Derecho comparado, que servirá para poner de relieve los denominadores comunes y, más especialmente, los contrastes existentes en los tratamientos normativos surgidos ante situaciones iguales o parecidas.

La utilización de los diferentes métodos que quedan reseñados se trata de realizar de manera que el planteamiento no pierda unidad, y que el empleo simultáneo de todos pueda permitir obtener tanto una aproximación a la materia como una perspectiva que facilite, al mismo tiempo, un mejor conocimiento de la cuestión, que es, en definitiva, lo que se persigue, puesto que el objeto ha de primar sobre el método, y no éste sobre aquél, dado que nunca se ha de olvidar que los métodos han de adaptarse a los problemas, y no al revés, como exige la pura lógica.

III.- FUENTES

Para conseguir un conocimiento lo más acertado posible del objeto del estudio, que es, sin duda, una parcela del Derecho positivo, la primera exigencia del método de investigación consiste, como en cualquier otro caso semejante, en un examen minucioso y directo de las fuentes jurídicas, entendiendo como tales, ante todo, las que merecen con la debida exactitud ese nombre, es decir, las normas legales, y sin ampliarlo a los resultados de su aplicación práctica, que determinarían una búsqueda interminable, no siempre fructuosa y que en la mayor parte de los casos sólo daría una visión parcial. La contemplación de esas normas jurídicas se completa con aquellos estudios históricos que contienen referencias a costumbres, situaciones, etc., que pueden llevar al conocimiento del Derecho aplicado en cada momento.

Partiendo de lo anterior, se ha dedicado, además, la debida atención a aquellas obras generales de investigación en las que, sólo como una parte de ellas, se aborda la problemática de la condición jurídica de los extranjeros; así como a las que han tratado la cuestión con referencia a períodos de tiempo o a situaciones determinadas.

Además, nos hemos detenido en la abundante bibliografía que interpreta algunas etapas de nuestra Historia o, incluso, toda

ella (18). El resultado inmediato de su lectura no tiene su sitio en las páginas que siguen pero nos ha servido -indudablemente- para conocer mejor el "caldo de cultivo" en el que se ha ido desenvolviendo el fenómeno de la extranjería.

En esa misma línea, hemos examinado más de ochenta libros de viajes de extranjeros por España, o que contienen referencias históricas a la Península. Además de textos clásicos como los "Comentarios" de Julio César, el "Libro de la guerra de España" de Aulo Hircio Pausa, o los de Estrabón, esta lista de viajeros va de Juan de Gozy (año 950), pasa por Américo Picaud (1.123), Mohamed-Al-Drisi (1.154), Abulfeda (siglo XIII), Ibn Batutah (siglo XIV), para seguir con Jorge de Ehinger, León de Rosmithal y Jerónimo Münzer (siglo XV), y, a partir de entonces, con Antonio de Lalaing (que relata los primeros viajes de Felipe el Hermoso), Lorenzo Vital (de Carlos I), los marqueses de Villars, Madame d'Aulnoy (siglo XVII), etc., etc., hasta llegar a

(18) J. A. Antonio Maravall: *"El concepto de España en la Edad Media"*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964; A. CASTRO: *"España en su Historia (cristianos, moros y judíos)"*, 1948; y especialmente, *"La realidad histórica de España"*, Editorial Porrúa, México, 1954, segunda edición en 1962, hasta una sexta, 1975; C. Sánchez-Albornoz: *"España, un enigma histórico"*, primera edición en 1956, la última en 1977, EDHASA, Barcelona. No nos vamos a referir a la apasionada discusión entre los dos últimos, cuya historia ha sido escrita por J. L. Gómez-Martínez (*"Américo Castro y el origen de los españoles. Historia de una polémica"*, Biblioteca Románica Hispana, Editorial Gredos, Madrid, 1975), y analizada por V. Cantarino: *"Entre monjes y musulmanes. El conflicto que fue España"*, Editorial Alhambra, 1978; y por S. de Madariaga: *"Españoles de mi tiempo"*, Editorial Planeta, Barcelona, 1974.



J. Townsend y Arthur Young (a finales del siglo XVIII), para terminar con los románticos Richard Ford y George Borrow, en la primera mitad del siglo XIX.

Todas estas lecturas, cuyo contenido queda, desde luego, al margen -pero al lado- de lo que se dice a continuación, han sido útiles para conocer mejor lo que Unamuno llamaba la "Infrahistoria", la realidad que está por debajo de la Historia oficial, y de los escuetos textos legales, y ello referido al objeto sobre el que ha versado la investigación.

Es muy notable la curiosidad que por España han sentido los viajeros, que -después- han recogido por escrito sus observaciones. La colección del Dr. Gregorio Marañón sobre este tema se hizo famosa (19).

IV.- PLAN DE EXPOSICION

El desarrollo temporal sigue una división en Partes de las que la primera se ocupa del extranjero en la Antigüedad, comprendiendo tanto

(19) Quien desee conocer al detalle el fruto de estos escritores puede consultar: *"Viajes de Extranjeros por España y Portugal"*, recopilación, traducción, prólogo y notas por J. García Mercadal, tres tomos, Aguilar, Madrid, 1952-1962; y J. M^a Díaz Borque: *"La vida española en el siglo de oro según los extranjeros"*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1990.

lo que tradicionalmente se conoce como Edad Antigua (con referencia a diferentes civilizaciones, y en especial al mundo greco-romano), como la época visigótica.

Se pasa después a abordar la extranjería durante la Reconquista, con detención en las situaciones y estatutos diferenciales, al haber varias clases de extranjería; los medios de naturalización según las entidades políticas, junto con la visión del hombre "extraño" y del hombre "de España". Se estudian, dentro de este período, los derechos y obligaciones de los extranjeros en los ámbitos del Derecho privado, del Derecho público y del Derecho internacional privado, así como las situaciones especiales.

Dentro ya de la Edad Moderna, se repiten prácticamente las líneas básicas de la sistemática (situaciones y estatutos diferenciales y derechos y obligaciones de los extranjeros), pero -naturalmente- el entramado interno es distinto, al aparecer nuevas situaciones que originan nuevas normas, aunque -por el sistema recopilador y no codificador seguido- continúa en vigor abundante número de leyes medievales. Como decíamos más arriba, aquí acaba el estudio, aunque se hace una referencia esquemática de los pasos dados para llegar al Real Decreto de extranjería de 1852.

Va encabezada cada una de las Partes por unas consideraciones

generales y ultimadas con un balance del período, después de abordar las diferentes materias que presenta la cuestión dentro de éste; para finalizar, en definitiva, con las conclusiones preceptivas, en las que se resume el resultado de las diversas facetas que se han ido investigando a lo largo del trabajo, que quisiera ser un punto de mira sobre la evolución de un fenómeno tan viejo como el hombre, puesto que la existencia del "ciudadano del mundo" no deja todavía de ser una utopía, por hoy inalcanzable, si bien la existencia de organizaciones como la Comunidad Económica Europea hagan concebir esperanzas de que se repitan situaciones como las que pone de manifiesto Franz Wieacker (20): el Derecho mercantil en las ciudades griegas, las leyes rodias, lo que se denominó "*lex mercatoria*", el "*ius commune*"... Pero, como él dice, "hay un largo camino desde la lealtad hacia la nación propia (o bloque ideológico), hasta la fidelidad a un ordenamiento más extenso, que todavía se halla en trance de creación."

(20) "*Supuestos históricos y paradigmas de los ordenamientos jurídicos privados supranacionales*", en "Revista de Derecho Privado", 1982, pág. 899-911.

Parte I

EL EXTRANJERO EN LA ANTIGÜEDAD

Capítulo I

EL EXTRANJERO EN LA EDAD ANTIGUA Y SU TRATAMIENTO EN LA PENINSULA IBERICA

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Según dice M. Torres Campos (1), desde que los pueblos se relacionan unos con otros, desde que el trato de sus individuos entre sí viene a ser un hecho, es indispensable un criterio legal o práctico para regular su vida jurídica. Por eso, el Derecho internacional privado tiene su origen en la Antigüedad (2). El cristianismo y el comercio deben considerarse sus principales agentes. Pero ya antes de aparecer el primero la situación de la extranjería hubo de presentarse. Así, según

(1) *"Elementos de Derecho internacional privado"*, Madrid, 1893, pág. 35 y sts.

(2) Sin ánimo de exhaustividad, consideramos obligado referirnos aquí a la obra de G. Barile, *"La fonction historique du droit international privé"*, *"Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye (en adelante "R. des C.")"*, t. 116 (1965-III), págs 301-381, y su opúsculo, *"Funciones e interpretación del Derecho internacional privado en una perspectiva histórica"*, Valladolid, Cuadernos de la Cátedra J.B. Scott, 1965. Asimismo, al curso clásico de Max Gutzwiller, *"Le développement historique du droit international privé"*, *"R. des C."*, t. 29 (1929-IV), págs. 291-399.

John Gilissen (3) existían diversas clases de extranjeros: de paso y establecidos, del exterior y del interior, privilegiados y perseguidos; y frente a ellos caben dos actitudes extremas: la xenofobia y la hospitalidad, entre las que hay una serie de actitudes intermedias.

En cualquier caso, es un hecho cierto que en las sociedades primitivas existía un marcado sentimiento de desconfianza respecto de aquéllos que no formasen parte del grupo. Tal sentimiento derivaba por lo general en una franca hostilidad en la que el sentimiento religioso era la nota dominante. Así lo puso de relieve Fustel de Coulanges en su conocida obra "La Ciudad Antigua" (4); todo aquél que no participa de las creencias comunes, que no tenga acceso al culto, a quien los dioses de la ciudad no protegen, es mirado como extranjero. A partir de aquí se fijará la línea de separación entre el "ciudadano" y el "extranjero": es el culto quien la establece, de ahí su carácter radical y absoluto. Por tanto, como el extraño a la comunidad no goza de la protección de los dioses, como no puede invocarles ni rendirles culto, tampoco puede entrar en el seno de la asociación, participar de sus instituciones, equipararse a los ciudadanos; en definitiva, gozar de sus derechos. Más

(3) "*Le statut des étrangers à la lumière de l'histoire comparative*", en "L'Etranger", Recueils Société Jean Bodin, Bruselas (en adelante, RSJB), IX, 1958, 1, págs. 6 y sts.

(4) "*La Cité antique*", traducción al castellano de M. Siges Aparicio, Madrid, 1920, pág. 130.

aún, encerrado el grupo en el estrecho círculo de sus creencias, contemplaba como enemigo y con hostilidad a todo aquél que consideraba repudiado por los dioses. El extranjero era entonces considerado como un verdadero enemigo (5). Con independencia del carácter teocrático o no teocrático de las primitivas civilizaciones, es un hecho cierto que en toda la antigüedad la vida íntegra del hombre está asentada en la religión. Su actuación familiar y social, su actuación civil y política no tiene base en otro criterio distinto.

Por otra parte, al margen del fenómeno religioso, el grado de xenofobia no está en proporción al de salvajismo o civilización, puesto que pueblos poco evolucionados, como los australianos, los patagones, los esquimales, son capaces de respetar al extranjero y de darle ciertas muestras de simpatía o de estima, mientras que otros pueblos en los que la civilización ha alcanzado un nivel muy alto, han sido francamente xenófobos, llegando a destrozar o a reducir a la esclavitud a todo extranjero que se presente, voluntaria o accidentalmente, en un territorio; y cita Gilissen (6) como ejemplos -que se sitúan incluso en

(5) Estas ideas han sido desarrolladas por E. S. de la Marnière en su introducción al colectivo *"Le Statut de l'étranger et le Marché Commun"*, publicado con ocasión del 57ème Congrès de Notaires, 1959. Una visión de conjunto se encuentra en A. Dorsinjang-Smets, *"Les étrangers dans la société primitive"*, RSJB, t. IX, 1958, 1, págs. 59 y sts.

(6) J. Gilissen, *"Le statut des étrangers, a la lumière de l'histoire comparative"*, en *L'Etranger*, RSJB, IX, 1958, 1, pág. 31.

tiempos próximos a nuestros días, lo que agrava la situación- a los españoles de América del Sur, a los japoneses y a los potentados indonesios que en los siglos XVII y XVIII mataban a todo extranjero arrojado a la costa a consecuencia de un naufragio.

Tras expresar nuestro disentimiento por lo que respecta a los españoles (como ejemplo), que precisamente en la América del Sur en esos años llegaron a cruzar sistemáticamente su sangre con las de los indios en un rasgo de humanidad no seguido por el mundo anglo-sajón, sí tenemos que admitir el principio expuesto de falta de correlación entre "atraso=xenofobia; progreso=hospitalidad."

Señala Gilissen como casos de xenofobia, los de Mesopotamia, donde el concepto de "extranjero" se asocia al de "enemigo" o de "esclavo"; y los de la Grecia clásica, en la que los bárbaros, es decir, los que no hablan la lengua de los griegos, son "sin derecho" (Aristóteles dice que su vocación es convertirse en esclavos de los griegos). A nuestro juicio, en los tiempos protohistóricos, la situación de los extranjeros ha tenido que ser muy parecida en casi todos los lugares, por lo que es útil -ante la carencia de datos- detenerse en el conocimiento de lo ocurrido en otras latitudes como orientación acerca de lo que pudo haber sucedido en lo que es actualmente España, en idénticos o parecidos estadios de la civilización.

El sentimiento social de los primitivos concierne sobre todo al círculo más o menos estrecho en el que vive un grupo de familias, de clases o de tribus, según los casos (7). Fuera existe un mundo hostil, a veces misterioso, sobre el cual los hombres primitivos experimentan el temor (porque lo que viene del extranjero está cargado de poder o de fuerza mágica, que pueda aportar la muerte, la desgracia, o la enfermedad), el desprecio (porque a sus ojos, ellos mismos son los únicos hombres verdaderos, los otros son "bárbaros"), y el odio (originado por el temor y el desprecio). Por ello, rehusan toda amistad frente a las tribus vecinas y niegan al extranjero todo derecho y toda protección.

La muerte de un extranjero no era un crimen sino una acción brillante, porque disminuía el número de los enemigos. En Borneo, la caza de cabezas de extranjeros era un juego guerrero que hacía la alegría de vivir de los Dayaks. En Madagascar, el robo de búfalos de las tribus vecinas introdujo en la sociedad sakalava un deporte ideal practicado sobre todo por los ricos. Por citar otros ejemplos, cabe apuntar que para los melanesios, para los gallas de Etiopía, para los australianos, o para tantas tribus de América, el extranjero era un hombre a matar. Y, siguiendo esta relación exemplificativa, basta retener que es un crimen casarse con un extranjero, dejarlo instalarse sobre tierras ancestrales.

(7) A. Dorsinfag-Smeits, obra cit., págs. 59 y sts.

No se puede generalizar lo que antecede, porque también existe la práctica de la hospitalidad; en Patagonia, en casa de numerosos eskimos, el extranjero tiene reservado un sitio en la comuna, puesto que aporta al grupo aislado noticias del interior, a veces productos raros y buscados. La tradición del "buen salvaje", está basada quizá en la observación de estas tribus hospitalarias, pero sobre todo en las numerosas convenciones que los grupos xenófobos admiten para moderar la fuerza de su oposición y el aislamiento a que estaban condenados.

Incluso -para esta autora- el extranjero transformado en esclavo se integraba en una clase social y gozaba de una suerte parecida a la de los menores de edad. Las mujeres extranjeras encuentran sitio en la familia de los vencedores, donde a veces se convierten en esposas, y sus hijos se integran en estos nuevos hogares; ésta es la costumbre general de los pueblos del Amazonas, incluso de los mundurucu, o reductores de cabezas. Por otro lado, entre los bantúes la adopción era a menudo el destino de los jóvenes prisioneros que no llevaban aún el tatuaje de su tribu, mientras que para los demás quedaba la esclavitud o la muerte.

Por eso, es muy interesante para el viajero encontrar un "patrono" que responda por él. De ahí nace el uso de convenciones entre dos individuos, acompañadas o no, de cambio de sangre. Los ejemplos son tan numerosos que -por citar uno- la autora señala el "djungu" o "dikongo" (en el Congo) de los Ankutchu, por el cual los miembros de

distintas aldeas se comprometen a tratarse como súbditos de una misma. Si el extranjero es portador de un poder sobrenatural, esta disposición es la base de la protección especial que cubre los desplazamientos de los "hombres santos", en Africa, de los sacerdotes y de los curanderos que, en América, se mueven sin daño entre tribus hostiles. Cuando el grupo extiende sus deseos de adquirir bienes que se encuentran fuera de su propio dominio, aparece el interés por los intercambios comerciales y con él nacen las reglas relativas a la protección de los comerciantes y de los mercados. Livingstone escribía que la mejor introducción en una aldea de Zamboya, era gritar "malonda" (cualquier cosa para vender).

El llamado "comercio silencioso" es un hecho bien conocido de los cartagineses (del que cita un ejemplo Herodoto), que consistía en depositar los productos en un punto convenido, y retirarse a esperar que la otra parte haya aportado, a su vez, la contrapartida. Hay más casos conocidos: el de los vedas de Ceilán con los cingaleses, el de los pigmeos de Africa con los bantúes... Más tarde aparece el comercio a través de intermediarios... No debe asombrarnos que los medios a los que recurren los pueblos primitivos, son, a veces, los mismos en comunidades muy alejadas unas de otras, y de nivel social acaso muy diferente, por lo que debe admitirse que, frente a los mismos problemas, en pueblos primitivos se recurre a menudo a soluciones semejantes.

Diversos pueblos de la antigüedad nos ofrecen varios ejemplos de

relaciones entre ciudadanos y extranjeros, colocados bajo el imperio de las leyes.

II. EXAMEN SECTORIAL EN LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES

Resulta obligado referirse, en primer término, al caso particular de Egipto. Entre los egipcios la situación de los foráneos puede resumirse así (8):

Los extranjeros poseían en Egipto un estatuto organizado; podían establecerse y ejercer el comercio y la banca (como ejemplo de esto último, los sirios). Eran objeto de un Registro de estado civil, con su nombre, su nacionalidad, la de su padre y de su madre, lo que prueba que la transmitían a sus descendientes, e igual si estaban casados con egipcios. Podían practicar su culto religioso nacional. También se registraban los esclavos extranjeros. No se sabe cómo accedían a la nacionalidad egipcia, pero era un hecho frecuente. En las fronteras había un servicio que controlaba la entrada y salida de personas. En todo caso, existían pasaportes para los diplomáticos.

(8) J. Pirenne: *"Le statut de l'étranger dans l'ancienne Egypte"*, en *"L'Etranger"*, RSJB, IX, 1958, I, págs. 93 y sts.

Era diferente el estatuto de los extranjeros que iban a Egipto de modo transitorio, por ejemplo, para comerciar.

Se deduce de documentos asirios que el extranjero que vivía en Egipto lo hacía bajo el "derecho de aubana", es decir, que los bienes que dejaba al morir, pasaban al rey; si bien esta situación podía ser modificada por medio de tratados internacionales: así, por ejemplo, ocurría a los chipriotas, y quizás a los cretenses y a los babilonios.

En cuanto a estos últimos, sabemos que el rey de Egipto era responsable de los daños causados a sus personas y bienes. De un tratado egipcio-hitita concluido por Ramsés II, resulta que los refugiados políticos encontraban asilo en Egipto; dicho tratado preveía su extradición, pero especificando que el extranjero no podía sufrir pena alguna en este territorio (9). En conjunto, este régimen era muy liberal.

En la antigua Mesopotamia (10), entendiéndola en el más amplio

(9) Dentro de la copiosa bibliografía existente, Vid. P. Bernard, *Traité théorique et pratique de l'extradition*, t. I, París, Rousseau, 1883, pág. 10; P. Lanza, *Estradizione*, Milan, Società Editrice Libreria, 1910, pág. 49. Entre las obras modernas resultan de interés: I. A. Sharer, *Extradition in International Law*, Manchester, University Press, 1971, p. 5 (con abundantes referencias a estudios históricos) y C. Van den Wijngaert, *The Political Offence Exception to Extradition*, Deventer, Kluwer, 1980, págs. 4-5.

(10) G. Cardascia: *Le statut de l'étranger dans la Mesopotamie ancienne*, en "L'Etranger", RSJB, IX, 1958, 1, págs. 105 y sts.

sentido, incluso los valles altos del Tigris y del Eufrates, y la Anatolia Central, los esclavos son en su origen cautivos extranjeros, e incluso se puede deducir, sin aventurarse demasiado, que en las ciudades del III milenio (antes de Cristo) apenas debían existir otros extranjeros que los cautivos reducidos a la esclavitud.

Los Códigos del período clásico (dinastías de Isin y de Larsa, al principio del II milenio, Imperio de Hammurabi -siglo XVIII-), no contienen ninguna disposición sobre la condición de los extranjeros, pero su examen no ha de ser infructuoso.

En los Códigos de Bilalauna y de Hammurabi la sociedad está distribuida en tres clases: hombres libres, ínfimos o mezquinos y esclavos. La clase de los "ínfimos" se constituye con unión de dos elementos; los esclavos emancipados y los extranjeros. En esta época en que se forman extensos reinos, las ciudades no pueden guardar su pureza étnica primitiva. Los contactos pacíficos entre las villas de Mesopotamia se multiplican. Los extranjeros que no son traídos a una ciudad en calidad de prisioneros de guerra, sino que se establecen libremente, de manera individual, o en pequeños grupos, no pueden ser reducidos a la esclavitud: ellos serían los "ínfimos". Por otra parte, no tenían ningún derecho. Tolerados por la sociedad del II milenio, ello provoca problemas jurídicos, como el de saber si la posesión de sus bienes debe ser protegida, y por esta razón el Código introduce una disposición expresa

en ese sentido. Los "infimos" constituyen una especie de plebe, formada de nuevo en el escalón más bajo de la clase de los hombres libres. Esta plebe ha podido comprender otros elementos, aparte de los extranjeros, pero éstos no han debido, en términos generales, tener otra condición que ésta.

Hacia la misma época es posible que algunos extranjeros hayan conocido un estatuto privilegiado: tal es el caso de los colonos asirios de Capadocia. Por desgracia, no hay unanimidad sobre la naturaleza de estos establecimientos. Por otra parte, los comerciantes importan telas y plomo; y exportan productos agrícolas y cobre, por lo general en estado bruto.

De la lectura de los textos se deduce la existencia de extranjeros ricos y poderosos, que tienen necesidad de una cierta protección del poder local, y existe la impresión de que les fue largamente dispensada.

Los "habiru", que son refugiados, son más bien individuos libres derrotados o sublevados contra su príncipe, más que esclavos fugitivos. Viven generalmente agrupados, por necesidad; a veces les es concedido un territorio, lo que es una manera de recompensar sus servicios y de contenerlos. Los "habiru" forman grupos de mercenarios asalariados por el Estado, que los acoge: los faraones han recurrido mucho a sus servicios. Rara vez entran al servicio de particulares, y de ello quedan

recogidos ejemplos en los textos Nuzi. En resumen: los refugiados que aparecen en los reinados del II milenario son hombres libres de la más baja clase, incapaces de vivir de otra manera que al servicio del rey o de un ciudadano.

Bajo los grandes Imperios, y sobre todo en el Imperio aqueménida, Mesopotamia se ha convertido en un cruce de razas, y se puede decir que no hay más extranjeros porque el Imperio absorbe a todas las naciones.

Los enviados de Nippur, en el siglo V antes de Cristo, encuentran:

- Unos sesenta nombres judíos, que corresponden a un número superior de personas.
- Un número no inferior de arameos y de persas.
- Un pequeño número, en fin, de egipcios, amonitas, moabitas, palestinos, sirios, hititas, sardienses, de licienses, de kasitas, y hasta de cimerios, de afganos y de indios.

Una gran parte de estos extranjeros provienen de guarniciones establecidas por el rey en el corazón del Imperio.

La conclusión de todos estos hechos parece clara. El Imperio de Darío, anuncio del de Alejandro, ha confundido y borrado las nacionalidades. Los nombres étnicos subsisten, pero no hay ya verdaderos extranjeros en el interior del vasto imperio, ya que no hay más que provinciales.

III. TRATO DISPENSADO EN LA ANTIGÜEDAD GRECO-ROMANA

1. El extranjero en el mundo griego (11)

En Grecia, según el estudio de André Aymard (12), el extranjero desde el punto de vista cultural, es el bárbaro. Este criterio se encuentra en la "Ilíada" y en Herodoto; de hecho, el criterio lingüista ("barbarophonoi") era el más sencillo de aplicar y, por lo tanto, el más empleado. Entre los concursos panhelénicos, los más célebres eran los juegos de Olimpia, cuyos jueces llevaban el nombre significativo de "jueces de los griegos". Se admitió, como excepción, que los miembros de

(11) Una visión general de esta etapa se encuentra en el estudio de R. Bierzanek, "*Le statut juridique des étrangers dans l'antiquité greco-romaine*", Mélanges Sefériades, vol. II, Atenas, Panteios Anotati, 1961, pp. 567-582.

(12) "*Les étrangers dans les cités grecques aux temps classiques*", en "L'Etranger", RSJB, IX, 1958, I, págs. 119 y sts.

la familia real macedónica que se decían originarios de Argor, eran griegos auténticos, y como tales podían tomar parte en los juegos, mientras que los demás macedonios, considerados como bárbaros, quedaban excluidos.

Pero, en la práctica, los imperativos políticos y el interés económico, permiten contemplar, sobre todo en favor de los bárbaros que se helenizan, más de un cambio. Por eso, se puede comprender la presencia en Atenas de un gran número de extranjeros establecidos, debido a que la realidad cotidiana de la vida no ha sido muy seductora en un buen número de ciudades griegas. Las luchas políticas, violentas, originan exilios voluntarios o impuestos; la miseria también provocaría la marcha a fin de buscarse medios de existencia. Atenas, por las solas facilidades que ofrecía -sin tener que practicar una propaganda sistemática-, con su actividad económica y su civilización, se encontraba en estado de atraer y retener en ella a un buen número de esos hombres errantes.

Por otro lado, Atenas era democrática, pero en el sentido que la palabra "democracia" podía tener en la Grecia de esta época; en ella vivía un grupo de ciudadanos, naturalmente estrecho y egoísta, como en todas las ciudades griegas. En concreto, durante la época helenística,

Claire Préaux (13) distingue tres clases de extranjeros:

- La integrada por quienes practican una técnica rara, o difícil, y cuya utilidad no es cotidiana: los actores, los médicos, los atletas, los profesores y conferenciantes, los consejeros reales, los turistas, etc.

- Los extranjeros útiles: los comerciantes y los mercenarios.

- Los indeseables: los bárbaros rebeldes a la cultura, los nómadas, cuyo género de vida es inquietante, gentes de religiones y de costumbres no asimilables; los componentes de los ejércitos de ocupación, los prisioneros de guerra, los refugiados comprometedores...

A la vista de los extranjeros de todas estas categorías, se aprecian dos actitudes que, a veces, coexisten: acogimiento y desconfianza. En el primer capítulo están la moral de la hospitalidad, la curiosidad, la filantropía; en el segundo, aparece el deseo de conservar los privilegios del grupo propio. La combinación de estas tendencias diversas explica la variedad del trato a los extranjeros.

En las grandes ciudades donde el comercio internacional llama a una gran población, se ven juntas las dos tendencias: la limitación del

(13) C. Préaux: "*Les étrangers à l'époque hellénistique (Egypte-Délos-Rhodes)*", en "L'Etranger", RSJB, IX, 1958, 1, págs. 143 y sis.

cuerpo político por medidas discriminatorias, y el otorgamiento de facilidades materiales a los extranjeros. Existen muchas pruebas de la existencia de extranjeros en Alejandría, Delos (14) y Rodas, sobre todo por razones comerciales.

Para José María Espinar Vicente (15), en la concepción de la ciudad-estado subyace la idea de la existencia de un pacto originario entre el grupo de personas que se constituyeron en "polis", con la finalidad de garantizarse recíprocamente la libertad y la convivencia en paz. Este elemento es clave en el análisis de la reglamentación de los supuestos intraparticulares de carácter internacional; a él se une la conciencia de un mundo griego inscrito en el contexto general de las relaciones globales de las ciudades-estado, a causa de que su traducción jurídico-internacional en ligas y tratados provoca un movimiento interciudadano de personas que originan relaciones "internacionales", muchas veces previstas y reguladas en los propios convenios sobre la base de la determinación de los derechos y libertades que pueden gozar los no extranjeros, o sea, lo que hoy constituye el Derecho de extranjería.

(14) Lacroix: *"Les étrangers à Delos pendant la période de l'indépendance"*, *"Mélanges Glotz"*, 1932, págs. 501 a 525, citado por H. Lewald, *"Conflits de lois dans le monde grec et romain"*, *"Revue critique de droit international privé"*, 1968, pág. 427.

(15) *"Algunas consideraciones en torno al desarrollo histórico del Derecho internacional privado en la Grecia de las ciudades"*, en *"Revista de Derecho Privado"*, 1981, pág. 547-568.

Los derechos más sobresalientes son los relativos a la protección de la integridad física y patrimonial del individuo y el de acceso a la Justicia, junto con los de contraer nupcias y de poseer inmuebles.

Las técnicas jurídicas utilizadas principalmente son las de la asimilación del extranjero (mediante su consideración parcial o total como miembro del grupo), y de la protección indirecta a través de un ciudadano. Estos planteamientos jurídicos y políticos llevan a una concepción personal y no básicamente territorial de las comunidades políticas griegas, que trae como consecuencia la posibilidad de que los extranjeros se agrupen comunitariamente dentro de ellas en razón de sus "polis" originarias, y de que lleguen a establecerse instituciones como los jueces especiales para ellos. La regulación jurídica de los problemas -sigue diciendo el autor al que citamos- se basa fundamentalmente en la "lex fori", aunque por medio de esta técnica se llegó a expresar una serie de conexiones similar a la empleada por las actuales normas de conflicto.

No obstante, el principio de personalidad de las leyes tuvo un carácter muy distinto al atribuido a partir de las doctrinas estatutarias; en todo caso, en el momento de dictar sentencia, la aplicación rígida de la "lex fori" hubo de verse atenuada por los principios de buena fe, justicia, eficacia, etc.

Esto nos lleva a ocuparnos del problema de los conflictos de leyes.

Según Fritz Sturm (16), algunos autores (Schönbauer, Niederer y Schwind) niegan categóricamente la existencia de normas de Derecho internacional privado en Grecia y Roma. Otros (Bercler, Lewald, Volterra, Alliot), ven un primer bosquejo. En lo que están de acuerdo todos es en que en los tiempos arcaicos los conflictos de leyes son inimaginables, porque no se concibe la coexistencia de varios órdenes jurídicos; cada comunidad reserva sus normas a sus ciudadanos, por lo que el extranjero queda excluido.

Los tratados de amistad existentes en Grecia y Roma aseguran al extranjero alguna protección; pero no hacen más que destacar la no-personalidad del extranjero, la exclusión del enemigo de la comunidad jurídica formada por los ciudadanos. Las relaciones comerciales abren en Grecia una brecha en ese sistema, y aparecen los convenios de inviolabilidad y de asistencia jurídica. Los primeros garantizan a las partes contratantes una protección eficaz contra los actos de violencia o de justicia privada, pero siempre aplicando el propio Derecho, es decir, la "lex fori". En cuanto a los convenios de asistencia judicial procede distinguir entre: los que se limitan a fijar reglas de competencia, en las que aparece el principio "actor sequitur forum rei"; los que señalan tanto las normas de Derecho material como las reglas de procedimiento (así, una serie de tratados entre Mileto y Creta en el siglo III antes de Cristo

(16) "*Comment l'Antiquité réglait-elle ses conflits de lois?*", en "*Journal de Droit international*", 106^e année (1979), n^o 2, Avril-Mai-Juin, pág. 259-273.

sobre la restitución de hombres libres y de esclavos capturados, deportados después a la otra ciudad contratante); y, por último, los convenios que regulaban no sólo las cuestiones de competencia, sino también el Derecho aplicable, como el tratado en el siglo I antes de Cristo entre Sardes y Efeso, en el que se comprometen recíprocamente a proteger las personas y bienes de los ciudadanos de la otra parte.

Para no romper la exposición de la materia de las fórmulas buscadas para la resolución de los conflictos de leyes, y a fin de recoger unas conclusiones unitarias, nos parece oportuno seguir con la cita del mismo autor, en cuanto se refiere también a Roma, y en tal sentido deben ser citados el "foedus Cassianum" del año 493 antes de Cristo que concede "connubium et commercium" a los pertenecientes a las ciudades federadas.

Las conclusiones a las que llega Sturm, al abordar este problemas en la Antigüedad, son las siguientes:

1) En materia de conflictos de leyes, la Antigüedad, tanto griega como romana, no se ha quedado en los primeros balbuceos de un pre-Derecho, sino que se ha percatado de las consecuencias de los conflictos y descubierto medios propios para resolverlos.

2) Sus técnicas, sobre todo en materia de conflictos

interprovinciales no difieren apenas de las nuestras. ¿Acaso la importancia que damos al Derecho nacional y los privilegios que concedemos a los nacionales no son sino una supervivencia del antiguo régimen de la personalidad de las leyes?

3) El deseo de beneficiar a todos los justiciables, romanos o peregrinos, de un derecho uniforme, es más acusado que la preocupación de repartir las esferas de aplicación de los diferentes derechos subsistentes en el Imperio.

En nuestro mundo moderno, las aspiraciones de muchos juristas van en el mismo sentido. Las reglas y las técnicas más complicadas del derecho de conflictos de leyes, no entusiasman casi más que a los especialistas.

Abrigamos la esperanza -termina Sturm- de que, en los siglos futuros, el acuerdo internacional será también de resolver los conflictos por medio de un "ius gentium", derecho uniforme susceptible de facilitar las comunicaciones y de garantizar, de una manera equitativa, la seguridad del comercio jurídico a través del mundo.

2. Roma y su legado en la Península Ibérica

En Roma, según M. Arjona Colomo (17), a través de una larga evolución, el extranjero pasa de ser "hostis" ("adversus hostem aeterna auctoritas") a transformarse en "peregrinus", con un "status" especial. Como pusiera de relieve W. Niederer (18), el "ius civile romanorum" fue considerado por los romanos como un atributo del que cada miembro de la ciudad de Roma era coposeedor. La titularidad de los derechos de la "civitas" se adquiría cumpliendo tres requisitos: a) Ser ciudadano romano; b) No hallarse al margen de la vida activa del grupo por uno y otro motivo, y c) Encontrarse en un entorno en el que la realidad del grupo resultase operativa. Son estas tres condiciones las que, como pusiera de manifiesto en un lúcido artículo M^{ra} Paz Mesa-Moles Martell (19), las que definen la posición jurídica del individuo en el Derecho romano. No es suficiente con ser ciudadano, es menester, además, no haber sido expulsado de la vida colectiva. Circunstancias tales como la deportación implicaban no sólo la pérdida de la ciudadanía romana, sino la

(17) "Nueva enciclopedia jurídica", Tomo IX, Barcelona, 1958, págs. 403 y sts., voz "Extranjero".

(18) Vid. W. Niederer, "*Ceterum quaero de legum imperii romani conflictu*", "Revue critique de Droit international privé", 1960.

(19) "Las soluciones al tráfico externo en el Derecho romano", "Una oferta científica iushistórica internacional al doctor J.M. Font i Rius por sus ocho lustros de docencia universitaria", Barcelona, P.P.V., 1985, pág. 235-246, esp., pág. 240 y sts.

transformación del estatuto, que quedaba equiparado al del peregrino (20). Refiriéndose, en concreto, a lo que hoy conocemos por España, dice Arjona Colomo que nada sabemos de los tiempos prehistóricos y faltan noticias, casi por completo, sobre el desarrollo del Derecho privado de la España primitiva.

Poblada la Península por iberos y celtas, se fraccionaban en tribus más o menos numerosas, que -según Estrabón- habitaban en aldeas. Estas tribus formaban entre ellas federaciones permanentes o transitorias, y su vínculo de relación era el contrato de hospitalidad, por el cual los componentes de cada una de las partes tenían derecho a ser alojados, mantenidos, protegidos y auxiliados, cuando se trasladaban al domicilio de la otra. Además, ha de tenerse en cuenta que los tartesios ejercieron el comercio del estaño con los oistrimenios, pueblos del Noroeste gallego, que luego siguieron los fenicios y cartagineses de Cádiz (21).

Con la aparición de fenicios, griegos y cartagineses, todos ellos se relacionan con los indígenas, si bien los fenicios -más amantes de la paz que de la guerra- sin duda dieron mejor trato a los naturales -extranjeros

(20) Vid. E. Volterra, "*La perte du droit de cité d'après les juristes postclassiques*", "Revue internationale des Droits de l'Antiquité", 1958, pág. 591 y sts.

(21) "*La conquista romana de Galicia*", por C. Torres, en "La romanización de Galicia", Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos, Sada-La Coruña, 1976, pág. 12.



para los invasores- que los restantes colonizadores.

En la época de las conquistas romanas -siempre según Arjona Colomo-, siglos I y II antes de Cristo, rige en todas partes el Derecho indígena y apenas unos cuantos millares de personas conviven conforme al Derecho romano. El comercio del estaño continúa con las cassitérides, y la familia de los Crasos se enriquece con él (22), después de que Publio Craso, Procónsul de la Ulterior, localizase el yacimiento (23).

César se introduce en la aristocracia gaditana, a través de Lucio Cornelio Balbo; al estar muy endeudado (se calcula en el equivalente de 25 millones de pesetas oro), para satisfacer lo que se llamó "auri sacra fames", no repara en medios para llegar a las Cassitérides, que se identifican con unas islas en el SO. de la hoy Gran Bretaña, pero el emporio del estaño y del cobre estaba en Brigantium (Betanzos), lo que supuso el principio de la transformación de un comercio pacífico en expediciones guerreras para hacerse con las riquezas mineras (incluso de oro) "manu militari".

Semejantes apetencias determinan la ocupación y conquista de lo que fue el Convento jurídico-astur, en donde estaba la inmensa mayoría

(22) Id., pág. 12.

(23) Ibid., pág. 18.

de las minas del NO.: la zona de los ríos Ibias, Navia y Narcea (en Asturias), y la de los Omaña, Tuerto, Turienzo y Duernas en León, además del Bierzo (alto Sil). Se calcula que la explotación suponía unas 20.000 libras anuales de oro al Erario romano, razón de más para que el comercio con los indígenas se convirtiese en una conquista violenta (24).

El fenómeno -sobre todo, con el oro- se repite en la Lusitania (desde finales del siglo I después de Cristo al principio del III). Esa actividad pudo dar algunas posibilidades a nativos (especialistas, prospectores, etc.), de cierto ascenso económico. También se podría obtener, a título singular, la ciudadanía romana por los indígenas, tras licenciarse del ejército, con derecho de transmisión a sus descendientes (25).

No sólo minera y comercial, sino también agrícola y ganadera era la economía del "conventus lucense" (26), pero desde finales siglo III el

(24) T. Mañanes, "*Asturica Augusta y su convento jurídico*", en la misma obra, pág. 42. A esta misma conclusión sobre la zona explotada, incluida Lusitania, llega J. Somoza García-Sala ("*Gijón, en la Historia General de Asturias*", 1908, I, pág. 1981, aunque encuentra exagerada la cifra citada, tomada de Plinio).

(25) A. Balil, "*Bracara Augusta y el conventus bracarum*", en la misma obra, pág. 50.

(26) F. Arias Vilas, "*Lucus Augusta*", en la misma obra, pág. 60.

sistema económico se basa casi en exclusiva en la tierra y se cierra al comercio exterior.

En conclusión: las imposiciones guerreras, por un lado, y el retroceso económico, por otro, reduce al mínimo las relaciones mercantiles, base de las situaciones establecidas entre "hombres extraños".

Ello no obstante, aunque la Galicia actual no haya sido un foco de atracción importante para los numerosos forasteros, se conocen casos de personas que allí se trasladaron. Por ejemplo, hay pruebas de una familia turinesa asentada en Lugo y tres clunienses en Vigo, aparte de otros (27); y nos estamos refiriendo a zonas de Hispania muy alejadas de sus centros políticos y comerciales.

En todo caso, la penetración romana fue -en general- intensa, ya que ninguna colonia ni capital de distrito careció de vías de comunicación; es decir, por cada uno de los catorce conventos jurídicos y de las veintiséis colonias militares existentes en España pasaba una calzada romana, las que se utilizaban para la circulación de las personas y el tráfico de bienes, entre otros, de modo especial, los cereales. Centros comerciales muy activos eran Tarraco, Barcino, Ampuriae, Cartago Nova

(27) F. Acuña Castroviejo, *"La cultura en la Galicia Romana"*, en la misma obra, pág. 71.

y Gades (28).

Al ser considerado el Derecho por los españoles y por los romanos como un ordenamiento propio y exclusivo de cada pueblo, sólo los miembros de éste pueden ser titulares de los derechos reconocidos por él. En el mundo romano, es preciso ser ciudadano de Roma para poder gozar de los derechos que el "ius civile" establece. Pero como en España existían ciudades romanas, latinas e indígenas, y los ciudadanos de ellas son igualmente capaces en su ciudad e incapaces en las demás, las necesidades del tráfico económico y jurídico obligan a reconocer en todos una capacidad general, que sólo se niega por falta de libertad o por no pertenecer a ninguna ciudad.

La situación queda alterada por completo cuando Vespasiano concede en el año 74 la latinidad a España. A partir de ese momento sólo quedan dos ciudadanías: la romana y la latina, atribuyendo esta última el "ius commercium" (el régimen de bienes) romano, pero no el régimen familiar. Podían gozar de la propiedad romana, celebrar contratos romanos y actuar ante los Tribunales romanos (29).

(28) V. Vera: *"Cómo se viajaba en el siglo de Augusto"*, Calpe, 1925, pág. 14, 15, 18 y sts. En el *"Itinerario de Antonino"*, que se cree data de los tiempos de Diocleciano (años 284 a 306), en la parte referente a la Península Ibérica se incluyen 34 caminos, con 6.953 millas romanas; y, como dice A. Fernández-Guerra, existen otros, de los que se tiene noticias por diferentes conductos.

(29) J. Arias Ramos y J. A. Arias Bonet, *"Derecho Romano"*, 1984, I, pág. 71.

Más tarde, con la concesión de la ciudadanía romana por Antonino Caracalla (212 después de Cristo) a todos los habitantes del Imperio, la distinción desaparece. Unicamente los extraños al "status civitatis", los bárbaros, quedan en situación de inferioridad. Si se examina la situación anterior desde el punto de vista del Derecho romano, se puede conocer la evolución que dicho Ordenamiento fue dando a los extranjeros, lo que permite ver a los habitantes de la península desde ese punto de vista, que podemos llamar "inverso", en el que los indígenas se presentan como extranjeros al Derecho de Roma. Si seguimos esa evolución (30), el principio fundamental que determina la condición de los peregrinos es bien conocido y de una extrema sencillez: ellos viven bajo el imperio de sus leyes nacionales, "suis legibus utuntur". Y esto, tanto en lo que se refiere a los derechos políticos como a los privados.

Este régimen es el que los griegos han llamado autonomía y es común a todas las ciudades peregrinas, cualquiera que sea la naturaleza de los lazos que las unieren con Roma; se observa en las ciudades federadas, en las ciudades libres e inmunes; y en las sometidas o estipendiarias. El respeto de los derechos y de las costumbres locales es uno de los principios esenciales de la política romana y una de las claves de su éxito; aunque el que se atenga a este solo principio para

(30) F. de Visser, "*La condition des pérégrins à Rome, jusqu'à la Constitution Antonine de l'an 212*", en "L'Etranger", RSJB, IX, 1958, 1, pág. 195 y sts.

caracterizar el derecho en vigor entre los peregrinos obtendría una visión deformada de la realidad histórica (31).

El fenómeno más importante es el de la romanización o igualamiento progresivo de las condiciones jurídicas de los peregrinos y de los ciudadanos. Todo acceso al Derecho de la ciudad ha sido precedido de un período más o menos largo de adaptación a los usos romanos; este proceso se encuentra ya en el siglo IV a. de J.C. fuera de los límites del Lacio. Comienza entre las clases superiores, por la aristocracia campesina, unida además por estrechos lazos a la aristocracia romana. Como dice Tito Livio, "ya en esta época, no sólo las armas sino el Derecho de Roma habían conquistado un gran Imperio".

Asistimos a un movimiento espontáneo, que explica la fácil y rápida difusión del régimen municipal en esas regiones; y si durante un largo tiempo el sistema jurídico romano parecía encerrarse en un cierto exclusivismo, que lo hacía inaccesible a los peregrinos, esta actitud cambia profundamente en el siglo II a. de J.C., puesto que -como dice De Martino- Roma no podrá vivir sin Italia, ni Italia sin Roma, y es precisamente la época en la que se pueden datar las instituciones que M. Magdelain ha atribuido a la iniciativa del Pretor, y que se las agrupará

(31) Véase E. Volterra, *"Quelques problèmes concernant le conflit de lois dans l'Antiquité"*, "Annuario di Diritto internazionale", 1965, págs. 553-562.

después con el nombre de "iuris gentium". Para los casos, que habían de ser muy frecuentes, en que interviniesen personas sujetas a diversos ordenamientos, Roma elabora esas normas de gran flexibilidad que fueron aplicadas en las provincias por los gobernadores y en Roma por el "Praetor peregrinus": la compraventa, el arrendamiento, el mandato, la sociedad, a los que hay que añadir el mutuo, o préstamo de dinero, cuyo uso común se remonta más atrás aún, sin duda.

Este Derecho común a los romanos y a los peregrinos no está constituido sólo por instituciones nuevas, sino que se adaptan y se transforman otras del viejo Derecho quiritarario; así, la antigua *sponsio*.

También tiene gran importancia la transformación del procedimiento judicial, con el abandono de las antiguas acciones y el desarrollo del procedimiento formulario, lo que pudo permitir al Pretor la posibilidad de extender a los peregrinos una serie de reglas legales aplicables no sólo a los ciudadanos romanos, a través de una ficción de ciudadanía. Gayo nos da el ejemplo de acciones de este tipo en materia de robo, sea a favor del denunciante, sea contra el que se defiende.

Esta igualación también se produce en el terreno del Derecho público; así, se aprueba la propuesta de M. Fluvio Flacco, tendente a conceder a todos el derecho a la provocación, y la de Cayo Graco sobre el derecho de voto. La "Lex Iulia" acordó el derecho de ciudadanía a

todos los itálicos.

Todo esto se explica por el prestigio del poder romano y de la ingerencia de sus jurisdicciones; pero en el amplio campo que el Derecho privado deja a la autonomía de las partes, debe mencionarse el papel importante jugado por la práctica notarial, y por los formularios romanos, y más decisiva aún fue, en el curso del siglo II, la difusión en las provincias de la Jurisprudencia, ciencia que se comparó a la misma Filosofía.

La constitución de los Municipios -al menos en las provincias occidentales- fue, de manera invariable, precedida de una intensa romanización, lo que Vittinghoff llama "penetración silenciosa"; hace falta un siglo y medio de romanización para ver aparecer en la Bética los primeros municipios: Gades (con César) e Itálica (bajo Augusto).

Pero, al lado de esta adhesión voluntaria hizo falta una política de igualación entre ciudadanos y peregrinos, perseguida de manera deliberada por las autoridades romanas. No se trataba de sustituir el sistema jurídico de las ciudades libres, pero sí de someter a los ciudadanos y peregrinos a ciertas reglas comunes que se juzgaban indispensables para el buen orden y la Justicia.

Después de Augusto, los ciudadanos romanos son sometidos a las

mismas cargas locales y ejercen las mismas funciones y honores. Los Tribunales romanos aplican a los peregrinos instituciones romanas típicas, como la "manumissio vindicta" y la "Lex Plaetoria"; y en Egipto, el rescripto de Severo y Caracalla sobre la "praescriptio longi temporis" son aplicables tanto a los ciudadanos romanos como a los peregrinos.

Constituciones imperiales extienden a las provincias una serie de leyes concedidas en principio sólo para Roma e Italia. Tal fue el caso de la "Lex Iulia" sobre la cesión de bienes, y de la "Lex Iulia" sobre la tutela. Ninguna más característica que la Constitución de Antonino Pio condenando las crueldades injustificadas infringidas a los esclavos, disposición a la que se somete a todos los que "están bajo el imperio del pueblo romano". Más significativo todavía es el "senatus-consultus" venido "ex auctoritate divi Adriani" que, entre las prescripciones de la "Lex Aelia Sentia", destaca una para hacer aplicable a los peregrinos la que tiene por nulas las manumisiones hechas en fraude de los derechos de los acreedores.

Esta difusión del Derecho romano no fue un efecto repentino y, en cierto modo, mecánico de la concesión de la ciudad romana. Es, por el contrario, el resultado de una penetración, de una adaptación progresiva a la manera de vivir y a la organización romana. Es más exacto considerar la concesión del Derecho de la ciudad como el reconocimiento oficial de un grado de romanización suficiente para

justificar el apego de una ciudad a la comunidad de los ciudadanos. La apreciación de este grado dependía del poder central, y ha debido variar mucho de región a región, según las circunstancias políticas y militares.

Las leyes y costumbres del municipio forman parte, en definitiva, del Derecho romano, pero tal y como se han practicado tradicionalmente, con bastante exactitud para que merezcan los habitantes el título de ciudadanos romanos, pero con la libertad suficiente para dejar subsistir el principio de autonomía del municipio.

Tal parece ser la interpretación más acertada, a la vista del problema tan discutido de los efectos de la Constitución antonina del año 212 (*In orbe romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives romani effecti sunt*).

La compatibilidad del Derecho de Roma con un Derecho de las ciudades, local, es, bajo el Imperio, un hecho indiscutible, pero no es menos cierto que la ciudad local había perdido, desde el siglo II, los últimos rasgos de significación política que había tenido bajo la república. El mismo Derecho romano ha abandonado prácticamente la posición rígida que había adoptado, hasta el punto de que el emperador Adriano se proclama "Magistrado de Atenas."

Debe tenerse en cuenta el grado de romanización adquirido mucho

tiempo antes de la Constitución antonina. Habría sido absurdo y prácticamente imposible imponer a todas las regiones del Imperio un régimen uniforme, deducido de la cualidad abstracta de ciudadano romano.

En la última época del Imperio, el concepto de extranjero evoluciona, como consecuencia de lo anterior (32). La política imperial es poco favorable a un comercio que franquearía las fronteras, y ello por razones económicas y militares.

Hay que evitar la exportación de productos estratégicos, monopolizados por el Estado: sal, salmuera, seda, púrpura, géneros alimenticios, vino, aceite, oro. En el 420, Teodoro dicta una prohibición general de vender *mercedes illicitae ad nationes barbaras*.

Los motivos militares son estratégicos: desconfianza de espías que circulaban bajo la capa del comerciante.

Para evitar todo esto se confía el control de las fronteras marítimas a los *curiosi litorum* y a los *custodes*. Ello no consigue, de hecho, hacer desaparecer el comercio.

(32) J. Gaudemet, "*Le étranger au Bas-Empire*", en "*L'Etranger*", RSJB, IX, 1958, I, pág. 209 y ss.

Queda, además, el tema de los bárbaros en sus diversas categorías: federados, dediticios, *loeti*; pero, en la medida de que están dentro de la estructura del Imperio, quiebra su encuadramiento como extranjeros.

Antes de finalizar este apartado resulta aconsejable remitirse a un aspecto de especial interés en esta etapa histórica: nos referimos a los denominados "Convenios de hospitalidad local". Para A. de Lapradelle y J.P. Niboyet (33), desde "La Ilíada" y "La Odisea", el extranjero tiene derecho a la hospitalidad: el que recibe a un extranjero debe respetar su vida. En la Antigüedad, los convenios de comercio refrendan la condición del extranjero, y le conceden todos o parte de los derechos privados. Existieron entre ciudades, como Palencia e Intercatia, ambas del mismo pueblo de los Vacceos, dos gentilidades de la misma *gens* de los Zollas. Más tarde, los romanos ocupan una posición preeminente, y en lugar de recibir protección la otorgan a los antes vencidos (34).

Julio Caro Baroja (35), se refiere a una lámina metálica de Astorga que contiene datos sobre un pacto "renovado" el año 27 después de

(33) "*Répertoire de Droit International*", París, 1970, VIII, pág. 7.

(34) J. M^a Ramos Loscertales, "*Hospicio y clientela en la España céltica. Notas para su estudio en "Emérta"*", X (1942), pág. 308-337; y "*La devotio ibérica. Los soldurios*", en *Anales de Historia del Derecho español*, I, 1929, pág. 7 a 26.

(35) "*Los pueblos del Norte*", Editorial Txertua, San Sebastián, 1977, pág. 66.

Cristo, ampliado en el 152, entre ciertas unidades sociales, que arroja luz sobre este asunto. De la comparación de los dos textos deduce Caro Baroja que en el año 27 los nombres de los que los firman son todos no romanos, pero en el 152 la ampliación del pacto está hecha por personas cuyos nombres revelan una evidente romanización, lo que pone de relieve la fusión de las razas, o mejor, la absorción por la superior.

3. Influencia de la Iglesia bajo los romanos

Las interferencias entre Iglesia y Estado sobre un objeto común fueron constantes, por las recíprocas influencias entre los dos poderes, tratando en muchas ocasiones de invadir uno los naturales campos de actuación del otro, por lo que, del mismo modo que la Iglesia en muchas ocasiones se entrometió en la vida civil, el poder político se sirvió de la Iglesia, y la dominó o -al menos-trató de dominarla.

Este fenómeno se da ya desde los primeros tiempos, y tiene una importancia mucho mayor que la que puede parecer a simple vista, pues aunque no afecta directamente a la condición de los extranjeros, sí contiene el germen de un elemento importantísimo en la delimitación del campo de actuación de aquéllos, el factor religioso, y sirve para apreciar desde los tiempos más alejados las recíprocas influencias entre los dos poderes: el civil y el espiritual, que repercuten -en definitiva- en la

condición jurídica de los extranjeros.

Para Alfonso García-Gallo (36), fue la propia Iglesia la que impuso a los fieles la acomodación de sus actos a los preceptos de la religión: la obediencia a las autoridades, el trato humano de los esclavos, la indisolubilidad del matrimonio...; más que en los escritos jurídicos de la época, el influjo del Cristianismo se manifestó en la aplicación diaria del Derecho.

A ello no pudo ser ajena la situación de los extranjeros, como veremos enseguida en la época visigótica.

Debe señalarse, en cualquier caso, que, a la recíproca, y mientras en la época de la romanización la Iglesia influye en la cristianización de la vida y del Derecho romano, los emperadores, convocan concilios con el consentimiento del papa, y llegan a excederse en esta actuación, que es cortada por la Iglesia (37).

(36) *"Manual de Historia del Derecho Español"*, 10ª reimpresión, Madrid, 1984, I, pág. 51.

(37) A. García Gallo: *"Curso de Historia del Derecho Español"*, 1947, I, pág. 70.

IV. BALANCE DEL PERIODO

Las conclusiones a las que se llega, al analizar la época antigua, en lo que hoy llamamos España, son: la ausencia casi total de fuentes escritas propias, la certeza de que era imposible la existencia de un sistema completo, regulador de la condición jurídica de los extranjeros, unida a la de que hubo numerosas relaciones entre propios y extraños, derivadas sobre todo de los vínculos mercantiles -no olvidemos a las colonias fenicias, griegas y cartaginesas-, y por las conquistas militares - que determinaron la distinción entre pueblos dominantes y dominados.

Apareció, con la expansión del Imperio Romano, una situación a la inversa, es decir, que, bajo él, los "hispani" se convierten en extranjeros en su propia tierra, frente a los romanos que son los que imponen el Derecho. Es entonces cuando se puede decir que, a través del largo proceso evolutivo, se da sí no un sistema concebido de una vez, sí una normativa que, en su conjunto, regulaba la situación de los que no eran ciudadanos romanos, o que -al menos- conducía a las fuentes aplicables a los indígenas. La paulatina extensión de las instituciones del "ius gentium" a los mismos romanos, y la fusión de éstos con los hispanos, hacen que, a la llegada de los bárbaros, éstos se encuentren con un pueblo único, integrado por unos y otros, en el que el concepto de extranjería -al menos entre ellos- habría dejado de tener sentido.

Capítulo II

EL EXTRANJERO EN LA EPOCA VISIGOTICA

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Tras las invasiones germánicas en el antiguo Imperio romano, se estableció un peculiar sistema para solucionar los eventuales conflictos de leyes entre pueblos diferentes, conocido como el régimen de la personalidad de las Leyes (1). Cada individuo, cualquiera que fuese el lugar donde se encontrase, estaba sometido a las leyes de su nación, aun en sus relaciones con los de la otra. Tras la conquista, la ley romana se convirtió, de territorial y general, en puramente particular y personal, con el mismo carácter que las bárbaras. Baste retener, a título anecdótico, que Agobargo, obispo de Lyon, en nombre de las ideas centralizadoras y de unidad que representaba la Iglesia en aquel período, alzó el grito deplorando la existencia de un gran número de derechos personales.

Frente a ello, el Feudalismo vino a establecer un nuevo principio:

(1) Véase, por todos, el Capítulo primero del curso de E. M. Meijers, "*L'histoire des principes fondamentaux du droit international privé à partir de moyen âge, spécialement dans l'Europe occidentale*", "R. des C.", t. 49 (1943-III), págs. 549 ss. Asimismo, V. N. Rizzo, "*Osservazioni sulla evoluzione del diritto internazionale privato nel medio evo*", "Annuario di diritto internazionale" 1967/68, págs. 164 ss., esp. págs. 170 a 173; L. Stouff, "*Il principio della personalità delle leggi delle invasioni barbariche al secolo XII*", "Diritto internazionale", vol. XXI, 1967, págs. 80 a 134.

el territorial. Tal postulado tuvo la virtud de destruir las leyes puramente personales de los germanos, apoyó su imperio sobre la tierra, colocó las relaciones reales en el lugar de las personales y subordinó las segundas a las primeras. A partir de aquí, los esfuerzos de los juristas de la Edad Media fueron encaminados a reconciliar el principio personal y el territorial del Derecho.

Es bien sabido que los visigodos, como los demás pueblos del Norte, permitieron a los vencidos el uso de sus leyes, continuando el régimen personal hasta la promulgación del "Liber Iudiciorum". Este dispone que los mercaderes extranjeros, si tienen algún pleito entre sí, deben responder ante sus jueces y por sus leyes (Ley II, Título III, Libro XI). A este respecto J. G. Verplactse (2) destacó que en la época feudal se entra, otra vez, en un período exclusivista respecto a los extranjeros. La ley sálica ordena la expulsión del "homo migrans", la ley ripuaria adjudica al rey los bienes del extranjero no protegido; la ley gombetta los supone esclavos fugitivos y los somete a suplicio.

Según M. Arjona Colomo (3), el extranjero en España goza de una situación singularísima. Cuando el propio esfuerzo era suficiente, obtenía el respeto de todos sin necesidad de acogerse a ninguna sociedad política. Pero si le convenía ingresar en alguna, tenía para lograrlo dos clases de naturalización: por equiparación a los "lidos", término medio

(2) *"Derecho internacional privado"*, Madrid, 1954, pág. 175.

(3) Obra citada, pág. 407.

entre la libertad y la servidumbre, con lo que gozaba de ciertos derechos civiles, pero no de los de carácter político, consistentes en el uso de las armas y en la facultad de asistir a las asambleas populares; también se obtenía otro grado de ciudadanía por el hecho de la residencia, muy parecida a la vecindad: el extranjero que servía durante un año en una población, sin protesta de los vecinos, entraba a formar parte de ella. La naturalización completa se obtenía por acuerdo de la asamblea popular. Si era expulsado de la comunidad, se le negaba toda clase de capacidad.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que en este período, desde el punto de vista de los derechos civiles, el extranjero no podía disfrutar de la propiedad, ni siquiera del goce individual de la tierra cuyo usufructo entre los bárbaros era dividido exclusivamente entre los propios miembros del grupo. Como pusiera de relieve Despagnet, "*a plus fort raison ne pouvait-il pas disposer de la terre par acte entre vifs ou succession "ab intestato"... En fin l'étranger ne pouvait exiger de "wehergeld"; en cas d'offense faite à un étranger, le coupable devait seulement une amende, "fredum", au roi..."*(4).

(4) F. Despagnet, "*Précis de droit international privé*", París, 1898, pág. 73.

II. ESTUDIO DE LOS TEXTOS EN PRESENCIA

I. Falta de sistemática legal de la extranjería.

Aunque el "Liber Iudiciorum" supuso un paso muy importante como cuerpo recopilador de las leyes vigentes en el reino visigótico, no se recoge en él una ordenación sistematizada de la condición legal de los extranjeros. No obstante, debe destacarse que en el apartado VII del Título I, del Libro I, se contiene la siguiente disposición (bajo el epígrafe "*Qualis erit in iudicando artifex legum*"): "*Erit indicans in iudicando vivax, in praeveniendi fixus, in discernendo non auxius, in percutiendo parens, in parcendo assiduus, in innocente vindex, in noxio temperatus, in advena sollicitus, in indigena mansuetus. Personum tanto nesciat accipere, quanto et condemnat eligere*" (5).

Lo anterior se traduce así en el "Fuero Juzgo":

"Cuemo deve iudgar el fazedor de las leyes.

"El iuez deve seer entendudo (6) en iudgar derecho: deve seer muy

(5) "Liber Iudiciorum", en "Monumenta Germaniae Histórica", Hannover, 1902; para la versión romanceada utilizamos el "Fuero Juzgo o Libro de los Jueces", cotejado con los más antiguos y preciosos códices por la Real Academia Española; Ibarra, Madrid, 1815.

(6) Considerado.

anteviso (7) : no deve seer muy coyoso (8) por departir: deve seer muy mesurado en penar: deve a las veces parcir (9) : deve penar al que faze mal, e deve aver tempranza en dar la pena: e deve aver cuydado del omne estranno: deve seer mesurado en el que es de la tierra, así que la persona de cada uno non desprecie, nin escoia de fazer mas derecho al uno que al otro.

Al comentar este pasaje, Conde y Luque (10) no puede por menos de reconocer: "Verdaderamente es digno de mención que en el siglo V de la era cristiana el legislador de un pueblo recién llegado, como éste, a la civilización, establezca principios jurídicos de que hoy se envanecen la ciencia y las leyes contemporáneas; porque declárase aquí el deber que corre (sic) a los Estados de extender la protección jurídica al extranjero, cuya personalidad se reconoce (*"in advena sollicitus"*), no menos que la relativa igualdad con el ciudadano (*"personam tanto nesciat accipere, quanto et contemnna eligere"*).

Este tratamiento, desde luego benévolo, coincide con las palabras del VIII Concilio de Toledo (Capítulo II), cuando aborda la posibilidad de mitigar la condena de los expatriados y traidores; y después de largas consideraciones, se concluyó que "cualesquiera juramentos hechos en

(7) Cauto.

(8) Apocado.

(9) Perdonar.

(10) R. Conde y Luque, *"Derecho Internacional Privado"*, 2ª edición, refundida, Madrid, 1910, Tomo I, pág. 310.

favor de la potestad real o en defensa del pueblo o de la patria, han de ser observados con toda custodia y vigilancia, pero completamente libres de aquéllos que incluyan la imputación de un miembro o la sentencia de muerte..." (11).

Se avanza en lograr la unidad de godos e hispanorromanos, para lo que fue un medio importante la Ley I del Título I del Libro III ("*Que la mugier romana puede casar con omne godo, e que la mugier goda puede casar con el omne romano*").

"El derecho de gentes se manifiesta en la ocupación de tierras, construcciones de edificios, fortificaciones, guerras, prisioneros, servidumbres, restituciones, tratados de paz, armisticios; comprende también la inviolabilidad de los embajadores o la prohibición de contraer matrimonio con personas extranjeras. Y se llama derecho de gentes porque tiene vigencia en casi todos los pueblos" (12).

"Colonos" son los agricultores que llegan del extranjero, y se les llama así porque cultivan el campo. Vienen, efectivamente, de otras

(11) "*Concilios visigóticos e hispano-romanos*", edición preparada por J. Vives con la colaboración de T. Marín Martínez y G. Martínez Díaz, C.S.I.C., Madrid-Barcelona, 1953, pág. 268 y 274.

(12) San Isidoro de Sevilla, "*Etimologías*", edición bilingüe, por J. Oroz, M. Marcos y M. C. Díez, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1982, I, pág. 513.

tierras, y se dedican a cultivar un campo ajeno en arrendamiento (13). Ostentan el dominio de terreno propio en virtud de cultivo del campo, bajo la propiedad del dueño, por que el fundo les está arrendado. Los colonos pueden ser de cuatro clases: colonos romanos, latinos, auxiliares y colonos de un campo privado.

Denomínanse "inquilinos" a los que cultivan una tierra que no les pertenece: no tienen un lugar que les sea propio, sino que habitan en tierra ajena. Entre "inquilino" y "extranjero" existe una diferencia: que los "inquilinos" son los que "emigran" y no permanecen siempre en un mismo lugar; en cambio, los "extranjeros" o colonos son gente de fuera que se quedan en el lugar; y de ahí el nombre de "colonos", "incolae", porque se convierten en habitantes permanentes; su nombre deriva de "incolere". Los "indígenas" con los que han nacido y visto la luz en el lugar donde viven. Un colono, por lo tanto, no es un indígena sino alguien venido de fuera. Se llama "peregrinos" aquellos cuya procedencia familiar se ignora, debido a que vienen de lejanas regiones (14)

"Advena" (forastero), porque viene de otro lugar (15).

"Alienígena" (extranjero), porque pertenece a otra gente, no a

(13) San Isidoro, Id. I, pág. 781.

(14) San Isidoro, Id., I, pág. 781.

(15) San Isidoro, Id., I, pág. 805.

aquella entre la que mora (16).

"Extorris" (desterrado), el que está lejos de su tierra, viene a equivaler a "ex terris". No obstante, se emplea apropiadamente extorris para significar que ha sido expulsado y alejado de la tierra propia a la fuerza o por el terror (17).

Todas estas matizaciones en las "Etimologías" son una prueba bien patente de las variadas situaciones que se daban en la realidad social.

A pesar de que la diferencia de razas seguía latiendo en la conciencia de los diferentes componentes del pueblo ("*que de cincuenta años adelante ni demanden los godos a los romanos -las tierras-, ni los romanos a los godos*", Libro X, Título II, Ley I).

En todo caso, Recesvinto prohíbe la aplicación de las leyes extranjeras (Libro II, Título I, Ley VIII): "*Bien sofrimos (18) et bien queremos que cada un omne sepa las leyes de los extrannos por su pro; mas quanto es de los pleytos indagar, defendémoslo, e contradezimos que las no usen, que maguer que y aya buenas palabras, todavía ay muchas*

(16) Id., pág. 805.

(17) San Isidoro, Id., I, pág. 817.

(18) Según la versión romanceada.

gravedumbres (19), porque abunda en fazer iusticia, las razones, e las palabras, e las leyes que son contenudas en este libro. Nin queremos que daqui adelante sean usadas las leyes romanas, ni las estrannas", y añade en la Ley IX "que nengún omne de todo nuestro regno defendemos que non presente al iuez para indagar ningun pleyto otro libro de leyes si con este nuestro, e otro traslatado según éste", "e si lo fiziere alguno, peche XXX libras doro al rey. E si el juez, pues que tomare el otro libro defendudo, si non lo rompiere, o lo non despedazase, reciba aquella misma pena. Mas aquéllos non queremos que ayan la pena desta ley los que quisieren dejar las otras leyes que fueron antes fechas, non por destruir estas nuestras, mas por afirmar los pleytos que son pasados por ellas".

De todo ello se infiere, junto a la aplicación de un principio de territorialidad de la Ley, la utilización enérgica de una técnica decidida de recopilación, unida a la existencia de una interpretación histórica de las normas, y dentro de un marco en el que se ordena "guardar" la Ley según la costumbre de la ciudad (Libro I, Título II, Ley IV), se señala la entrada en vigor del "Liber Iudiciorum" (Libro II, Título I, Ley I), se recoge el sometimiento del rey a la Ley (Libro II, Título I, Ley II), se proclama que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento (Libro II, Título I, Ley III), se sienta el principio de respeto a la cosa juzgada (Libro II, Título I, Ley XII), y el de que el Juez sólo puede juzgar dentro de lo que es de su competencia (Libro II, Título I, Ley XI).

(19) Trabajos, dificultades.

Cuando el rey muere, ninguno debe tomar el reino o hacerse rey, ningún religioso, ni siervo, ni hombre extraño, que no sea del linaje de los godos, noble, digno de costumbres, y con el otorgamiento de los obispos y de los godos mayores y de todo el pueblo (Título Primero -Preliminar-, Ley VIII, hecha en el cuarto Concilio de Toledo). La obligación de defender el reino contra los enemigos comprendía no sólo a los nacionales, sino hasta los que hubiesen venido de otra tierra, situados hasta cien millas del lugar de la lid (Libro IX, Título II, Ley IX). Vemos, pues, que, en este período, existía -al menos en la Ley- un aceptable conjunto de normas jurídicas básicas, notables para aquel sistema político tan rudimentario, dentro de las cuales no había demasiadas disposiciones reguladoras de la condición jurídica de los extranjeros. Pero las transcritas merecen elogio en algún caso, y comprensión en todos, incluso desde nuestra visión actual.

2. Extranjeros al Reino y extranjeros a la ciudad

Es del mayor interés la tesis de R. Gibert (20), sobre la distinción entre extranjeros al reino y extranjeros a la ciudad. Según él, se presenta la noción del primer concepto al constituirse el reino visigótico como independiente del Imperio Romano (466-711). Los "milites" bizantinos son combatidos, hasta su expulsión en el año 621. Los dos pueblos -el godo

(20) "La condición de los extranjeros, en el antiguo Derecho español", en "L'Etranger", RSJB, IX, 1958, 2, págs. 150-199.

y el hispano-romano- se integran en la "Gotorum gens, patria o regnum". La actitud de Leovigildo (defensa contra los francos, sometimiento de los suevos y de las tendencias autonómicas territoriales y la idea de la "nación gótica") y la de Recaredo (su conversión al catolicismo), son elementos decisivos. Para explicar su tesis sobre los "extranjeros a la ciudad", Gibert parte del principio de que la instauración de un régimen local y urbano es anterior en España al régimen territorial, por lo que la ciudadanía en el reino se ha configurado sobre el modelo originario de la ciudadanía en la ciudad. Este régimen tenía precedentes entre los pueblos indígenas y las colonias de griegos y fenicios, y la dominación romana, al urbanizar los pueblos, les ha dado un orden general basado en la ciudadanía. La pertenencia a la ciudad deriva de la nacionalidad ("origo"), o de la residencia.

En cuanto a la época visigoda faltan casi en absoluto noticias sobre el tema, debido en parte a la crisis general de la vida urbana y de sus instituciones, pero la causa fundamental está en que las fuentes jurídicas y literarias que llegaron hasta nosotros lo que reflejan es el derecho territorial regio y el régimen de la corte.

Esta tesis de Gibert cuenta con un precedente notable, la del citado Conde y Luque (21), que no cabe desconocer.

(21) Obra citada, pág. 319.

3. Relaciones con el mundo exterior

A la época visigoda podemos identificarla como el intento de realizar el "sugestivo programa de vida en común" de que nos habla Ortega. En efecto, invadido y posteriormente destruido el Imperio Romano de Occidente, la Monarquía visigoda lucha en España por realizar la aspiración de un Estado que domine la anarquía y unifique el poder. Expulsados o vencidos los demás pueblos invasores, vemos ya en Leovigildo un ansia de unificación que se irá trasluciendo en sus intentos para conseguir una legislación común a godos e hispanorromanos, que se logrará con la promulgación del "Liber Iudiciorum" en el VIII Concilio de Toledo, una vez hecha la unidad religiosa en el III y la cultural en el IV.

Ya, desde estos dos Concilios, se puede decir, con Menéndez Pidal, que ha tomado realidad un nuevo nacionalismo, cantado por San Isidoro en su "De laude Hispaniae", inspirada en Claudio; con esto desaparece el universalismo imperial, conservándose sólo el universalismo eclesiástico. Pero se ha de tener en cuenta que este nuevo nacionalismo no era excluyente, pues en ningún momento de esta época hubo preceptos legales que rebajasen la condición de los extranjeros, y ha de buscarse la razón de ello en la comunidad religiosa que soldaba los restos del mundo antiguo.

Llegaba la tolerancia -¿o la conveniencia?- hasta el punto de

continuar abierta la Península al comercio marítimo con Oriente, por medio de mercaderes ("*transmarini negotiatores*") sirios, judíos y griegos, los que no sólo comerciaban en las costas, sino que también llegan a ciudades como Mérida y Córdoba. A mayor abundamiento, como ya se vio, los litigios que sostuviesen entre sí serían sentenciados por sus propios jueces ("*telonarii*") y de acuerdo con sus leyes (Ley II, Título III, Libro XI del "*Liber Iudiciorum*"), siendo ésta una forma de manifestarse el personalismo de las leyes, propio de los bárbaros, más que un respeto a su condición de extranjeros. De esto deducimos que se admitía la presencia, más o menos prolongada, de extraños que, incluso, podían no ser de nuestra religión.

En la época visigoda se produjeron invasiones como las de los bizantinos, y viajes aislados de viajeros, o grupos de ellos de los que nos han quedado vestigios. Así, Thomson nos habla (22) del cruce del Estrecho por los visigodos y de la toma de Ceuta, y de la conquista de dicha ciudad por los bizantinos, en un descuido de aquéllos; los bizantinos ya habían desembarcado en España en junio del año 552, y tomaron parte en las guerras civiles entre los visigodos. Por otra parte (23), aunque España estaba distante de los grandes centros del poder, el país despertaba de cuando en cuando el interés de otros pueblos mediterráneos (así, los ostrogodos, y -más tarde- los bizantinos,

(22) E. A. Thomson, "*Los godos en España*", traducción de J. Faci, Alianza Editorial, Madrid, 1971, pág. 28.

(23) Id., pág. 33.

bajo Justiniano). Por el contrario, los monarcas hispanos mostraron escaso interés por los países extranjeros. Evidentemente, no quisieron que su país se viera implicado en los problemas de los otros.

Desde otro punto de vista, España estaba en estrechas relaciones con el mundo exterior en aspectos no políticos. En el siglo VI hubo dos viajeros excepcionales. Juan de Biclaro fue a Constantinopla, y regresó a España en 576, y estuvo bien informado de los acontecimientos de Oriente durante uno o dos años después de su regreso. Durante la revuelta de Hermenegildo las relaciones entre Bizancio y Toledo estuvieron interrumpidas. A pesar de todo, hacia finales del siglo VI, España estaba probablemente en contacto más estrecho con el Imperio Oriental que Francia. Mientras existía una provincia bizantina (552-624), tuvo que haber una gran comunicación por medio de funcionarios y de correspondencia entre el Sur de España y Constantinopla; así se encuentra en la establecida entre el patricio Caesarius y el rey Sisebuto, hacia 614-615, en la que se ve a funcionarios bizantinos viajando a Constantinopla con un diplomático visigodo, y volviendo felizmente (24). También hubo viajes semioficiales, como el de Leandro de Sevilla a Constantinopla hacia 580, en solicitud de apoyo para Hermenegildo, según parece. El citado Juan de Biclaro se instruyó allí en la cultura griega y latina durante diez y seis años.

Hacia finales del siglo VI, Liciniano, obispo de Cartagena, murió

(24) Ib., pág. 34.

en Constantinopla. Las visitas de clérigos griegos a España debían de ser en 518 lo suficientemente numerosas como para provocar que el papa Hormidas escribiera "a todos los obispos españoles", para explicarles lo que tenían que hacer, en el caso de que solicitasen ser admitidos en su comunión los clérigos que aún no hubiesen abjurado de la herejía de Acacices.

A mediados de siglo un cierto Pablo, físico, vino de Oriente a Mérida, capital de Lusitania, y llegó a ser obispo. Algunos años más tarde, cuando una compañía de comerciantes orientales estuvo en España y visitó Mérida, había entre ellos un muchacho llamado Fidelis, que sucedió a aquél, su tío, como obispo. Los ropajes eclesiásticos de seda, de corte oriental, eran de uso corriente allí, y de las diez inscripciones halladas en España, cuatro lo fueron en Mérida o sus alrededores.

Los obispos de la provincia de la Galia hablaban en 589 de la existencia de sirios y griegos en la Septimania, de la misma manera que de godos, romanos y judíos; la mayor parte de esos sirios y griegos, como la tripulación del barco que había traído a Fidelis a España serían, sin duda, comerciantes. Sabemos que hubo comerciantes orientales en Nîmes, y no es extraño que en los comienzos del siglo VI hubiese una profunda influencia bizantina en los objetos de uso cotidiano entre los visigodos.

Los papas mantuvieron contacto frecuente con España y, en 514, Simaco dio facilidades al clero de Galia o de España que quisiera

visitarle. A finales del aquel siglo, Gregorio el Grande alude a los viajes desde España a Roma, como algo normal. En la primera mitad del siglo hubo un constante trasiego de Italia a España de estilos artísticos y de objetos de arte cotidiano (25).

También existió comercio entre España y Africa. En los últimos años del reinado de Teodosio el Ostrogodo, a unos navegantes que llevaban instrucciones de transportar ganado español hacia Italia, se les encuentra vendiéndolo en Africa. En 533, mercaderes en navegación directa desde Cartago, adelantaron a los embajadores vándalos que venían costeando desde Cartago hasta el estrecho de Gibraltar. El monje Nauctus se trasladó de Africa a Lusitania durante el reinado de Leovigildo, que -a pesar de ser arriano- quiso que el abad le encomendase a su Dios, y no se trata de un caso aislado, porque por las mismas fechas un monje -Dovato- navegó hacia España con otros sesenta compañeros y una gran biblioteca, por temor a los bárbaros moros en el Africa bizantina, y fundó el monasterio de Servitamus, cuya situación se desconoce.

Con Francia hubo comercio y viajes en el siglo VI; a mediados del mismo, las comunicaciones entre Galicia y Tours eran fáciles, y entonces y en el siglo VII hubo tráfico marítimo hacia el Norte, que llegó a Irlanda. Tenemos noticias de un santo que vino de Oriente a Galicia, y de un comerciante español que llegó a Marsella con la mercancía de

(25) Ib., pág. 36.

costumbre. La posición de los comerciantes extranjeros era lo suficientemente importante en la España del siglo VI como para que Leovigildo les dedicase un título en su Código (26).

Dice Thomson que hubo una gran cooperación por parte de los católicos españoles, incluido el clero, con pueblos extranjeros después del 585. Cuando la rebelión de Hermenegildo, según algunos autores, su mujer, Ingundis, murió en Africa, otros dicen que en Sicilia (27). También consta que Leovigildo destruyó los buques que hacían el comercio establecido entre Francia y Galicia (28); que Leandro volvió de Constantinopla para ser obispo de Sevilla (29); que Recaredo, tres años después de convertirse al Catolicismo, había enviado a Roma algunos abades llevando regalos y la noticia de su conversión, pero naufragaron cerca de Marsella y retornaron a España; entonces envió al papa un cáliz de oro con una gema, por medio de un emisario papal, que estaba en Málaga, en la provincia bizantina (30). Todo esto pone de relieve la gran movilidad que existía, lo que demuestra la gran libertad que había para ir a tierras extrañas.

(26) lb., pág. 37.

(27) lb., pág. 89.

(28) lb., pág. 105.

(29) lb., pág. 108.

(30) lb., pág. 131.

Como caso contrario muy especial, debe tenerse en cuenta que los curiales no podían librarse de sus obligaciones abandonando la ciudad en que habían nacido, pues en ese caso se les podía exigir ser curiales tanto en ésta como en aquélla a la que se hubieren trasladado (31); ni podía un consejero municipal entrar en un monasterio para escapar a sus obligaciones (32). Si la hija de un consejero municipal se trasladara a vivir a otra ciudad, tendría que pagar el equivalente de la cuarta parte de su herencia al Concejo que hubiere abandonado; de hecho, se la obligaba a casarse con un curial de su propia ciudad (33).

Frente a esto, vemos a un "dux" militar, al padre de San Fructuoso de Braga, ir con su hijo a los valles montañosos cercanos al Bierzo (Bergidum) y al Noroeste de la Cartaginense para conocer la situación de sus ganados, clasificar las ovejas y oír los informes de los pastores (34).

En el segundo sínodo provincial de la Bética (año 619) compareció un hereje llamado Gregorio, obispo de la secta de los aléfalos y fue convertido por San Isidoro. Pone de relieve que llegaban a España influencias orientales a comienzos del siglo VII, aunque no se sepa la

(31) Ib., pág. 140.

(32) Ib., pág. 141.

(33) Ib., pág. 141.

(34) Ib., pág. 156.

importancia y el destino de la grey a la que abandonó Gregorio.

Con ocasión de una revuelta en el año 632, sacerdotes católicos se ponen en contacto con poderes extranjeros (al igual que Leandro con Bizancio durante la rebelión de Hermenegildo, en 579-584). El IV Concilio dispuso que los sacerdotes que vivían cerca de la frontera no debían recibir mensajes secretos sin autorización del rey, ni enviarlos fuera de España (35).

La pertenencia a una raza extranjera impedía llegar a ser rey (36) u obispo (37). Esta prevención demuestra que no eran escasos los extranjeros. Otras veces, la libertad de movimientos disminuía, por ejemplo bajo Chindasvinto, que arrestó rápidamente (antes del 656) a San Fructuoso, cuando planeó salir en secreto del país para visitar Oriente. En todo caso, debía haber muchos peligros en los viajes. Así, el obispo de Zaragoza, Braulio, en carta de 640-646, dice que algunos hombres de su ciudad tenían miedo de viajar a Valencia, a causa de los bandidos que merodeaban por los caminos (38). Bajo Chindasvinto, los curiales podían vender sus tierras y marcharse, con tal que el comprador

(35) Ib., pág. 203.

(36) Ib., pág. 210.

(37) Ib., pág. 218.

(38) Ib., pág. 227.

se comprometiese a pagar los impuestos que las gravaban (39).

En cambio, con Ervigio, las restricciones para viajar puestas a los judíos son notables (40), lo que produjo daño a los mercaderes (41); del mismo modo que Egica persiguió duramente a los esclavos fugitivos (42), obligando a dar cuenta de la llegada de cualquier extranjero a las autoridades, por si fuera esclavo (43). Estas normas perjudicaron la facilidad de los pobres para viajar por el interior de España. Cuando San Fructuoso se encontraba en las cercanías de Italia (Egitania), descalzo y vestido de harapos, un campesino le tomó por un esclavo fugitivo y empezó a golpearle. Sólo un milagro salvó la vida al santo (44). Pero el artificio de la organización política visigoda, más o menos perfecta, y casi siempre amenazada por sucesivas sublevaciones, se quiebra con la invasión árabe en los primeros años del siglo VIII.

(39) Ib., pág. 242.

(40) Ib., pág. 269.

(41) Ib., pág. 271.

(42) Ib., pág. 284.

(43) Ib., pág. 309.

(44) Ib., pág. 310.

4. Relaciones Iglesia-Estado: los Concilios

Durante el periodo visigótico, en la fase arriana, la Iglesia Católica desarrolla su actividad separada del Estado, el cual, a veces, trata de intervenir aquélla, para utilizar su influencia sobre sus fieles, y se provocan tensiones al intentar someterla, como pretendieron Eurico y Leovigildo. Por el contrario, en el período católico, con la conversión de Recesvinto en el III Concilio de Toledo, tanto se relacionan ambos poderes que llegan a interferencias enormes: los concilios toledanos que, en un primer momento, se ocupan de materias religiosas, pasan a tratar temas legislativos, políticos y administrativos con asistencia en estos puntos de los nobles. El rey pronuncia un discurso inicial ("tomo regio"), en el que propone los asuntos a debatir. Los cánones son aprobados por el Concilio y sancionados por el rey, el cual nombra, a veces, a los obispos.

El Título Primero (Preliminar) del "Liber Iudiciorum" contiene diez y nueve leyes que regulan las materias más diversas, y que fueron aprobadas en los Concilios cuarto (bajo Sisenando) a décimo de Toledo (bajo Egica), con intervención de los obispos.

Una de las formas de manifestarse el poder de la Iglesia lo encontramos en la Ley III, del Título I del Libro XII, que da facultad a los obispos para mandar y amonestar a los alcaldes cuando hagan "algún tuerto"; a la inversa, la Ley XVIII, del Título IV, del Libro III, incluye



a los clérigos entre los ministros del príncipe. Vemos, pues, cómo ambos poderes se apoyaban el uno en el otro.

Todo esto, desde luego, no es manera de regular las condiciones de la extranjería, pero se presenta como una serie de intervenciones en la vida social por un poder ajeno al Estado, y continúa siendo un elemento de prueba de la importancia del factor religioso en el esquema político, que trasciende a todos los órdenes, del que no se excluye la condición de los extranjeros.

Es, en verdad, impresionante, la intervención de los Concilios, en la vida civil, pública y privada, como se desprende de la lectura de sus actas (45), y destaca J. M. Pérez-Prendes (46).

III. *EXAMEN DE LAS SITUACIONES PARTICULARES*

1. Mercaderes, jueces y telonarios

Sobre los mercaderes, cuya condición jurídica solía equipararse a la de los peregrinos, transcribimos las siguientes disposiciones:

(45) Ver, más arriba, nota (11).

(46) Obra citada, pág. 283.

"Liber Iudiciorum", Título III del Libro XI: *De Transmarinis negotiatoribus*. *Lex I (antiqua)*: "Si quis transmarinus negotiator aurum, argentum, vestimenta, vel quaelibet ornamenta provincialibus nostris vendiderit, et competenti pretio fuerint renundata; si furtiva post modum fuerint adprobata, nullam emptor calumniam pertinescat".

Lex II (antiqua): "Quum transmarini negotiatores inter se causam habent, nullus de redibus nostris eos audire praesumat, nisi tantummodo suis legibus audiantur apud telonarios suos".

Lex III (antiqua): "Nullus transmarinus negotiator de redibus nostris mercenarium audeat in loca sua transferre. Qui contram hoc venire tentaverit, inferat fisco nostro auri libram unam, et praetere C flagella suscipiat".

Lex IV: "Si quis transmarinus negotiator mercenarium de redibus nostris pro vegetando commercio susciperit, det pro beneficio eius solidos III per annum unum, et nihil hominus impleto placite servum domino reformar cogatur".

Estas leyes las vierte así el "Fuero Juzgo": Ley I (antigua): "Si el mercadero dultira portos vende oro, o argento a omne de nuestro regno, o pannos, o vestidos, o otras cosas, si las cosas fueron compradas en razón conveniblemiente, maguer que sean de furto, el que las compró, maguer le seyen provadas de furto, non deve aver nenguna calonna". (Como se ve, contiene ya la protección de la compra de buena fe en establecimiento

mercantil).

Ley II (antigua): *"Si los mercaderes dultra portos an algún pleyto entre sí, ningún juez de nuestra tierra non le deve judgar; mas responder deven segund sus leyes, ante sus jueces"* (Montesquieu llama la atención en "El espíritu de las leyes" sobre esta disposición, que es una forma de mostrarse el personalismo de las leyes).

Ley III (antigua): *"Ningún mercadero defendemos que non lieve consigo siervo de nuestro regno. E si alguno lo ficiere, peche al rey una libra doro e además reciba C. azotes"*.

Ley IV: *"Si algún omne mercadero dultra portos tomare algún siervo de nuestro regno que le lieve sus mercaderías, por cada anno del tres marevedís por su trabajo, e a cabo del plazo entregue el siervo a su Sennor"*. (Se aprecia que estaba prohibido la movilidad definitiva de siervos, pero no la transitoria).

Los autores celebran los principios que inspiran la independencia de los mercaderes extranjeros para dirimir sus contiendas, como muestra del reconocimiento de su independencia; pero, cabe también preguntarse: ¿no habría también en esta secuela del personalismo germánico una inhibición, un "encogerse de hombros" de los poderes oficiales ante los problemas de pequeños grupos sociales entre sí?

2. Una situación especial: los judíos, ¿eran extranjeros?

Intimamente ligada con la condición jurídica de los extranjeros estaba la de los judíos. ¿Eran extranjeros los judíos? Así lo parecen entender los historiadores del Derecho cuando, sin plantearse expresamente la cuestión, la dan por resuelta "a priori" e incluyen su problemática dentro de la extranjería. Sin embargo, a nuestro parecer, la materia debe ser objeto de algunas precisiones.

En primer lugar, los judíos se nos presentan inicialmente como unos viajeros o comerciantes más, que vienen a la Península Ibérica igual que lo hacen los fenicios o los griegos. A este respecto, José Amador de los Ríos (47) dice:

"He aquí, pues, el concepto en que ya apuntamos, que acaso vinieron los judíos a nuestra Península mucho antes que asentaran en ella su planta los romanos; sus colonias, sin embargo, debieron limitarse por entonces a las regiones litorales del Oriente y Mediodía al amparo de las sirias y fenicias, no hallando razón plausible para creer que les fuera dado por aquellos días penetrar en el centro del continente, como resultaría de admitir la frágil cuanto ambiciosa opinión de que fueron Toledo y las demás ciudades de su comarca fundadas por los judíos, dados al fabuloso rey Hispán por el temido Nabucodonosor, avasallado

(47) *"Historia Social, Política y Religiosa de los judíos en España y Portugal"*, publicada por primera vez en 1876 (precedida de unos *"Estudios históricos, políticos, literarios sobre los judíos españoles en España"*, 1848).

ya y destruida Jerusalén y quemado su templo".

"En todo caso, cuando la peculiaridad del problema surge es cuando se produce la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío por todo el mundo; entonces se convierten en lo que hoy se llaman apátridas y son mejor o peor tratados por los pueblos en los que se refugian".

"Culminan estas circunstancias con la destrucción y saqueo de Jerusalén bajo el Imperio de Tito en el año 74 después de Cristo, 824 de Roma, y perseguidos después por Adriano, que los desterraba para siempre de su país natal en el año 117 después de Cristo, con lo cual aquella nación rica, gloriosa, se convirtió en un pueblo mísero en medio de los demás, que lo odiaban y lo escarnecían, derramándose por todos los confines de la tierra".

"El primer documento que nos dio a conocer la existencia de los israelitas en gran número establecidos en España, son los cánones del Concilio Liberitano celebrado en los primeros días del siglo IV cuando aún no se había alcanzado en la Iglesia la paz de Constantino. Convocados en asamblea religiosa diecinueve obispos, veinticuatro presbíteros y gran número de diáconos y de legos, regularon, como se verá en otro punto de este trabajo, la estancia y relaciones de los judíos con el resto de los hispanos, y, aunque no aquejado de espíritu de tolerancia, sin embargo sus leyes constituyeron los cimientos del divorcio

social que en el futuro iba a establecerse entre el pueblo hispano y el pueblo judío".

Para Amador de los Ríos, después de varias generaciones de estar sometidos a un determinado poder político, no cabe afirmar que siguen siendo unos extranjeros apátridas que residen más o menos circunstancialmente en el país, ya que se convierten en súbditos de aquel poder político que no sólo los reconoce como tales, sino que regula las singularidades que presentan por su diferente raza y religión, si bien esta distinción entre refugiados y asentados no se percibe siempre. Por nuestra parte, y sin tratar de corregir ni enmendar tan docta opinión, estimamos que fueron tantos los movimientos migratorios de los judíos a lo largo de nuestra Historia, tan constantes sus idas y venidas, y tan patente su falta de un asentamiento permanente y estable, que permiten que, bajo muchos puntos de vista, sí puedan ser considerados como próximos a los apátridas, o, por lo menos, como súbditos de naturaleza muy especial, que al constituir núcleos de entidad suficiente como para que fuese preciso contar con ellos en la vida social, no podían ser tratados como incluidos dentro de la generalidad de los ciudadanos, sino que -necesariamente- provocarían diferentes disposiciones de los poderes públicos aplicables a ellos de manera concreta y especial, de signo diverso según los casos, promovidos por un elemento diferencial básico: la religión, aunque también su raza los hizo sospechosos -o merecedores de vigilancia- en mayor o menor grado, como personas o grupos que vivían en nuestro territorio, necesarios de regulación al margen del

común de los demás súbditos, al que ellos mismos nunca llegan a sentirse unidos. Se puede decir que su situación en la sociedad pasa sistemáticamente por estas fases: persecución, tolerancia, acaparamiento de puestos influyentes y de riquezas, y nueva persecución (volviendo a empezar el ciclo). Esta casi permanente evolución se produce lo mismo de fuera a dentro, que de dentro a fuera, como entre los diferentes reinos cristianos entre sí. Y permite que se junten a los ya asentados anteriormente otros judíos venidos de fuera, que se mezclan con ellos, lo que hace más singular la situación, al sumarse a ella estos súbditos sobrevenidos.

Por otra parte, los visigodos, en el momento en que estaban sometidos a la herejía de Arrio, no desdeñaron conceder su protección a la raza judía, cuyos servicios comenzaban ya a ser grandemente útiles para los pueblos que los acogían en su seno; con este motivo aumentó mucho la grey israelita durante la primera época de la dominación visigoda, y alcanzaron, gracias a la inteligencia de su raza y a las riquezas que fueron juntando, gran importancia y predicamento. No obstante, elevado Sisebuto al trono, a la vista de los abusos que se imputaban a los hebreos en el cumplimiento de las leyes, se creyó dicho rey en la precisión de dictar el Edicto que expulsaba perpetuamente de sus hogares a los descendientes de Judá en toda la extensión del Imperio visigodo, impedía a todos los cristianos darles de algún modo protección o ayuda, y ponía como condición para rescatarles del destierro la de abrazar la religión católica.

Sosegados los ánimos e incumplido en cierto modo el Edicto, en los cánones de los Concilios sucesivos y en las leyes visigodas se dictaron algunas medidas restrictivas, pero no gravemente onerosas: así los Concilios IX y X de Toledo, de los años 655 y 656, se limitaron a mandar que los conversos celebrasen con los obispos las fiestas solemnes, y a ratificar la ley antes formulada de que no se pudiesen vender esclavos cristianos a judíos y a gentiles.

Pero tan pronto Wamba llegó al trono, la rebelión de Ilderico y de Paulo les dió ocasión de manifestar su falta de simpatía por las instituciones oficiales, y se pusieron abiertamente de parte de los amotinados; con tal motivo tornaron al Imperio visigodo, especialmente en la zona de la Galia Gótica, donde había tomado mayor cuerpo la rebelión, muchas familias hebreas de las que habían salido del reino en la época de Sisebuto. Hasta que, vencidos en Nîmes, se publicaron diversos Edictos para castigo y escarmiento de los judíos, que fueron arrojados de nuevo en masa de la Galia Gótica.

En tal sentido, al terminar el año 694 se celebró un nuevo Concilio de Toledo, convocado por Egica, quien pidió se dictasen las leyes convenientes para el castigo de los judíos por su tendencia a la conspiración contra la seguridad del Estado, y para tratar de extirpar la religión mosaica, acordándose que fuesen dados por siervos, confiscados sus bienes para que, con la pobreza, sintiesen más el trabajo, y entregados a sus propios siervos cristianos, a elección del rey, con

absoluta prohibición de sus ritos; y quitándoseles los hijos de ambos sexos (una vez llegasen a la edad de siete años), para educarlos bajo la tutela de virtuosos varones conforme a las prácticas católicas. Los judíos que se resistiesen al cumplimiento de estas leyes serían decapitados y sus bienes ingresados en el fisco.

A la muerte de Egica, y habiendo subido al trono su hijo Witiza, cambiaron las circunstancias de forma mucho más humana, pues en un nuevo Concilio se revocaron los anteriores cánones y se les abrieron las puertas de la nación para que pudiesen regresar, colocando en elevados puestos a muchos descendientes de aquella raza, con lo cual nuevamente los judíos alcanzaron una enorme preponderancia y se convirtieron en peligro para el pueblo hispano-visigodo, aparte de preparar nuevos planes de venganza en secreto. Movidos del odio que sentían, les faltó tiempo para tratar de rescatar su libertad al amparo de los musulmanes, demostrando la Historia que sólo iban a cambiar de señores, dispuestos a extremar la saña y la dureza de las persecuciones.

Con o sin causa que justificase su postura, lo que está fuera de duda era su insolidaridad con el reino godo y con el resto de la nación hispana.

La trascendencia del tema se pone de manifiesto examinando el Libro XII del "Liber Iudiciorum", en concreto sus Títulos II y III (bis), y es preciso detenerse en la sistemática del primero de ellos, que va

dirigido a los herejes, a los judíos y a las sectas.

En efecto, la Ley I dice *"que después que las leyes fueron dadas a los fieles de Dios, conviene a hacerles a los non fieles"*, la Ley II se ocupa de *"toller los yerros de todos los herejes"*, y la IV *"de las leyes que fueron dadas por la maldad de los judíos"*, y continúa este título ocupándose de éstos hasta la Ley XVII.

La Ley I es una introducción llena de reflexiones, que terminan con ésta, que no deja de ser significativa: *"E pues que los fieles de Dios toviéremos en paz, e los non fieles tomaremos a concordia, que crezca la nuestra loor, y el nuestro precio, e con la virtud de Dios, que crecentemos nuestro regno"*.

Para ello (Ley II) ordena *"que ningund omne de ninguna gente, si quien de nuestro regno, o estranno, ni de otra tierra..., sea osado de quebrantar los mandamientos que fcieron las sanctos padres antiguamente, ...de despreciar los establecimientos de la fee, ni contra los sacramentos... E cualquier persona que venga contra esto...pierda la dignidad e la ondra que oviere por siempre, ..., e todo lo que oviere. E si fuese omne lego, pierda su ondra toda, si se non quisiere repentir, e vivir segund el manamiento de Dios"*.

La Ley III se ocupa *"dordenar especialmente las maldades que hacen algunos en nuestros días"*, puesto que *"deraiados"* (48) todos los herejes, por

(48) Desarraigados.

la maldade de los judíos solamente entendemos que el nuestro regno es ensuciado", y pasa a tomar las prevenciones que el rey Recesvinto estima oportunas:

Ley IV.- *"De tollere los yerros de los judíos"* (que no blasfemen, ni dejen la fe de los cristianos, ni huyan ni se escondan para no recibirla, ni vuelvan a su error...")

Ley V.- *"Que los judíos non fagan su Pascua segund su ley"*.

Ley VI.- *"Que los judíos non se casen segund su ley"*.

Ley VII.- *"Que los judíos non se circunciden"*.

Ley VIII.- *"Que los judíos non coman las viandas segund su ley"*.

Ley IX.- *"Que los judíos non deven facer tormentar los cristianos"*.

Ley X.- *"Que los judíos non deven seer testimonios contra los cristianos"*.

Ley XI.- *"Cuemo deven seer penados los judíos que facen contra la ley (...le deven matar con sus manos, o apedrear, o quemar en fuego ...y si el príncipe quiere tener piedad del judío infractor, délo por siervo a quien quisiera)"*.

A su vez, el Rey Sisebuto mandó:

Ley XII.- *"Que los judíos non circunden el siervo cristiano"*.

Ley XIII.- *"De los judíos que venden los siervos cristianos, o que los franqueen"* (sean libres los siervos).

Ley XIV.- *"Que los siervos cristianos non se alieguen en ninguna manera a los judíos, ni entren en su secta"*.

Ley XV.- *"Que ningún cristiano non deve mamparar los judíos, nin defender"*.

Ley XVI.- Contiene una curiosa constitución que los judíos de Toledo enviaron al Rey, en la que figuran los compromisos que adquieren los judíos con los que no se quisieran bautizar: no tener relación con ellos, no casarse con ninguno de su linaje hasta el sexto grado, no circuncidarse, no guardar la Pascua, ni los sábados ni las otras fiestas, no tomar las comidas a la manera judía, ni seguir ninguna costumbre suya.

Egica, en la Ley XVII, castiga con la muerte a los cristianos que se vuelven judíos, y todo su patrimonio téngalo el rey, para que los herederos ("*nin los propinquos*") no cometan tales errores.

Por fin, la Ley XVIII de este Título II, bajo la significativa rúbrica "De la perfidia de los judíos", contiene una serie de reglas de Derecho Mercantil:

- El judío que se convierte al Cristianismo puede comerciar con los cristianos.

- Si después vuelve a su creencia judía, "con todas sus cosas sea dado a la bolsa del rey".

- Los judíos que no se conviertan no pueden comerciar con los cristianos, ni en los mercados, ni en ultramar, pero pueden hacer entre sí sus mercaderías, pero todo lo que compran a los cristianos: siervos, casas, tierras, viñas, olivares, "sea de la bolsa del rey", y el judío siervo del rey. Y dice de forma expresiva: *"Otrosí amonestamos a los cristianos, que por amor de Dios non muerquen nada con ellos, bajo pena de muerte si fuese persona "mayor" (importante) o de cien azotes y confiscación de bienes, si fuese "menor"*.

El Título III (es el III bis) del Libro XII contiene las Leyes Nuevas de los judíos, que llegan a la XXVIII, y la I destaca que éstas las afirman (a las Antiguas) y concuerdan con ellas, con la salvedad de acabar expresando que *"es plana cosa y manifiesta que el nuestro Sennor...non quiere la muerte del pecador, nil place que los vivos perezcan, mas quiere que conviertan e vivan, por lo que la ley que condena con la*

muerte la "descreencia de los judíos" es derogada.

En todo caso, la promulgación de estas Leyes Nuevas pone de relieve tal reiteración en abordar un problema, que demuestra que éste era considerado como muy importante.

En la Ley II condena a los que denostan a la Santísima Trinidad con cien azotes, esquilárles la cabeza, meterlos entre rejas, o echarlos "fuera de la tierra en un lugar, o sea toda su vida", o confiscación de bienes. En cualquier caso, las penas eran durísimas.

A los que no se bauticen (o a sus hijos o a sus siervos) dentro del plazo de un año, se le impodrán cien azotes, cortarle el pelo, echarlos de la tierra por siempre y confiscación de sus bienes.

Parecidas penas tenían celebrar la Pascua según su costumbre, o hacer la circuncisión (Ley IV), guardar los sábados y sus fiestas (Ley V), trabajar en domingo (cien azotes, y los señores que se lo mandasen a sus siervos, multa de cien maravedíes, Ley VI); dejar unas carnes y comer otras (cortarle el pelo y cien azotes, Ley VII), casarse con parientes o sin bendición de sacerdote (Ley VIII), desmentir la Ley de Cristo (Ley IX), leer libros contra la Ley de Cristo (Ley XI) ... Los siervos de los judíos que se hiciesen cristianos, que sean libres (Ley XVIII), que no sean mayordomos (administradores de familias de cristianos) (Ley XIX). Se encomienda a los reyes que sean piadosos con los que toman a la Ley de

Cristo con buena voluntad (Ley XXVII), se da gran intervención a los obispos en diversos aspectos relacionados con esta materia (Leyes XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII), y se les encomienda a los obispos den traslado de este Libro, que fue hecho para deshacer la falta de fe de los judíos (Ley XXVIII), a todos los que tienen bajo su guardia.

Todo este conjunto de disposiciones se nos presenta hoy poco menos que incomprensible. No obstante, ha de ser interpretado con la mentalidad de aquella época, teniendo en cuenta la inter-relación Estado-Iglesia que apuntábamos, que el fenómeno se prolonga en España hasta la expulsión (finales del siglo XV), y que ni siquiera se extingue con ella, y que esta situación se dio en la generalidad de los países europeos.

Pero hay más: su intervención -motivada por la venganza- en facilitar la invasión musulmana demuestra que eran una minoría, no merecedora por principio de persecución, pero sí, al menos, de un cuidadoso tratamiento.

3. Los siervos. Situación del que es vendido dos veces en tierra extraña

La Ley X, del Título I del Libro IX del "Liber Iudiciorum", dice que *"si algun omne vende su siervo fuera de nuestro regno, y el siervo se torna después, y el sennor lo vende otra vez fuera del regno, el juez deve*

constrinnir al sennor que lo redima daquel que lo compro: e después que lo oviese el sennor, no se faga ninguna contralla, y el siervo sea libre, y el sennor que lo vendió fuera de nuestro regno, después quél retornara, peche otra tal siervo a aquél quien lo vendió primero, e al otro que vendió después entreguel precio: y el siervo que se tornó sea libre, y el sennor primero non lo pueda vender sin tener más en su servicio".

Esta disposición ha de ser interpretada dentro del contexto de todas las de este Título ("*De los siervos foidos, e de los que toman*"), no como un premio o privilegio que recibe el siervo que traspasó por dos veces las fronteras del reino, sino como un castigo al señor que rompe la rígida estructura de la esclavitud, que trata de evitar a toda costa (véanse las demás leyes de este Título) que los siervos se desliguen de sus señores, evitando incluso, en el caso presente, que éstos especulen con ellos fuera del reino.

No es éste el lugar adecuado para ocuparnos de la esclavitud, ni de sus problemas sociológicos, pero sí conviene poner de relieve la importancia que indudablemente se da a esta cuestión concreta en el "*Liber Iudiciorum*", hasta el punto de presentarse como materia dominante, ya que la rúbrica del Libro IX se refiere a los siervos huidos y a los que se vuelven, que se regula en el Título I, olvidándose de los otros dos Títulos que, además, no tienen nada que ver con la servidumbre (relativos a los que no van a la hueste y a los que huyen a la Iglesia). Dentro del cúmulo de medidas previstas en aquél (son

veintiuna las leyes que contiene) para evitar la huida contra la voluntad del señor, se incluye la Ley X para impedir que el mismo obre especulando a su albedrío (es decir, es la situación opuesta), fuera del reino, pero sólo a partir de la segunda venta, la que se condena con la puesta en libertad del siervo (se dice dos veces), realizando su redención del dueño actual mediante el pago del precio, y dando al primer comprador otro semejante. Esta valoración es recogida por J. A. Escudero (49).

Aparte de que la ejecución de esa doble condena fuera del reino habría de presentar complicaciones muchas veces difíciles, o hasta imposibles, de superar, no deja de llamar la atención la dureza del castigo que para el primitivo dueño entraña esta venta del siervo en otra tierra, que -paradójicamente- se castiga con su libertad.

IV. *BALANCE DEL PERIODO*

Dentro de lo convencional de la división de la Historia en épocas, nos encontramos en este caso ante una bien definida: empieza en el año 409 con la invasión de suevos, vándalos y alanos, que a continuación o se marchan de Hispania o son vencidos -los dos últimos- por los visigodos, aliados del Imperio, con el que (siendo Honorio Emperador),

(49) Obra citada, pág. 195.

bajo el rey Valia celebraron un "foedus" (año 418), para convertirse en auxiliares militares de aquél -por lo que reciben tierras en la Galia-, pasando a ser, poco a poco, dominadores. Pero la "invasión" de aquel año no se trataba de tropas guerreras exclusivamente, sino de pueblos enteros con mujeres y niños y ocupantes de las tierras que, en un principio, se habían reservado los romanos. Es decir, los visigodos "entran" abiertamente en la Península.

Según parece, en 457, un número relativamente importante de familias de campesinos visigodos se instalaron en la hoy denominada "Tierra de Campos"; la penetración en masa tiene lugar a partir de la batalla de Vouillé (año 507), en la que Alarico II fue derrotado y muerto, en su lucha con los francos.

Según F. Tomás y Valiente (50), para los arqueólogos e historiadores el número de visigodos que convivieron con los galorromanos primero y los hispanorromanos después, va de 80.000 a 200.000; en todo caso, menos del cinco por ciento de la población de Hispania, que conservaba una mayoría hispanorromana aplastante.

Para García Gallo (51), había 9.000.000 de "españoles" y menos de 200.000 germanos: un dos y medio por ciento.

(50) *"Manual de Historia del Derecho español"*, Madrid, Tecnos, 1981, pág. 89.

(51) A. García Gallo, *"Curso de Historia del Derecho español"*, Madrid, 1947, pág. 91.

Pocas noticias tenemos de los suevos, aunque no ninguna, como dice el mismo García Gallo (52). Según Casimiro Torres Rodríguez (53), cuando se producían contiendas entre ellos y los indígenas, eran los tribunales suevos los que decidían, con apelación al rey suevo. Otras veces, había un tribunal arbitral constituido por obispos o por clérigos. Los pleitos entre los suevos los resolvían sus propios magistrados.

Por otra parte, la monarquía visigótica se derrumba en la batalla de Guadalete, o de la Janda, en el 711, que abre las puertas a la invasión árabe.

Como se ve, este período es relativamente corto, y durante una buena porción de su primera parte, el Estado, por llamar de alguna manera a la forma política de organizarse, está en "constitución". El poder no tiene autoridad para imponerse, y el pueblo está dividido por causas religiosas y culturales.

Con Leovigildo el poder real se fortalece, y con Recaredo, convertido al catolicismo, se da impulso a la fusión de godos y romanos, y se establecen las bases de la constitución política y del orden jurídico, si bien las luchas entre el poder real, apoyado por la Iglesia, y entre los nobles evitan alcanzar la deseada estabilidad política. Una de estas

(52) Obra citada en la nota anterior, pág. 72.

(53) "*Galicia sueva*", Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, 1978, pág. 271.

luchas, al buscar apoyo en los musulmanes habitantes del Norte de Africa, trae consigo la caída de la monarquía.

En el campo del Derecho, en medio de esta ebullición política se aplican instituciones romanas del bajo Imperio, germánicas (visigóticas, suevas, francas y ostrogodas, de carácter arcaico y semejantes a las de los países nórdicos), y canónicas.

Como una faceta más de la lucha por alcanzar la plenitud política, los visigodos tratan de imponer colecciones de leyes, es decir, recopilaciones en las que se recogen soluciones casuísticas -ya que son poco capaces para comprender ideas jurídicas abstractas-, y ésta es quizá una de las más evidentes muestras del retroceso que supuso la caída del Imperio romano y la invasión de los bárbaros. Las leyes se aplican literalmente, la costumbre sólo al caso que coincide plenamente con ella. No se acude a la analogía, para resolver situaciones semejantes. Cuando no hay norma aplicable, se debe acudir al rey, para que la dicte (54). A su lado y -de hecho- frente a la ley, la costumbre tuvo, en la realidad, una gran importancia, si bien como fuente (oficial) del Derecho sólo se admitiese la "secundum legem". Además de las leyes teodoricianas y del Código de Leovigildo, que no han llegado hasta nosotros (aunque muchas de las leyes de éste son las "antiguas" del "Liber Iudiciorum"), se conocen el Código de Eurico, el Breviario de Alarico y la Ley de Teudis.

(54) A. D'Ors, *"El Código de Eurico"*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1960.

Innegablemente ningún "Corpus" de leyes tuvo la transcendencia del "Liber Iudiciorum", por lo que supuso como instrumento para la implantación de un orden jurídico tanto en sus tres ediciones visigodas (la de Recesvinto -654-, la de Ervigio -681- y la "vulgata"), como en su versión romanceada, o "Fuero Juzgo" (Así lo entienden Brunner, Zeumer, Hinojosa, Galo Sánchez, Prieto Bances, Sánchez-Albornoz, García de Valdeavellano, Pérez-Prendes).

La teoría tradicional (Bahm, Brunner, Hinojosa, Von Halban, Meréa, Torres López...) sustenta el principio de la personalidad del Derecho como norma general entre los pueblos germánicos y, en concreto, entre los visigodos. Así, el Código de Eurico se destinaba a éstos, y el Breviario de Alarico a los hispanorromanos (55); sólo el "Liber" se aplica a toda la población. Por el contrario, según A. García Gallo (56) y Alvaro D'Ors (57), la legislación real tuvo vigencia en todo momento en el territorio. Para Tomás y Valiente (58), la cuestión sigue pendiente, aunque él se inclina más por la segunda interpretación.

(55) "*Lex Romana Visigotorum*", edición de G. Haenel, Leipzig, 1849.

(56) "*Nacionalidad y territorialidad del Derecho en la época visigoda*", en "Anuario de Historia del Derecho Español", XIII, pág. 168 y sts.; "*La territorialidad de la legislación visigoda: respuesta al profesor Meréa*", en el mismo Anuario, XIV, pág. 559 y sts. Los antecedentes hay que buscarlos en Eichhorm y Gaupp (J. M. Pérez-Prendes, obra citada, pág. 275).

(57) "*El problema de la territorialidad del Derecho visigodo*", en "Estudios Visigóticos", Roma-Madrid, 1956, I, pág. 91 y sts.

(58) "*Manual de Historia del Derecho Español*", Tecnos, 1981, pág. 107.

Tampoco el "*Liber Iudiciorum*" contiene una sistemática de la condición jurídica de los extranjeros, pero recoge la orientación del cuidado de que deben ser objeto por los jueces, tratándolos al igual que a los nacionales; y la territorialidad del Derecho, que prohíbe aplicar otro "Libro" distinto de éste, con la excepción de los litigios entre mercaderes extranjeros que serán resueltos por sus propios jueces y con arreglo a sus leyes, lo que supone un caso concreto de supervivencia del principio de personalidad de las leyes, originariamente seguido por los visigodos.

Parte II

EL EXTRANJERO DURANTE LA RECONQUISTA

Capítulo III

SITUACIONES Y ESTATUTOS DIFERENCIALES

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Como señala acertadamente M. Arjona Colomo (1), la coexistencia de cristianos de diversos reinos, musulmanes, mozárabes, judíos, francos, etc., trae como consecuencia que el imperio del personalismo de las leyes no pueda ser mayor. Para este autor, España era una vasta asociación de extranjeros repartida en tres categorías: la que formaban las ínfimas clases sociales, la de los ciudadanos de los otros numerosos Estados mahometanos o cristianos en que se dividía la Península, y la constituida por los procedentes de diversas regiones, avecindados o transeúntes en el territorio. Los extranjeros pueden adquirir la condición de ciudadanos de Tortosa, por llevar diez años de residencia constante en la ciudad o en su término; por contraer matrimonio con hija de ciudadano o ciudadana tortosina, fijando su residencia definitiva en la ciudad o en su término y por obtener carta de vecindad.

Según André Weiss (2), la legislación española se ha mostrado

(1) Obra citada, pág. 408.

(2) *Traité theorique et pratique de Droit International Privé*, II, París, 1849, pág. 523.

favorable a los extranjeros: no parece que se haya aplicado nunca el derecho de aubana y, en la Edad Media, diversos textos han colocado a los comerciantes y a los peregrinos de otras naciones bajo la protección de las leyes y de las autoridades locales.

Por otro lado, de acuerdo con A. de Lapradelle y J. P. Niboyet (3), en la Edad Media, en la Europa Occidental se concluyen acuerdos entre los soberanos para asegurar la libertad de comercio, la exención de impuestos o tasas sobre los extranjeros en relación con el pago de deudas. El principio de libertad comercial se abre paso, pero es siempre un privilegio, y el derecho de los extranjeros a poseer bienes y el de que se les haga Justicia son afirmados poco a poco, pero sin precisión (por ejemplo, el tratado entre Inglaterra y Portugal de 20 de octubre de 1353).

Por lo que concierne a la Península Ibérica, cabe retener que en la Reconquista (siglos VIII-XV) surge una pluralidad de territorios políticamente independientes, pero existe una tendencia a la unidad que se concreta en la aspiración al "Imperio Hispánico".

Inmediatamente de producirse la invasión se establecen por separado tratados entre los árabes y las poblaciones que iban cayendo en su poder: Toledo, Mérida, Córdoba, Orihuela, Sevilla y otras (4). El que

(3) *"Répertoire de Droit International"*, París, 1930, VIII, pág. 7.

(4) R. Conde y Luque, obra citada, pág. 315.

firmaron Tarik y la ciudad de Toledo contenía estas condiciones: 1ª, que entregasen los toledanos sus caballos y sus armas; 2ª, que los que quisieran salir de la ciudad, lo hiciesen con toda libertad, pero sin poder llevar cosa alguna; 3ª, que se asegurarían las vidas y haciendas de los que quedasen, teniendo que pagar un tributo moderado; 4ª, que podrían seguir ejerciendo la religión y su culto en las iglesias, pero sin poder erigir nuevos templos, ni hacer procesiones o ceremonias públicas; 5ª, que conservarían sus jueces, leyes y usos (5).

El orden político de Toledo se restauró en Oviedo (año 791) (6) y en León (911), de cuyo reino se independizan dos Condados: Portugal y Castilla, la que se une a León de manera definitiva en 1.230. A ella se agregan, por conquista, los reinos musulmanes de Badajoz, Sevilla, Jaén, Murcia y, en 1492, Granada, y a los que se incorporan las Islas Canarias y las Indias; no hay extranjería entre estos diferentes territorios, salvo con las Vascongadas, unidas por pacto con la Corona.

En el siglo X se constituye como independiente el reino de Pamplona (luego Navarra). Conquistado en 1516 por Fernando el

(5) Idem, Idem.

(6) Para una completa información, C. Sánchez-Albornoz, *"El reino de Asturias. Orígenes de la nación española"*, Biblioteca Histórica Asturiana, Gijón, 1989, especialmente pág. 153 y siguientes; y con más extensión, en 3 tomos, *"Orígenes de la nación española. Estudios críticos sobre la Historia del Reino de Asturias"*, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1972-1974.

Católico, conserva su autonomía: la unión es sólo personal. De otra parte, Aragón es un reino a partir de la sucesión de Sancho el Mayor (1035); su unión con el Condado de Barcelona (1162) fue sólo personal y a esta Corona se incorporan por conquista: Mallorca (1229) y Valencia (1238). Aragoneses, catalanes y valencianos son extranjeros entre sí, salvo catalanes y mallorquines en algún aspecto. Por último, la unión de Castilla y Aragón (1474-1479) no ha alterado este estado de cosas, pero ha sentado las leyes para su modificación. Aragoneses y catalanes son extranjeros entre sí; el rey expide salvoconductos a los súbditos de un reino para que se les permita el tránsito por otro.

Pasados los primeros años, en los que la dominación sarracena se va extendiendo por toda la Península, surgen los primeros brotes de independencia: Asturias, las provincias vasco-navarras, Cataluña. El Reino asturiano se presenta como continuador de la monarquía visigoda ya en sus primeros momentos, pero cuando adquiere en toda su plenitud este sello neogótico es bajo el reinado de Alfonso II el Casto (791-812). Educado en el Monasterio de Samos, en el que se conservaba en su pureza el espíritu visigodo, al ser elegido rey conforme al ritual del IV Concilio de Toledo, realiza una labor política, legislativa y cultural, inspirada en el pensamiento de San Isidoro, llegando a restaurar el "Liber Iudiciorum". Un siglo más tarde, los reyes de León empiezan a titularse "Imperatores", como señal de preeminencia sobre los demás Caudillos de la Reconquista. Fernando I de León y Castilla se titula en

el siglo XI "Imperator totius Hispanae", y asimismo su hijo Alfonso VI, quien después de la conquista de Toledo emplea los pomposos nombres de "Aldephonsus Imperator Toledanus, Magnificus Triumphator" y "Aldephonsus Imperator super omnes Hispaniae nationes constitutus"; Alfonso VII, que pasó a la Historia con el nombre de "el Emperador", es coronado como tal en León en el año 1135. Según Menéndez Pidal, este ansia imperial del Reino leonés contiene la clave del desarrollo de la Historia de España en los siglos X al XII: el sentimiento de continuar la idea nacional goda esbozada por San Isidoro (cuyo cuerpo es traído en esta época a León desde Sevilla), se manifiesta por el uso del título de "Imperator".

Es en el siglo XII cuando nace un nuevo reino: Portugal, bajo la soberanía del conde borgoñés (yerno de Alfonso VI), Alonso Enríquez, que en 1139 ya se llamaba "Rex portugalensium". Castilla, y luego España, nunca se conformaron con la pérdida de lo que siempre se consideró como un trozo desgajado del territorio nacional. Pero de nuevo se frustra la unidad -sucesivamente- con la batalla de Aljubarrota (1383), la ineficacia de los matrimonios de las hijas de los Reyes Católicos y la sublevación del duque de Braganza en 1640.

De todo lo que queda apuntado, deducimos necesariamente que la larga lucha de ocho siglos de Reconquista está inspirada por la creencia en una solidaridad histórica y una responsabilidad común, creencia que

caracteriza profundamente este período y que, según Donoso Cortés, constituye la idea de Nación.

No quedaría completa esta idea, que a nivel de las instituciones monárquicas parece irrefutable, si no llamásemos la atención sobre el hecho de que, desde el punto de vista de la organización política y administrativa inferior, es decir, a nivel de Villa o de núcleo de repoblación, ese sentimiento no alcanza igual profundidad; por el contrario, hay una evidente insolidaridad entre los miembros integrados en ese núcleo, y los que no lo componen: los "hombres extraños". Para más detalle, véase el punto IV de este capítulo del presente trabajo.

La ruptura de la unidad jurídica y la lucha de los reyes contra ella, se encuentra como un objetivo a conseguir en diversas recopilaciones; así, en la Ley I, Título V, Libro V del "Espéculo" (7): *"Fuero Despanna antiguamente en tiempo de los godos fue todo uno. Mas quando moros ganaron la tierra perdieronse aquellos libros en que eras scritos los fueros. E después que los christianos lo fueron cobrando, así como la ivan consiguiendo, tomaron de aquellos fueros algunas cosas, segunt se acordaran, los unos de una guisa y los otros de otra. E por esta razón vino el repartimiento de los fueros en las tierras. E como quier que el entendimiento fuese todo uno, porque los omnes no podían seer ciertos de cómo lo usaron*

(7) "Los Códigos españoles anotados y concordados", Madrid, "La Publicidad", 1847-1851, tomo VI.

antiguamente, lo uno porque avie gran razon que perdieron los fueros, e lo al por la grant guerra en que fueron siempre, usaran de los fueros cada uno en el logar o era según su entendimiento e su voluntad".

Y en el "Fuero Real" (8), que ya al principio del Libro I pone de manifiesto que, al no tener fuero la villa de Valladolid, se juzgaba por fazañas "e por alvedríos departidos de los omnes, e por usos desaguisados e sin derecho, con los consiguientes males y daños", se puntualiza en la Ley V, del Título VI del Libro I: "Bien sofrimos e queremos que todo ome sepa otras leyes por ser más entendidos los omes e más sabidores, mas non queremos que ninguno por ellas razones nin judge, mas todos los pleitos sean juzgados por las leyes desde libro, que nos damos a nuestro pueblo, e mandamos guardar. Et si alguno adujese libros de otras leyes en juicio para razonar o para judgar por él, peche quinientos sueldos al rey. Pero si alguno razonase ley que acuerde con las deste libro, e las ayude, puedalo facer e non haya pena".

(8) *Fuero Real del Rey D. Alfonso el Sabio*, copiado del Códice del Escorial...y cotejado con varios Códices de diferentes Archivos, por la Real Academia de la Historia; de orden y a expensas de S.M., Madrid, 1836.

II. EXTRANJERIA

1. Falta de sistemática legal en el concepto de extranjería.

Pléñese en que obra tan elaborada y minuciosa como el Código de las Siete Partidas, concebido de acuerdo con una sistemática que, anticipándose en más de quinientos años al fenómeno moderno de la Codificación, superando el viejo acarreo de leyes de las Recopilaciones, no contiene una regulación de la situación jurídica de los extranjeros.

Es cierto que en el Título Primero ("que habla de las Leyes") de las Partida Primera (9) , la Ley XV dice que *"todos aquellos que son del señorío del facedor de las leyes, sobre que las él pone, son tenudos de las obedecer e guardar, e juzgarse por ellas...E eso mismo dezinos de los otros que fueren de otro señorío, que ficiesen el pleyto o postura, o yerro en la tierra do se juzgarse por las leyes; ca magüer sean de otro lugar non pueden ser excusados de estar a mandamiento de ellas; pues que el yerro ficiesen, onde ellas an poder: e aunque sean de otro señorío no pueden ser excusados de se juzgar por las leyes de aquel señorío, en cuya tierra oviessen fecho alguna de estas cosas. E si por aventura ellos fuesen rebeldes que non lo quissieren facer de su voluntad, los jueces e las justiticas los deven constreñir por premia que lo fagan así como las leyes deste nuestro libro mandan"*.

(9) Edición de Salamanca, por Andrea de Portonaris, 1555.

Pero, con lo que antecede, no se hace más que proclamar, como regla general, el principio de aplicación territorial de la Ley, especialmente la penal.

2. Extranjeros al Reino y extranjeros a la Ciudad

El concepto de extranjeros a la ciudad es más antiguo que el de extranjeros al reino, por la clara razón de que, como ente político, la ciudad es más antigua que el reino. Con la invasión árabe se rompe la unidad nacional y van apareciendo núcleos cristianos que empiezan por separado la Reconquista, que se van extendiendo y fusionando.

Rafael Gibert (10) parte de los extranjeros al reino, noción que se da al constituirse el reino visigótico como independiente del Imperio Romano, y que encuentra perpetuada al producirse la invasión musulmana e ir naciendo los diversos reinos cristianos, cuyos naturales son extranjeros entre sí; por ejemplo, vascos y castellanos, catalanes y valencianos, aunque catalanes y mallorquines tengan en determinados aspectos una común naturaleza política. Con la unión de ambas Coronas bajo los Reyes Católicos, no se altera sustancialmente la situación, pero se sientan las bases de su modificación. El rey expide salvoconductos a

(10) "La condición de los extranjeros en el antiguo Derecho Español", en "L'Etranger", RSJB, IX, 1958, 2, pág. 151 y sts.

sus súbditos de un reino para que se les permita el tránsito por otro. Al lado de los extranjeros al reino, están -para Gibert- los extranjeros a la ciudad, concepto favorecido por la repoblación de los territorios conquistados a los musulmanes. Además de esta división, destaca este autor la existencia de extranjeros calificados (mercaderes, romeros y peregrinos, embajadores, amparados por salvoconductos del Rey, por la hospitalidad local, por tratados en favor de comerciantes, por tratados de paz internacional). Existe, también, la situación de judíos, moros y gitanos. Por último, y esta distinción es importante, se refiere Gibert a que en la unidad de un mismo fuero no queda descartada una extranjería interna, respecto de la ciudad, de los habitantes extramuros y de los lugares en torno. También es cierto que se regulan las circunstancias del vivir de mercaderes, romeros y peregrinos, pero -repetimos- no se construye una sistemática de la extranjería.

Por todo ello, no tiene que extrañar que, por una carencia de normativa general sobre los extranjeros en las fechas que se han recogido, el concepto de extranjería al Reino fuese un concepto prácticamente olvidado durante cientos de años, y en los pocos casos en que aparece en los Fueros locales, por ejemplo en el de Teruel, cuando dice (11): *"Decabo mando que, si algunos conptes o potestades o jnfancones o cauallero, o sean de mj regno o de otro regnado, a Teruel ujnjeren a poblar*

(11) Publicado por M. Gorosch, *Leges Hispanicae Medii Aevi*, Stockolm, 1950, pág. 306 y 307.

tales colonias, e atal fuero ayan como los otros pobladores asin de uida como de muerte", es realmente intrascendente en el terreno práctico.

Ello lleva, por el contrario, a revalorizar el concepto de extranjero a la Villa, que es el verdaderamente decisivo, y recogido en todos los Fueros locales, hasta el punto de que la mención de cada uno de ellos en esta materia parecería prolijidad innecesaria, no sin destacar que esta tesis de Gibert aparece también, ya antes de manera decidida, en Conde y Luque (12), quien deduce, por otra parte, que, durante la Edad Media, España era una vasta asociación de extranjeros divididos en tres categorías: las ínfimas clases sociales, los ciudadanos de los numerosos estados mahometanos en que estaba dividida España, y la constituida por avecindados o transeúntes, que procedían de cualesquiera partes del mundo.

En efecto, para Conde y Luque, una vez que se plantea si los miembros de lo que se llama ínfimas clases sociales eran, o no extranjeros, se inclina por la contestación afirmativa, porque "donde había un más y un menos en la ciudadanía, habiéndola completa o incompleta, sólo la primera lo era verdaderamente; quienes tenían la segunda, serían ciudadanos imperfectos, lo cual vale tanto como decir extranjeros de una clase determinada; mucho más, si esa merma de los derechos se extendía también al orden político. ¿No es contradictorio, y aun absurdo, afirmar

(12) Obra citada, pág. 324.

que los vasallos colonos, los "signi servitii" y los payeses de "remensa" eran ciudadanos, es decir, poseedores de un perfecto "status" jurídico?"

No podemos estar de acuerdo con esta tesis que incluso su mismo autor plantea con dudas iniciales; el hecho de que haya ciudadanos de primera clase, de segunda, etc., no quiere decir que los de la última sean extranjeros, pues la extranjería supone siempre la dependencia de un Estado en otro núcleo de poder político distinto, mientras que el fenómeno no se da en relación con esos ciudadanos ínfimos.

Por eso, Conde y Luque dice: "Mas respecto a la segunda categoría de extranjeros (13), la duda es imposible. Los habitantes de realengo, de señorío lego, episcopal, abacial, de órdenes, de tierras enfeudadas o infanzonadas y de behetrías, eran extranjeros cuando pasaban las fronteras de estos pequeños Estados, cabalmente porque dentro de ellos tenían una nacionalidad definida y completa".

Esto no ofrece discusión. La dependencia de un poder político determinado produce situación de extranjería, en cuanto se pasa al territorio donde domina otro poder político distinto. Ahí está el embrión de la interpretación de Gibert.

(13) La de los procedentes de los diferentes Estados de la península y aún más, como veremos enseguida, la de los pertenecientes a diversos entes políticos y hasta sólo administrativos.

La instauración de un régimen local y urbano es anterior en España al régimen territorial que ha quedado expuesto (la constitución de los diferentes reinos de la Reconquista). La ciudadanía en el reino se ha configurado sobre el modelo originario de la ciudadanía en la ciudad, régimen que contaba con precedentes entre los pueblos indígenas y las colonias de los extranjeros (griegos y fenicios). Las ciudades españolas eran originariamente "peregrinae"; desde Vespasiano (74 a. de C.) gozan del "ius latii", la ciudadanía vino a ser normal en España, incluso antes del 212. Sobre la época visigoda faltan noticias, debido en parte a la crisis general de la vida urbana.

La extranjería local se ha realizado en la Edad Media principalmente a través de la esfera local y urbana, y existe una verdadera intercomunicación entre los círculos jurídicos locales; la generalidad de los súbditos están integrados en el reino a través de su pertenencia a la ciudad o villa.

El procedimiento de repoblación, con individuos de distintas procedencias, hace que la extranjería sea un factor constitutivo de la misma vecindad (Toledo, con castellanos, mozárabes y francos, con su propio Derecho cada grupo).

En la unidad de un mismo fuero no queda descartada una extranjería interna; respecto a la ciudad, de los habitantes extramuros y

de los lugares en torno.

En la Reconquista, la generalidad de los súbditos están integrados en el reino a través de su pertenencia a la ciudad o villa. No hay un estatuto uniforme de extranjero.

En este largo período, la repoblación es un fenómeno importantísimo, que se basa, en síntesis, en la admisión de hombres de diversas procedencias, a los que se les conceden plenitud de derechos e, incluso, privilegios, y se les llega en muchos casos a eximir de responsabilidades anteriores, hasta las penales.

Frente a la permisividad para admitir a los que primero vienen a repoblar, hay un recelo ante los "hombres extraños" que llegan luego, que es objeto de estudio en otra parte de este trabajo. Se trata, ante todo, de regular una vida social poco desarrollada, de unos pueblos de campesinos y pastores, que se esforzaban en mantenerse en sus tierras o en arraigar en las que trataban de repoblar (14).

La regulación local de la vecindad se ha conservado hasta la aparición de la legislación municipal moderna, ya uniforme para todo el reino.

(14) A. García-Gallo, *Manual de Historia del Derecho Español*, 10ª reimpresión, Madrid, 1984, I, pág. 76.

III. NATURALIZACION

1. Quiénes son naturales

En el Preámbulo del Título IV del "Espéculo" se dice: "*E esta naturaleza puede seer en muchas maneras, así como por seer y nascido, así como por heredamiento que venga de padre, o de su linage, o de parte de su mugier, o si por fijó algún natural de la tierra, o a otro estragno, o por compra, o por donadío, o por moranza que faga y de dos años cumplidos, o dende arriba, o si es siervo el aforrau en aquella tierra*". Según Conde y Luque (15), el "ius soli", tan propio de la época, es el que domina, pues se llega a obtener la naturaleza por la adquisición de bienes en el territorio o por la adopción de un extranjero según la ley territorial. Pero, como añade este autor, también se hallan admitidos los principios propios del Derecho moderno: "el ius sanguinis" y la naturalización procedente de la residencia en el territorio.

La Ley II del Título XXIV de la Partida IV (16), bajo rúbrica de dicho Título, ya de por sí expresiva ("*Del debdo que han los omes con los señores por razón de naturaleza*") dice cuántas maneras son de naturaleza: "Diez maneras pusieron los sabios antiguos de naturaleza: la primera e la mejor es: la que han los omes a su señor natural, por que tan bien

(15) Obra citada, pp. 337-338.

(16) Edición de Salamanca, por Andrea de Portonariis, 1.555.

ellos, como aquellos de cuyo linaje descenden, nascieron e fueron raygados, e son en la tierra onde es el Señor. La segunda es la que aviene por vasallaje. La tercera, por crianza. La quarta, por cavallería. La quinta, por casamiento. La sexta, por heredamiento. La setena, por casarlo de captivo o por librarlo de muerte o de deshonna. La octava, por aforramiento de que non recibe precio el que lo aforra. La novena, por tornarlo cristiano. La decena, por moran a de diez años que faga en la tierra, maguer sea natural de otra". Como dice el autor que venimos citando (17), se exagera el Derecho territorial y el predominio del político sobre el civil.

En cuanto a la pérdida de la nacionalidad, está regulada en la Ley V, Título XXIV de la Partida IV ("Cómo se puede perder la naturaleza"): *"Desnaturar, segund lenguaje de España, tanto quiere de ir como salir ome de la naturaleza que ha con su Señor, e con la tierra en que bive. E por que esto es como debda de natura, non se puede desatar si non por algún derecho razón. E las derechas razones por que los naturales pueden esto fazer, son quatro. La una es por culpa del natural, e las tres por culpa del Señor. Este sería como quando el natural fiziese trayzión al Señor o a la tierra: ca solamente por el fecho es desnaturado de los bienes e de las honras del Señor e de la tierra. La primera de las tres que viene por culpa del Señor es quando se trabaja de muerte de su natural sin razón e sin derecho. La segunda, si le face deshonna en su muger. La tercera, si le desheredase a*

(17) Obra mencionada, pág. 328.

tuerto e non quisiessse caber derecho por juycio de amigos o de Corte".

La Ley VII del Título XXV de la Partida IV dice las razones por las que puede el vasallo desligarse del Señor, que con las mismas que la anteriormente citada; y la Ley VIII del mismo Título regula las relaciones del vasallo y del Señor, después que fuesen "departidos": *"Partiéndose el vasallo de su Señor, bien se puede fazer vasallo de otros e non ante. E maguer se el ficiessse vassallo de otro, nunca lo debe él ferir nin matar: por razón de la cavallería que rescibió dél, es del bien fecho que fizo, e por vasallaje que ouo con él; fueras ende si viesse en peligro de muerte aquel su Señor cuyo vasallo es, de manera que lo non pudíessse librar ende, a menos de ferir al otro, cuyo vasallo fue. E aun entonces, si a ferirlo oviesse por tal razón como ésta, deuelo fazer de guisa que non le dé ferida que muera, si lo escusar pudiere. Pero en ninguna manera non lo debe ferir, ni fazerle mal, nin daño ninguno, con las armas nin con el cavallo que él le dio".*

La Ley X de este Título fija las razones por las que el rey puede echar a los ricos homes (condes o barones) de la tierra: *"por tomar venganza por malquerencia que haya con ellos, por mal setrias que hayan fecho en la tierra, por razón de yerro, en que aya trayción o aleve".* En el primer caso, puede el rico home pedir al Rey por tres veces que no le mande marchar, y si no accede, pueden salir con él de la tierra sus vasallos, y debe darle un plazo de treinta días para hacerlo.

Por otra parte, una pragmática de Castilla de 1396 sobre provisión de cargos eclesiásticos, definió a los naturales como los nacidos en el reino, de padre y madre castellanos. Como se ve, se suman el "ius sanguinis" y el "ius soli".

Gregorio López, en Glosa a las Partidas (IV, XXIV, II) considera natural al nacido de padres naturales en el extranjero, si los mismos no habían adquirido domicilio en éste. Así lo entendió también una Real Pragmática de 1565.

En Cataluña, la naturaleza viene determinada por el nacimiento y el domicilio ("Constitutions e altres drets de Cathalunya", 1, 68). En el "Código de las Costumbres de Tortosa" (18) se sienta que son ciudadanos todas las personas libres y cristianas, nacidas en Tortosa o en su término, sin distinción alguna. Para el ejercicio de los cargos públicos es necesario el domicilio (1291, 1333, 1413); después se exige: nacimiento, población y domicilio (1422, 1481). Una Constitución de 1481 concedió la nacionalidad a los nacidos fuera de Cataluña de padres catalanes, siempre que retornen a Cataluña y establezcan en ella su domicilio.

En Aragón un acto de Corte de 1461 ("Fueros de Aragón", I, pág. 23) sobre la base implícita de que son naturales los nacidos en Aragón de padres aragoneses, dice que son naturales los mismos, pero nacidos

(18) M. Arjona Colomo, obra citada, pág. 408.

fuera, si en algún momento entran en Aragón, y pierden esta condición si salen otra vez.

En Valencia, a mediados del siglo XIV el plazo de residencia era de tres a cinco años; en el XV, entre siete y diez años: En este último siglo constan en los archivos de la ciudad de Valencia avecindados ciento veinticinco extranjeros, de ellos diez alemanes, treinta y ocho franceses, y cuarenta de procedencia variada; sus profesiones eran: cincuenta y uno mercaderes, nueve zapateros, cinco sastres, cinco "perayres", cinco "velloters", etc. (19).

2. Régimen castellano-leonés, aragonés y navarro

El fenómeno de la repoblación origina un trato sumamente favorable para los que vengan de fuera a asentarse en las villas y a poblarlas, con un concepto de "numerus apertus" que se repite en casi todos los fueros:

Fueros de Brañanoserá, dados por el conde Mario Núñez el 15 de octubre de 824: "*et dabimus vobis...ad tibi Valerio et Felix et Zonio, et*

(19) Piles Ros, "Actividad y problemas comerciales de Valencia en el cuatrocientos", citado por V. L. Simó Santonja, "Estatuto de los extranjeros en el antiguo Derecho valenciano", edición de la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, 1973, pág. 108-109.

Cristuebalo, et Zerbello ipsos términos ad vos, vel ad eos qui venerint de alteras villas, cum sua pecora..." (20).

Donación del Monasterio de Javilla por los condes Fernán González y Doña Sancha y sus hijos, al abad y monjes de Cardena, en el año 941: "*Insuper damus vobis licentiam populandi; tamen non de meos homines et de meas villas, sed de homines excussos, et de alias villas, et undecumque potueritis...*" (21).

Fuero romanceado de Castrojeriz confirmado en 20 de mayo de 1299, de Fernando IV en favor de los canónigos y clérigos de la villa: "*...et que puedan poblar sus heredades de homes forros, e avenedisos...*" (22).

Concilio XX de León, año 1020: "*Mandamus igitur ut nullus junior, caparius, alvendarius adveniens Legionem ad morandum, non inde abstrahatur*"; e igual en el texto castellano contenido en el Código del Fuero Juzgo que existía en el Monasterio de Benevirese (23).

(20) T. Muñoz y Romero, *Colección de Fueros Municipales y Cartas-Pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra*, Tomo I, Madrid, 1847, Imprenta de J. M^o. Alonso, pág. 16.

(21) Idem, pág. 25.

(22) Ib., pág. 44.

(23) Idem, pág. 66 y 80.

Fuero de Villavicencio, sin fecha: "*In primis de illis qui ad abstandum venerint...sin ingenui et absoluti*" (24).

Donación de las villas de Villafra y Orbaneja hecha al monasterio de Cardeña por Fernando I en 1045: "...*dono, et concedo tibi Patri nostro Lazaro, Abbati Monasterii S. Petri de Caradigna, et omnibus Monachis, ac Fratribus tuis, ibidem Deo servientibus, tam presentibus, quam futuris...*" (25).

Privilegios del monasterio de San Martín de Tera, en el obispado de Astorga, concedidos en el año 1063 por Fernando I: "...*et cum omnibus ibi habitantibus, vel qui ad habitandum venerint...*" (26).

Carta de población de Longares, dada en el año 1063 por el obispo de Najera D. Gómez y el Prior y monjes del monasterio de Albelda: "*Haec omnia super scripta sint concessa eis, vel qui in supra scripta villa habitare voluerint*" (27).

Privilegios de los pobladores del monasterio de San Andrés, dados por el obispo de Nájera D. Gómez: "*Insuper et scribo tibi et omnibus qui*

(24) Ib., pág. 171.

(25) Ib., pág. 203.

(26) Ib., pág. 227.

(27) Ib., pág. 230.



in eodem loco habitaturi sunt..." (28).

Carta de población de S. Anacleto, dada en el año 1065 por el obispo de Najera D. Gómez: "...volo ut ita sitis ingenui vos, et filii vestri, et posteritas vestra..." (29).

Fuero de Jaca otorgado en 1064 por el rey D. Sancho Ramírez: "...concedo et confirmo vobis, et omnibus, qui populaverint in Jacca mea civitate totos illos bonos fueros..." (30).

Privilegio del rey de Aragón, D. Ramiro el Monje, año 1134, confirmatorio del fuero anterior, y concediendo a los habitantes de Jaca las franquezas de los burgueses de Montpellier, y la exención de lezda: "...vobis omnibus hominibus de Jacca...praesentibus, et futuris" (31).

Otro igual del mismo rey (32).

Fueros y privilegios de la iglesia y villa de Alquezar, otorgados en

(28) Ib., pág. 232.

(29) Ib., pág. 233.

(30) Ib., pág. 235.

(31) Ib., pág. 239.

(32) Ib., pág. 241.

el año 1069 por D. Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Navarra: "*...ibi habitantium...et omnibus clericis filiis de populatoribus Alqueceri, praesentes et futuri*" (33).

Fuero del burgo nuevo de Alquezar, otorgado a sus pobladores por el rey Alfonso I el Batallador en febrero de 1114: "*vobis totos populares de illo virgo novo de Alquezar qui ibi estis, vel in antea veneritis ibi populari...*" (34).

Fueros y privilegios de la ciudad de Burgos, concedidos por Alfonso VI en 1073: "*vobis omnibus, qui ad illas Burgensium villas...ad populandum venire decrevit, tammodo vobis qui populates estis, quam ad illos qui venientes in illas villas populaturi essent...*" (35).

Fueros de la Alberguería de Burgos, también de Alfonso VI, en 1085: "*...homines habitatores in eis, vel qui venerint ad habitandum, accesum vel regressum...*" (36).

Privilegio de Alfonso VII en 1124, en el que confirma y adiciona

(33) Ib., pág. 246.

(34) Ib., pág. 254.

(35) Ib., pág. 256-7.

(36) Ib., pág. 263.

los fueros de Burgos: "*vobis onnibus in Burgos commorantibus tam praesentibus, quan futuris...*" (37).

Fuero de Palenzuela, otorgado por Alfonso VI en 1104: "*...tam illi qui ibi sunt morantes, quam, illi qui advenientes fuerint pro hic morari*" (38).

Carta de población de Ejea, otorgada en el año 1180 por el rey de Aragón D. Alfonso I el Batallador: "*facio hanc cartam donationis, et confirmationis, vobis populatores de Exea qui estis, vel qui de ista ora in antea veneritis ibi populare...*" (39).

Fuero de Sahagún, dado por Alfonso VI en 1084: "*Quando populator acceperit solum dabit uno solido at queduobus denariis...Sane vero si in ipso anno no populaverit illum, perdet eum*" (40).

Fueros concedidos a Sahagún en el año 1140 por D. Diego, abad del monasterio: "*...ad vos homines de poblaciones, tam illis qui populant ibi, quan illi qui venerint ad populandum*" (41).

(37) Ib., pág. 266.

(38) Ib., pág. 276.

(39) Ib., pág. 299.

(40) Ib., pág. 303.

(41) Ib., pág. 307.

Fueros otorgados a los burgueses de Sahagún por el rey Alfonso VII y el abad D. Domingo en el año 1152: "*...hominibus villae Sancti Facundi tam presentibus, quam futuris, et filiis suis, omnique generationi...*" (42).

Fueros dados a la villa de Sahagún por Alfonso el Sabio en el año 1255: "*...et de les dar fueron, porque vivan da aquí adelante tambien los que son agora, cuemo los que vernan después*" (43).

Fuero de Arguedas, concedido en el año 1092 por Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Navarra (copia romanceada): "*...a vos todos los pobladores que viniestes e que, de oy adelant, vinieren ad Arguedas poblar*" (44).

Fuero de Valle (1094): "*...confirmationis de vestros foros, et ad vos et ad filios vestros vel neptos tenendos et habendos sicut nunc habetis*" (45).

Fuero de Logroño, dado por Alfonso VI en 1095: "*...facimus hanc cartam ad illos populatores de Logronio omnibus presentibus et*

(42) Ib., pág. 309.

(43) Ib., pág. 313.

(44) Ib., pág. 329.

(45) Ib., pág. 332.

fuuris..." (46).

Fuero de Miranda de Ebro, concedido por el rey Alfonso VI en el año 1099: "*...quod omnes populatores qui in praesenti populant supradictum populum, et de caetero usque ad finem mundi populaverint*" (47).

Privilegio de población de Barbastro, dado por Pedro I de Aragón en el año 1100: "*omnibus qui modo sunt in civitate barbastrim vel qui de hodie in antea hic populaverint*" (48).

Privilegio de Alfonso II confirmando los privilegios de la ciudad de Barbastro: "*...concedo et confirmo vobis probis hominibus de civitate Barbastro praesentibus et futuris in pertuum*" (49).

Privilegio de Alfonso VII, eximiendo a los mozárabes, castellanos y francos de la ciudad de Toledo, del derecho de portazgo y de alexor: "*...omnibus christianis qui hodie in Toletu populiati sunt, vel pupulari venerint, Mozarabos, Castellanos, Francos...*" (50).

(46) lb., pág. 335.

(47) lb., pág. 344.

(48) lb., pág. 355.

(49) lb., pág. 357.

(50) lb., pág. 375.

Privilegio de Alfonso VII, en que liberta a los caballeros de Toledo y de su término de la décima real y de cualquier otro tributo real: "*Dono itaque omnibus Toleti, et totius termini sui militibus presentibus, ac futuris...*" (51).

Fueros de Caparrosso, dados en el año 1102 por el rey Pedro Sánchez, de Navarra: "*...e cuantos qui venerint populare similiter siant per secula cuncta*" (52).

Fuero de Santa Cara, otorgado por el rey Pedro Sánchez de Navarra, entre 1102 y 1105: "*...populatores totos de Santa Cara qui populaveris ibi...vos e quantos ibi popullaverint*" (53).

Carta de población de Agramunt, del año 1113, por los condes de Urgel, Armengol y Dulcia: "*...habitoribus et populatoribus hominibus de Acrimonte qui ibisunt vel erunt et venturi sunt...*" (54).

Carta de población de Belchite, concedida por Alfonso I el Batallador en 1116: "*...ad totos homines, qui sunt in Belgit, populati, et in*

(51) Ib., pág. 384.

(52) Ib., pág. 391.

(53) Ib., pág. 394.

(54) Ib., pág. 400.

antea ibi populaverint..." (55).

Fueros de Tudela, dados por Alfonso I el Batallador en el año 1127: "*...ad vos totos populosos qui estis populosos in Totela, et a quantos veneritis in era popolare*" (56).

Fuero de Sangüesa, de Alfonso I el Batallador en 1122: "*Et dono vobis quantosque ibi popularentis...in illo termino de Sangossa...*" (57).

Fuero asignado por Alfonso VII en el año 1126 a los pobladores del barrio de San Martín de Madrid: "*De hominibus undecumque venerit, et illi homines qui ibi populosi fuerint...*" (58).

Fuero de Zaragoza (1119), conferido por Alfonso I el Batallador: "*...facio hanc cartam donationis vobis totos populosos de Zaragoza, qui ibi estis, vel in antea ibi veneritis popolare*" (59).

Otro, de Zaragoza (1126), llamado popularmente "privilegio de los

(55) Ib., pág. 413.

(56) Ib., pág. 420.

(57) Ib., pág. 429.

(58) Ib., pág. 446.

(59) Ib., pág. 448.

veinte": "*...ad totos vos populos, qui estis populos in Zaragoza, et quantos in antea veneritis ibi populare...et totas gentes veniant ibi populare de bona voluntate ...*" (60).

Fuero de Calatayud, dado por Alfonso I el Batallador en el 1131: "*...ad votos totos populos de Calatayud, qui ibi estis populos et in antea ivi veneritis populare...et totas gentes ibi veniant populare cum bona voluntate...*" (61).

Fuero de Carcastillo (1129), de Alfonso I el Batallador: "*...vobis totos homes populos de Carrocastello, qui estis ibi, venierint populare...*" (62).

Fueros de Enciza, otorgados en 1129 por Alfonso I el Batallador: "*...vobis populos, et qui venerint post vobis per omnia secula...*" (63).

Fuero de Casada, concedido también en 1129 por Alfonso I el Batallador: "*...et facio vos ingenuos et totam vestram prosperitatem...*" (64).

(60) Ib., pág. 451.

(61) Ib., pág. 457-8.

(62) Ib., pág. 469.

(63) Ib., pág. 472.

(64) Ib., pág. 477.

Fuero de Escalona, suscrito en 1130 por Diego y Domingo Alvarez, en virtud de orden de Alfonso VII: "*...damus vobis populatoribus de Scalona...vobis et filii vestri...*" (65).

Fuero de Colmenar de Oreja, merced de Alfonso VII en el año 1139: "*...tengo por bien, e digna cosa de dar fueros, e términos a todos aquellos que viniesen á poblar el dicho Castillo*" (66).

Fuero de Calatalifa, dado por Alfonso VII en el año 1141: "*...dono et concedo...omnibus illis, qui iam in Calatalifa populati sunt, vel deinceps popularint...*" (67).

Fuero de Roa, asignado por Alfonso VII en el año 1143: "*...omnibus populatoribus de Roa praesentibus et venturis...*" (68).

En la versión romanceada del Fuero de Sepúlveda (1300) (69), se lee en el Título I: "*A primas do e otorgo a los que moran en Sepúlveda, e a los que son por venir, Sepúlveda con todo su término...*"

(65) Ib., pág. 486.

(66) Ib., pág. 525.

(67) Ib., pág. 532.

(68) Ib., pág. 544.

(69) Publicado por J. de la Reguera Valdelomar, Madrid, Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798, pág. 156.

Fuero de Avilés (1155): "...vobis habitatoribus de Abilies tam presentibus quam futuris..."; Fuero de Oviedo (1036): "...nobis cibitatoribus de Oueto, tam presentibus quam futuris..." (70).

Fuero de Brihuega (1221-1229): "...nos Don Rodrigo..., Arzobispo de Toledo, con otorgamiento de D. Miguel el Dean, et de todo el Cabildo de Toledo. Otorgamos nuestra villa Briuega a todos los pobladores que y son oy, o uinieren y daqui adelant, a ellos et a fijos, et a nietos, et uisnietos, et a todas sus generationes" (71).

Fuero de Teruel (1177): "E todos uirjentes habitadores et los pobladores que habiten...et los otros que hy desseyen uenir..." (72).

Fuero de Béjar (1272): "A primas do e otorgo a todos los que moran en Béjar e a los que son por venir..." (73).

Comentario especial merece el Fuero de Salamanca que, según J.

(70) *Fuero de Avilés, descifrado; y su correspondencia con otros*; discurso leído en junta pública de la Real Academia Española para solemnizar el aniversario de su fundación, por D. A. Fernández-Guerra y Orbe, Madrid, 1865, pág. 111.

(71) *Fuero de Brihuega*, publicado por D. J. Catalina García, Madrid, 1887, pág.

(72) *Fuero de Teruel*, citado en la nota (11).

(73) *Fuero de Béjar*, publicado por J. Gutiérrez Cuadrado, Universidad de Salamanca, 1974, 1, pág.

Sánchez Ruano (74) no es una concesión graciosa de los Reyes, antes bien es obra de los representantes populares de la autoridad, que ejercieron funciones legislativas, si bien en muchos casos tuvieron su origen en privilegios particulares, situación que no es única, pues se da también en el Fuero de Medinaceli.

Téngase en cuenta que Salamanca fue repoblada por borgoñones, castellanos, bregancianos, portugueses y serranos (asturianos o leoneses).

3. Régimen de Cataluña

Merecen detenido estudio las fuentes catalanas, para lo que hemos tenido a la vista la obra de José M^a Font Rius (75). Al lado de documentos en los que se emplean fórmulas como las que acabamos de recoger, propias del reino castellano-leonés, en las que se hace la concesión de los términos a repoblar, a favor de todos los que venieren, presentes y futuros, a los que se les conceden los beneficios que el fuero respectivo contempla, sólo por su condición de vecinos, que así se ve estimulada y favorecida; en cambio, en los textos catalanes aparecen

(74) *Fuero de Salamanca*, publicado por J. Sánchez Ruano, Salamanca, 1870, pág.

(75) *Cartas de población y franquicia de Cataluña*, Madrid-Barcelona, dos tomos, 1969-1983.

también con gran repetición concesiones hechas a personas concretas y determinadas por sus nombres, e, incluso a sus hijos, y a toda su progenie, pero no a cualquier otro que viniese a repoblar.

Esto es tanto como cortar, al menos en teoría, o en principio, la libertad de repoblar, restringiendo a determinadas personas, en todo caso, a sus linajes, la facultad de asentamiento, basado en las condiciones de aquéllos, o en la confianza que ofrecieren al donante. De esta manera podría decirse que se establecen unas relaciones mucho más incluíbles en el Derecho privado que en el Derecho público, dado que no se atiende al hecho de venir a repoblar como elemento determinante del establecimiento de la relación, sino a las circunstancias personales de repoblador. Lo que no podemos saber ahora es qué es lo que pasaba si los donatarios admitían con posterioridad a otras personas no vinculadas a ellos mismos por la familia; pero como síntoma de relación y -quizás- de exigencia de una mayor confianza, nos parece digno de resaltar.

Otra interpretación, no incompatible, sino complementaria de la que acabamos de exponer, es la de que el fenómeno feudal tuvo mayor arraigo en Cataluña (76), por lo que la denominación concreta de los destinatarios del beneficio, puede apuntar al establecimiento de una relación de feudo entre el otorgante y el investido. Así, encontramos:

(76) Lo destacan E. Montana Ferrín y J. Sánchez-Arcilla, obra citada, pág. 290.

Carta de establecimiento de la Villa de San Acisclo en el Castillo de San Vicente, comarca del Panadés, efectuado por Guitardo, abad de San Cugat del Vallés, a favor de Bonfill Ermemir y Andrés Bellit: "...donamus nos vobis et posteritati vestre..."(77) (22 de junio de 1047).

Donación de un alodio en el lugar de Lavid (18 de junio de 1051), término del Castillo de Aguiló, condado de Manresa, por Alemany, hijo de Hugo, a un grupo de doce familias, que enumera: "*Manifestum est...et successores vestris...*" (78).

Donación del Castillo de San Vicente (13 de enero de 1083), otorgada por Andrés, abad de San Cugat del Vallés, a Ramón Mager, su esposa Adalez, sus hijos e hijas y su hermano Geralló. Los donatarios lo reciben vitaliciamente: "*Dono...et filiis est filiabus vestris, et fratri tuo...*" (79).

Donación del lugar de Puig Giró (1098-1114), en término de Montañana, condado de Pallars, otorgada por Pedro, conde de Pallars, a Sicarda y su hijo Roger: "...tibi domna Sichard et filio tuo Rodgerio ..."; si bien, pudiendo ser sustituidos por los habitantes de Gerona: "*et dono*

(77) J. M^a Font Rius, obra citada, I, pág. 42.

(78) Obra citada, I, pág. 45.

(79) Obra citada, I, pág. 64.

vobis illos homines de Gerone ut mutetis eos in illo podio et edificetis illos et alios quantos magis potestis. Et ipsos homines quos ibi edificaveritis abeant ademperamento...laborare, plantare, comparere, paschere et lignare " (80).

Donación de la ciudad de Tarragona (23 de enero de 1118) y su término por Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, a Olegario, obispo de Barcelona: "*...iusque successoribus in perpetuum*" (81).

Donación del lugar de Belcaire (31 de enero de 1139), en la plana de Mascana, de tierras de "Marca", otorgada por Ermengol VII, conde de Urgel, a un grupo de seis pobladores, que menciona, sin más extensión (82).

Donación (24 de octubre de 1140) del molino de Viula, en Rubí, otorgada por Pedro, primicero de la Sede de Barcelona, con el consentimiento de su obispo Arnaldo Armengol, a favor del Presbítero Guillermo, para fortificarlo y repoblarlo; a su muerte, la donación con las mejoras, revertiría a los donantes" (83).

(80) Obra citada, I, pág. 73.

(81) Obra citada, I, pág. 83.

(82) Obra citada, I, pág. 93.

(83) Obra citada, I, pág. 95.

Donación (28 de enero de 1143) de la torre Faneca con su término, en el campo de Mascana, condado de Urgel, otorgada por Ermengol VI, a los hermanos Pedro y Arnaldo Bernardo (84).

Donación (9 de abril de 1149) del Cerro de Mangons, en Tarragona, efectuada por Poncio de Timor, a favor de los hermanos Guillermo de Villafranca y Ramón Arnaldo y Berenguer del Om (85).

Donación del lugar de Tarrés, en el condado de Barcelona (26 de julio de 1149), por Ramón Berenguer IV, a favor de Ramón de Boixadors: "*...vobis Ramón de Boxados et coniugi tue Ermenssendis*" (86).

Donación del lugar de Riudoms, en Tarragona (25 de enero de 1135), por el príncipe Roberto, a Arnaldo de Palomar, "*omnique tue progeniei atque posteritati...*" (87).

Donación de varios honores en Espluga de Francolí, con un solar para levantar casas en el cerro superior del mismo, otorgada (22 de abril de 1151) por Poncio de Cervera y su esposa, a favor de "*Bernardo de*

(84) Obra citada, I, pág. 98.

(85) Obra citada, I, pág. 114.

(86) Obra citada, I, pág. 116.

(87) Obra citada, I, pág. 135.

Rovira et fratribus tuis Arnallo atque Raimundo, et infantibus vestris et cuncte posteritati vestre" (88).

Donación de una tierra en Riu de Pruners (18 de diciembre de 1151), del Castillo de Espluga de Francolí, en el condado de Barcelona, otorgada por Poncio de Cervera, a favor de "*Albert et coniux sua Saurina vel ad posteritati tue*" (89).

Donación (6 de marzo de 1153), de unos alodios en Espluga de Francolí, otorgada por Ramón de Cervera a favor de "*Petrus de Malacara, videlicet, ad coniux tua Dolza,....namque vobis vel ad proenie vestre...*" (90).

Donación 26 de setiembre de 1157 del lugar de Belcaire, en el campo de Mascanca, junto a Balaguer, otorgada por Ermengol VII, conde de Urgel, "*...vobis Raimundus de Vallebrera et fratres tui, id sunt Bernardus et Petrus et Bonifilius, et ad Petro Niger de Pradel...*" (91).

Carta de población (22 de abril de 1158) otorgada por Gerberto de Anglesola y otros freires templarios a los habitantes de Avinavita;

(88) Obra citada, I, pág. 137.

(89) Obra citada, I, pág. 142.

(90) Obra citada, I, pág. 146.

(91) Obra citada, I, pág. 159.

Menciona los nombres de once cabezas de familia: "...vos pupulatores et ad omnes posterita vestra per secula cuncta..." (92).

Donación del lugar del Albiol (25 de junio de 1158) otorgada por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a favor de Juan de Martorell, "*archidiácono Tarraconensis et omni progeniei tuae sive posteritati*" (93).

Donación del lugar de Alforja (27 de junio de 1158), otorgada por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a favor de "*Raimundo Gavalgandi et tuis omni que tue progeniei at que posteritati ipsum...*" (94).

Carta de población (10 de setiembre 1159) otorgada por Guillermo de Torroja, obispo de Barcelona, a diez personas y sus descendientes ("*vestre proieniei alque posteritati unius*") para su repoblación (95).

Donación del lugar de las Gunyolas, en territorio de Olérdola (5 de mayo de 1160), otorgada por los comendadores templarios Bertrand de Olost y Pedro de Torradella, a "*Joan de Bassa y a sa muller Guia y a*

(92) Obra citada, I, pág. 161.

(93) Obra citada, I, pág. 162.

(94) Obra citada, I, pág. 163.

(95) Obra citada, I, pág. 167.

son germá Pere y a sa muller Guia y a sos fills..." (96).

Establecimiento del molino de Villarrodonna, en el Gayá, otorgado (2 de abril de 1161) por Guillermo de Torroja, obispo de Barcelona, a favor de Guillermo de La Vid y Guillermo de Terrasola *"et vestre progeniei atque posteritati..."* (97).

Donación de Villanova de Prades (25 de febrero de 1163), efectuada por Alfonso I y Alberto de Castellvell, castellano de Ciurana, *"tibi Petro de Avellano et tue proheniei atque posteritati"* (98).

Donación del lugar yermo de Falset (febrero de 1168) efectuada por Alberto de Castellvell *"tibi Petro de Deo et uxori tue Dominica et Filiis vestris vestreque proieniei atque posteritatem..."* (99).

Donación del lugar de Pauls (26 de julio de 1168) otorgada por Alfonso I, a tres caballeros, *"omnique progeniei atque posteritati vestre"* (100).

(96) Obra citada, I, pág. 168.

(97) Obra citada, I, pág. 170.

(98) Obra citada, I, pág. 175.

(99) Obra citada, I, pág. 190.

(100) Obra citada, I, pág. 191.

Establecimiento de un manso (11 abril 1159), en territorio de Tarragona, efectuado por su arzobispo Hugo de Cervelló, a favor de "*N. Calvonis et omni tue progeniei et posteritate*" (101).

Donación del lugar de Rocabruna (16 de noviembre 1171) en Tarragona, por su arzobispo Guillermo de Torroja; y Alfonso I, a favor de "*Petro de Villagrasa et uxori tue, Anne omnique progeniei et posteritate*" (102).

Donación del lugar de Alforja (23 de diciembre 1173), por Guillermo de Torroja, Arzobispo de Tarragona, a Ramón de Gavalgand "*et progeniei et posteritati tuae in perpetuum*" (103).

Una vez estudiados los fueros de repoblación en favor de personas determinadas, conviene detenerse en los fueros de repoblación de cualesquiera habitantes, ya que la circunstancia apuntada no quiere decir que no existan documentos en los que las cesiones de terrenos para repoblar se hayan hecho de manera indiscriminada, a favor de toda clase de pobladores, presentes y futuros:

(101) Obra citada, I, pág. 194.

(102) Obra citada, I, pág. 200.

(103) Obra citada, I, pág. 206.

Carta de franquicias otorgada por Berenguer Ramón I, conde de Barcelona (8 de enero 1025), a los habitantes de la ciudad y condado de Barcelona: "*...vobis omnibus habitantibus Barchinoman...locis possidetis sive possessuri eritis...*" (104).

Carta de franquicias concedida por Arnaldo Mir de Tost (2 de mayo de 1049) a los habitantes de la villa de San Julián de Régula, en término del castillo de Ager: "*...omnibus hominibus habitantibus qui sunt et erunt...*" (105).

Licencia concedida por Ramón Berenguer I, conde de Barcelona (16 abril 1061), a Guillermo Lobatón para establecer mansos y tierras del Monasterio de San Pol mediante cartas precarias: "*...facimus vobis et ipsi etiam homines cultores agrorum, restaurantes et rehedificantes, atque complantantes diversis seminum fructibus et variis arorum generibus...*" (106).

Carta de franquicias concedida por Ermengol IV, conde de Urgel, a los habitantes del Valle de Lord (10 de enero 1068): "*...quantenus concedo vobis presentibus et futuris...*" (107).

(104) Obra citada, I, pág. 29.

(105) Obra citada, I, pág. 44.

(106) Obra citada, I, pág. 62.

(107) Obra citada, I, pág. 57.

Carta de franquicias otorgada (18 abril 1085) por Lucía, condesa de Pallars, y Ledgardis, abadesa de Santa Cecilia de Elins, a los habitantes de Castelló: "*...ad homines...in antea qui iam veniebunt ad Castellon, qui stabunt et suoavere abebunt*" (108).

Carta de franquicias concedida (5 febrero 116) por Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, a los hombres de Tárrega: "*...ad omnibus hominibus de Tarrega qui hodie ibi sunt vel in antea Deo adiuvante fuerunt...*" (109).

Carta de población otorgada por Gregorio, abad de Ciuxá, con asenso del conde Ramón Berenguer IV (febrero 1142), y otros magnates, a los habitantes de Codalet: "*...et homines quos ad eandem de diversis scilicet terreum partibus accipit...ut quicumque ibi advenerint...*" (110).

Carta de población concedida por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona (año 1148), a los habitantes de Tortosa: "*...illis qui modo habitant et omnibus qui postea habitabunt Tortosam*" (111).

Carta de franquicias otorgada por Bernardo de Tort, arzobispo de

(108) Obra citada, I, pág. 68.

(109) Obra citada, I, pág. 81.

(110) Obra citada, I, pág. 97.

(111) Obra citada, I, pág. 110.

Tarragona (septiembre 1149) y Roberto, príncipe, a los habitantes de Tarragona: "...*facimus habitatoribus Tarracone, qui modo ibi sunt vel ad eandem urbem incolendam deinceps venerint*" (112).

Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde Barcelona y príncipe de Aragón (30 noviembre 1149), a los habitantes de Tortosa: "...*dono vobis omnibus habitatoribus Tortose concisique successoribus vestris in perpetuum in civitate Tortosa...*" (113).

Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, príncipe de Aragón, y Ermengol VI, conde de Urgel (enero 1150), a los habitantes de Lérida: "...*donamus vobis omnibus populatoribus et habitatoribus sive statoribus Ilerde civitatis tam presentibus quam futuris...*" (114).

Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a los habitantes de Vimbodi (30 noviembre 1151): "...*vobis poblatores qui sunt et erant in locum qui vocant Avimbudi*" (115).

Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona

(112) Obra citada, I, pág. 120.

(113) Obra citada, I, pág. 123.

(114) Obra citada, I, pág. 130.

(115) Obra citada, I, pág. 140.

(29 abril 1153), a los habitantes de Ciurana: "... *condeo universis populatoribus atque habitatoribus Siurane qui modo ibi sunt vel in antea ad habitandum vel populandum advenerint*" (116).

Carta de población (5 febrero 1155) de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a los habitantes de Cambrils: "... *facio han cartam omnibus hominibus qui venerint ad populandum et habitandum in Cambrils*" (117).

Carta de población de Ramón Berenguer IV (29 abril 1155), conde de Barcelona, a los habitantes de Dues Aques y de Vilavert: "...*confirmo universis populatoribus atque habitatoribus de Dues Aques et de Villaverd, qui modo ibi sunt, vel in antea ad populandum, vel habitandum advenerint...*" (118).

Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona (23 agosto 1155) y Bernardo de Tort, arzobispo de Tarragona, a los habitantes del lugar de Espinaversa, en Tarragona: "*donamus vobis omnibus venientibus ad habitandum in territorium Tarracone ipsum locum qui dicitur Spinaversam...*" (119).

(116) Obra citada, I, pág. 148.

(117) Obra citada, I, pág. 150.

(118) Obra citada, I, pág. 153.

(119) Obra citada, I, pág. 156.

Carta de población (30 agosto 1157) de Ermengol VII, conde de Urgel, y Bernardo de Estopaña y demás señores del lugar, a los habitantes de Abella: "*...donamus omnibus albelle...vobis et illi qui veniuri sunt post...*" (120).

Carta de franquicias concedida (11 diciembre 1158) por Iofredo, abad de Ripoll, a los habitantes de Tossa: "*...linquo vobis hominibus de Tossa omnibus vestris post vos...*" (121).

Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón (mayo 1159), a los habitantes de Prades: "*...dono et concedo vobis omnibus populatoribus qui sunt vel fuerint in Patris...*" (122).

Carta de franquicias (7 febrero 1163) de Alfonso I, a los habitantes de Barcelona: "*...concedo universis habitatoribus christianis Barchinonae presentibus et futuris...*" (123).

Carta de población (13 noviembre 1163) de Ermengol VII, conde de Urgel, a los habitantes de Agramunt: "*...vobis omnibus stiatoribus et habitatoribus et populatoribus hominibus de Acrimonte, qui ibi sunt vel*

(120) Obra citada, I, pág. 158.

(121) Obra citada, I, pág. 164.

(122) Obra citada, I, pág. 166.

(123) Obra citada, I, pág. 174.

erunt et venturi sunt..." (124).

Carta de población dada por Hugo de Cervelló, arzobispo de Tarragona, a los habitantes de Villa Constantina (13 mayo 1164): "*...donamus cunctis habitantibus...habitaturi sunt et posteritati eorum, in perpetuum*" (125).

Donación de un alodio en término del castillo de Montblanch, por Ramón de Cervera (22 marzo 1166), en la que señala a un grupo de catorce pobladores y su descendencia: "*...ad alios populos que ibi laborent...*" (126).

Carta de población otorgada (11 enero 1170) por Ramón y Bernardo de Gavalgand y Berenguer de Cambrils, a los moradores de Alforja: "*...ad vos populos de Algurgie et ad eos qui futuri sunt...*" (127).

Carta de franquicias (20 noviembre 1171) concedida por Hugo, vizconde, y Poncio y Ramón de Cervera y Ramón de Torroja, a los habitantes de Espluga de Francolí: "*...omnibus hominibus qui habitare*

(124) Obra citada, I, pág. 176.

(125) Obra citada, I, pág. 182.

(126) Obra citada, I, pág. 183.

(127) Obra citada, I, pág. 195.

voluerint..." (128).

Carta de población (13 julio 1174) de Ermengol a los habitantes de Balaguer: "*...omnibus populatōribus villae Balagariī qui modo presentes sunt et adhuc ibi ad populandum venerint usque ad finem seculi...*" (129).

Carta de población otorgada por Alfonso I (enero 1175) a los habitantes de Vilanova de Prades: "*...et omnibus hominibus habitatoribus de Villa Nova qui nunc ibi sunt vel futuri erunt...*" (130).

Carta de población de Alfonso I (diciembre 1178) a los habitantes de Cambrils: "*...tam presentibus quā futuris...*" (131).

Carta de población de Alfonso I (12 septiembre 1180) a los pobladores de Sarreal: "*...omnibus populatōribus, presentibus atque futuris...*" (132).

Carta de franquicias otorgada por Bernardo, abad de San Feliú de Guixols (1 junio 1181), a los moradores de esta villa: "*...omnium*

(128) Obra citada, I, pág. 202.

(129) Obra citada, I, pág. 209.

(130) Obra citada, I, pág. 214.

(131) Obra citada, I, pág. 218.

(132) Obra citada, I, pág. 222.

habitantium qui modo presentes sunt vel venturi sunt..." (133).

Carta de población de Alfonso I, a los moradores de Ríu de Algars y Batea (30 octubre 1181): "...*omnibus populatoribus presentibus atque futuris...*" (134).

Carta de franquicias de Alfonso I (31 octubre 1181) a los habitantes de Puigcerdá: "...*vobis omnibus presentibus et futuris...*" (135).

IV. LA REPOBLACION: LA PRESURA. POBLADORES, VECINOS, ALDEANOS Y HOMBRES DE ESPAÑA

1. Referencias a pobladores y vecinos en los fueros locales

El instituto de la presura es, según I. de la Concha Martínez (136), un título para adquirir la propiedad de las tierras en la Reconquista. Era preciso que las que estaban efectivamente abandonadas por los avatares de la invasión y de las "razzias", pasasen a nuevas manos que se cuidasen

(133) Obra citada, I, pág. 226.

(134) Obra citada, I, pág. 228.

(135) Obra citada, I, pág. 232.

(136) "*La presura*", en Anuario de Historia del Derecho Español, XIV, 1942-1943, pág. 322 y sis., publicado después en tomo, Madrid, 1946.

de normalizar en ellas la vida, y de hacer que volviesen a cumplir su fin. La presura es la institución que resuelve este problema. Ante el enorme vacío de las tierras yermas, por la desaparición de gran número de sus primitivos propietarios, los reyes se llaman a la propiedad de aquéllas, lo que supone un gran aumento de los bienes de la Corona, que necesita encontrar una fórmula para cultivarlos y defenderlos: ésta es la "aprisio" en la Marca Hispánica, y su equivalente la presura en el resto de la Península, que se podía realizar bien mediante el encargo hecho a una persona concreta, o por actuación directa de los reyes (137).

Su objeto es la entrega de las tierras yermas, el elemento subjetivo lo constituyen los "presores", que podían pertenecer a diferentes clases sociales ("maiores", "minores", con la consiguiente transcendencia política); y el fin es la puesta en régimen de explotación, y con independencia de su situación física anterior, si bien se ha de destacar que la ocupación (la más elemental y antigua forma de adquirir la propiedad) es requisito indispensable pero suficiente.

Como dice el profesor Eduardo García de Enterría (138), ha notado Otto Hintze con su peculiar lucidez que la época moderna del municipalismo, la que arranca de los fisiócratas y de la Revolución Francesa, está decisivamente influenciada por posiciones teóricas en

(137) AHDE, XIV, pág. 419.

(138) *"Turgot y los orígenes de municipalismo moderno"*, en *Revista de Administración Pública*, número 33, 1960, pág. 79 y sts.

grado incomparablemente superior que en la fase anterior, de signo medieval, la cual, con el carácter de un crecimiento orgánico, descansaba primariamente, no ya sobre teorías, sino sobre situaciones fácticas.

Destaca el autor citado en primer lugar que la famosa "Mémoire sur les municipalités", redactado en realidad bajo la dirección de Turgot en 1775 por su colaborador, el notorio economista y político Du Pont de Nemours, contiene un concepto de la "village" decisivo para el desarrollo posterior: "un pueblo está compuesto esencialmente de un cierto número de familias que poseen las casas que lo forman y las tierras que dependen de él", concepto que -según García de Enterría- "refleja la concepción asociacionista de la comunidad local que proviene claramente de la Edad Media, y que, pese a las prevenciones antihistoricistas de Turgot, trasciende al tiempo nuevo."

Con estas breves, pero exactas pinceladas, queda también diseñado el panorama local español en la Edad Media, del que la mejor prueba es la que se deduce de la lectura de fueros, privilegios y cartas pueblas.

Ponen de relieve E. Montanos Ferrín y J. Sánchez-Arcilla (139) que estos documentos constituyen una manifestación sencilla y rudimentaria, pero muy importante, del Derecho medieval, y sirven para regular situaciones que el "Liber" no podía prever, por no haber surgido

(139) Obra citada, pág. 309-310.

éstas durante la monarquía visigoda. Para J. M. Pérez-Prendes (140), es imposible fijar un contenido común a los fueros, pero, en términos generales comprenden: materias económicas, prestaciones al rey o al señor; normas de Derecho público y de administración de la ciudad; de Derecho penal, procesal, privado y militar; y no persiguen agotar el Derecho aplicable, pero tienen primacía sobre el Derecho general.

Con independencia de las referencias reflejadas en otros puntos de este estudio, parece oportuno recoger las siguientes, que tomadas de fuentes distintas de las catalanas (de las que antes nos ocupamos), son más expresivas, quizás por razón de ser de época posterior, y matizan la condición social o humana de los pobladores, detallan mayor número de beneficios materiales, y -en general- tienen, dentro de su rudeza verbal, una minuciosidad que pone de manifiesto el deseo pertinaz de favorecer los asentamientos permanentes.

Los textos de los fueros nos dan una visión de lo que era la vida cotidiana en estos mínimos núcleos urbanos, con sus problemas y las soluciones arbitradas para resolverlos, no siempre coincidentes. Aquéllos nos ofrecen un panorama de los más amplio y complejo, difícil, prácticamente imposible de escudriñar por sus dimensiones

(140) Obra citada, pág. 359.

enciclopédicas. Bástenos asomarnos a un catálogo de fueros (141), para comprender la envergadura del problema; por eso, hemos traído aquí los más asequibles y significativos.

Fuero de Alcaraz (142), en la provincia de Albacete, de 23 de febrero de 1296. Es un fuero extenso de la familia de fueros de Cuenca, atribuido a Alfonso VIII. En él se contempla el amplio objeto de la donación a los moradores.

Libro I.

I. "Franquezas de Alcaraz".

"En las primeras cosas do e otorgo a todos los que moran en Alcaraz e a los que de aquí veman morar, doles Alcaraz, con todos sus términos, con montes, con fuentes, con pastos, con ríos, con salynas, con venas de plata e fierro, e de todo..."

(En el Fuero de Alarcón, provincia de Cuenca, también del siglo XIII, se encuentra análoga redacción).

No obstante, este último reserva, al menos sobre el papel, los derechos de repoblar a personas de condición principal:

(141) A. M^a. Barrero García y M^a. L. Alonso Martín, *"Textos de Derecho local español en la Edad Media"*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Ciencias Jurídicas, Madrid, 1989.

(142) *Les Fueros de Alcaraz y Alarcón*: Edición synoptique par J. Roudil, Professeur a l'Université d'Amsterdam, París, 1968, pág. 83.

Fuero de Alarcón (143).

I,7: "De los pobladores que viniesen a poblar Alarcón."

"Et si condes o príncipes o caulleros o infançones, si quier sean de mi regno, si quiere de otro, francos, como hispanos (M^a de Ebro, pág. 8) e Alarcón vinieren a poblar, tales calonnias ayan quales los otros pobladores, tan bien de vida como de muerte".

Mientras que el Fuero de Alcaraz (144) no contiene limitación de beneficiarios, como se puede ver en los amplísimos términos de su redacción:

I, 12. "Franquezas de los pobladores."

"E tann otorgo a todos los pobladores de Alcaraz e de su término esta franqueza: que tod aquel que Alcaraz viniere a poblar de qualquier manera que seya, si quier sea cristiano, si quier moro, si quier judío, si quier libre, si quier siervo, e non responda por enemistad, ni por debido, ni por fiadura ni por evencia, ni por mayordomía, ni pr merindazgo, ni por otra razón que ayan fecho ante que Alcaraz fuera presa."

El Fuero de Molina de los Caballeros, hoy Molina de Aragón, Guadalajara (145) hacía referencia a determinados requisitos temporales de permanencia:

(143) *Les Fueros de Alcaraz y Alarcón*: Edición synoptique par Jean Roudil, Professor a l'Université d'Amsterdam, París, 1968, pág. 86.

(144) Id., pág. 88.

(145) Publicado por M. Sancho Izquierdo, Madrid, 1916, pág. 64.

Los Caballeros de la Sierra tenían que tener vecindad por tres años en aquella colación, casa poblada y caballo de veinte maravedís, un año antes.

Los Andadores (Alguaciles) (Cap. XIII) eran seis, no siendo preciso que fueran vecinos de Molina, bastando con que dieran *"sobre levador y casa con pennos."*

Igualmente:

"De aldeano que poblase en la villa" (146).

"Aldeano que poblase en la villa non seya escusado por casas que tenga en pennos, ni logada, mas aya su propia casa, et primero seya en la villa morador con mujer et con fijos por un anno, et aquel anno peche, et desde en adelante sea excusado como vecino de Molina."

Tratamiento análogo en el pago de tributos, incluso para los judíos (147):

"Do a vos en fuero que siempre todos los vecinos de Molina, cavalleros et clérigos et oidios prendan sendos cafices (148) de sal cad a uno, et den en precio de apuestos cafices sendos mencales (149)".

(146) Ib., pág. 64.

(147) Ib., pág. 65.

(148) Es una unidad de medida.

(149) Una clase de moneda.

Y también permite el acogimiento de moros cautivos (150):

"Todo omne de Molina que traxiera moros de otra tierra, de guerra, et aquellos en su aldea poblase, suyos sean amandar."

Desciende al detalle de los diversos cierres de los prados, según su respectivo propietario (151):

"Quien prado toviere, téngalo cerrado a Fuero de Molina. Los vecinos de la villa, con moiones. Los omnes de las aldeas, de palo seto, o de vallador o de tapia."

Ocupémonos del fuero de Ubeda (152), en la provincia de Jaén, de la familia de fueros de Cuenca, atribuido a Fernando III.

Ante todo, debe destacarse la amplitud de los beneficios:

Título II: De la franqueza de los pobladores.

"Et todo aquel que en Ubeda casa poblada touyere, sea quito de todo pecho...e sy algunos condes o potestades o caballeros o infanzones a Ubeda vinieren a poblar, sy quier de myo rreyno, si quier de otro, tales calonnas ayan como los pobladores, tan bien de vida como de muerte...E vecino de Ubeda

(150) Ib., pág. 80.

(151) Ib., pág. 174.

(152) *Fuero de Ubeda*, estudio preliminar M. Pescet y J. Gutiérrez Cuadrado, estudio paleográfico de Josep Trench Odena, edición y notas de J.G.C. Universidad de Valencia, 1979.

non dé portazgo ni montazgo en ingún lugar de Tajo acá. E esta franqueza otorgo a todos los pobladores que a Ubeda vinjeren poblar, sy quier sea cristiano, sy quier moro, sy quier judío, sy quier franco, sy quier syervo: venga seguramente. Et non responda nju por otra cosa ninguna que ouyere fecha ante que Ubeda fuere presa. E sy aquél enemigo fue ante que Ubeda fuere presa vinjere poblar a Ubeda et fallare y su enemigo, den ambos fiadores de salvo a fuero de Ubeda, que sean en paz. E aquél que fiadores dé salvo non quisiere dar, vaya fuera de la villa e de su término." (153)

La protección se extiende también a los comerciantes:

Título VII: "De los mercaderes que a Ubeda vienen et del establecimiento de la feria del Coto".

"Et demás mando que todo omne que en mercadura vinjere a Ubeda, sy quier sea cristiano, sy quier moro, sy quier judío, que nol prende njunguno sy el mesmo non fuere debdor o fiador. E qui otro prendare, pedre çient moravedís al conçejo et al querelloso la prenda doblada. E aun a provecho de la villa et a onra, otorgo a vos ferias que comiençen ocho días ante de la fiesta de pentecosté et que duren ocho días después de la fiesta. E todo aquel que a estas ferias viniere, sy quier sea cristiano, moro o judío, venga seguramente." (154)

Regula la competencia subsidiaria para señalar el lugar donde habían de establecerse las casas:

(153) Id., pág. 256.

(154) Ib., pág. 259.

Título VIII, Ley III (155) : *"De los pobladores que fagan casas do el conçejo les diere".*

"Otrosy, los pobladores que a Ubeda o a sus aldeas vinjeren a poblar, fagan casas do el conçejo de aquel lugar les diere. E sy por auventura el conçeio del aldea esto non quisiere fazer, el juez et los alcaldes de la villa den lugar a aquellos pobladores do fagan casas acerca de las otras, en lugar conveniente."

Se ocupa de las líneas divisorias de las aldeas:

Ley VIII: *"De los conçeios de las aldeas que contendieren sobre los términos."*

"Mando aún que si los conçejos de las aldeas sobre algunos términos contendieren, que vayan al juez o los alcaldes a veer los términos de cada una de las aldeas, et determjenenlos según que los mojones fuesen puestos."

Realza el hecho de llevar viviendo en Ubeda diez años, por lo menos.

Título XXI. Ley II (156):

"Quel pariente más propincuo herede".

"Mando aún que los parientes más çercanos, que fuesen vecinos, hereden la buena de su pariente muerto. E sy por aventura parientes más cercanos vinjeren de alguna parte, hereden la buena de su pariente muerto. Más primeramente dé fiadores valederos, que el menos sea poblador de

(155) Ib., pág. 262.

(156) Ib., pág. 287.

Ubeda X annos, et si non lo fiziere, non herede."

Se ocupa de las roturaciones arbitrarias, y de la falta de responsabilidad por deudas de los vecinos de colación:

Título XXXI (157):

"Todo aquél que menestral de otro término fallare en término de Ubeda labrando, prendal fasta que se rredima por auer. Esto fayiendo por amor de los vecinos menestrales, que ganen más, et aum que los aldeanos vengan al fuero de la villa."

"Mando aún que njugna collaçión non responda por vecino que mal fuere dado escripto en padrón. Otrosí vecino nunca se despida de la collaçión fasta que toda la debda sea pagada, por onde la collaçión fuese adebdada el seyendo vecino. Más después que se despidiere, non a de rresponder por debda de la collaçión que después fuese hecho. E el desprendimiento sea fecho a las vísperas el sábado o el domingo a las misas."

Obligación de dejar fiadores los deudores que se ausentan:

Título XLIII (158):

"Et mando aún que sy, por aventura, el debdor se fuere de la villa, ante que se vaya dé sobre levador."

Mejor trato al que construye su casa con teja, y no con paja:

(157) Ib., pág. 311.

(158) Ib., pág. 346.

Título LXXXVI (159):

"Et mando que todo aquél que au casa tonjere de paia en la villa, cúbrala de teja; et si non, peche como sy morase en aldea".

Establecimiento de solidaridad en la derrota y en la victoria (160):

Título XIII: *"De la faeienda en que los cristianos fuesen vençidos."*

"Si por aventura, lo que Dios non quiera, el conçejo o otros fuesen vençidos de sus enemigos, sy alguna cosa ganaren, sy quier en alcançe, si quier dotra manera, todo sea de mancomuín de todos los compañneros, asy como si lo ganasen venciendo."

Igual valor del testimonio de los vecinos de San Esteban de la Sierra, que el de los Ubeda.

Fuero de Ubeda, Privilegio del Rey Sandro IV (161):

Título XVII: *"E otrosy, tengo por bien que todo pleito que vezino de Sant Esteban faga sobre sy et contra sy, que pudiendo ser provado con omnes buenos, maguer no sean vecinos de Sant Esteban (de la Sierra), que valan también sobre los vecinos."*

(159) Ib., pág. 400.

(160) Id., pág. 405.

(161) Ib., pág. 408.

Equiparación de vecinos y aldeanos, Idem (162):

"Otrosy mando e tengo por bien que aquel que razonare ante los alcaldes por aner acotado, sy los contendores abonados en la villa, non sean temidos de dar pennos ante los alcaldes, e sy fuesen los contendores aldeanos, dando en la villa casa con pennos, esto mesmo."

En el fuero de Guadalajara (163), semiextenso, otorgado por Fernando III, encontramos también el requisito -al menos, teórico- de ser de mejor condición social.

41. *"Tod omne que fuere poblar a Guadalajara, e dixere: "yo so fijo de jufanzón", non haya mayor calonna que uno de sus vecinos."*

Este texto distingue entre vecino y morador, y según firme en la villa o en la aldea (164):

98. *"Qui oviere a firmar a vezino de carta, firme en villa con tres vecinos de carta; e en aldea con dos; e a morador, en villa firme con tres moradores, e en aldea con dos".*

El de fuero de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos, fuero breve otorgado por Alfonso VI, confirmado por Alfonso VII y Alfonso

(162) Ib., pág. 411.

(163) *Fuero de Guadalajara* (1219), edited by H. Kenston; Princeton University Press, U.S.A.; les Presses Universitaires, París, 1924. pág. 8.

(164) Id., pág. 16.

VIII (165), está concebido con toda amplitud:

3 (traducción):

"Y nosotros viendo que tal consejo era bueno y leal, concedimosles ley y fueron, e hicimos la presente carta puebla en beneficio de los pobladores de Miranda, que al presente pueblan dicho lugar, y, por lo demás, hasta el fin del mundo han de poblar, bien açi francos, como hispanos, u otra gente cualquiera que lo poblasen, vivan según su fuero y el de los francos, y se mantengan de buena fe por autoridad de la presente escritura." (166)

Y se reitera en 36:

"Y todos los vecinos que al presente son, y por lo demás sean caballeros, o peones, o moros o judíos, observen este fuero, y tengan en las demás cosas el fuero de Logroño." (167)

Los fueros de la Novenera (168) y del siglo XIII, empiezan delimitando el ámbito territorial:

1. *"Est es el fuero que deven auer el conceillo de Artayssona, et de Mendigorria, et de Lárraga, et de Miranda (de Aragón)".*

(165) *Fuero de Miranda de Ebro*, edición crítica, versión y estudio por F. Cantera Burgos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, 1945, reproducida en *Miranda de Ebro*, 1980, y Salamanca, 1987.

(166) *Id.*, pág. 64.

(167) *Ib.*, pág. 75.

(168) *Los Fueros de la Novenera*, publicados por G. Tilander, *Leges Hispanicae Medii Aevi*, Upsala, 1951. pág. 43.



Contemplan el paso de una villa a otra para cobrar una deuda (169).

273. *"De peyundra d'una villa a otra.*

"Nuil ombre qui peyundre d'una villa a otra por ombre que peinnos non aya, et si peyundran a ningun su vecino, et si el manguero li aduce delant, que yescam los peynnos; et si no, dé fiador sobre la peyundra, et si transmytan, XL sueldos ay de colonia."

Prohíben la venta de fincas, para que no salga del reino la propiedad (170):

217. *"De laurador, que non deue vender heredamiento".*

"Nuill ombre que laurador sea del rey, non ha poder de vender en Navarra hereditat, que passe el auer ad Aragón, ni a Castieyla; et si prouado li es, deue perder el auer, et al cuerpo a la mercé del rey."

El fuero de San Sebastián (171), otorgado por Sancho VI hacia 1180, contiene la introducción habitual sin limitaciones.

I..."Facio omnibus hominibus tan maioribus quam minoribus, presentis et futuris, que populati sunt et in antea populabuntur in Sancto Sebastiano. Place muchi liberti animo et spontanea voluntate, quod dono et concedo

(169) Id., pág. 99.

(170) Ib., pág. 88.

(171) *Fueros derivados del de Jaca, I (Estella-San Sebastián)*, por J. M^a Lacarra y Martín Duque. Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1969, pág. 269.

"4. De Karga de stagno, VI denarios et suam lezdam."

"5. De Karga de plumbo, VI denarios et suam lezdam."

"6. De unoquoque pondere de Coriis, II denarios de media traea, I denarium. Et si minus fuerit, nihil donet.

"7.2. Et ut clericus (nec) navarros sit populator in populatione ni si voluntate regis et consilio omnium vicinorum."

Reconoce una moratoria para el pago de las deudas a los pobladores (174):

"I.8. Quicumque populavesint in Sancto Sebastiano, si debitor fuerit, non respondeat suo debitor, nec ipse fideiusor eius, usque ad duos annos."

No obstante, se obliga a pagar un derecho de naufragio (175):

"I.10. Si contingerit quod alia navis fragatur in término de Sancto Sebastiano, mercatores navis renpexet navem et totas suas mercaturias, dando X solidos et suam lezdam, sicut superius est terminatum."

Se sienta el principio del fuero territorial de San Sebastián para sus habitantes (176):

"II. 8.1. Et nullus ex hominibus de Sancto Sebastiano (vadat) ad iudicium in illo loco nisi inter in Sancto Sebastiano.

"2. Et si homo de Sancto Sebastiano fuerit inventus foris in aliquo

(174) Ib., pág. 272.

(175) Ib., pág. 271.

(176) Ib., pág. 271.

loco, et homo de foris habuerit sancuram de illo, veniat cum eo ad Sanctum Sebastianum, et accipiat directum ad forum de Sancto Sebastiano, quia non solo ut accipiat directum (de) alcaldis de foris."

Regula la prueba de testigos y de juramento, en los pleitos con los hombres de fuera (177):

"II.2.1. Similiter dono per fuero quod non faciant beleum nec duellum cum hominibus de foris, per nullo plaito, sed donet testes, unum navarrum et unum francum."

"2.2. Et si testes non habuerit, donent unam iuram."

Régimen de los homicidas (178):

"II.11. Et hominibus de foris, ex quo intus fuerint in Sancto Sebastiano, propter malinolenciam, aut homicidium quod habeant contra alium, non se debent (percutere), vel ulla arma (excuplata) non debent (trahere; et si traxerint peccent) mille solidos: Et si omnes populos (se) lavauerint et occiderint illum que alterum percusseris, non est ibi calonia."

Fija el pago del hospedaje de los viajeros (179):

"IV. 5.1. Omnes troceli que veniant ultra portos ad Sanctum Sebastianum, postanam amplius unius noctis iacurint, de VI denarios hospitio suo de hostalaje, et medius troselus det tres denarios."

(177) Ib., pág. 272.

(178) Ib., pág. 272.

(179) Ib., pág. 284.

En el fuero de Estella (180), en la provincia de Navarra (año 1164), se contiene la protección de las aduanas contra el vecino:

"D.I. (17) *E si algún d'ees es irat en contra su vecine e tray armas en contra é, lança o espada o maça, paiase mil sols.*"

Se adquiere la vecindad por la tenencia de casa durante un año y un día (181):

"D. 61. *Si algun des poblados uendra en la uila per cosa de stament, et lognia casa an et día, sea quiti de toda vecindat.*"

"*Mas d'ali auant ost et rezinesdi fuga, et d'aqui adeuant tengulo por uecin, así como un ultre dels altres uecins.*"

El fuero de Usagre (182), en la provincia de Badajoz, fue otorgado entre 1242 y 1275 por Pelayo Pérez, maestro de Santiago. Reproduce el de Cáceres. Equipara al aldeano al vecino en determinadas condiciones.

"32. *Aldeano que casa ovier en la villa.*"

"*Tod aldeano que casa ovier en la villa, sea uecino si la touia poblada con sos omes. E de el medi diemo en la colación o fuere necino. E de a los*

(180) *Fueros derivados del de Jaca (Estella-San Sebastián)*, por J. M^a. Lacarra y A. Martín Duque. Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1969, pág. 157.

(181) *Id.*, pág. 150.

(182) *Fuero de Usagre (siglo XIII)*, anotado con las variantes del de Cáceres. Publicado por Rafael de Ureña y Smenjaud, y Adolfo Bonilla y San Martín, Madrid, 1907.

mayordomos recabdo por todos los derechos de concejo, y si ita non fecerit, non sea uecino." (183)

Se reconoce la preferencia de los primeros en venir a repoblar (184):

"422. De pobladores".

"Todos los pobladores que ante de partición de las tierras vinieren denles raciones. Et a los que después vinieren, no les daquello partido, et compren si quisieren."

El fuero de Béjar (185), de entre los siglos XIII y XIV, de la familia de los fueros de Cuenca, concede al concejo la facultad de no admitir en los posteriores pobladores.

"(7) De puebla que poblasen".

"De pueblas que fechas fueren en vuestro término non queriendo el concejo, non sean estables, más echelas el concejo sin calonna et non valan."

"(11) Todos pobladores aian un fuero".

Se exige también un elevado "status" social para venir a poblar.

"Sy algunos ricos omnes, condes o podesdades, caualleros o infanzones

(183) Id., pág. 12.

(184) Ib., pág. 147.

(185) *Fuero castellano de Béjar (siglo XIII)*, Preliminar, transcripción y notas por A. Martín Lázaro, Madrid, 1916, pág. 10; también Fuero de Béjar, por J. Gutiérrez Cuadrado, Salamanca, 1975.

de mio regno, vinieren poblar a Beiar, tales calomnas aian quales otros pobladores..."

Fija la competencia para señalar el suelo para edificar (186):

"(58) Coimo deuen tomar suelo pobladores".

"Pobladores que vinieren a Beiar o a fus aldeas, fagan casas do el conceio les diere et non a icembre. Si conceio de aldea non quifier fer esto, el juez y los alcaldes de la villa den al poblador logar do faga casa en logar mas guifado cerca de las otras casas."

La postura del acreedor prendario que no tiene casa en la villa es débil (187):

"(582) Del prendador que non a casa en la villa".

"Si el que prenda non ouier casa en la villa, o conocido non fuere, el dicho vecino tenga la prenda. Si esto non quisier fer, el prendado perdiere los penos, pedielos el faion."

Regulación del emplazamiento del demandado que no tiene casa en la villa (188):

"(603) Del fuero cómo aplazen a ffu cotendor que non aya casa en villa".

"Si el querelloso fallase fu contendor que non aia casa en la villa,

(186) *Id.*, pág. 18.

(187) *Ib.*, pág. 84.

(188) *Ib.*, pág. 87.

aplazelo con tres vecinos a la puerta del juez."

Y contiene una enumeración de quiénes son conceptuados como vecinos (189):

" (660) *Quáles son vezinos*".

"Vecinos de la villa llamamos todos aquellos también de villa como de aldeas, si son escriptos en padron, atemplantes, medieros, caualleros, clérigos racioneros. Estos tales firmen, et iuren contra vecino et contra qual fequiere otro omne. Morador firme contra morador."

El fuero de Viguera, en La Rioja, y Val de Funes, en Navarra, del siglo XIII, concede la vecindad al año, aunque sea responsable de culpas anteriores, con una bella frase de Alfonso I el Batallador (190):

"2. *Todo omne que vinjere de otra tierra a Funes por morar, et diere a emparar su casa et su heredit, et tronjere en Funes ayyno complido, puede por ende perder la casa, heredit haberla ha por siempre. Et si algunos de su villa la fiziere uerto, bayan los de Funes e prendren e quemen la aldea. Otrosi, que todo homne que en alguna bena fiziere mal o alguna negligencia e vinjere a Funes, juzguere en eylla fasta que cumpla derecho, que más plaze a mi don Alonso emperador esto, e mejor es, que non que's vaya a tierra de moros.*"

(189) Ib., pág. 94.

(190) *Fuero de Viguera y Val de Funes*, edición crítica por J. M^a Ramos y Loscertales, Universidad de Salamanca, 1956.

En cambio, deja de proteger en el caso de abandono del reino (191):

"253. *Et si algún infanzón fuere a tierra de moros o a otro regno a buscar su pro o seynnor servir, por tal fecho el rey no l'debe emparar sus bienes*".

Los que están al servicio del rey deben defenderle, hasta perder la vida (192):

"257. *Los que no fueren desnaturados.*"

"*Otrosi, los caualleros e los ricos homes e los otros fijosdalgo que non fueren desnaturados del rey, et otro rey o otro omne quisier haber batalla ex ellos fueren en servicio d'él, debendo ellos de amparar e ayudar al rey que es su seynnor natural por hun día en la batalla, así que non seam en la muerte de su seynnor, ante deben muerte rescebir defendiéndolo que no ha otro omne de su gent.*"

Contempla el caso de que los litigantes no sean de la misma villa (193):

"(257) *Pleyto de dos omnes de dos villas.*"

"*Et si dos omnes de dos villas oujeren pleyto, la una testimonya dará de su villa, e la otro de la otra, e conprouvara si non fuere hijo o hermano o home de su pan.*"

(191) Id., pág. 48.

(192) Ib., pág. 49.

(193) Ib., pág. 49.

El Libro de los Fueros de Castilla (194), recopilación privada que se sitúa en la segunda mitad del siglo XIII, no distingue entre el acreedor que es de la villa o el que es de fuera de ella.

"87. Título de como deue el sayon dar los pennos que prenra (dar) a los de la villa o al de fuera."

"Esto es por fuero: que sy sayon a de preñar et va a casa de omne de la villa o a otro de fuera de la villa, deue los pennos sacar de casa e dargelos al deudor, así como es fuero."

"88. Título de omne de la villa que echa fiador a otro de fuera de villa, contra de fuera de la villa."

"Esto es por fuero de todo omne de la villa que echa fiador a otro de fuera de la villa contra omne de fuera de la villa, et viene qué...Et esto non dee auer plaso ninguno su non entregarle luego el caudal doblado; et el señor leuará la meatad del doblo por que entergue."

Este mismo Libro no permite comprar en la villa a quien no sea vecindado (195):

"176. Título de como ningún fijodalgo, non puede comprar en la villa do non es deuysero nin poblador."

"Esto es por fuero de Castilla: que ningún fijodalgo non pueda comprar ni poblar en la villa en non fuere deuysero. Et sy cauallero o escudero entrea en la villa do no es heredero e deuysero et entra en armas en la villa oniviere caualleros o escuderos e le segundaren de la villa sobre palabras, con el

(194) Publicado por G. Sánchez, Barcelona, 1924, pág. 45.

(195) Ib., pág. 91.

deuen pechar deshonrra sin ser enemigo, pues non es heredero nin es deuysero de la villa. Et el fijosdalgo ally do fuere deuysero puede comprar hereditat."

La libertad del poblador de vender o de donar (si no tenía hijos) se reconoce en el fuero de Avilés (196), de enero de 1155, otorgado por Alfonso VIII, confirmando el fuero de Sahagún de Alfonso VI.

"24 Toh omne qui populator fori el la villa del Rei, dequant aver quisier aver, si aver como hereditat, de fer entoth suo placer de vender o de dar. Et a quien lo donar que redear stabile, si filio non aver."

Redacción semejante en el Fuero de Oviedo.

El fuero de Cuenca, del siglo XIII (197), atribuido a Alfonso VIII, al igual que el de Ubeda y el de Béjar, señala las sucesivas competencias para señalar el sitio donde se habían de edificar la casas de los pobladores.

"XXIII. Populatores qui Concham, vel in aldeas venerint, edificent ubi concilium eiusdem loci concesserit illis. Quod si forte concilium alde hoc facere noluerit, iudez urbis et alcaldes dent ipsis populatoribus locum ad hedificandum circa alias domo in loco competenciosi. Sed tamen siquis domum suam vendiderit, et iribi iterum aliam facere noluerit, non faciat nisi

(196) Según el Discurso pronunciado por A. Fernández-Guerra y Orbe, en la Real Academia Española (año 1865), en el que figura su correspondencia con el Fuero de Oviedo (pág. 125).

(197) *Edición crítica con adaptación del Fuero de Iznatoraf*, de R. de Ureña y Smenjaud, 1935, pág. 150.

in cemento comparato."

En los fueros de Sepúlveda (198), Apéndice, encontramos que el año 1274 (26 de marzo), en Mérida, Pelayo Pérez, Maestre de la Orden de Santiago, otorga al concejo de Segura de León (Badajoz), "el buen fuero y usos de que fuë poblada Sepúlveda" y concede a los pobladores de dicho lugar otras mercedes (199).

A su vez, se contienen exenciones tributarias (200):

"4. Y todo poblador que viniere a poblar a Segura no pedre por diez años."

"5. Y todo morador que morare en la villa sobredicha, pero que non haga casa ni viña, no pedre por tres años."

Como dato curioso, y -a nuestro juicio- de gran interés para medir la importancia normativa de los fueros, encontramos que en los años de 1.776-1790 se redacta un informe elevado por el Ayuntamiento de la villa de Sepúlveda sobre la observancia de su fuero, que dice (201):

"21. Todo aquél que viniere a morar en esta villa o tierra de Sepúlveda,

(198) *Los Fueros de Sepúlveda*, Edición crítica y apéndice documental por E. Saez; *Estudio histórico-jurídico*, por R. Gibert. *Estudio lingüístico y vocabulario*, por M. Alvar. *Los términos antiguos de Sepúlveda*, por H. G. Ruiz Zorrilla. Segovia, 1983.

(199) Id., pág. 200.

(200) Ib., pág. 201.

(201) Ib., pág. 295.

no hallándose con algún impedimento que le obste para avecindarse en ella, si por ventura se le denegase por los pueblos la vecindad y el construir casas en ellos, recurriendo al Ayuntamiento, éste le concede solar en donde fabrique casa, cuidando de no abrogarse en tales concesiones terrenos ajenos, pues siempre, y con el competente conocimiento, le señala en sitio concejil, y nunca en el de tercer alguno."

Se debe poner de relieve que en el fuero de Teruel (202), del siglo XIII, atribuido a Alfonso II de Aragón, se contiene un derecho de veto de los pobladores contra sus enemigos:

"25. De aquel que enemigos ouviere e a poblar viniere en Teruel".

"Decabo mando que todo omne que enemigos oujere en alguna partida del mundo, et a Teruel vjniere a poblar et sus enemigos de aquél vinieren después de aquél, non los coian en Teruel, sin non fuere con su amor".

2. Vecinos y aldeanos

Estimamos interesante destacar que, para la generalidad de los fueros, al concepto de "morador" se le contrapone el de "extraño", sin distinguir su origen, o la posible relación que el "extraño" pudiera tener con el mismo monarca, príncipe o señor del lugar del Fuero, aunque en casos muy contados, tal posible relación aparece reconocida.

(202) *El Fuero de Teruel*, publicado por M. Gorosch, Stockholm, 1950, pág. 104.

También es del mayor interés detenerse en el concepto de "aldeano", que aparece en numerosos fueros.

Por fin, no cabe desconocer que, dentro del ámbito de la ciudad, existen diversos grupos o "colaciones", caracterizados por su diferente origen.

A desarrollar estas ideas se orientan las páginas que siguen, pero antes estimamos conveniente transcribir las definiciones que, sobre tales conceptos se contienen en la obra de Pedro Lumbreras Valiente, "Los Fueros de Cáceres.- Su Derecho Público" (203) :

Desde el punto de vista jurídico-administrativo, los habitantes de las poblaciones se clasificaban en: pobladores, vecinos, moradores, aldeanos y albarranes.

"POBLADOR.- Era considerado aquél que acudía al llamamiento regio para poblar un lugar hurtado a la hegemonía musulmana, concediéndosele determinados derechos de excepción.

"VECINO.- Es todo aldeano que tuviera casa poblada, pagara los tributos y estuviese empadronado.

(203) (Tesis doctoral), Cáceres, 1974, págs. 43 y 44.

"MORADOR.- Se denominaba al que viviendo en la villa no reunía los demás requisitos que preceden.

"ALDEANO.- Fue tenido por tal el que, no estando domiciliado en la villa, lo estaba en una de las aldeas del "alfoz".

"ALBARRANES.- Con esta denominación se conocía a los forasteros.

Estas definiciones pueden servir de orientación, aunque no estemos totalmente de acuerdo con la de vecino, la cual, a nuestro juicio no debe partir del concepto de aldeano (como un género del que el vecino es una especie), sino que debe sustituirse por la siguiente: "el poblador que tuviera casa habitada dentro del perímetro de la villa, pagara los tributos y estuviera empadronado."

Como decimos, la regla general es la indiferencia que el concedente del fuero siente sobre el origen de los pobladores; los ejemplos son innumerables, pero como muestra podemos hacer referencia a lo dicho por el Canónigo Don Antonio López Ferreiro (204) que alude a un diploma de Ordoño II (del año 915) y a otro de Fruela II (del año 924), pero que sobre todo se refiere a la carta foral dada por Raimundo

(204) *Fueros Municipales de Santiago y de su tierra*. Santiago de Compostela, 1895-1896, tomo I, pág. 69 y siguientes. Hay otra edición de Madrid, 1975.

de Borgoña, junto con su esposa Dña. Urraca el 16 de diciembre de 1105, de manera que todos los que en este día constaren como moradores de Santiago de Compostela, fueren hombres o mujeres, y cualquiera que sea el condado, el castillo, la "mandación", o el país de donde hayan venido, sean considerados como libres, e ingenuos, ellos y toda su descendencia, y exentos de todo servicio y prestación personal y real, tanto por razón de señorío o dominio, como por razón de patronazgo, en favor de cualquiera que no sea el obispo de la sede y su clerecía.

Como ejemplo de esta postura hemos seleccionado el siguiente:

En el fuero de Teruel (parágrafo 519) (205) se lee:

"De infançones que a Teruel uinieren a poblar.- Decabo mando que si algunos comptes o potestades o jnfançones o cauallero, o sean de mj regno o de otro regnado, a Teruel ujneren a poblar, tales colonia et atal fuero ayan como los otros pobladores, asin de ujda como de muert."

Por el contrario, vemos el tratamiento del forastero en el fuero de Cuenca (206):

"Quod nemo extraneus pascat peccora..." (parágrafo 45)

(205) Publicado por M. Gorosch, Stockholm, 1950, pág. 306.

(206) *Edición crítica con adaptación del Fuero de Iznatoraf*, de R. de Ureña y Smenjaud, 1935, págs. 116-120.

"De extraneo qui in concha homicidium fecerit.- Omnis homo alterius uille... (parágrafo 110).

"Todo omne de otra villa que omezillo fiziere...sea justiciado" (parágrafo 110 del fuero de Iznatoraf).

"Qual quier omne estranno que en las aldeas o en el término de heznatoraf omne firiere, o matare...y fuere ferido o muerto, njnguna calonna non aya (parágrafo 120).

Tratamiento especial se encuentra en el fuero de Brihuega (207):

"Qui matare omne de fuera de Villa.

"Tot omne de briega, que omne matare de fuera de villa, peche tal calonna qual pecharie aquel concejo dont fuesse el muerto..."

"Qui no fuere bezino o morador en Briuega

"Tot omne que non sea bezino ni morador en briuega, et fuere de otra tierra, et alla matare o ficiere cosa alguna por que enemigo dueiere exir, de los parientes daquel en qui uiniere la mala fecha: et si aquel por quien saliere enemigo ouiere parientes en briuega: el conceio nol reciba en uezindad, depues de la mala fecha..."

No obstante, ya hemos recogido cómo en algunos fueros la condición de repoblador no se concedía a todo el mundo, sino que estaba limitada a príncipes y nobles: así en los de Alarcón, Béjar, Guadalajara

(207) Publicado por J. Catalina García, Madrid, 1887, pág. 130.

y Teruel (véanse las páginas 164, 172, 179, 180 y 190 de esta Memoria), si bien, según el Libro de los Fueros de Castilla no puede comprar ni poblar en la villa fijodalgo donde no es "*devysero*" (v. *supra*, pág. 181): interpretamos "de solar conocido" allí, con lo que se establece un concepto estanco -personal y real- frente a los que no son pobladores iniciales, aunque sean hidalgos, lo que reitera lo ya dicho por nosotros en otros sitios.

Con esto no se agota el concepto de vecino, contrapuesto al de extraño, que se aborda con más detenimiento en otro capítulo de este trabajo.

En numerosos fueros se distingue entre los habitantes de la Villa (o villanos) y los del alfoz (aldeanos), que aun siendo aforados o beneficiarios del fuero respectivo, no siempre tienen la plenitud de los derechos, por lo que ocupan una categoría especial dentro de los círculos concéntricos que forman: los vecinos de la Villa, los aldeanos de su alrededor o alfoz, los naturales del mismo reino (de los que escasean las alusiones en los fueros), y los extraños, en general.

Los fueros a veces empiezan por definir o acotar el término al que se aplican, describiendo con minuciosidad los linderos hasta donde llega su ámbito respectivo. Con este motivo, ya se suele hacer referencia a los puntos poblados a modo o manera de villas, constituyendo las aldeas el resto del territorio.

Otras veces se alude en los fueros a las aldeas, para regular materias exclusivas o propias solamente de las mismas, tales como asuntos de labranza de tierras, crianza de ganados, aguas, bosques, etc.

En otras circunstancias aparece la contraposición entre los vecinos de la villa y los aldeanos. Las razones de la misma no se expresan, pero pueden obedecer tanto a un sentimiento de superioridad del habitante urbano -más pretencioso- frente al rústico -considerado menos "culto"-, como al deseo de los vecinos de obtener un mayor resarcimiento de las indudables cargas concejiles que pesarían sobre ellos.

En fin, dado que los propios fueros, por su primitivismo, carecen de sistemática, tratar de hacerla ahora sería punto menos que imposible, por lo que lo mejor será ir recogiendo lo que aquéllos van diciendo sobre este aspecto de nuestro estudio.

En el fuero Viejo de Castilla, Libro III, Tit. II, VIII, se lee (208):

(208) Obra citada, págs. 85 y 86.

"Esto es fuero de Castiella: Que si ovier algund Fijodalgo pleito con labrador, o con algund Fijodalgo el labrador e dier pruebas la una parte contra la otra; puede el Fijodalgo decir contra las pruebas que dier el labrador, que el labrador que non es fijo de velado, o que es perjuro, o que es descomulgado; probado esto puedelos desechar, e el labrador ninguna cosa destas non puede decir contra el Fijodalgo..." A continuación se extiende sobre los plazos probatorios. No podemos por menos de exponer la extrañeza que siente una mentalidad de nuestros días ante la enorme injusticia que representa este fuero de Castilla.

Y en el fuero de Cuenca (209) encontramos:

"Si los contendores fueren aldeanos, el querelloso enplace a su contrario a la puerta del juez, y el juez déles por juizio que vayan a determinar, poniéndoles plazo, como dicho es de suso: y es a saber, que la lauor fecha con aradro o con açada, y tanniendo la tierra sulco con sulco, puede defender la eredad; y la otra presura non vala a ningunno."

"Populatores qui concham, uel in aldeas uenerit, edificent ubi concilium eiusdem loci concesserit illis" (210)

"Si concilia aldearum super terminos litigauerint, uidez uel alcaldes uadant ad uidendos terminos utriusque, et desterminent eos secundum metas iam positas." (211)

(209) Obra citada, pág. 145.

(210) Obra citada, pág. 150.

(211) Obra citada, pág. 154.

En el fuero de Brihuega (212) se refiere a la existencia de:

"Los de las aldeas que ayan collaciones.- Los Bezinos de las aldeas ayan collaciones connocidas os se arrimen, si mester les fuere de saluar con connombrados, por demanda de fuera de uilla, et el que no reconnociere collación: nol ayuden a saluar por premia."

El fuero de Teruel (213) regula el emplazamiento del deudor hecho en la aldea:

157. *"Del que su debdor trohare fuera de la uilla.- Si por auentura el querelloso trobará su debdor fuera de la uilla o en aldea o alguno escuentra alqual aya pleytesia, non auiendo caa en la uilla de Teruel, aplaze lo delant II uezinos, que a tercer día sea a la puerta del uidez, que emiende al querelloso segunt del fuero."*

Y también el señalamiento del acto del juicio:

270. *"De pleyteantes aldeanos.- Otrosi, si los pleyteantes fuesen aldeanos e fuera de la uilla farán alcaldes e aurán iudicio e ad alguno d'ellos aquel iudicio non le plazrá, alçe se al día uienes et el que al auant dicho día al plazo non uenrá caya del peyto. Mas si por auentura la demanda fuere fecha en el día uienes e alguno de los pleyteantes se alara al día uienes, uengan al plazo en el primero día uienes. Mas quien assi como es dicho ad aquel*

(212) Obra citada, pág. 181.

(213) Obra citada, pág. 154.

plazo non uerná caya del peyto." (214).

614. "De aquel que dirá que era en el aldea quando fue el apellido.- Quando appellido uiniere ad aldea do denna non ayan, los postrmeros pleguen al lugar de los primeros; si non, pechen assi como de suso ya es dicho." (215).

Existía un distinto tratamiento fiscal:

774. "De enparejamjento de las aldeas.- De cabo mando que quando qujere que plugujere al Concejo de Teruel, sean enparejadas las aldeas ian solajentre, más los cibdadanos nunca sean emparejados; que los euzinos habitantes en la ujlla de Teruel non son tenjdos de pechar." (216).

Como se puede ver, el tema de las aguas era ya muy importante en aquella sociedad tan primitiva, regulada por este fuero:

775. "De las cequjas et de los regajos.- Los aldeanos fagan lures cequias en todas las aldeas, por las quales corran los regajos et las aguas, aplegadajentre; que si fer non lo qujsiere alguno, pierda su quinnyón. El d'aquí adelant, qual que ora et en qual que manera las cequias fueren rotas, los sennyores de aquellas heredades que fueren en las uegas de las cequias refáganlas et emjenden. Et aquellos que las cequias non querrán refer et adobar, pierdan las heredades, et sean dadas a otros pobladores, los quales

(214) Obra citada, pág. 204.

(215) Obra citada, pág. 335.

(216) Obra citada, pág. 392.

las cequias destruydas refagan así como es dicho, et emjden et adoben" (217).

En cuanto a la situación en Santiago de Compostela, su tierra, según Antonio López Ferreiro (218), en los primeros tiempos a partir de la iniciación del culto del Apóstol, no existía una absoluta "ingenuidad" de los habitantes del suburbio compostelano, pues su posición social no difería de la de los libertos que quedaban con la obligación de pagar el censo de capitación y de continuar adscritos al cultivo de las mismas tierras que labraban durante la servidumbre; lo que hicieron los reyes fue transferir a la Iglesia compostelana el derecho de "patrocinum" que tenían sobre los hombres de aquellas comarcas, sin alterar su condición social, en virtud de la cual continuaban siendo, aunque libres e ingenuos, "juniores", "rustici", "villani" y pecheros; aunque en épocas tardías (Alfonso IX, San Fernando), el Concejo de Santiago, en su afán de incrementar el número de vecinos y de crear nuevos órdenes de ciudadanos, para ensanchar la escala social, admitía sin reparo a toda clase de "juniores" (219), con las consiguientes protestas del Arzobispo, que veía disminuídos los derechos de la Mitra, que provocaron varios Diplomas reales, entre ellos uno del año 1261, en los que se da la razón al Arzobispo; al igual que en otro de San Fernando, de 1232, se seguiría ese criterio.

(217) Obra citada, pág. 392.

(218) Obra citada, I, pág. 71.

(219) Ib., I, pág. 244.

En el fuero de Pontevedra (220) los "usos de fuera contra los de la villa", dulcifican la condición de los primeros:

"Et sy el vizino de la villa deuer alguna cosa a onbre de fuera de la villa e non ouier bienes, o el mayordomo non fallar personas que del sean, et su vizino non quier pagar a diuida, et sy aquel cuyo deuedor he querellar del a justicia, deuelo echar fuera de la villa, e encotar que ningun non lo tenga en casa. Et sy alguno lo acojer, deue de pechar la deuda a aquel cuyo deudor he."

En el fuero de Cáceres encontramos (221) un tratamiento minucioso:

31. *"Aldeanos.- Tod aldeano que casa ouier ena uilla sea uizino si la touier poblada con sos omes. Et det el medio diezmo ena collación o fuere uezino. Et det a los mayordomos recabdo por todos los derechos de Conceio. Et si ita non fecerit, non sea uizino."* Como se ve, se alcanza la vecindad mediante la tenencia de casa poblada en la villa.

La existencia de pleito con aldeanos tenía el siguiente tratamiento:

Litigios entre hombre de la villa y aldeano:

32. *"Qui ouier rancura (duelo) de aldeano.- Uezino de la uilla que rancura ouiere d'aldeano parete fiel con un uizino aldeano, ut ueniat ad*

(220) Ib., I, pág. 510.

(221) P. Lumbreras, obra citada, pág. XVI.

suam portam al tercero día de sol a sol, et si non uenerit pectet I moraueti suo contentori...Et si el aldeano uinier al plazo, et non uinier el de la uilla, pectet ei medio moraueti si fuer uizino; et si morador fuere, la meatad. Et si el de la uilla uinier, et el aldeano non, pectet ei I moraueti suo contentori" (222).

Pleitos entre aldeanos:

33. "Aldeano ad aldeano.- Aldeano que rancura ouier de aldeano, parele fiel con un uizino aldeano fiel de la uilla ad tercio die ad fenestram Sante Marie de sol a sol, delle casa con penos que le este a derecho, et si non uiniere, o casa con penos no le diere, pectet suo contentori I morauet...Et a qui fiel mostraren et a plazo non uiniere, el o su mugier et su mugier non ouiere, su celerizo o su omme, pecter I moraueti a ssuo contentori." (223).

34. "Aldeano que parar fiel ad aldeano.- Et si un aldeano a otro enna uilla parare fiel, otro día uayan ambos a la finiestra de Sancta María, et faganse derecho assí como es super scripto." (224).

35. Mugier aldeana.- Mugier aldeana uenga a fiel, si non pectet I morabeti suo contentor." (225) .

(222) Obra citada, pág. XVII.

(223) Obra citada, pág. XVII.

(224) Obra citada, pág. XVII.

(225) Obra citada, pág. XVII.

También las causas penales estaban reguladas:

308. "*Las aldeas.- Todas las aldeas de Caceres a la tierra onde ouieren ermandades, et por hy troxieren ganado o robadura, sagudenlo, et si non, ellos lo pectent. Et enna uilla, los iurados los rayguen, et si los non raygaren, sit illos in periurio...*" (226).

309. "*Qui fiel parar ad aldeano.- Qui fiel parare ad aldeano, meta la uerdad que querela a del et diga su querela. Et si la uerdad non diere, no ly uenga a fiel. Et si prendare, tomely los penos doblados quereloso. Et si la uerdad diere, et a fiel non uiniere, pectet I morabeti a suo contentori, si lo firmare con el fiel.*" (227).

310. "*De labor de aldeano.- Toda lauor de aldeano atal fuero aya de pecho como uizino de la uilla.*" (228).

Como dice Pedro Lumbreras (229), el último peldaño de la escala judicial son los Jurados de aldea, dependientes de villas y ciudades, a los que estaban sometidos los asuntos de mínima entidad (V. parágrafo 306).

En el fuero de Madrid leemos:

LXXXIX "Qui cafa habuerit in uilla.- Todo homine qui cafa habuerit

(226) Obra citada, pág. LXXVI.

(227) Obra citada, pág. LXXVII.

(228) Obra citada, pág. LXXVII.

(229) Obra citada, pág. 284.

in uilla et non moraret ibi lai duai partei del anno, pectet II pectaf, una per aldeano, et otra con los de uilla." (230).

En la Biblioteca del Arsenal de París existe el denominado "Manuscrito Español 8331", que según Jean Roudil es un fuero-tipo o modelo hecho a imitación de los fueros de la familia Cuenca-Teruel, y susceptible de ser adoptado por aquellas ciudades reconquistadas, que andaban en busca de algún cuaderno foral por el cual pudieran regirse (231). En él se lee:

34. *"Este es el capítulo de los pobladores que uienen menos a las aldeas de Baeza.- Fagan casas do el conceio del logar les diere, e si los non los dieren, uiaa el juez e los alcaldes o denles do fagan casas cerca de las otras en logar comunal; e si d'estos pobladores alguno su casa uendiere e y quisiere otra facer, no lo consientan facer si non en cimientto conprado, fueras si la uendiere por catiuazon o por fiadura mala"*. Como se ve, coincide con la fórmula de los fueros de Cuenca, Ubeda y Baeza (232).

750. *"E mando que tod omne de las aldeas que fagan acequias por o corran las aguas o los rios; y el que no lo quisiere facer, pierda el quinon. E desi que las acequias fueren fechas e departidas, los senores de las heredades*

(230) *El Fuero de Madrid y los Derechos locales castellanos*, por G. Sánchez, Madrid, 1932, pág. 49.

(231) J. Roudil, *"El Manuscrito Español, 8331"*, de la Biblioteca del Arsenal de París, en *"Vox Románica"*, 22 (1963-64), pág. 127-174 y 219-380.

(232) *Id.*, pág. 140.

adbenlas e alinpen las sienpre; e los que no las quisieren adobar, pierdan las heredades e los conceios de las aldeas denlas a otros pobladores que las adoben." Se corresponde con el fuero de Teruel (233).

770. *"E auemos por fuero que los aldeanos traian a sus colationes a la uila sennos Kafyzes del iugo de buey e d'un buey medio Kafyz y el qui mas bueys ouere assi traia segunt esta razón. E de las bestias otrosí. E los de la uila que en las aldeas labraren de cada iugo de bueyes de bestia den I fanega de pan del pan delizmo que an a leuar a la uila a sus colationes, denlla en aldea. E si non ouiere trigo, cunplata de la meior ciuera que ouiere"* (234).

En el fuero de Guadalajara (1219) (235), se dice:

94. *"Aldeano que acoture a otro, el que no viniere al coto, peche medio maravedí al quereloso e medio al juez."*

En el fuero de Alfambra (236), en la provincia de Teruel (siglo XIII) tras describir -como es frecuente- el término donde se aplicaba el mismo (epígrafe 1), con diferentes "aldeas" mencionadas expresamente, se dice:

82. *"A quales aldeas es otorgado el fuero.- Todos los fueros desti*

(233) Ib., pág. 347.

(234) Ib., pág. 352.

(235) Editado por H. Keniston, Princeton-París, 1924, pag. 15.

(236) Publicado por M. Albareda y Herrera, 1925, pág. 14 y 29.

padrón sean otorgados a la uilla de Alfambra et a sus aldeas ad aquellas que nos los frayles possedimos agora de present zo es a saber el aldea de Orrios con sus terminos, e Mirauet con sus terminos, e Altamas con sus términos, Escucha, Siptuene con sus términos."

En el fuero de Molina de Aragón (237), se expresa:

"Aldeano que poblare en la villa non seya escusado por casa que tengan en pennos ni logada, mas aya su propia casa et primero seya en la villa morador con fijos et con mugier suya por vii anno y seya escusado así como los otros vezinos de Molina." Es la misma solución que la del fuero de Estella, citado más arriba.

En el fuero de Estella (238), aunque no se hace referencia a los aldeanos, se contiene una regla, la 71, que parece aplicable a ellos:

"De omnes de foras.- Et toz los omnes de foras, de la hora de nona en sus del dimercles tro al dijós a la nueit, de tot lo blat, quant que unquas a l'arova mesuraren, emenda deven dar als peons de l'alcaier del castel."

En los fueros de Sepúlveda (239), se aprecia que el privilegio que

(237) Publicado por M. Sancho Izquierdo, Madrid 1916, pág. 64.

(238) Obra citada de J. M^a. Lacarra y A. Martín Duque, pág. 56.

(239) Edición Crítica y Apéndice documental, por E. Sáez; Estudio histórico-jurídico, por Rafael Gibert; Estudio lingüístico y vocabulario, por M. Alvar; y Los Términos Antiguos de Sepúlveda, por A. G. Ruiz-Zorrilla, págs. 219, 227 y 295, Segovia, 1983.

da Enrique II en Burgos en 1367, se comprende sólo a *"todos los vecinos y moradores de la dicha villa, que moraren de los muros adentro, así a los que agora y son como a los que serán de aquí adelante..."*, es decir, no se incluye a los aldeanos; y, a su vez, en 1373, la reina doña Juana, señora de Sepúlveda, "manda a los alcaldes y alguacil de dicha villa que apremien a los vecinos de la misma, que la abandonaron y se marcharon a las aldeas para no contribuir a los gastos del pleito sostenido con los arrendadores reales, a fin de que paguen lo que correspondiere en dichos gastos". Y de nuevo en 1387, "Juan I exime del pago de moneda, en el año de la fecha del documento y en adelante, a los vecinos y moradores de Sepúlveda que vivieren de los muros adentro". Y, por fin, en 1416, Juan II "manda a los arrendatarios mayores de las dos monedas foreras del obispado de Segovia, del año 1415, que no exijan el pago de las mismas a los vecinos y moradores de Sepúlveda, que viviesen de los muros adentro, por cuanto están exentos de éste y otros tributos."

En el fuero de Sepúlveda (240), se aborda la cuestión: *"De omme de la villa que querella oviere del de la Aldea"*, regulando el procedimiento, con cauciones, y fijación de plazos.

(240) Publicado por el Licenciado D. Juan de la Reguera Valdelomar, Madrid 1798, pág. 209, en el Extracto de las Leyes del Fuero Viejo de Castilla. Con el primitivo Fuero de León, Asturias y Galicia. Se añaden el antiguo Fuero de Sepúlveda y los concedidos por San Fernando a Córdoba y Sevilla.

Según el fuero de Córdoba (241), los Caballeros que fueren llamados a las armas por el Rey, *"si dexare a su muger sola, sea honrada el honor de su marido, y así también los que dentro de la Ciudad, o fuera en las villas o solares suyos moraren."*

En el fuero de Béjar (242), se regulan aspectos procesales civiles y penales:

49. *"De los aldeanos que an baraia sobre hereditat.- Si los contenedores fueren aldeanos, aplaze el quereloso su contendor a tercer día a la puerta del júdez, e el iudez déles por iudicio que uayan a desmoionar, poniéndoles plazo assi comes dicho de suso."*

301. *"De desondra de omne aldeano.- Por toda desondra de cuerpo de aldeano que en aldea fuer hecha, hi connombre los iurados, fuera homezilio solo. E esso connobrados uengan al uirnes al corral de los alcaldes a iurar. Qui no uinier como la Touier iudgado caia del plazo."*

El párrafo 660 es muy importante por su carácter igualitario:

"Quáles son vezinos.- Vezinos de la villa llamamos todos aquales también de villa, como daldeas sinon escriptos en padron, atemplantes, medieron, cualleros, clerigos racioneros. Estos tales firmen e iuren vezino e contra qual se quiere otro omne. Morador firme contra morador."

(241) Obra citada en la nota anterior.

(242) Publicado por J. Gutiérrez Cuadrado, Salamanca, 1975, págs. 50-83.

En el fuero de Coria (243) leemos:

30. *"De los aldeanos que ovieren casa en villa.- Todo aldeano que casa ovier en la villa, sea vezino si la tovier poblada con su ome. E dé la meatad del diezmo en la collacion do fuer escripto, e dé al terçero recado por todas sus puestas. E si non lo hizier, non sea vezino."* Igual que en Molina de Aragón y Estella.

A continuación, transcribimos apartados de dicho fuero, que regula con detalle aspectos que sirven para demostrar que había todo un "status" de aldeano, más o menos complejo:

32. *"Aldeano que ovier querella de otro.- Aldeano que querella oviere de aldeano, parel fiel con un vezino aldeano, e venga a tercer día a la finiestra de Santa María de sol a sol, e del casa con pennos así como es derecho. E si non vintier, o casa con pennos no dier, peche I maravedi. E si dixier: "no fue fiel", jure con un vezino que no fue fiel, e reçiba sus pennos cabales: E qui fiel demostrar, o plazo e non vinier el o su muger, o, si non ovier mugier, venga con su çellerizo, e si non vinier ningun destos, peche I marevedi al querelloso."*

33. *"Aldeanos que paran fiel.- Si algún aldeano parar fiel en la villa, pora otro día vengan anbos a la finiestra de Santa María e paguen su derecho, así como sobredicho es."*

34. *"De las mugieres aldeanas.- Muger aldeana venga a fiel; si no,*

(243) Estudio histórico-jurídico, por J. Maldonado y Fernández del Torco, Madrid 1949, págs. 21-22-34-75-79-89.

peche un maravedí al querrelloso."

85.- *"Qui labrar exido de aldea.- Qui labrar exido de aldea, peche X maravedís, e dexe el exido; los medios al conçejo e los medios a los querellosos."*

252. *"De los aldeanos que labraren con bues.- Todos los aldeanos que labraren con bues, den senas ochavas de evada a los yunteros, e el mediero media. E el anno que no senbraren no den nada a los yunteros."*

272. *"Aldea que forçia fezieren.- Toa aldea en que forçia fiezieren a alcaldes o a bozeros, e apellido dieren a otros alcaldes, e non les quisieren ayudar, pechen C maravedis a los alcaldes que reçibieron forçia. E si algunos o algun ome forçia fizier en aldea do posare elle ho su criazon, e apellido dieren, e sus vezinos, ho de las otras aldeas que lo supieren, non les ayudaren pechen C maravedis, los medios al aldea e los otros medios a los alcaldes e a los VI."*

315. *"Toda lavor de aldeano. Toda lavor de aldeano tal fuero aya de pechar como de vezino de villa."*

El contenido del fuero de Salamanca (244) confirma la transcendencia que se les daba a la situación del aldeano, a las circunstancias en que podía encontrarse, y a la existencia de toda una pequeña problemática en esta cuestión, que no puede ser desconocida.

CCLXXXVII. *"Qui prenda bestia d'aldeano.- Nadi non prinde bestia*

(244) Con Notas, Apéndice y un Discurso Preliminar, por J. Sánchez Ruano, Salamanca 1870, págs. 82, 89, 90, 113, 125, 126, 127, 95 y 102.

d'aldeano si non por su cabo, o por cosa de conçeio; é qui lo prender peche II maravedís e dobre la bestia."

CCCIX.- "Los alcaldes que non coman en las aldeas.- Todos los alcaldes é las iustias non coman en las aldeas, nin el iuez."

CCCXI.- "De cómo pechen las colaciones.- Del pecho q'hechan á las colaciones pechen fiteras dos cada sesmo; et el sesmo que los suios non dier, todos pechen, é estos por I anno; et uengun escusado cada colocación non aia fueras de las ualesterios; é los alcaldes q'entreren mudienlos cada anno, si non caiales en periuro."

CCCXII. "De la maiordomía.- De la maiordomía serranos, castellanos, moçaraves, portugueses, francos, toreses, bregañianos."

CCCXIII. Del Iulgado de Salamanca.- Este es el iudalgo de Salamanca: sant simón, sancta maria la maior, sant iuste, sant barolomé, sant adrian, sant gerués, sancto tomé, sant oihan, sant andres, sant pedro, sant çebrian, sant facunde, sant roman, sancta cruz, sant nicolás, sant bonal, sant iulian, sant floriense, sant esteuan, sancta olaia, sant seuastian, sant yago, sant isidro, sant martin, sant benito, sant mateos, sant saluador, santi gil, sant polo, sant pelaio, sant crisoual, sancto domingo, sancta maria la nueua."

Pone de relieve J. Sánchez Ruano que el fuero de Salamanca no es ("haec est carta quam fecerunt boni homines de Salamanca") una concesión graciosa de los Reyes, sino obra de los representantes populares de la autoridad, que ejercieron funciones legislativas, aunque -siempre según el mismo autor- la mayor parte de estas leyes tuvieron su



origen en privilegios dados, o comprados, de los que pudieran citarse ejemplos; así como que este fuero tuvo tanto mayor vigor y fuerza cuanto que fue sancionado por la tolerancia de los monarcas que lo respetaron y aprobaron, directa o indirectamente; esta particularidad no es única, y se da, por ejemplo, en el fuero de Medinaceli.

Desde otro punto de vista, sigue diciendo J. Sánchez Ruano, no es común observar las diferencias que en otros existen, entre los naturales de la villa, o ciudades, y los de alfoz, lo cual es evidente señal de progreso, y de que todas las profesiones, artes e industrias merecían ya por entonces igual consideración. Las familias llamadas "de criación", cuyo estado era humillante y sevil, de que se trata en otras cartas-pueblas, sobre todo de las procedentes de abadengo, y de las que se habla extensamente en el fuero de León, no parece fueran conocidas en Salamanca.

En cuanto al término en que ejercía su autoridad el municipio de Salamanca, era grandísimo, pues en tiempo de los Reyes Católicos, cuando ya había perdido todo lo que se dio a Ledesma, Ciudad Rodrigo, Alba, Salvatierra de Tormes, Miranda del Castañar, etc., y sin contar los pueblos del cabildo y los de las órdenes militares, aún tenía jurisdicción sobre más de 200 lugares y por razón de subdelegación de rentas sobre 1.300, de los cuales 70 eran villas.

Quando el fuero habla de "cómo sea todo el pueblo uno", aparte de referirse a la extensión y atribuciones del concejo (según Martínez Marina), ha de interpretarse -siguiendo a J. Sánchez Ruano- como prueba de la existencia de bandos o parcialidades entre los diversos barrios que ocupaban los repobladores ya en el último tercio del siglo XII, lo que no es de extrañar si se tienen en cuenta las turbulencias producidas a consecuencia del matrimonio de doña Urraca con Alfonso I el Batallador, durante la minoridad de Alfonso VII, de las que Salamanca fue teatro muchas veces.

Según el autor últimamente citado, las parroquias antiguas (edificadas en territorio que poblaron los mozárabes) eran: S. Juan el Blanco, San Andrés, San Cervasio, San Gil, San Esteban de allende el Puente, San Nicolás de Bari, Santa Cruz, Santiago, la Santísima Trinidad, y San Lorenzo; las fundadas en el territorio poblado por los borgoñones: San Cebrian, San Sebastián, San Bartolomé el Viejo, y la Catedral Vieja; las fundadas en el territorio que poblaron los castellanos: San Martín, San Julián y Santa Basilisa, Santa Eulalia, San Boal, Santa María de los Caballeros, San Juan Bautista, Santo Tomás Apostol, Santa María Magdalena, San Marcos, San Cristóbal, San Mateo Apostol, Sancti-Espíritus y San Isidoro; las fundadas en el territorio que poblaron los bregancianos: San Adrián, Santos Justo y Pastor, San Román y San Ildefonso; las fundadas en el territorio poblado por los portugueses: San Esteban de los Godínez, San Pablo (antes San Polo), y Santo Tomás

Cantuariense; las fundadas en el territorio poblado por los Serranos (montañeses de Asturias y León): San Salvador, San Juan Evangelista o del Alcazar; San Pelayo, San Millán, San Bartolomé de los Apóstoles y San Pedro; y las fundadas en el territorio poblado por los Gallegos: San Benito, San Blas, Santos Simón y Judas Tadeo, Santo Domingo de Silos.

En el fuero se lee:

CCCXXVI. *"De quien se hechar en otra colación.- Et tod'omne que fuer vecino d'una colación é á su pasamiento con su lengua se mandar, hechar en otra colación, los elerigos onde fuer veçino lieven la meatade de l'ofrenda quesse dia levaren con él e de quanto mandare por missas cantar."*

CCCLIV. *"Del iulgado de la senna.- Esto es el escripto que fizo el conçeio de Salamanca como deve andar el iulgado por naturas uno tras otro: el iuez que fuer dé senna nueva cad'anno, é se senna nueva y ovier dé tanto quanto ualdrá é la senna al conçeio; é si auenier hueste de rei cabdal aia XII escusados el iuez."*

CCCLV. *"De possar con la senna.- Uezino de Salamanca q'en fonsado fuer e con la senna non possar, menos ualiente sea por ello."*

CCCLVI. *"Com' ande el iulgado.- Et assi andar, el iulgado: serranos, castellanos, mozarabes, francos, portugueses, bregantianos, toreses."*

Es decir, que de la lectura del fuero de Salamanca se desprende, cómo de un conglomerado de orígenes o naciones se hace una unidad, regida por la misma Ley, que conserva las antiguas divisiones, más que

a nada a efectos puramente administrativos, evolucionando, en un equilibrio verdaderamente notable.

3. Visión del "hombre extraño" en los fueros Municipales

En su simplicidad, el "hombre extraño", es decir, el que no forma parte del núcleo político, la mayor parte de las veces de dimensiones territoriales pequeñísimas, es el que se identificaría con el concepto actual del "extranjero". Por ello, dentro de aquella sociedad fragmentada, el tratamiento que recibía es decisivo para comprender el problema que este estudio trata de analizar, de manera que al extraño que viene a repoblar, se le dan toda clase de facilidades, y se le perdona su pasado, por delictivo que sea, y constituido ya el núcleo político -la villa-, al forastero se le trata peor que al vecino.

En el fuero de Alcaraz (245), Libro I, 3, leemos: "*Del estranno que al de la villa firiere.*"

"*Et si por aventura el estranno se defendiendo al vecino firiere o matare, peche la calonna que fiziere a fuero de Alcaraz. Et si el vecino, estos derechos defendiendo, al estranno firiere o matare, non peche calonna por*

(245) *Les Fueros de Alcaraz y Alarcón*, edición synoptique par J. Roudil, Professer a l'Université d'Amsterdam, París, 1968, pág. 84.

ende (246).

En el fuero de Alarcón encontramos una redacción semejante.

El fuero de Alcaraz, Libro I, 14, dice:

"Del estranno que en término de Alcaraz fiziere omecillo.

"Et todos los omnes de otra villa que en Alcaraz fizieren omecillo, mueran por ello e no les vala Iglesia, ni palacio, ni monasterio, maguer que el muerto seya enemigo ante que Alcaraz fuera presa o después."

En el fuero de Alarcón era castigado: "sea despennado".

A su vez se ocupa el fuero de Alarcón (Libro I, 13) (247):

"Del estranno que en todo término d'Alarcón fiziere o matare ome".

Et tod omne estranno que en todo término d'Alarcón fisiere o matare omne neneguna o con bando viniere, e fuere hoy herido o muerto, non peche calonna el matador. Et si por aventura el estranno, que non fuere del término, matare alguno, peche la calonna que fiziere duplicada, el fuero de Alarcón, et el danno otro tal. Si por aventura otros algunos de sus vecinos fueren delante et no ayudaren a su vecino, cada uno de los que hy estubiesen, peche X moravedís al juez, e a los alcaldes e al querelloso."

En el fuero de Alcaraz el tratamiento de los mercaderes era el

(246) Id., pág. 89.

(247) Ib., pág. 20.

siguiente: (Libro I, 27) (248):

"D'aquel que con mercaduras viniere a la cibdat."

"Demás mando que todo omne que con mercadura viniere a Alcaraz, si quier sea cristiano, si quier indio, o moro, ninguno no lo preyudase, peche al conceio C. moravedís e el querelloso la preyndra doblada."

La redacción del fuero de Alarcón es muy parecida.

En estos dos fueros, aparte del sentimiento de vecindad, profundo, que en ellos aparece, también se trasluce el de "colación" (Libro IV, 107) (249):

"Mando a nos que ninguna collación non responda por vecino que a ella fuere dado, si el que non fuere escripto en el padrón."

En el fuero de Guadalajara (250), encontramos:

"Tod vecino que a ome albarran matare, non peche sy no el omezillo viejo, e non exea enemigo."

Y en la rúbrica 87 (251):

(248) Ib., pág. 98.

(249) Ib., pág. 254.

(250) *Fuero de Guadalajara (1219)*, edited by H. Kenston; Princeton University Press, U.S.A.; les Presses Universitaires, París, 1924, pág. 10.

(251) Id., pág. 14.

"A tod omne que demandare fiadores delant alcaldes e jurados que viva en paz e que non sea trabieso, délos e sy no los diere, vaya por albarran, e qui lo matare no ixca enemigo ni peche nada sino le omecillo viejo: treinta y dos maravedís."

El fuero de Molina de Aragón (252) (capítulo XXVI) dice:

"Todo estranno pueda traer pan sin calonna."

En los "fueros de la Novenera" (253) se sienta en orden a la prueba testifical:

"De clamo de plaga de ombre forano."

"Nuil ombre de Lárraga que clamo meta que ombre de Lerin lo ha plagado o ombre forano ninguno, ha de dar testigos, uno de Lerin et el otro de Lárraga, et con tanto pleyte l'otro la calonia."

Según el fuero de Estella (254) (C,13) se exigía:

"Nuil navarro preste de fora non puyda poblar en l'Estella sin la voluntad del Rey, et de totz los vecins d'Estella."

(252) *El Fuero de Molina de Aragón*, por M. Sancho Izquierdo, Madrid, 1916, pág. 129.

(253) *Los Fueros de la Novenera*, publicados por G. Tilander, Leges Hispanicae Medii Aevi, Upsala, 1951, pág. 79.

(254) *Fueros de Navarra. I. Fueros derivados de Jaca (Estella-San Sebastián)*, por J. M^a Lacarra. Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1936, pág. 159.

En D, 65, (255), se prohibe llevar una caja de dinero:

"Omnes de fora de la vila non deuren portar nin per estuiar; e si lo porta, lo nin perdra. E aquel en cui casa estara LX sols de calonia; e la meitat sera del consell de la villa, l'altra meitat serà del seynor de la vila."

Y en D, 7, 1, (256) se regulan los movimientos:

"Et toz los omes de foras, de la hora nona en sus deidi troa'l dicos a la nueit, de tot lo blat quant que cinguas a la vona mensurada deciem dar als peons del calcaiet del castel."

El párrafo D, 58, (257) también se ocupa de regular la prueba testifical:

"De indici".

"De indici si es entre francs e navarro de tot plait que aurán con los frans, con testimoniis lo deben prouar l'un al'altre, per un navarr e un franc."

"E lo franci non deu entre de vilas de foras mas de ciudat o de de ré. E lo navarr den estre de Siçagorvía en ça, o del punt d'Arqueta en ça, o de Pampilona en ça, o del pont de San Martin en ça; et den auer son foc e sa table."

"Mais si testimoniis no a l'un l'altre, de tot plait deliures con una iura."

(255) Id., pág. 221.

(256) Ib., pág. 223.

(257) Ib., pág. 223.

En el fuero de Béjar (258), vemos el distinto tratamiento que se daba al homicidio cometido por el forastero, y la situación recíproca, cuando él hubiese cometido homicidio:

(16) *"Del omne de fueras que matar omne en Beiar."*

"Todo omne de otra villa que omezillo fiziere en Beiar sea despennado o enforcado, nil vala eglefia, ni palacio, nin monasterio, maguer que el muerto fueffe enemigo ante que Beiar se poblasse o después."

(18) *"Del de fueras de vila que matare omne en aldea o viniere en bando."*

"Todo omne de fueras que firiere o matare omnes en aldeas de Baiar, o en término, o con bando viniere, et i fuese ferido o muerto, non aia por ende calonna ninguna."

El fuero de Jaca (259) contempla la obligación de cuidar también de los hombres extraños:

1. *"Co debuen aindar al sennor rey."*

"Estafeit es que cada un per si et totz ensemble aindem al seynnor rey et a ses homes, que tienen ses lugares a defendre et a guardar les camins, et les estranges homes, et les privatzs..."

(258) *Fuero castellano de Bejar (siglo XIII)*, Preliminar, transcripción y notas por A. Martín Lázaro, Madrid, 1916, pág. 11.

(259) *El Fuero de Jaca* (última redacción), publicado por J. M^a Ramos y Loscertales. Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho, 1927, pág. 1.

En 119 (260) se fija la pena por la muerte del hombre extraño:

"De qui mata estrange".

"Qui mata homne estrange ço es albarran, paquia al rey cincent stolz de calonnia. Mientras que mata al claverro de rey debía pagar cient stoly de "calonia".

En el párrafo 97 (261) se viene a poner una tasa por abandonar la villa, en la que se ha estado viviendo un año y un día:

"De mudar estage".

"For antic et laudat es que si un homne se muda de una vila ad altra per estage, no estengut de pagar res en taylla, nin en questa de rey, nin daltre omne, si non a estat an et día en vila, pero no le den nin pot escusar clamar en host o en caualgada, quant ses vecius y vanque no y vaya."

Y en el 243 (262) se distingue la prenda, según se constituya en la ciudad o en las villas:

"De homne foran com den peynorar."

"Homne foran sy peynora alguna bestia en ciutat non la en den trayre; mas si la peynora en las vills, et no a casa en que meta aquella peynora, lo sey unor de la nila le diú en que meta aquella peynnora."

(260) Id., pág. 51.

(261) Ib., pág. 43.

(262) Ib., pág. 94.

El fuero de Viguera y Val de Funes (263) recoge un claro caso de aplicación de la ley territorial:

49. *"Qui mata a home de otra villa."*

"Et qui mata a home de otra villa, peche el omicidio segunt su fuero."

También se tienen en cuenta normas sobre constitución de las prendas:

102. *"Qui prendra en otra villa."*

"Otrosi, todo omne estraynno quj prendare en otra villa, e non fallare do mater el peynor, o no'l quisieren dar lugar, pueda el peynro sacar de la villa, con testimonyo dando fiador que tome la bestia a su seynyor, quando le cumpliera de drecho."

103. *"Qui prendare al seynnor de la villa."*

"Otrosi, todo omne forano que prendare seynnor d'alguna villa o omne vecino de su villa, e non fiziere clamo ante la seynnora o d'aquel que tobiese su lugar, pedre a la seynnora LX. ss de calonja et el quarto al quereylloso."

Encontramos otra aplicación de la ley territorial en:

202. *"Pleytos de albarranos."*

"E los omnes altarranos que ouieren entre sí pleito, déles el juyzio el juez como a sus vezinos faría, et el seynor de la villa debe tomar d'ellos su calonja así como d'aquellos que son moradores en la villa."

(263) *Fuero de Viguera y Val de Funes*, edición crítica por J. M^a Ramos y Loscertales, Universidad de Salamanca, 1956.

Aparece un distinto tratamiento de la donación al extraño, según sea de cosa inmueble o mueble:

325. *"De villano que non puede dar a estraynno."*

"Ningun omne villano non puede dar a estraynno, parient nj a otro hombre nj por su alma donadio de hereditat por siempre. Et de mueble pude dar quanto quisiere."

Incluso se reglamenta el paso de ganados, en forma considerada:

438. *"Ganado estraynno si passare por el termino."*

"Et si ganado estraynno passare por el termynno de la villa, por demandar su vida, non debe dar peage al seynnor, e puede fincar en el termino por una noche sin claynno del fruto e de la defessa. Et los vecinos deben demostrar al ganado estraynno o a sus bayles ciertos benrages. Et si el ganado quisier fincar el mont puede su vida haber y del mes de septiembre troa de la defesa dando al seynnor su erbaje: de cada gvey una oveja aynual et otra mayor."

El Código de las Costumbres escritas de Tortosa (texto castellano) (264) se ocupa de aspectos relacionados con el hecho de ganar vecindad y del matrimonio del extraño:

Libro I, Rúbrica IV, Costumbre 13ª:

"Todo extranjero, cualesquiera que sea su país, que quiera ser vecino

(264) Obra comenzada por R. Foquet, continuada por J. Foquet Marsal, Tortosa, 1910, pág. 63.

de Tortosa, puede serlo sin servicio y donación, que no está tenido a prestar a hombre alguno, señor u otro, y sin toda la contradicción que nadie puede hacerle. En tal forma, sin embargo, que dé buenas fianzas o prendas, de no hacer esto en fraude de su señoría, por excusar pago de lezdas u otros derechos dominicales. Y debe poner un dinero en el libro sacramental cuando jurar la vecindat, el cual pertenece a los alguaciles de la Curia. Y después que haya prestado juramento, si desea que se escriba su nombre en el libro de la Curia, debe dar un dinero al escribano de ella, y éste debe escribirle en él con los otros vecinos extranjeros que han venido ya, o que son vecinos."

"Dicho extranjero debe prestar juramento en la Curia, a día y hora de Curia, públicamente, en presencia y por decreto de todos los que en la Curia estuviesen. Así debe decir el juez..."Amigo, en cosa alguna que vos hayáis hecho o dicho hasta este día, o que os haya hecho hombre a vos, la Señoría y la Ciudad no os ayudarán, pero de aquí en adelante os ayudarán y valdrán así como los otros vecinos..." (A continuación prestaba juramento de rodillas): "Vos, amigo, ¿juráis vuestra mayor estancia en Tortosa, guardando fidelidad a la Señoría y a los ciudadanos de Tortosa?...E incontinenti, tiene y goze...de todas las franquicias y libertades de los otros ciudadanos de Tortosa, sin impedimento ni contradicción de hombre alguno."

"Todo extranjero, además, venido a Tortosa, que toma aquí mujer hija de ciudadano o habitador, o ciudadan de Tortosa o de su términos, y casado ya, se establece y reide en ella o en sus términos, es habido y tenido por vecino de la misma, como sus otros ciudadanos o habitantes, sin juramento que no necesita tener, y tiene y puede usar de todas las franquicias de la

ciudad y libertades de los ciudadanos de Tortosa."

En el Libro I, Rúbrica IV (265) se define a los ciudadanos y los habitantes:

"Costumbre 14ª. Ciudadano es el nacido en Tortosa o en sus términos; otroí es ciudadano el que haya estado o habitado en la ciudad o en sus términos, por espacio de diez o más años.

"Y estas tres maneras de ciudadanos que no están tenidos al juramento de vecindad, que deben prestar los extranjeros que deseen ser vecinos de Tortosa."

"Costumbre 15ª. Habitador es aquél, que con intención y voluntad, se viene a vivir en Tortosa o en sus términos, con toda su casa o familia, y hace aquí su mayor estancia o residencia."

Aspectos de interés se encuentran en el Libro de los fueros de Castilla (266):

73. *"Título de judío que demanda por carta a cristiano de fuera de la villa."*

"Esto es por fuero: que judío que demanda a cristiano, e el cristiano es de fuera de la villa, por carta de deudo de su padre de aquél a quien demanda la deuda, et dise aquél...que no es hijo de aquel cristiano...et dise el judío ante el alcalde que lo prouará con judío y con cristiano de aquellos

(265) Id., pág. 65.

(266) Publicado por G. Sánchez, Barcelona, 1924, pág. 38.

testigos que tiene en la carta, que es hijo de aquel deudor suyo, e demanda el alcalde dar pesquisidores, e prueba el judío la deuda de la carta, mas non prueba que aquel a quien demanda que era hijo de aquél su deudor, et demanda el cristiano al alcalde la carta, e demanda el cristiano al alcalde la carta y el alcalde y el merino demandan.

Demanda el judío sesenta sueldos: el alcalde deue dar la carta al judío con que demanda su deuda e non deue más demandar el judío a aquéllos a quienes demandó que eran hijos de aquel su deudor que era muerto, pues non los pudo prouar, asy commo se alabó delant el alcalde. Et el meryno non deue auer sesenta sueldos por tal razón.

Obligación de administrar justicia a los extraños (267):

89. *"Título de omne de fuera de la villa, que a querella de omne de la villa,*

"Esto es por fuero: que sy omne de fuera de la villa a querella de omne de la villa deue lo mostrar al juez. Et sy el juez et el alcalde non quisieren fazer derecho, sy prendare, pechará las engueras. Et el alcalde sy non quisier non inbiara por ninguno que venga fazer derecho, mas los que vinieren ante el deue los él julgar. Mas el alcalde deue envíar decir al meryno que faga derecho a los omes".

Pago de una tasa por guardar pan y vino los de fuera, pero no los de las aldeas (268):

135 *"Título de la costumbre que an los de Bilforado con los que son de fuera, que ençierran en la villa pan e vino.*

"Esto es costumbre en Bilforado: que los del conçeio deuen auer de los omes de fuera de la villa que no son vecinos, et encierran pan et vino en la villa de Bilforado, cada un anno, de cada cuba de vino deue dar un maravedí, et de cada arca de pan, una libra, de qual pan fuere. Et esto han de dar condeseio. Mas los de las aldeas que son vecinos deuen encerrar en la villa pan e vino, et non deuen dar condeseio ninguno."

Tramitación de la demanda del hombre de fuera contra el hombre de la villa (269):

160 *"Título de omne de fuera que demanda deuda a omne de villa.*

"Esto es por fuero que solían en Burgos juzgar a ome que demanda una deuda a omnes de la villa: que sy el deudor y era el día, que físeren luego derecho; et sy eran dantes, que pechasen o se salvassen con sus plasos. Agora juzgar que sy el de fuera se ha de salvar a omne de la villa, maguer sea dante la demanda, que se salve luego al día."

Pago de las costas al hombre de fuera (270):

(268) Ib., pág. 70

(269) Ib., pág. 85.

(270) Ib., pág. 88.

164 "Título de omne de villa que tiene razon de omne de fuera de la villa."

"Esto es por fuero: que si omne de la villa tiene razón de omne de fuera contra el vecino de la villa, deue pechar sesenta sueldos, sy se que reclanne al meryno disiéndoselo ante el alcalde el vecino que non tenga razón de omne de fuera contra él, que es vecino de la villa."

En el párrafo 282 se contienen normas procesales para los pleitos entre los hombres de la villa y los de fuera, según versen sobre cosas muebles o inmuebles:

"Título de omne de fuera de villa que demanda al de la villa" (271).

"Esto es por fuero: que sy un omne de fuera de villa demanda a vesino de la villa, e la demanda es mueble, deuel prouar con dos vecinos derechos de toda la villa; et de hereditat, con çinco vecinos derechos. Et sy omne de fuera de la villa viene a poblar a la villa, e entra en la villa anno e día, e después viene otro de fuera de la villa e demanda a aquel omne quel deue maravedis u otra deuda, et quel prouará con çinco omnes de fuera de la villa, e non lo querellando ante, deuel prouar con sus vecinos, et non con los de fuera. Et sy a un omne de la villa demandare omne de fuera deuda que fizo e que lo prouara allí do fizo la deuda, non lo deue provar con los de afuera, mas deue prouar con los vecinos, sy non es mercadero.. Et sy fue en hueste o en romerya, et por fuera de Castilla prouará allí do fuera la derecha fecha con los de aquel logar.

El fuero de Avilés se ocupa del régimen de construcción de una casa por el extraño (272):

202. *"Si omne de fora demandar Kasa en la villa, venga a la villa dar et prender directo por foro de illa villa; et det fidiador que si caer de iuso, doble illa kasa en altero tal lugar, et pectet LX sólidos al Rei."*

(Redacción semejante en el fuero de Oviedo).

En el fuero de Brihuega se contiene una norma de carácter personal en la aplicación de la ley (273):

"Qui matare omne de fuera de villa.

"Tot omne de brinega, que omne matare de fuera de villa, peche tal calonna qual pecharle aquel conceio dont fuesse el muerto: a becino de brinega, et si el muerto que fuere de fuera de brinega ouiere parientes en briuega: non sean sus enemigos, et si alguno y ouiere que su enemigo quisiere seer: fágalo el conceio saludar, et si saludar no lo quisiere: pedre ccc. soldos, a aquel que non quiera saludar: et salude lo.

"Qui non fuere bezino o morador en briuega.

"Tod omne que non sea bezino ni morador en briuega, et fuere de otra tierra, et alla matare o ficiere cosa alguna por que enemigo deniere exir, de

(272) Según el Discurso pronunciado por A. Fernández-Guerra y Orbe, en la Real Academia Española (año 1865), en el que figura su correspondencia con el Fuero de Oviedo (pág. 116).

(273) Publicado por J. Catalina García, Madrid, 1887, pág. .

los parientes daquel en qui viniere la mala fecha: et si aquel por quien salliere enemigo ouiere parientes en briuega: el conceio nol reciba en vecindat, después de la mala fecha."

Aparece también en el fuero de Jaca (274) el tema de la colocación de las cosas empeñadas:

19. "D'om estraynne que pynnora en alinea villa, q'en den hom far.

"Sy omne formar pynnora ad altre en ciutat alguna bestia, non la den trayre de la ciutat. Mas si la peynnora en vilas e no y a casas aquel qui pynnora en que meter la pynnora, lo seynnor de la villa le den donar casas en que meta la peynnora."

También se aplica la ley personal en el pleito entre extranjeros (275):

20. "De pley que será entre albarrans com se den deluirar.

"Tot pleyt que sera entre omnes albarrans, ço es estrayus, puys que será ffermat en poder de la Justicia, lo iudici el fuer deuen auer d'aquela cort on ayço es deuenira así como necius et heredes d'aquel metex logar: car si en altra manera fosfeyt, lo seynnor.

(274) Edición Crítica, por M. Molho, Zaragoza, 1964, pág. 33.

(275) Ib., pág. 33.

El fuero de Coria (276) se ocupa de la sanción de los pescadores de fuera:

4. "De los pescadores.

"*Todo pescador que non fuer vecino e en estos términos pescar, peche V maravedís, sil hallaren por que los peche: si non, adugando preso hasta que peche la calonna.*"

Y también de la tasa que tienen que pagar los mercaderes extraños (277):

398. "De todo merchán.

"*Todo merchán que venier de otra parte a mercar e vendier, de un maravedí de cuatro dineros.*"

El fuero de Cuenca (278) regula las más variadas situaciones:

La del forastero que causare heridas o matase a un vecino:

"ij. De extraneo que vicinum percusserit.

"*Si estraneus se defendendo vicinum percusserit, aut occiderit, soluat quam cumque calumpniam ad forum conche fecerit. Verumpta mesa. Si iucinus extrarrenum perosserit hoc ius defendendo, uel occiderit, non sit*

(276) Estudio histórico-jurídico, por J. Maldonado y Fernández del Torco, Madrid 1949, pág. 15.

(277) Id., pág. 105.

(278) Edición crítica con adaptación del Fuero de Iznatoraf, de R. de Ureña y Smenjaud, 1935, pág. 116.

proinde calumpnia."

La de la expulsión de los ganados de los de fuera:

"*iiiij. Quod nemo extraneus pascat peccora.*

"Si peccora, iumenta vel armenta in pascuis conche ad pascendum intraverint, mando quod concilium quintet illa, ad expellantur a toto termino conche sine calumpnia."

La de la eximente del que hiere al extraño que había matado al vecino (279):

"*xiiij. De extraneo qui in termino conche homicidium fecerit.*

"Quicumque extraneus in aldeis, uel in termino conche hominen percusserit, aut occiderit, aut cum bando uenerit, et ibi persussus fuerit, uel interfecus, nulla sit, iude calumpnia. Si uero extraneus, qui de termino non sit hominen percusserit, aut occiderit, pectet calumniam, quamcumque fecerit, duplatam, et dam damnum similiter."

La del mercader (280):

"*xliij. De eo qui cum mercimonio (uenerit ad hanc urbem).*

"Omnis homo qui cum mercimonio uenerit concham, sine xristianus, sine indeus, nel sarracenus, nullus eum pignoret nisi fuerit debitor nel fidenssor. Qui alium pignorauerit, pectet concilio centum aureos, et que

(279) Id., pág. 122.

(280) Ib., pág. 132.

riminioso pignora duplata.

El fuero de Madrid (281) exige el pago del portazgo a los extraños:

"LXXIX. Qui non fuerit vicino.

"Todo el omne que vicino non fueret de Madrid, det suo portadgo: et fi dixerit que becino efe las duas pastef del anno morat in Madrid, faluet cum II vicinof et non det portago."

En fuero de Molina de Aragón (282) la muerte o herida causada a un vecino por uno de fuera, se castigaba con la pena capital:

"Qui non fuere de Molina et matare o firiere.

"El homne que de Molina non fuere et homne de Molina matare o firiere con armas, et fuere preso en la villa, o en la aldea, ninguno nol defienda, ni la Iglesia, mas seya jusicado."

También el Fuero General de Navarra se ocupa de la prueba testifical (283):

Libro II, Título VI, Cap. IV. "Quoae dere ser el testimonio entre franco et navarro.

(281) *El Fuero de Madrid y los derechos locales castellanos*, por G. Sánchez, Madrid, 1932, pág. 43.

(282) Publicado por M. Sancho Izquierdo, Madrid, 1916, pág. 120.

(283) *Fuero General de Navarra*, por P. Elarregui y S. Lapuerta, Pamplona, 1869, pág. 28.

"En todo pleyto que sea feyto en Pamplona, de franco, de navarro, deve ser la testimoanza de entranbos de la postrimera cruy en adventro, et deve ser casa tenient et vecino entegro qui eviere peynos biros, et que sea abonido por sus vecinos en el portegado de la elesia. Et devemos dizir la testimonia de los francos qual deve ser; aquel que va loado por los XII et el amirat que vecino es, et casa tenient ayno et dña."

Cap. V. "Dont deven ser los testimonios entre franco et navarro, et qual franco es para testimonio.

... "Otro sí, devemos dizir el testimonio de los francos qual deve ser; aqueye que sea probado de los XX de la villa que vecino es, et casa tenient ayno y dña."

A su vez, concede a los extraños derecho a regar y vendimiar, debiendo pagar diezmos (284):

Libro III, Título II, Cap. II "Como vecino forano pueda segar e vendemar et quaal elesia deve dar la diezma.

..."Si entra pieza o vinna dalgun vezino en el término de la otra villa...más segará et vendemará, et ranquará, et dará la diezma et al primicia a la elesia daqueylla villa ont leheredamiento viene...Mas...sin amor deylos, non podra segar nin vendemar ata que eylos entren en aqueyl lugar, et la diezmas y la primicia dere dar a la elesia onde el término es..."

(284) Id., pág. 38.

En el fuero de Salamanca (285) se reitera la protección del mercader:

CCXLII "Quien preñar mercador.

"Qui mercador preñar, o su auer pressier, sin mandado de los alcades o de las iusticias, pedre sesenta soldos."

En los fueros de Sepúlveda (286) está previsto el trámite del pleito planteado por los de fuera:

"Ex homines de aliis terris qui habuerint indicium cum homines de Uclés, et prius non demandasent directo iu suo concilio et super istud pignoraverint, pignora illa duplent et pectent C morabetinos ad regem."

Los Fori Antiqui Valentiae (287) permiten la retención del forastero para el cobro de deudas:

11. "Si privatus vel extraneus capitalarius vel debitos arripuerit fugan a Civitate, creditor vel quidebet nomine eius potest eum capere et retinere et ferreis vinculis in curia custodire quosque satisfaciatur..."

El homicidio cometido por el extraño es castigado con severidad

(285) *Fuero de Salamanca*, por J. Sánchez Ruano, Salamanca, 1870, pág. 71.

(286) *Los Fueros de Sepúlveda*, Edición crítica y apéndice documental por E. Saez; Estudio histórico-jurídico por R. Gibert. Segovia, 1983, pág. 180.

(287) *Fori antiqui Valentiae*, edición crítica por M. Dualde Serrano, Madrid-Valencia, 1950-1957, pág. 153.

en el fuero de Teruel (288):

24. "De estranno que en Teruel homizilio fiziere.

"Decabo, todo omne estranno de otra villa, que en Teruel homizilio fiziere, sea preso et enforcado, e non lo deffienda egleſia ni palacio ni encara monasterio, mafuera que aquel muerto oviesse estado antes de la auenida de Teruel enemigo.

El Manuscrito 8331 de la Biblioteca del Arsenal de París (289) no señala el castigo en el caso anterior, sino que se remite a lo que señala el fuero correspondiente, sin duda por tratarse sólo de un modelo-tipo.

3. "Del extranno que vezino fiziere.

"E desi por aventura el estranno que al veçino de la villa firiere o matare defendiendos, pedre la calonia que fiziere a fuero.

Es muy expresivo el contraste que se encuentra en el fuero de Ubeda (290), al dar el tratamiento correspondiente a los moradores y a los de fuera, beneficiando a los primeros y castigando a los segundos:

Título primero:

"e en las primeras cosas del fuero, yo, el rrey don Fernando, dono et

(288) *El Fuero de Teruel*, publicado por M. Gorosch, Stockholm, 1950, pág. 104.

(289) "El manuscrito español 8.331", de la Biblioteca del Arsenal de París, de J. Roudil, en "Vox Románica", 22 (1963-1964), pág. 131.

(290) *Fuero de Ubeda*, estudio preliminar M. Pescet y J. Gutierrez Cuadrado, estudio paleográfico de Josep Trench Odena, edición y notas de J.G.C. Universidad de Valencia, 1979.

otorgo a todos los que moraren en Ubeda, et a los que aquí vernian morar, doles la villa con todo su término con montes, et con fuentes, et con ríos, e con salinas, et con venas de plata et con venas de fierro et de otro metal qualquier que sea. Et sy por aventura omne de Ubeda fallare omne estranno en el término de Ubeda venando con aves, o con rredes, o con ballestas, o pescando, o madera tajando, o lenna faziendo, o sal o fierro, o cualquier otro metal, o açores tomando, prendal sin calonna njugna et sea preso fasta que se rredima por auer. Et si por aventura el omne estranno defendiéndose firiere al vezino de la villa, ol matare, pedre la calonna al fuero de Ubeda. Et sy por aventura el vezino al estranno firiere o matere estos derechos defendiendo, non pedre calonia por ende. E sy omne de linaje a otro cavallero fuerza fziere en el término de Ubeda o fuese herido o muerto, non pedre caonna por ende. E mando que qualquier omne que en Ubeda o en su término por fuerça entrare en posada, o alguna cosa prisiere, et por esta razón fuere herido o muerto, non pedre calonna njinguna. Mas sy a algún vecino firiere o maare, pedre la calonna que fziere al fuero de Ubeda. E otrosy, si ovejas o vacas o otros ganados en los pastos de Ubeda entrasen a paçar, mando que los quite el conçejo et los eche de todo el término sin calonna njuguna. E todas las pueblas que en vuestro termjno fueren fechas, non sean estables, mas derribelas el conçejo, sin calonna ninguna.

Semejante en el Título III: "Del que de fuera que omjçidio fziere en Ubeda et del que con bando vinjere.

"...E qualquier omne estrano que non fuera de la villa vecino, y en

aldeas o en el término de Ubeda omne firiere, o matare, o con bando vinjere, et fuere herido o muerto, non haya calonna njguna. E sy el estrunno, que non fuere del término, omne firiere o matare, pedre la calonna que fiziere doblada et el danno otrosy.

Los fueros que el abad de Sahagún y otros señores dieron a Villavicencio en el año 1221 se ocupan del extraño que cometiese delito:

El que non fuere vecino, el calomnia fecier, dé fiador en V sueldos, e que leve la voz sobre si (291).

La existencia de varios reinos aparece en los fueros y privilegios de Santa María del Puerto (Santoña) (1281) (copia romanceada):

"El cual sacerdote Paterno le agradó el aumentar los adornos de aquella Iglesia...y a juntar personas virtuosas y de buena vida, y de diversos reinos, temerosas de Dios...(292) "

El fuero de Burgo Nuevo de Alquejar, otorgado a sus pobladores por el Rey de Aragón D. Alonso el Batallador en febrero del año 1114, contempla las situaciones habituales del repoblador y del mercader:

"...Et qui venit ad visto vurgo novo populare non det in tota mea terra

(291) T. Muñoz y Romero, *Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas de los reinos de León y Castilla, Corona de Aragón y Navarra*, Tomo I, Madrid, 1847, Imprenta de J. M^a. Alonso, pág. 178.

(292) Ib., pág. 192.

lezta, et alios qui venerint marchare per unum annum non det lezta in illo mercato (293).

Encontramos en el privilegio del rey de Aragón Don Alonso II, otorgado en el año 1187, confirmando y adicionando las costumbres y fueros de Jaca la figura de la migración proyectada por el forastero:

"...Si autem fuerit extraneus, qui moviatur Jaccae, vel in illa terra ultra serratam, si destinamentum fecerit, fiat sicut destinaverit..." (294).

El fuero de Palenzuela, en la provincia de Palencia, dado por Alfonso VI en 1104, confirmado -a través de otras por Alfonso X- contiene beneficios para el repoblador, durante el primer año:

"Omnis homo qui adventicus fuerit in Palenciola, non dabit sforcionem, nec faciat sernam in primo anno" (295).

El fuero de Nájera, en La Rioja, de hacia 1140, en redacción confirmada por Alfonso VI, se considera la demanda del forastero contra el vecino:

"Et si aliquis homo de foris de Nagara demandaverit ad hominem de Nagara aliquam rem, non debet exire ad medecineum, nisi ad postam de illo

(293) Id., pág. 254.

(294) Ib., pág. 243.

(295) Ib., pág. 273.

ponte (296).

El fuero dado por Alfonso VI a los pobladores de Sahagún en 1084, da igual tratamiento a los vecinos que a los extraños, en procedimientos sobre inmuebles u otros bienes:

"Vicinus aut extranneus qui domum, vel aliquam partem calumniaverit, tam ipse qui querit quam nec, non ille de quo querit, den Abbati fidiatores in sexaginta solidos, et qui fuerit victus persolvat sexaginta solidos Abbati" (297).

Los fueros otorgados a los burgueses de Sahagún por el rey don Alfonso VII y el Abad D. Domingo en el año de 1152 fijan un merino para los castellanos y otro para los francos:

"Maiorini Sancti Facundi sint duo, unus castellanus, et alter Francus..." (298).

Y exigen un fiador al forastero que demandase una casa a un habitante:

"Si aliquis deforaneus domum quesierit ad habitore Sancti Facundi, det

(296) lb., pág. 287.

(297) lb., pág. 301.

(298) lb., pág. 309.

Abbat fidiatorem in quinquaginta solidos" (299).

La compra de bienes convierte a los adquirentes en vasallos a efectos especialmente tributarios, según los fueros dados a la villa de Sahagún por Alfonso el Sabio en 1255:

"Si algunos omnes que non sean vecinos compraron o ganaron fasta aquí, o daqui adelante heredades de vecino, sean vasallos del abad por a cumplir al rey so derecho, e al abad el suyo" (300).

En la copia romanceada del fuero de Arguedas concedido el año 1092 por D. Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Navarra, leemos el castigo del forastero que se apropiase de bienes, así como la exigencia de fiador que lo avale:

"Et si por aventura prisiertes algún estraino, que non sea poblador de Arguedas, en la dita Bardena, escaliando, o tayllando madera o faciendo leynora o carbon, o cazando, mando que peyte a vos cada uno 60 sueldos (301).

"Et si algún homme de fueras obiere con vos algún juicio, non pruebe a vos si non con hun vuestro vecino, que hayan su casa et su heredit en a

(299) lb., pág. 309.

(300) lb., pág. 313.

(301) lb., pág. 329.

villa, et con otro de fuera" (302).

Se señala en el fuero de Logroño, dado en 1095 por el rey don Alfonso VI, el lugar y la forma de tramitar los pleitos a los que sean parte los extraños:

"Et si venerit alicuius homo de foris deumen Iberi, qui inquirat indicium ad alicuius populator respondeat in sua villa, vel in caput ponti de Santo Toanne (303).

"Et si alicuius homo de foris de villa, et non potue rit formare cum duas testimonias legales, vicinos de villa, qui habent suas casas, et suas hereditates in villa, et si ipsas testimonias non potuerit haberre, audeat sua iura in Sancta María, Caput Villae (304).

Se encuentra también la exigencia de fiadores en el fuero concedido a Miranda de Ebro en el año 1099 por el rey Alfonso VI:

"Et si de aliquo homine qui non sit populator fuerit aliquis querellosus, merinus aut qui mandaverit villam, faciat ut det fideiutores vicinos qui sint populatores, et habeant casas et haereditates quantum valet petitio quarellosi; et si non, portet eum sajón de una parte usque aliam villae; et si non invenerit fideiutores, ponant eum in carceres et quando exiverit, pecten

(302) Ib., pág. 329.

(303) Ib., pág. 334.

(304) Id., pág. 334.

tridecim denarios et unam madagiam pro cararagi" (305).

Y se contempla, lo que no es usual, la protección del nuevo poblador frente a los abusos de los antiguos:

"Et si aliquis homo de terra fecerit injuriam istis populatoribus aut acceperit aliquam rem per violentiam ab omnibus, aut ab aliquo illorum, dominus qui mandaveit villam suo Rege, aut suus merinos, faciat eis justitiam; et reddant quae acceperunt ab eis; et si non fecerit hoc usque ad triginta dies, portea non respondeat domino cum juribus" (306).

Hasta el lugar de tránsito estaba regulado:

"Et homnes de terra Lucronii, aut Naxera, aut de Rioxá, qui voluerint transire mercaturas versus Alava, aut de alia terra quacumque versus Lucronium, aut Naxoram, aut ad Rioxam, transeat per Mirandam, et non per alia loca; et si non, perdant mercaturas" (307).

Los fueros de Caparroso, dados en el año 1102 por el rey don Pedro Sánchez de Navarra, contienen la obligación de los forasteros de plantear la demanda en Caparroso:

"Et si homine de alio loco in primis non demandarat directum in Caparros, et pignoraret in Yrunnia, aut in estella, aut in Sangosa, aut carresa,

(305) Ib., pág. 344.

(306) Ib., pág. 344.

(307) Ib., pág. 344.

peitet LX solidus (308).

Los acusados de robo pueden ser absueltos con el juramento de dos hombres, hasta tres veces, pero a la cuarta serán condenados:

"E si homine de alio loco impossuerit furtum super homine de Caparros, e debet se delibrare cum duos homines, et debet jurare sive e alium, et si fuerit probatum III vices in ipsa quarta vice in forca" (309).

Igual ocurre en el fuero de Santacara, otorgado después del año 1102 por D. Pedro Sánchez, rey de Navarra:

"Et si hominem de alio loco impusuerit furtum super homines de Santa Cara debet se diluminare cum duobus homines e debet jurare sive e...et si fuerit probatum tres vices propria cuatro vice ad fosca" (310).

El obispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez, en los fueros concedidos en el año 1113 a los pueblos de su jurisdicción, protege a los mercaderes y a los peregrinos:

"De mercatoribus et peregrinis"

"Mercatores, romaní, et peregrini, non pignerentur; et qui aliter egerit duplet quae tulerit, et sit excommunicus, et solidos LX persolvat domino illius"

(308) Ib., pág. 390.

(309) Ib., pág. 394.

(310) Ib., pág. 397.

honoris" (311).

Fernando II de León confirma en el año 1117 los fueros que los reyes sus progenitores habían concedido a los vecinos de Lugo:

"Et si quis extraneus aliquod tortum fecerit aliqui Burguensi, non intret in ipsam villam, nisi cum fidantia, postquam fuerit appellatus semel; et nisi fecerit inde directum, et aliquod damnum receperit, non pectent proinde Maiorino" (312).

El fuero de Calatayud otorgado por Alfonso I el Batallador en el año 1131, determina el castigo del forastero que matase a un habitante:

"Et homine que non de Calatayud, si mataverit hominem calatayud, aut prendiderit, vel discabalgaverit, pectet M. Movavitos, tertia pars ad regem, et tertia ad concilium, et tertia al quereloso" (313).

El fuero de Carcastillo, en Navarra, concedido a sus vecinos por Alfonso I el Batallador, hacia el año 1129, contiene fórmulas que aparecen en otros.

Así, la precisión de los extraños de demandar a los habitantes en Carcastillo:

(311) lb., pág. 409.

(312) lb., pág. 433.

(313) lb., pág. 459.

"Et homines de alteras terras qui habuerint iudicios cum illos de Carosc Castello, e illi non demandaverint prius directo in suo concillio, et super istud pignoraverint, dupent ista pignora, et pecten duos solidos a palacio" (314).

La disculpa del homicidio cometido antes por el repoblador:

"Homine qui fuerit homicida de alteras terras, et venerit a carocastellis, populare, ad iuvent illum quantum millioren potuerint" (315).

La exigencia de fiador para demandar:

"Homines de alteras terras, qui iudicio demandaverint ad homines de Carocastellis dent illis fidente, ut non veniat nulus homo in propria voce, et sic faciat illis directo" (316).

Lo último, igual en los fueros de Encisa en Navarra, otorgados en el año 1129 por Alfonso I el Batallador:

"Et totum hominem de aliena qui venerit ad Encisa, et furtum demandaverit de lunnes (317) cum iura de II homines" (318).

(314) lb., pág. 470.

(315) lb., pág. 471.

(316) lb. pág. 471.

(317) De lejos.

(318) lb., pág. 473.

En los fueros de población del barrio de San Saturnino, o San Cermín de Pamplona, dados por Alfonso I el Batallador en el año 1129, se contienen prevenciones con los de fuera:

"Et nullos homines de altera populatione non faciant murum, neque turrin, neque fortalezam, contra ista populatione, neque contra homines iste populationis. Et si voluerin facere quod populatores istos non dimitant illos facere murum, aut turrin neque fortalezam aliquam contra populationem suam, nique contra illos, sed resistent quantum potuerint, quod non faciant ullum opus, quomodo superius scriptum est" (319).

En el fuero de Castrotorafe, de por Alfonso VII en el año 1129, se contempla la conservación de los muros propios:

"Et si aliquis homo venerit, vel maiorinus, tam depropinquis, quam de extraneis quis ille fuerit qui mure factum nostrum irrumpere voluerit, in primis accipiat iram Dei Patris omnipotentis, et sea maledictus, et excommunicatus, et anathemicatus et a dife Christi separatus..." (320).

El distinto tratamiento del homicidio del extraño y del vecino se encuentran en el fuero de Marañón, en Navarra, concedido por Alfonso I el Batallador:

"Et si homo de Maraione occiderit alium hominem foras de villa non habeat nullum pectum; et si vicino ad vicino occiderit in villa pecte XXX

(319) Ib., pág. 479.

(320) Id., pág. 481.

solidos; et si aliquis homo de foras villa qui non fuerit vicino occiderit hominem de Masaine, pectet quingentos solidos " (321).

Y se conceden amplias facilidades a la repoblación:

"Et homine qui venerit e fecerit se vicino in Maraione habeat totam suam hereditatem que hi habet de terras, de vineas vel de cassas, sive de alio suo habere ingenuum de ante de retro per infinita secula seculorum" (322).

El fuero de Guadalajara, otorgado a sus vecinos en el año 1133 por el rey Alfonso VI, no sólo reitera lo anterior, sino que protege al que va en camino a repoblar:

"Otra razón otorgamos a vos que sodes pobladores de Guadalfayara o aquéllos que de aquí adelante vernan a poblar, si quier de Castilla, si quier de Leon, si quier de Galicia, o de otras partes, que hayades vuestras casas e vuestras heredades en todo el logar, y así mismamente de aquellos mozárabes, como de otros homes, los quales halli seredes allegados" (323).

"El home que viniere a Guadalfayara de Castiella, o de otros logares y trajere consigo mujer savida o una fuyendo remedio vagante y fuere en los caminos de aquella ciudad y fuere halli deshonrado o muerto, quien lo ficiere

(321) Ib., pág. 496.

(322) Ib., pág. 496.

(323) Ib., pág. 508.

pedre al rey quinientos sueldos" (324).

"Mercadores que vinieren hallí no les pendren ningún home, ni en carrera ni en ciudad; y si alguno los pendreire, pedre al rey sesenta sueldos" (325).

El fuero de Lara (año 1135) del rey Alfonso VII, sigue el principio de competencia territorial:

"Totum hominem de qualicunque terra qui demandaverit ad homines de Lara, si alcancaverit illum per iudicium pedret pro suo foro" (326).

A su vez, el fuero de los pobladores del Castillo de Aurelia (hoy Colmenar de Oreja, otorgado en el año 1139 por Alfonso VII), señala el lugar de celebración del inicio:

"E despues de aquesto, si alguno de los pobladores de Oreja oviere juicio con algun omne que sea dallende Sierra, o aprenda sierra, sacando los cibdadanos de la cibdat de Toledo, la yunta sea en la rebera de Tajo ante el castillo de Oreja, allí et aya fuero" (327).

El fuero de Daroca, de D. Ramón Berenguer, conde de Barcelona,

(324) Ib., pág. 509.

(325) Ib., pág. 509.

(326) Ib., pág. 520.

(327) Ib. pág. 527.



del mes de noviembre del año 1142, tiene una condena del daño causado por el extraño:

"Si quis autem estraneus vicino Darocae aliquid abstulerit, reddat illi suam rem duplicatam, et M. solidos rege" (328).

Y añade la responsabilidad del dueño por el daño causado por el siervo del vecino o del extraño, a la persona del vecino, esposa o hijos, pero por daños en las casas o ganados:

"Si servus alicuius vicini, vel quilibet estraneus exierit de domo alicuius vicini de illa scilicet domo, ubi ipse habitat cum uxore, et filiis, et fecerit aliquod malum, et postea reversus fuerit in domum illam, dominus domus, aut respondeat cum malefactore, aut restituat malefactum. Pro alia domo, vel pro cabanya non respondeat"

"Si quis in Darocam populare venerit, et inimici eius post eum, aut eiciatur de villa (329).

El fuero de Peralta, otorgado en el año 1144 por D. García, rey de Navarra, contiene normas procesales sobre prueba de juramento de fiadores y otros extremos:

"Et si iudicio habuerit homine de Petralta cum alio homine de alia terra, e dederit duos firmatores de Peralta, trocature pleito super totos alios homines de tota mea terra. Et homines de Petralta firmen contra alios

(328) Ib., pág. 534.

(329) Ib., pág. 536.

homines non firment contra eos" (330).

"Et homines de foras qui habuerint juram super nostro vicino non intrerit firmes...; et homine de alia terra qui habuerit nullas rencuras de homine de Petralta, cum fidiator de Petralta colligat suo directo"

"Et homine de Petralta si mesclaverit cum homine de alio terra, et occiderit cum hominem de Petralta ad alio homine non pectet nulla"

"Hominem de allia villa qui debuerit habere ad homine de Petralta, et negaverit ponat illo habere debante, et sic firmet, de quale habere firmaret tale pectet" (331).

"Et homine de Petralta, si habuerit iudiciu cum homine de alia terra, et fuerit ad suo concilio, e demandaverit fidiator qui det ei ad sua porta in Petralta, et non quisieret dare, facit pignora de illa villa, et si fuerint vacas comederit unam, et si obes X, et juret homine de Petralta quia por quoant petivit fidem, et non dedit ei ad sua porta, inde comedit, et perdat illud"

"Et si nullus homo de villa, aut foras de villa, acceperit ganato, aut aliqui habere, et suo donno jactare fidem, et non colligerit eum fides, et non colligerit eum fides, et habuerit mezclanja, et plafaret eum de morte, non pectet nulla, suo fideatorgando, quia ego piteaban fide" (332).

"Et totum homine qui habuerit rixa cum suo seniore, aut cum suo vicino, et se fuerit in alia villa de rex, cum sua hereditate, sedeat segura, et

(330) Ib., pág. 546.

(331) Ib., pág. 547.

(332) Ib., pág. 548.

non habeat super illa nulla pecta, neque nulla facendera" (333).

"Et totos homines in tota mea terra qui pigniravent ad homine de Petralta pro emenda, pectet LX solidos ad illo seniori, et ad rec, et ad illo alcalde, qui posuerint vicinos" (334).

En el texto castellano del Ordenamiento de las Cortes celebradas en la ciudad de León en el año 1208, se sigue el fuero personal del demandado:

"Otro sí...el demandador siga el fuero de aquél a quien demanda.

Y se contempla la existencia de diferentes divisiones territoriales, que se tienen en cuenta al regular las migraciones:

"Otro sí establescemos que los omes de las villas o de las posesiones pertenescientes a los obispos, o a las abadías, a las religiones, que si a otra villa, o a otro sennorio se trasmudasen, que se torne a su suelo, o al sennorio del obispo, o del abadía, o de la religión que fueran fasta tres semanas, después que estas excusaciones fueran publicadas en el obispado de que eran, e pierdan daquí adelante aquel suelo; e la heredit dyala el sennor de la villa o de la posesión de que se trasmudaron. Establescemos aún, que aquellas cosas que fueron dadas, o dexadas a las iglesias, o a los monasterios, o a los clerigos de cibdadanos moradores en León, o compradas dellos, o de las otras religiones, ayan aquellas mismas libertades las que auían antes que fueran

(333) Ib., pág. 546.

(334) Ib., Id.

dadas, o dejadas; o que Nos, e otros por nuestro nombre, o mandado, tomemos poderío dellas el que ante a bien" (335).

En el privilegio del rey Sancho de Aragón, Alonso II, otorgado en el año de 1187, confirmando y adicionando las costumbres y fueros de Jaca, se contiene toda una regulación de la herencia del extraño que muriese en Jaca, con testamento o sin, y según se personen, o no, los parientes, pudiendo llegar a aplicarse por su alma:

"Si autem fuerit extraneus, qui moriatur Jaccae, vel in illa terra ultra serrat, si destinamentum fecerit, fiat, sicut destinaverit. Si autem non fecerit destinamentum, serventurmas eorum, vel illius, per triginta dies. Et si veniat ejus consanguinei, vel consanguineus, de quo non dubitatur, reddant ei duae partes de tota illa pecunia, et tertia detur pro anima sua consilio bonorum hominum, et episcopi vel capituli de Jacca. Si autem nullus de consanguinis venerit, tota pecunia detur pro anima sua eorunden consilio " (336).

4. Pobladores extraños en los fueros Municipales (recapitulación)

En este punto, se pueden llegar a formular las siguientes conclusiones:

(335) lb., pág. 113.

(336) lb., pág. 243.

- 1ª.- Ruptura de la unidad política del reino visigodo, debida a la invasión árabe.
- 2ª.- Fraccionamiento de los núcleos iniciales y aislados de la Reconquista, y falta, no ya de una normativa común a todos ellos, sino a los componentes de cada núcleo entre sí.
- 3ª.- Existencia de un gran lapso de tiempo, en el que prácticamente no existe actividad normativa. Era preciso sobrevivir, no quedaba tiempo para regular las relaciones de la vida en común.
- 4ª.- Iniciación y desarrollo de aquélla a medida que el proceso reconquistador va avanzando, pero sin unidad legislativa. Surgen los fueros locales o municipales, dados para cada situación. Algunas veces aparecen "familias" de fueros (Logroño, supletorio de Miranda de Ebro, Cuenca-Teruel, etc.), es decir, que se da a una villa el fuero de otra. Lo contado de estos casos prueba lo excepcional de ellos y la enorme fragmentación legislativa de la zona cristiana.
- 5ª.- Inicio de algunas fuentes territoriales (fuero General de Castilla, Usatges, fuero Juzgo, en fechas muy avanzadas: siglo XIII). Otras obras codificadas de mayor envergadura, como el Código de las Siete Partidas, de Alfonso X el Sabio, son rechazadas por su

tendencia modernizadora: Ténganse presente el prestigio de las "leyes viejas", y las cláusulas en las que se prohíbe modificar las leyes en el futuro.

- 6ª.- Aparición de otra fuente legal: las peticiones de Cortes, cuando son aprobadas por los Reyes. Son a modo de pacto o transacción entre el Rey y los representantes del pueblo: por el medio andaba -sin que quizá se le dé la suficiente importancia que entonces tenía- la cuestión fiscal. Algunas revistieron mucha transcendencia; piénsese en el "Ordenamiento de Alcalá de 1348".
- 7ª.- El volumen de lo legislado acaba obligando a redactar las Recopilaciones hechas en época posterior; la Nueva (1567), la Novísima (1805); la de Indias (1680), la Novísima Recopilación de las Leyes de Navarra (1735).
- 8ª.- Cada reino seguía su propia legislación, con las particularidades introducidas por los Decretos de Nueva Planta, de Felipe V. La unión de los reinos era en la persona del Rey. Esta situación califica no sólo a la Reconquista, sino a la Edad Moderna.
- 9ª.- Todo ello nos lleva, de nuevo, atrás y a detenernos en los fueros Municipales, pues hasta Felipe V no hubo regulación sistemática de la extranjería.

- 10ª.- Los fueros Locales deben observarse en cuanto son usados y guardados, y no se oponen a la razón y Leyes generales del Reino (III, II, III, Nov. R.).
- 11ª.- Por eso, existen -dentro de nuestra materia- como dice el profesor Gibert, los extraños al Reino, y los extraños a la ciudad. Téngase en cuenta que al haber calado poco el fenómeno feudal en España, la importancia de villas y ciudades libres era muy grande.
- 12ª.- Pero, además, había distinciones entre miembros de diversas "colaciones", dentro de cada ciudad. V. fueros de Ubeda, Alarcón, Alcaraz, Salamanca, etc.
- 13ª.- Por último, había distinciones entre vecinos, o miembros de la villa y aldeanos, o vecindados en el alfoz, a los que dedicamos una parte de este trabajo.

Como aspectos más importantes de la legislación contenida en los fueros Municipales han de citarse los siguientes:

1. Toda clase de facilidades para venir a poblar. Es el fenómeno de "la presura" (337). No importaba que los repobladores fueran

(337) I. de la Concha Martínez, *"La presura. La ocupación de las tierras en los primeros siglos de la Reconquista"*, Madrid, 1946. Antes, en *"Anuario de Historia del Derecho Español"*, XIV, 1942-1943, pág. 322 y sts.

criminales, moros, judíos, siervos, francos, etc..., aunque, en ocasiones, estaba reservado a las clases sociales elevadas (Alarcón, Béjar, Guadalajara, Teruel). Los que se establecen en algún pueblo y poseían caballo y armas eran infanzones; de lo contrario, se consideraban villanos, según el Fuero de Sobrarbe (338).

Era una "cancelación de antecedentes" (Alcaraz, Molina de Aragón, Ubeda, Guadalajara, San Sebastián, Estella, Usagre); "que más plazze a mi don Alonso emperador esto, e mejor es, que non val de aquel vaya a tierra de moros" (Viguera y Val de Funes), Cuenca, Segura de León -Badajoz-, Sepúlveda, Burgo Nuevo de Alquejar, Jaca, Palenzuela, Sahagún, Carcastillo, Guadalajara.

Exención de responsabilidad por deudas (San Sebastián).

2. A los pobladores se les dan todos los términos, montes, fuentes, pastos, ríos, salinas, minas (Alarcón, Alcaraz y Tortosa -"Costumbres escritas"-).
3. Es más, a los enemigos de los pobladores, que vinieran después, no los reciban, "si non fuere con su amor" (Teruel, Daroca).

(338) J. Yanguas y Miranda, *"Diccionario de Antigüedades"*, Diputación Foral de Navarra, 3 tomos, 1964, I, pág. 353.

Prohibición de entrar en León al extraño que hiciere daño a un burgués, sino es con un fiador leonés (León).

Idem de que venga después, si no es con su voluntad (Daroca).

4. Se necesita la voluntad del Rey y de los vecinos: (Estella).

Prohibición contra la voluntad de los vecinos (Pamplona).

Ningún fijodalgo puede comprar ni poblar en la villa si no fuere "devisero" (Libro de los fueros de Castilla); los que vengan después de la fundación tienen que comprar los terrenos (Béjar, Funes)

5. Prohibición de entrar en la villa a los extraños que hicieran "tortum" a los burgueses (Lugo).

6. Exenciones tributarias a los pobladores (Molina de Aragón, Ubeda).

No pagar peaje el ganado por una noche (Viguera y Val de Funes).

Pago de tributos por guardar pan y vino (Belorado, Libro de los fueros de Castilla).

El que no sea vecino, que pague el portazgo (Madrid).

Los forasteros tienen que pagar para poder segar o vendimiar, y también pagar el diezmo a la Iglesia (Fuero General de Navarra).

Pagar por cortar el extraño madera o leña (Arguedas).

Exenciones tributarias el primer año (Palenzuela).

7. Detalle de los tributos (San Sebastián, Alcaraz, Alarcón).

Pescadores y "merchán" que no sean vecinos, tienen que pechar (Coria).

8. Facilidades a los mercaderes (Ubeda, San Sebastián, Salamanca, Santiago de Compostela); y a los peregrinos (Guadalajara).

9. Dénselos terrenos a los pobladores para hacer casas (Ubeda).

Sean vecinos si compraron heredades (Sahagún, Marañón, Guadalajara).

10. Importancia de la pertenencia a una "colección" determinada:

- a) No responder una "colación" por otra (Ubeda, Alarcón, Alcaraz).
 - b) Pagar diezmos en donde se tienen propiedades (Costumbres escritas de Tortosa).
 - c) Responder antes de marchar de la "colación" del pueblo (Alarcón, Alcaraz, Brihuega, Miranda de Ebro).
 - d) Con carácter general (Salamanca).
- 11. Fuero personal (homicidio) (San Sebastián, Estella, Viguera y Val de Funes).
 - 12. Fuero territorial (Viguera y Val de Funes) (pleito civil).
 - 13. Prohibición de vender heredades en Navarra, para pasar a Aragón o a Castilla (La Novenera).
 - 14. Lo contrario (Avilés y Oviedo).
 - 15. El hombre que marcha, siga con sus bienes (Peralta).
 - 16. Al revés (León).

17. Tratamiento del homicidio:

a) Distinto trato al vecino y al extraño, en caso de homicidio (Cuenca, Molina de Aragón, Ubeda, Marañón. Peralta).

b) Muerte al extraño que cometiere homicidio (Teruel).

c) El extraño que hiriere o matare al vecino de Alcaraz, pague la pena según el fuero de ésta: a revés, no (Igual en Alarcón).

d) Los vecinos que maten al "albarrán", no pechen sino el "omecillo viejo": (Guadalajara).

e) Castigo al extraño que matare al vecino (Calatayud).

18. Distinta pena al que roba, si es forastero (Daroca).

19. Aspectos procesales:

a) En los pleitos no "hagan guerra" con los hombres de fuera: valga la prueba de testigos.

b) Querellante que no residiese en la villa: necesita presentar tres testigos al juez (Béjar).

- c) Valga el testimonio de los no vecinos (Ubeda).
- d) Sustituir el testimonio con el juramento (Logroño).
- e) Existencia de fiadores de los extraños (Miranda de Ebro).
- f) Prueba de los vecinos de Santacara.
- g) Pleito ente albarranes (Jaca).
- h) Diversos tratamientos de pleitos entre hombres de dentro y fuera de la villa (Libro de Los fueros de Castilla).
- i) Pleito de hombre de fuera sobre casa en la villa (Avilés y Oviedo).
- j) Pleito entre francos y navarros (fuero General de Navarra).
- k) Pleito entre castellanos y franco, un testigo castellano y otro franco (Sahagún).
- l) Requisitos del extraño para pleitear con los de Carcastillo (Carcastillo).

20. El "prendador" que no tenga casa en la villa, o no fuese conocido, o no se la tome un vecino, pierde la prenda (Béjar).
21. Obligación de ayudar al Rey (Jaca).
22. Obligación del Juez de atender la reclamación del hombre de fuera de la villa (-Libro de los Fueros de Castilla-, párrafo 89 (339), y protección de los extraños (fuero de Jaca, 1, 119), siguiendo la vieja tradición del "Liber Iudiciorum", "*in advena sollicitus*" (I, I, VII).
23. No hacer donaciones de inmuebles a extraños (Viguera y Val de Funes); sí de muebles.
24. Tratamiento igual en los pleitos a vecinos y extraños (Sahagún), Libro de los Fueros de Castilla, párrafo 893 (340), y protección de los extraños (Fuero de Jaca, 1.119), siguiendo la vieja tradición del "Liber Iudiciorum", "*in advena sollicitus*" (I, I, VII).
25. Herencia del extraño que muere (Jaca).
26. Castigo del que quisiera romper las murallas (Castrotorafe).

(339) Edición de G. Sánchez, Barcelona, 1923.

(340) Edición de G. Sánchez, Barcelona, 1923.

27. Obligación de pasar por Miranda, a los de Logroño, Nájera y Rioja a Alava (Logroño).

5. Hombres de España

Por fin, hemos de recoger cómo en el "fuero de Jaca" (341) se alude (párrafo 129), a la existencia de "hombres de España", es decir, en una primera lectura parece que se contempla esa amplia, pero concreta situación, que no se suele encontrar en los fueros, a pesar de que, en esas épocas y mucho antes -incluso- los Reyes se presentaban como "Emperadores de toda España", o con títulos análogos.

Dice así el fuero de Jaca:

"S'omnes de montaynna e d'Espaynna, si auran a iurar, o deuen uenir".

"Sj algun ho, de montaynna aura pleyt o iura ab un hom d'Espaynna."

No obstante, para J. Lalinde Abadía (342), España -en el Fuero de Jaca- significa únicamente las tierras situadas al Sur de la Sierra de Guara, por lo que "español" -para dicho autor- equivale a "sobrarbense", es decir, que el "hombre de España" no es el de la "España reconquistada", sino -al contrario- el cristiano que hay que rescatar de las

(341) Edición Crítica, por M. Molho, Zaragoza, 1964, págs. 74-93.

(342) *Los Fueros de Aragón*, Librería General, Zaragoza, 1976, pág. 22 y 28

tierras que todavía están en poder de los moros ¡Qué notable simbolismo encierra esta expresión!

Esta misma idea había sido expuesta antes por L. García de Valdeavellano (343), cuando dice que "el concepto mismo que desde entonces -la invasión musulmana- tuvieron de España los cristianos independientes, parece reducido a una idea geográfica, en cuanto las crónicas y documentos de la Alta Edad Media suelen entender por "Hispania", el territorio ocupado por los musulmanes", aunque en el siglo X nace con timidez una idea española más amplia y fecunda.

En todo caso, en la redacción del siglo XIII que seguimos, ya se hacen conferencias a un ámbito territorial más amplio que el propio del fuero:

"Segont fuero d'Aragón (párrafo 112).

"Segontz fuero d'Aragón (párrafo 152).

También, en este sentido, en el fuero de Teruel (344), como ya reproducíamos más arriba: *"Decabo mando que si algunos comptes o jnfancones o cauallero, o sean de mj regno o de otro regnado, a Teruel*

(343) *"Historia de España, I, De los Orígenes a la Baja Edad Media"*, segunda parte, tercera edición, "Revista de Occidente", 1963, pág. 26.

(344) *El Fuero de Teruel*, publicado por Max Gorosch, Stockolm, 1950, pág. 306 y 307.

ujnesen a poblar...

El fuero de Viguera y Val de Funes habla del "infanzón que fuere...a otro regno".

Sin embargo, las citas que se pueden hacer en este orden no pueden ser más escasas.

Lo anterior no es incompatible con el sentimiento de continuidad visigótica, que ha sido recogido especialmente por José Antonio Maravall (345).

Veamos: la caracterización del "*hispanus vir*" es temprana, los romanos (Orosio) la refieren a Trajano y Teodosio.

Hay en la Alta Edad Media un sentimiento de "nación" no relacionada con el poder político, sino concebida como pueblo, como grupo humano (cristianos, judíos y sarracenos bajo Alfonso VI, en Toledo).

Es cierto -decimos nosotros- que existe ese sentimiento de comunidad de los españoles, pero es más histórico y literario -nostálgico-

(345) *"El concepto de España en la Edad Media"*, 2ª edición, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964, en especial pág. 476 y siguientes.

que jurídico.

A ello nos lleva una valoración de las citas del germánico Renallo, del borgoñón Glaber, de Raimundo de Peñafort, de Dante ("*hispaniarum more*"); del uso de los que emplean "España" como apellido: Gonsalvus, Petrus, Vicentius, Laurentius, Johannis Hispanus...; de la existencia del Colegio "de los Españoles", de Bolonia, así como de las citas literarias (Díaz de Games, Fabricio Vagad, Anales toledanos, Muntaner, Enrique del Castillo, la primera "Crónica General", la de Alfonso XI, el "Victorial"...))

Es verdad que usan los títulos de Rey, Emperador de España, Alfonso VI de León y Castilla, su hija doña Urraca, Alfonso I "el Batallador", Alfonso VII, Alfonso X el Sabio, Alfonso V "el Magnánimo"...

También, que hay referencias a la "costumbre o uso de España"; y que nos encontramos con expresiones tales como "fuero de Espanna antiguamente en tiempo de los godos fue todo uno" (Espéculo, 5,5,1); fue primeramente establecido por fuero en España"... ("Fuero General de Navarra", comienzo).

Incluso se puede admitir la existencia de influencias recíprocas entre las diferentes fuentes territoriales del Derecho ("Fuero Real", las

"Partidas", "Fuero Viejo de Castilla").

Todos estos datos son ciertos, pero no son definitivos, al menos en el terreno que nos ocupa, ya que su transcendencia en el campo del Derecho, que regulaba el vivir cotidiano fue muy pequeña, por la división de aquél en fueros, cartas pueblas, normas locales en definitiva, esas sí verdaderamente decisivas a la hora de definir derechos y obligaciones.

Por eso, el mismo Maravall, defensor de un concepto de España en la Edad Media basado en la continuidad de la idea gótica, que no vamos a discutir (es más, que en muchos puntos compartimos), reconoce que el fondo jurídico colectivo procede de una lejana base jurídica común a todo el ámbito hispánico; frente a lo cual se nos presenta, como una realidad inequívoca, el hecho de que en la aplicación cotidiana del Derecho, los fueros locales, con visión muy estrecha, prescindieron del "hombre de España": todo el que no era vecino, en un sentido más o menos amplio, era un "hombre extraño" (un extranjero), y ésta es la expresión que cuantitativamente aparece más en los textos examinados, aunque también se usan "homines de alteras terras", "omnes de foras", "omne foraneo", "albarrán", "ad venticus", "qui non fuerit vicinus"...etc.

Y sobre este último extremo, todavía hay que hacer una precisión que puntualiza más la cuestión: ha de hablarse, a la vista de los textos,

más que de "vecino" (palabra que se usa, pero menos), de "poblador", "morador", "hombres que viviesen" (expresiones más usadas), "habitante", para pasar más tarde a ideas más próximas a las de "residencia" o "domicilio".

Así se desprende de la investigación de Pilar Domínguez Lozano (346), y de modo especial lo destaca el profesor José Carlos Fernández Rozas en la recensión de su obra (347), que pone de relieve lo precario de la vecindad civil, y de las amenazas que sobre ella se ciernen, situación que traslada al momento presente, en que la conexión entre todos los españoles se produce no por la vecindad civil común, sino por la residencia habitual en el territorio nacional.

(346) *"Las circunstancias personales determinantes de la vinculación con el Derecho local. Estudio sobre el Derecho altomedieval y el Derecho local de Aragón, Navarra y Cataluña (siglos IX-XV)"*, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988, 258 págs.

(347) "Revista Española de Derecho Internacional", XLI, 1989, 2, pág. 711-713.

Capítulo IV

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJEROS

I. *DERECHO PRIVADO*

1. Aspectos generales

Según Conde y Luque (348), en época de paz, puede decirse que la igualdad entre extranjeros era completa. Regíanse por su ley nacional ..., y en cuanto a ciertos aspectos del Derecho civil y del fiscal, soportábanlos igual que los ciudadanos: la pérdida de los bienes, caso de desnaturalización o desvasallamiento, el derecho de mañerfa; y añade este autor: "Como tales extranjeros, con tal que fuesen cristianos, no recordamos que estuviesen sometidos a gavelas o tributos especiales".

Las normas civiles especiales para extranjeros son muy contadas. No se les impide el acceso a la propiedad, el matrimonio, etc., sino que el ejercicio de estos derechos les convierte en vecinos de la ciudad, o en naturalizados en el reino. Ha habido en ocasiones prohibiciones de adquirir inmuebles, que se encuentran en algunos fueros municipales, que se compensan con la posibilidad de venir y presentarse como pobladores, y pedir que se les asignen tierras.

(348) Cfr. obra citada, pp. 328-330.

De todo lo expuesto deducimos que en los siglos de la Reconquista, los reinos cristianos estaban empeñados en la lucha religiosa, seguida con el propósito de continuar la monarquía visigoda, como se ve no sólo en lo que queda dicho de Alfonso II el Casto, sino también con la traducción al romance del "Liber Indiciorum": el "Fuero Juzgo" promulgado por San Fernando. Pero este deseo de realizar los ideales de unidad religiosa y nacional no impide que los extranjeros tuvieran libre acceso al país, vinieren por motivos religiosos, mercantiles o simplemente culturales, como se ve en los hechos que transcribimos y en las disposiciones contenidas en las recopilaciones legales que quedarán reseñadas a lo largo de este trabajo.

En la Edad Media hubo muchos viajeros que nos dejaron relatos de sus viajes por España: Juan de Lory en el siglo X, Aimerico Picaud (hacia 1143); Abn-Abd-Alla-Mohamed-Al Edsisi, que debió nacer en Ceuta hacia el 1100; el príncipe Abul Frede (Damasco, 1273); fray Mauricio, dominico (1257); Ibn-Batutanth (Tanger, siglo XIV); Abi-Al-Basid (egipcio, estuvo entre 1465 y 1466); León de Rosmithal, en iguales fechas; Nicolás de Polpieloso (a mediados del siglo XIV); Jerónimo Münzer (1494-1498); también a finales de dicho siglo Mártir, obispo de Arzecia, armenio ...

2. Viajeros, romeros y peregrinos

Uno de los motivos que más se repite en el Derecho de extranjería es el de los peregrinos, por cuya protección y atenciones existió siempre en España un gran interés. Seguimos en esta materia el estudio de Luis Vázquez de Parga, José María Lacarra (349) y Juan Uría Ríu, que, si bien se refiere a los de Santiago de Compostela, puede aplicarse en términos generales a toda clase de peregrinos, pues, como veremos, las leyes hablan siempre muy ampliamente en este sentido.

La regla usual era equiparar los peregrinos a los mercaderes, lo que se hace en el Concilio de Santiago de 1114, en el de Letrán de 1123, en el fuero de Estella de 1164 y en el fuero General de Navarra (libro V, título VI, cap. II) (350). En consecuencia, no se les ponen trabas, sino al contrario, para circular por los reinos. Así, el canon IV del Concilio de León de 1114, ratificado en el mismo año en el citado Concilio de Compostela, dice: "*Negotiatores et peregrini et laboratores in pace sint, et secure per terras seant ut nemo in eos, vel eorum res manus mittat*". Alfonso el Sabio decretó en 1252: "*Ut per singula regna nostra et provincias nostrae dicioni subjectas, tam ipsi quam eorum familias secure veniant, reddeant et morentur*" (Archivo de la Catedral de Santiago).

(349) "*Las peregrinaciones a Santiago de Compostela*", 3 tomos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Medievales, Madrid, 1948-49.

(350) Edición por P. Ilarregui y S. Lapuerta, Pamplona, 1869.

Por su parte, la Ley I, Título XXIII del Libro IV del Fuero Real, dedicado todo él a los romeros, dice: *"Porque queremos que los fechos de Dios, e de la Sancta Iglesia por nos sean más adelantados: mandamos que los romeros, e mayormente los que vienen en romería a Santiago, quienquiera que sean, o doquier vengán, hayan de nos este privilegio por todos nuestros Reynos: ellos, e sus compañías, con sus cosas, seguramente vayan, o vengán, o finquen: ca razón es que aquéllos que bien facen que sean por nos defendidos, y amparados en las buenas obras, e que por ningún empecimiento alvergüen seguramente quando quisieren, a tanto que sean lugares de alvergar. Otrosí, mandamos que también en las alvergüerías, como fuera dellas, puedan comprar las cosas que hubieren menester, e ninguno no sea osado de les mudar las medidas, ni los pesos derechos por que los otros de la tierra venden, e compran, y el que lo ficiere haya la pena que manda la Ley"* (Concuerta con las leyes II y III, título XXIV, Partida I). Alfonso VI suprime en absoluto en 1072 el portazgo del puerto de Valcárcel (Santa María de Atarés), y Fernando II de León dio en 1180 al arzobispo de Santiago D. Pedro, el burgo de Pontevedra y el castro de Cartovad, como reparación por haber sido hecho presos unos peregrinos.

Juan II dio en 1 de enero de 1434 en Medina del Campo un salvoconducto a los habitantes de Italia, Francia, Alemania, Hungría, Dacia, Suecia, Noruega o cualquier otra nación para ir a Santiago, y los Reyes Católicos expidieron a 16 de enero de 1479 en Guadalupe una carta de seguro a los peregrinos de cualquier país. La Ley I, Título IX del Libro I de las Ordenanzas de Montalvo, dice: *"Que los romeros y*

peregrinos sean seguros. Todos los romeros que anduvieren en nuestros Reynos, mayormente los que fueren y vinieren en romería a Santiago, sean seguros; y les damos y otorgamos nuestro privilegio de seguridad, para que vayan y vengán y estén ellos y sus compañías por todos nuestros Reynos seguros que les no será hecho mal, ni daño. Y defendemos que ninguno sea osado de los hacer fuerza ni mal, no otro daño: e yendo, y viniendo a las dichas romerías puedan seguramente alvergar y posar en mesones y lugares de alverguría y hospitales. E puedan libremente comprar las cosas que huvieren menester; y ninguno sea osado de les mudar las medidas ni pesos derechos; y el que lo ficiere que haya la pena de falso en el título de los falsarios contenida". Semejantes disposiciones encontramos en la Nueva Recopilación (Título XII de Libro I) y en la Novísima (Título XXX del Libro I).

El fuero de Estella de 1164 y el Libro de los fueros de Castiella mandan que si alguien compra una bestia a un romero o comerciante y no pueden presentar "auctor", basta que presente testigos que juren que lo compró de peregrino que llevaba esportilla y bordón.

En relación con los contratos de prenda y fianza, el arzobispo D. Diego Gelmírez prohíbe preñar a los mercaderes, romeros y peregrino, bajo pena del doble de la cosa prendada, excomunión y multa de sesenta sueldos. El fuero de Navarra no permite que el infanzón sea prendado hasta que vuelva de la romería, señalándose el plazo de un mes para la de Santiago, de quince días para la de Rocamador; tres meses para

Roma y Ultramar y un año, y un día para Jerusalén (fuero General, Libro III, Título XV, Cap. XXVII); e iguales plazos para el fiador (Libro III, título XVII, cap. I). En el fuero de Daroca (1142) se fija el plazo de un año para suspender la participación, si alguno de los beneficiarios está en peregrinación.

En 1226 Alfonso IX pone castigos a los mulateros que los engañen sobre las distancias, y recomienda a los vasallos que cumplan el deber de atender a los peregrinos. Las Ordenanzas de Oviedo de 1274 disponen que no se les pongan estorbos.

En los casos de robo, según el Fuero General de Navarra, ponía a los ladrones bajo la jurisdicción real; y si se producía en la posada, podría contender el romero con el pasadero: si vencía el peregrino, el mesonero pagaría el triple al primero y al rey cien sueldos, y en el caso contrario el romero satisfaría al mesonero cien sueldos (Libro V, Título VII, Cap. IV). Las Ordenanzas de Oviedo mandan poner candados en las puertas y preguntar al peregrino si había perdido algo, pues de hacerlo, el huésped respondería de lo perdido. El Fuero Real de España, en la Ley IV, título XXIV del Libro IV dice: *"Si los Alcaldes de los lugares no ficieren emendar a los romeros los tuertos que rescibieren, también de los albergadores como de los otros, luego que los romeros les mostraren la querella, no les ficieren cumplimiento de todo derecho sin ningún alojamiento, peche el daño doblado al romero, e las costas que por aquesto ficiere"*. En iguales términos se expresa la Ley III, Título IX del Libro I de las

Ordenanzas de Montalvo.

El derecho a otorgar testamento está reconocido por los Decretos de Alfonso IX (1226) y Alfonso X (1254) y además en el Fuero Real, cuya Ley II, Título XXIII del Libro IV dice: *"Todo home a quien no es defendido por derecho, ha poder de facer manda de lo suyo; ca ninguna cosa no vale tanto a los homes como ser guardadas sus mandas, e por ende queremos que los romeros, quienquier que sean, e donde quier que vengan, también en sanidad como en enfermedad puedan facer manda de sus cosas según su voluntad, e ninguno no sea osado de embargarlo poco ni mucho: e quien contra esto ficiere, quier en vida del romero, quier después de la muerte, quanto tómelo todo a aquel a quien lo mandó el romero, con las costas, o daños, a bien vista del Alcalde que sobre ello fuere puesto, e peche otro tanto de lo suyo al Rey: e si no tomó nada de lo del romero, más embargó que no ficiere la manda, peche cincuenta maravedís al Rey, y en aquello sea creída la palabra del romero o de sus compañeros que anden con él: e si no hubiese de lo pechar, el cuerpo está a merced del Rey". "Si el romero muriese sin manda, los Alcaldes de la Villa do muriese reciban sus bienes, e cumplan dellos lo que fuere menester a su enterramiento, e lo demás guárdenlo, e fagan saber al Rey y el Rey mande lo que tuviere por bien" (Ley III). "Si los alcaldes de los lugares no ficiesen enmendar a los romeros los tuertos que recibiesen, también de los alvergadores, como de los otros, luego que los romeros les mostrasen la querella, no les ficiesen cumplimiento de todo derecho, sin ningún alongamiento, peche el daño doblado al romero, e las costas que por aquesto fiziere" (Ley IV). La citada Ley II, Título XXIII*

del Libro IV concuerda exactamente con la Ley II, Título IX del Libro I de las Ordenanzas de Montalvo y con la Ley II, Título II del Libro V del mismo cuerpo legal; y la Ley III, Título XXIV del Fuero Real con la Ley III, Título II del Libro V de las referidas Ordenanzas, por lo que nos abstenemos de transcribirlas. La Ley XXVII, Título VIII, Partida V, señala cómo *"los hosteleros e los albergadores deben recibir a los peregrinos e guardar a ellos e a sus cosas"*.

La Ley XXX, título I, Partida VI, fija *"las penas que merecen aquellos que embargan a los peregrinos e romeros, que no puedan hacer testamento"*, que consisten en que no puedan hacer los causantes testamento o manda, debiendo sufrir además escarmiento *"en el cuerpo y en el haber"*, según entienda el juzgador del lugar.

La Ley XXXI del mismo Título indica cómo deben ser puestos en recaudo los bienes de los romeros y peregrinos, cuando mueren sin manda, entregándoselas al obispo, en espera de que aparezcan quienes deben ser sus herederos, a los que se han de entregar los bienes. Si no apareciesen, se aplicará a obras de piedad. Y si algún hostelero hiciese algo en contra, *"lo peche tres doblado"*.

La Ley XXXII, siguiente, manda a los jueces y oficiales del Reino que guarden y amparen a los peregrinos y romeros para que no reciban daño en sus personas ni bienes; así como que si vinieren ante ellos, por razón de sus bienes o sus testamentos, que los atiendan lo primero y

mejor que pudiesen, sin demorar su romería por alargamiento de los pleitos. En el derecho aragonés no está regulada la sucesión del peregrino tan minuciosa y extensamente como en el castellano, pero es aplicable el privilegio dado por Alfonso II a Jaca, en 1187 que dice que si el romero testó, se cumpla su manda; y si no testó, se guarden bien sus caudales durante treinta días, y en el caso de aparecer pariente en este plazo se les den dos tercios del haber, y el resto sea para el alma de la forma que dispongan los hombres buenos y el obispo de Jaca; y si no aparecen parientes, todo se le aplicará al alma.

Dos disposiciones encontramos en las Ordenanzas Reales referentes a los caballos de los peregrinos. La primera es la Ley IV, Título IX del Libro I: *"Que los romeros y los peregrinos puedan sacar palafrenes de los Reynos sin derechos. El rey D. Enrique II en Burgos. El rey D. Juan en Guadalajara (sic). Año de MCCCXC. Gozar deben de mayor privilegio aquellos que trabajo toman por servicio de Dios. Por ende, mandamos que los romeros y peregrinos pueden libremente sacar de fuera de nuestros Reynos y meter en ellos palafrenes, siendo manifesto que no nascieron en nuestros Reynos, y que a la entrada de ellos ni salida les sea tomada cosa alguna"*. La otra es la Ley XVI, Título VIII del Libro VI: *"De los Romeros que metan palafrenes. El rey D. Juan en Guadalajara, Era de MCCCXC. El rey D. Enrique"*. Y reproduce textualmente la otra Ley; mientras que la Ley XV del mismo Título ordena inscribir los caballos que se traigan fuera del reino.

3. Mercaderes. Comercio de ganados. Contratación

Los árabes siguieron la política mercantil internacional de los godos, favoreciendo el comercio mediante la protección de los extranjeros (351).

En el siglo X se empieza a hacer más abierta nuestra Economía, celebrándose mercados a los que acudían negociantes quizá judíos, procedentes de Francia y de Al-Andalus. Llegan a España objetos lujosos: joyas, paños ("mauriscos", "greciscos", de Bizancio, doxtourfes" de Doshtowa, "saías franciscas", de Francia) y esclavos... Utilizaban los mercaderes en sus itinerarios las calzadas romanas ("via antiqua") y caminos de menor importancia ("carraria").

Esta animación mercantil se incrementa en el siglo XI, siendo las principales causas del mismo las Cruzadas y las peregrinaciones, especialmente las de Santiago, que merecieron nuestra atención. Dejando aparte la protección jurídica de los peregrinos, hemos de detenernos a considerar que este motivo abre de manera sin igual en nuestra Historia las puertas del país a los extranjeros, con todas sus consecuencias. Se preocupan los reyes de mejorar los caminos, de crear hospitales y albergues, de dar, en fin, facilidades a los numerosos romeros franceses, italianos, alemanes, ingleses, flamencos, provenzales, gascones, borgoñeses, normandos, etc., que el pueblo conoce con el nombre común de "francos".

(351) Conde y Luque, obra citada, pág. 317.

Crecen las poblaciones, se crean barrios de francos, se colonizan tierras antes yermas...

Junto con los peregrinos vienen los hombres de ciencia que, pasando por Roncesvalles, se establecían en Toledo o en Barcelona: Roberto de Chester, Rodolfo de Brujas, Platón de Tívoli. Fundan monasterios los monjes de Cluny, y con ellos traen el arte románico. La poesía provenzal influye poderosamente en el nacimiento de la lírica nacional; se crea la Escuela de Traductores de Toledo de la que forman parte hombres de todas las razas...

Se llega a las últimas consecuencias con la sustitución del ritual mozárabe por el romano. Podemos afirmar que España estuvo durante siglos abierta a toda clase de extranjeros, con los que estaba unida solamente por el vínculo de la religión.

Santiago y Barcelona se convierten en centros del comercio que, en los siglos XI y XII, se realiza al mismo tiempo por tierra y por mar; las naves que venían, sobre todo, de Pisa y de Génova, a Barcelona, estaban protegidas especialmente por los Condes, de acuerdo con el Usatge "*Omnes quippe naves*".

Empiezan a celebrarse grandes ferias, cuya realización es asegurada por la "paz del mercado", a cargo de los reyes. Alfonso VII concede a Valladolid en 1152 el privilegio de tener una feria en la

Natividad de Nuestra Señora; y en 1153 lo otorga a Sahagún para Pentecostés; esta última duraba tres semanas. En la misma fecha Ramón Berenguer IV hace igual favor a Moyá, en Cataluña.

Alfonso X el Sabio protege a los mercaderes, en atención a los beneficios que sus actividades reportan a la comunidad. A pesar de que en las Cortes de 1252 se les prohíbe que se "*coteen sobre los pueblos, mas que venda cada uno so mester segunt como mejor pudiere*", y que en las de Jerez de 1268 se ponen tasas a las mercaderías, nacionales o extranjeras, la política del Rey Sabio -uno de los monarcas más liberales que tuvo España- es favorable a los extranjeros. Con el fin de evitar los abusos que con ellos se cometían en los portazgos manda en la Ley VIII, Título VII, Partida V, que se les tome juramento y que después de prestado, no se les registre ni se les abran las arquetas. Todo el Título mencionado está dedicado a la protección de los "mercaderes". Confirma, además, los privilegios concedidos por su padre, y aun los acrecienta a las ferias de Baeza, Cuenca y Cáceres, creando la de Murcia. Vivía en Sevilla en esta época una colonia de genoveses tan numerosa que se les instituye un cónsul que juzgaba en sus litigios; aparte de éste, gozaron los de Génova de otros beneficios importantes, que ya disfrutaban desde Fernando III el Santo, entre ellos el de pasar sus géneros por Aduanas especiales sin tener que satisfacer derechos; en esta excepción estaban incluidos también los placentinos.

Se conciertan convenios comerciales con negociantes de Pisa y

Marsella; los lombardos establecieron Bancas en las ciudades más importantes y se especializaron en el descuento de efectos, percibiendo comisiones usurarias. Numerosos individuos oriundos de Plasencia de Lombardía se dedicaban al comercio de joyas, y vivía en los reinos de Castilla una numerosa colonia francesa que vendía paños de Arrás y Abeville, estofas de Montpellier, telas de Reims, encajes de Valenciennes; los alemanes, por su parte, comerciaban en paños de Ratisbona, y los flamencos con la "bruneta" de Yprés, encajes de Brujas, paños de Poperingue y Tournai.

Este estado de cosas continúa en los reinados de Sancho IV el Bravo y Fernando IV el Emplazado. En el del último los genoveses gozaron aún mayor influencia, debido al préstamo que hicieron al rey el cónsul Juan Bibaldo y otros genoveses ricos, por importe de 8.900 doblas de buen oro y justo peso. En las Cortes de Burgos de 1301 se repite que *"en razón de las sacas de las cosas vedadas que non sean escndrinnados nin embargados los mercaderes"*.

Alfonso XI concede un privilegio a los mercaderes de Narbona en 1338 en el que dice que anden salvos y seguros por los reinos de Castilla, que no saquen fuera del reino cosas vedadas sin guía, ni monedas de oro y plata. Podían volver a llevar las "tazas" que habían traído para beber, y al retornar a su país mostrarían al "albalá" de los diezmos de los puertos por donde entraron. Otro documento de la época habla del derecho de la veintena de los paños que pagaban los comerciantes de

Bayona, Génova y Plasencia de Lombardía. En las Cortes de Valladolid (1351), bajo Pedro I, se ordena el pago del diezmo en Logroño.

Con el fin de proteger los paños castellanos, Enrique III el Doliente dicta una ley prohibiendo la entrada de los gascones, navarros y aragoneses, pero su hijo Juan II no confirmó esta disposición, aunque las Cortes de 1491 se lo solicitaron.

En los reinados de los últimos Trastamaras adquieren la máxima importancia las ferias de Medina del Campo; las Cortes de Santa María de Nieva (1476) solicitan protección para los comerciantes que fueren a ellas. Tantas fueron las franquicias concedidas a los mercaderes extranjeros que, entre otras cosas, las Cortes piden que se proteja el vino castellano (Toledo, 1462), y que se impida a los genoveses acaparar el aceite sevillano amparándose en privilegios que les fueron confirmados por Juan II, pero estos deseos de las Cortes no fueron atendidos.

Por lo que toca a la Baja Edad Media en la Corona de Aragón, hemos de notar que los reinos de la misma sostuvieron un activo comercio internacional, que llegaba a Armenia, Asia Menor, Chipre, Rodas, Egipto, hasta que el Pontífice Gregorio X prohibió el comercio con los países del Soldán.

Jaime I el Conquistador no fue en principio favorable a los mercaderes extranjeros, estableciendo en las Cortes de Lérida impuestos

por la importación de algunos productos (Fueros XVIII, XIX, XV, XVI, XX, XXV y XVII); así como a la de determinada procedencia y a mercaderes concretos; sin embargo, en las Cortes de Lérida de 1214 concede su protección "*omnes homines tam domestici quan peregrini mercatores*", ocupándose de mantener la paz en los caminos. Igual decisión adopta en las Cortes de Villafranca de 1218. La Ley XXX aprobada en las Cortes de Montblanc de 1333 por Alfonso IV, dice "*qui mercatores seu sua perisen eorum negotiatores puniantur*". Pedro IV el Ceremonioso renueva los privilegios a los mercaderes, de los que había hasta ocho establecidos permanentemente en Barcelona en 1378.

En el siglo XIV los papas pretendieron aislar al mundo musulmán excomulgando a los cristianos que comerciasen con él, pero no prosperó, pues Jaime II reunió una Junta de Teólogos que estudió favorablemente la posibilidad de comerciar sin incurrir en excomunión (352).

Existen normas de protección a los mercaderes en general (Fueros LXXIV, I y II), y disposiciones de Pedro II, Alfonso II, Fernando II y Martín el Humano, así como de tutela de los de determinada procedencia y a mercaderes concretos.

En el reino de Navarra fue grande la influencia francesa en todos los órdenes, al sucederse en el trono las dinastías de Champaña, los Capetos, Evreux, Foix y Albret, oriundas de aquel país.

(352) V. L. Simó Santonja, obra citada, pág. 18.

Tras contener la Ley I, Título VII de la Partida V, una referencia a que los mercaderes usan de peso o medida, según fuese costumbre en aquella tierra o reino donde morasen, la Ley IV del mismo Título VII dice: *"Cómo los mercados, e sus cosas, deven ser guardados. Las tierras e los lugares, en que usan los mercados a leuar sus mercadurías, son porende más ricas o más abundadas, e mejor pobladas; e por esta razón deue plazer a todos con ellos. Onde mandamos que todos los que vinieren a las ferias de nuestros Reynos, también christianos, como judíos e moros, e otros los que vinieren en otra razón cualquier a nuestro Señorío, maguer non vengán a ferias, que sean saluos e seguros sus cuerpos, e sus aueres, e sus mercadurías, e todas sus cosas, también en mar, como en tierra. E defendemos, que ninguno non sea osado de les facer fuerca, nin tuerto, nin mal ninguno. E si por auentura alguno fiziesse contra esto, robando alguno dellos lo que traxesse, o tomándogelo por la fuerca, si el robo o la fuerca puede ser prouado por prueuas, o por señales ciertas, maguer el mercador non pruese quáles eran las cosas que le robaron, nin quantas: el Juez de aquel lugar do acuesciere el robo deue rescebir la jura dél, catandolo primeramente qué ome es, e que mercaderías suele usar a traer. E éste catando, apreciando la cuantía sobre las cosas que le da la jura, deuele faser entregar de los bienes de los robadores todo quanto jurare que le robaron, con los daños, e los menoscabos quel vinieron por razón de aquella fuerca quel fizieron, faziendo de los robadores aquella justicia que el derecho manda. E si los robadores non pudiesen a faser la enmienda, el Concejo o el Señor, so cuyo Señorío es el lugar do fué hecho el robo, gelo deuen pechar de los suyo", con lo que se*

implanta una auténtica responsabilidad de los mismos, caso de insolvencia de los ladrones.

Por su parte, la Ley II, título XII del Libro VI de las Ordenanzas Reales dice : *"Que los mercaderes que traben mercancías y navíos por la mar non sean prendados".* Establecemos que todos los navíos que vinieren de otras tierras a nuestros Reynos, que trayan mercaderías quier por otro, quier por suyas, non sean prendados por ninguna deudas, que deban a aquellos cuyos son, pues que traen mercaderías o viandas a las nuestros Reynos".

En la Edad Media, los privilegios de ferias y mercados incluyen un "conducto" protector para los mercaderes de cualquier procedencia. Así, en la feria de Sahagún; el rey es protector del mercado, según se recoge en la concesión al obispo de Orense del señorío de la ciudad.

Los fueros municipales también se ocupan en favor de ellos (fuero de Salamanca, Costumbres de Tortosa).

Una Ley de 1480 permitió importar libros de todas clases, y declaró exentos de impuestos a los impresores distinguidos. La situación habría de cambiar radicalmente, por una pragmática de la Princesa Gobernadora el 7 de setiembre de 1558, que prohibió, bajo pena de muerte y pérdida de bienes, tener, vender e importar libros prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición, debiendo quemarse públicamente tales libros (353).

(353) Conde y Luque, obra citada, pág. 357.

La protección de los mercaderes fue una de las materias por la que avanzó la tendencia al buen trato a los extranjeros, ejemplo de lo cual puede ser la Liga Hanseática, creada en la Edad Media para proteger el comercio pacífico, que otorgaba grandes privilegios a los extranjeros, sin excluir la aplicación de su ley personal (354).

Juan II de Castilla en 1449 dijo que *"Es mi merced que todas las personas, así de mis reinos como de fuera de ellos..., que hayan paz conmigo, que vengan con sus mercaderías...a las vender...en mis reinos, y comprar en ellos de las que quisieren, de las que no son defendidas, sean salvos y seguros* (Ley I, Título IV, Libro IX de la Novísima Recopilación).

En cuanto a comercio de ganados, pueden verse las Leyes dictadas por Enrique II en Burgos (1377), confirmadas por Juan I en Guadalajara (1390), y por Enrique III (Nov. IX, XII, I a IV).

Para evitar la usura ("a logro") en contratos celebrados por moros y judíos, se dictan normas por Enrique III (1395), ratificadas por Enrique IV (Toledo, 1462), y por los Reyes Católicos (Madrigal, 1476) (Novísima, XII, XXXII, I a V).

(354) Conde y Luque, ib., pág. 345.

4. Ejercicio de derechos: compra de inmuebles, régimen de bienes en el matrimonio y sucesiones

Por lo que respecta a la compra de inmuebles, la Ley III, Título XXVII, del Ordenamiento de Alcalá (año 1348) que, tras su ratificación por Enrique IV en Córdoba (1455), se integrará en la Novísima Recopilación (III, V, VI) (355) prohibió las donaciones o enajenaciones del Señorío y Jurisdicción de lugares por los Reyes a otros Reyes, o reinos, o personas de otro reino que no sean naturales o moradores en estos reinos; y también las donaciones y enajenaciones hechas por algún "natural nuestro" a alguno no natural de nuestros reinos, lo que provocaría que se perdiese lo así entregado, "y quede en albedrío del rey de la dar la pena que le pareciese por lo haber hecho".

En lo que atañe al régimen de bienes en el matrimonio, cabe apuntar que en materia de donaciones y arras con ocasión del matrimonio, la Ley XXIV, Título XI de la Partida IV prescribe: "*Contece muchas vegadas que, quando casan el marido, la muger que ponen pleyto entre sí, que quando muriere el uno, que herede el otro la donación, o el arra, que dan el uno al otro por casamiento o fazen su auenencia, en que manera ayan lo que ganaren de consumo. E después que son casados acaescem que vienen a morar a otra tierra, en que usan costumbre contraria a aquel pleyto, o de aquella auenencia que ellos pusieron. E porque podía acaescer dubda,*

(355) Está recogida en esta última, pero no en la edición de aquélla de Jordan de Asso y De Manuel, no coinciden siempre.

quando muriesen alguno dellos, si deue ser guardado el pleyto que pusieron entre sí, ante que casasen o quando se casaron, o la costumbre de aquella tierra do se mudaron, porende lo queremos de partir. E dezimos, que el pleyto que ellos pusieron entre sí deue valer en la manera que se auinieron, ante que casassen, o quando casaron; e non deue ser embargado por la costumbre contraria de aquella tierra do fuessen a morar. Esso mismo sería, maguer ellos non pussiesen pleyto entre sí: ca la costumbre de aquella tierra do fizieron el casamiento, deue valer, quanto en las dotes, e en las arras, e en las ganancias que fizieron; e non la de aquel lugar do se cambiaron".

La solución en este caso se busca en la ley que rige donde se celebró el acto, y no por el sitio a donde fueron a vivir los contribuyentes.

Por otro lado, la Ley CCVI de Estilo dice: "*Otrosí, aun por uso algunos lugares do son los mercaderes, porque han lo suyo todo lo más en mueble, y que si las mugieres con quien son casados han heredad, o otras cosas de su matrimonio, o que son suyas en otra manera, y vende el marido con consentimientto de su mugier alguna heredad de las suyas, o si vende todo lo de su muger, había el marido su meytad en todo; y si la muger no consiente que se vendan sus bienes, es así de uso que había el marido la meytad en todos los bienes de la muger, y esto es porque la muger quiere haber la meytad en todo lo que ha de su marido, que lo ha en todo mueble, o lo más; y es así, comunaleza, que haya el marido la meytad en los bienes de la muger".*

Resta por apuntar el régimen sucesorio. En concreto, el derecho a otorgar testamento se encuentra reconocido en la Ley XIII, Título I de la Partida VI: *"Todos aquellos a quien non es defendido por las leyes desde nuestro libro, pueden facer testamento"*. Los extranjeros no quedan exceptuados; aparte de las disposiciones que hemos transcrito sobre peregrinos, las Leyes XXX, XXXI y XXXII del citado Título de la Partida VI, que también tratan de esta materia en el mismo sentido que los otros cuerpos legales y ordenamientos de que ya se hizo mérito.

Había alguna excepción: En la Recopilación de los fueros de Aragón, se lee: *"De mercatores vel alio homine aliene terre, que obit in Aragone. Suus habit hospes haberse unan bestiam, aut suan cabalgaduram aut omnia sua vestimenta, ad libietum hospitis: set totum super plus es dominis Regis"*. Este derecho territorial, que implanta el derecho de "detracción", se modifica en Jaca en favor del extranjero. En general, hay un derecho protector de romeros y peregrinos.

En un privilegio de Alfonso IX se atribuye el mejor traje al albergador y, a falta de testamento, se hacen tres partes con los bienes: para el rey, para el huésped, y para la Iglesia del enterramiento.

En el Libro de los fueros de Castilla una parte de la herencia era para fines piadosos, y un Concilio de 1228 adjudicaba esa parte a los gastos de la guerra contra los moros. Según la glosa de Gregorio López, el peregrino tiene el privilegio de poder otorgar testamento militar.

Referido a los peregrinos, según el Fuero Real (IV, XIV, II, III), que se incorporó a la Novísima Recopilación (I, XXX, II, V) se encargaba del asunto el alcalde del lugar, que lo hacía saber al rey, el cual haría "lo que tuviera por bien".

Como se ve, la tónica general era que no existían restricciones a la "testamentifacio" activa y pasiva de los extranjeros, lo que contrasta con la situación en los demás países europeos era la que muy brevemente vamos a aludir.

Es un hecho significativo que fue bajo la Revolución (finales del siglo XVIII) cuando se suprimió en Francia el derecho de aubana, que correspondía, según las épocas, a los señores feudales, o al rey (356).

El origen de esta regalfía suele situarse en Francia, pero el tratadista del siglo XVI Jean Bacquet (357) dice: "El estatuto conforme al cual los extranjeros no pueden testar, no es derecho peculiar de Francia, sino un derecho común a los Reinos de Escocia, Inglaterra, Nápoles, Sicilia y todo el Imperio de Oriente". Por su parte, Vareilles-Sommières (358) afirma: "En el Derecho antiguo no solamente en

(356) R. Villers, *"La condition des étrangers en France dans les trois derniers siècles de la Monarchie"*, en *"L'Etranger"*, RSJB, IX, 1958, 2, pág. 139 y siguientes. También, C. Jandot Danjou, *"La condition civile de l'étranger dans les trois derniers siècles de la Monarchie"*, Paris, Sirey, 1939.

(357) En su *"Trois premier Traictéz"*, París, S. Nivelles, 1580.

(358) En *"Le synthèse du Droit International privé"*, Tomo I, París, 1898, pág. 33.

Francia, sino puede decirse en toda Europa, los derechos civiles negados a los extranjeros eran los siguientes: el derecho de suceder ab intestato, el derecho de dejar unasucesión ab intestato, el derecho de adquirir por testamento, el derecho de transmitir por el mismo modo". Y en los casos en que se abolía el derecho de aubana, era corriente que por concepto de "detracción" el Fisco retuviese de un veinte a un cincuenta por ciento de las herencias de los extranjeros.

A conclusión parecida se llega respecto de Alemania (359), pues la autoridad fiscal se quedaba con una parte de la herencia, que iba del diez por ciento a la mitad ("*ius detractus*", "*gabella hereditaria*"), según los casos. Cuando el extranjero era el causante, entraba en juego el derecho de los advenedizos ("*ius albinagii*", "*droit d'aubaine*"): la autoridad se quedaba con todo o parte de la herencia, situación contra la que el Emperador Federico II intentó varias medidas ("*Authentica Omnes Peregrini*"). Por otra parte, al extranjero se le señalaba -en el mejor de los casos- un plazo para tomar posesión de la herencia, pasado el cual la perdería; en otros supuestos, se le amonestaba con apremios para que hiciese donaciones piadosas.

(359) H. Thieme: "*Die rechtss telling der Freuden in Deutschland ron 11. bis zum 18. Jahrhundert*", en "*L'Etranger*", RSJB, IX, 1958, 2, pág. 202 y siguientes. También C. Jandot Danjou, en RSJB, citado.; "*La condition civile de l'étranger dans les trois deniers siècles de la Monarchie*", París, Sirey, 1939.

En Bélgica (360) el problema se presenta complejo y con interpretaciones contradictorias en los autores. Lo que no cabe duda es que el derecho de aubana se aplicaba en Hainaut, Flandes y Bravante en la Baja Edad media, y en los tiempos modernos incluso.

Se dice que el rey ejercía el derecho de aubana desde la época carolingia (361) en lo que hoy es Holanda, aunque también es cuestión debatida y plagada de matizaciones.

En fin, la limitación, por activa y por pasiva, se daba en Inglaterra (362) y ha sobrevivido hasta nuestros días en la Isla de Jersey, a la que nos referiremos más adelante.

5. Otros aspectos relevantes (derecho de naufragio y de marca)

Aludiremos, en primer término, a las peculiaridades del naufragio. En esta materia ya la Ley I, Título XXIV del Libro IV del fuero Real dice: "*Si nave, o galea, o otro navío cualquier peligrare, o quebrare, mandamos que el navío, e todas las cosas que en él andaban, sean de*

(360) J. Gillissen, "*Le statut des étrangers en Belgique du XIIIe a XXe siècle*", en "L'Etranger", RSJB, IX, 1958, 2, pág. 231 y siguientes.

(361) R. Feenstra y H. Keompmaker, "*Le statut des étrangers aux Pays-Bas*", en "L'Etranger", RSJB, IX, 1958, 2, pág. 333 y siguientes.

(362) R. Kirpatrick, "*Le statut des étrangers en droit anglais au cours des derniers siècles*", en "L'Etranger", RSJB, IX, 1958, 2, pág. 451, y sts.

aquellos cuyas eran antes que el navío quebrase: e ninguno sea osado de tomar ninguna cosa dellas sin mandado de sus dueños, fuera si las tomare para guardar, e darlas a sus dueños; y ante que las tome de esta guisa, llame al alcalde del lugar, si lo haber pudiere, y otros omnes buenos, y escribanlas, e guárdenlas todas por escripto, e por cuenta, e de otra guisa no sean osados de las tomar: e quien de otra manera las tomare, péchelas como de furto: eso mismo sea de las cosas que fuesen echadas del navío para aliviar, o cayere, e se perdieren por alguna guisa".

Concuerta esta Ley con la VII, Título IX de la Partida V, basada también en el respeto de la propiedad, para evitar los abusos: "*Cómo las cosas que son falladas en la ribera de la mar que sean de pecios de nauios, o de echamiento, deuen ser tomadas a sus dueños. Miedo de muerte mueue a los mercaderos, e a los otros omnes, a echar sus mercancías en la mar, quando han tormenta, con evitación de aliuar las naves, porque puedan estorcer de peligro: e porende tenemos por bien, e mandamos, que todas las cosas que assi fuessen echadas, que quien que las falle, que sea tenuto de las dar a aquellos cuyas fueren, o a sus herederos. Esso mismo dezimos que deue ser guardado, si acaesciere que la naue se quebrantase por tormenta, o de otra manera; que todo quanto pudiese ser fallado della, o de las cosas que eran en enlla, o quier que lo fallsen, que deue ser de aquellos que lo perdieron; e defendemos, que ningún ome non gelo pueda embargar, que lo non hagan; magüer oviesse peruillejo, o costumbre usada, que tales cosas como éstas, que aportassen a algún puerto suyo, o que fuesen falladas cerca de algund castiello, o en ribera de la mar, que deuen ser suyas nin por otra*

razón que ser pueda: ca non tenemos por derecho, que las cosas que los omes pierden por ocasión de tal malandan a, que las pueda ninguno tomar, por costumbre, nin por priuillejo que aya; fueras ende, si tales cosas fuessen de los enemigos del rey, o del reyno; ca entonce, quien quier que las falle, deuen ser suyas".

Y la Ley XI, del Título IX, de la Partida V castiga a los pescadores que hacen señales de fuego cerca de la ribera del mar "*por fazerlos quebrantar*" (los navíos), dañina práctica que debió ser frecuente, puesto que provocó se tomase esta medida disuasoria.

Vemos, pues, que no se aplicaron nunca en España los derechos de aubana y de naufragio, tan generalizados en el resto de Europa, según Bacquet, de quien ya se hizo mención, debiendo notarse, como observa Rodríguez Ramón, que no está incluida España entre los países en que dice se realizaba esta dura práctica; como tampoco no la cita Vilpicella en su tratado sobre la materia. Confirma esto la tesis de Weiss de que "desde hace mucho tiempo la legislación española acerca de los extranjeros ha sido favorable a éstos... El derecho de aubana no fue aplicado nunca en España". La prohibición del derecho de naufragio se encuentra en los Fueros valencianos (363).

Junto al supuesto referido resulta aconsejable una referencia, siquiera sea muy somera, a una curiosa institución, el derecho de marca.

(363) V. L. Simó Santonja, obra citada, pág. 27.

Se trata de la facultad que el rey concede a sus súbditos de ejercitar determinados actos de violencia contra los bienes de los extranjeros, para compensarles de los daños que han recibido de los connacionales de éstos, llegando incluso al bloqueo de bienes y expulsión (actos de piratería, fraudes en el comercio, incumplimiento de contratos, sentencias de los tribunales extranjeros que se consideran injustas...). Según el profesor Gibert, los reyes han accedido a esta práctica con repugnancia, aunque quedan rastros de esta institución en la Corona de Aragón, y llega a convertirse en una creación del Derecho de gentes, a la que aluden Vitoria y Lessins (364). Entre Sancho IV de Castilla y el rey de Inglaterra se celebró un tratado sobre marcas, con indicación de los trámites precisos.

Por último, aludiremos a los denominados "Convenios de hospitalidad". En 1285, entre Pedro III de Aragón y el Rey de Túnez se estableció un tratado de paz y amistad, en el que se declaraba una recíproca seguridad de personas y bienes, liberación de "ius naufragii" y establecimiento del derecho a ser oídos en Justicia. Aragón celebró más tratados de esta clase con países musulmanes del Norte de Africa.

En la Edad Media León y Zamora aparecen como "fíbula compulati" y también Plasencia y Escalona establecen un pacto de reciprocidad para demandar Justicia.

(364) V. L. Simó Santonja, obra citada, pág. 25, y cita casos autorizados por Jaime I (1273), Pedro II (1280) y Alfonso III (1286).

El extranjero amparado por un huésped gozaba de protección (fueros de Madrid y Ledesma).

El comercio puede ser causa de estos hermanamientos entre ciudades: Santander, Laredo, etc., con Bayona y también con Portugal, Egipto y Barcelona (1436).

II. DERECHO PUBLICO

1. Aspectos penales

En esta materia de la territorialidad de las leyes penales, la Ley I, Título I del Libro II del fuero Real de España dice: *"Todo home que se mudare so algún señorio, y hiciere y algún hecho malo, por que debe haber pena de su cuerpo o de su haber; y pasare a morar a otro señorio, allí responda, y allí tome juicio ante aquel Alcalde, en cuya tierra fue el fecho; y no se pueda escusar porque fue a morar a otro lugar"*.

La tónica general en los fueros municipales es que los delitos cometidos por el extranjero son penados con más dureza que los realizados por el vecino, del mismo modo que las penas impuestas a éste por delitos de los que es víctima el forastero son también menores (fueros de Madrid, Alcalá, etc.).

En el fuero de Cuenca, tan difundido, el extranjero está totalmente indefenso: si es hallado labrando en el término puede ser muerto impunemente.

En otros fueros hay una mayor protección penal del forastero: así el de Viguera y Val de Funes, mediante el reenvío al fuero de la víctima, y el de Brihuega, mediante la reciprocidad.

Al lado de la territorialidad de la ley penal se encuentran precedentes directos del instituto de la extradición. En concreto, para Conde y Luque (365), en el título XXIX de la Partida VII se encuentra el procedimiento para establecer la extradición. La Ley I (*"cómo deben ser recabados los presos, y por cuyo mandato"*) dice el juez ordinario ante quien fue hecha la acusación del delito, debe enviar *"su carta al juzgador del lugar do lo fallaren, que lo recabden, e lo envien ante él para facer derecho del yerro de que fuese acusado"*; y el juzgador del lugar donde fuese hallado el malhechor después que recibiese la carta, debe enviarlo (aunque no quiera)".

Sin embargo, parece que lo que se regula en este título es la competencia para juzgar a los malhechores que estén dentro del reino, pero no para reclamarlos a otros reinos.

En el mismo sentido, acordaron Alfonso XI en Segovia (1.347)

(365) Obra citada, pág. 368.

y Juan I en Valladolid, lo que pasó a la Novísima Recopilación (XII, XVI, I).

En 1360 se establece un tratado entre Pedro I de Castilla y Pedro I de Portugal, para la entrega de los caballeros que cuatro años antes habían dado muerte a D^a Inés de Castro en Coimbra, lo que puede considerarse como el primer convenio de extradición que se produce en la Península Ibérica, aunque no cabe desconocer la transcendencia política del delito, que había sido cometido siguiendo órdenes de Alfonso IV de Portugal (366).

Los Reyes Católicos, por pragmática de 20 de marzo de 1499 (Novísima, XII, XXXVI, III) sancionan un "asiento" de España con Portugal sobre entrega de los delincuentes fugitivos de un reino a otro, en el que se recoge la entrega de los propios nacionales para ser castigados en el otro Estado donde delinquieron. Destaca Tomás Ortiz de la Torre (367), la opinión de Quintano Ripollés, de que "este texto responde ya a otros criterios menos personales y más acordes con el actual sentir en torno a la institución (de la tradición)".

(366) J. A. Tomás Ortiz de la Torre, *"El régimen jurídico de la extranjería en el siglo XVIII y la participación del extranjero en la industria nacional"*; tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1972, pág. 18.

(367) Obra citada, pág. 23.

2. Aspectos tributarios y monetarios

En orden al pago de tributos, encontramos la ley VI, título IV del Libro VII, en contradicción con aquélla de las Ordenanzas Reales de Castilla, recopiladas por el Dr. Alonso Díaz de Montalvo (368): "*Que los estrangeros que viniesen a vivir al Reyno, sean excusados por diez años.*- El rey D. Enrique II (sic) en Toro.- *Nuestra merced y voluntad es que se guarde lo que nuestro progenitor el rey D. Juan I ordenó en las Cortes que hizo en Segovia. Y eso mesmo lo que cerca de las monedas dispone la Ley de Quaderno que dice, que aquellos que fuesen estrangeros, y se vinieron de nuevo a vivir a los nuestros reynos de Castilla, que por diez años sean exceptos y francos de todo pecho y tributo real, y de concejo, y de monedas. Pero si acaesciere que alguno en fraude de las dichas nuestras rentas y pechos y derchos, por otra cualquier manera se fueren de nuestros reynos, y señoría, y estuvieren fuera dellos por espacio de tres años, y más tiempo, que aunque tornen a ellos, no gozen del dicho privilegio. Porque acaesce que algunos caballeros prometen exemptiones de los pechos a los que fueren a vivir a sus tierras de señoría; mandamos que no gozen de las tales exemptiones, según se contiene en este libro, en el título de los exemptos.*- Ordenamos y mandamos que las personas que tuvieran bienes en las ciudades y villas y lugares de nuestros reynos, y se fuesen a vivir y a morar, que pechen por los bienes que dexaren, según se contiene en este libro en título de los exemptos".

No puede ser más significativo que esta Ley no pasó ni a la Nueva

(368) Glosadas por el Dr. Diego Pérez, Madrid, 1777.

ni a la Novísima Recopilaciones.

Existen también referencias concretas a la defensa de la moneda. En concreto, la prohibición de sacar moneda, oro y plata en vajilla a los extranjeros fue establecida por Juan I y Enrique III en sus cuadernos de Guadalajara; Fernando e Isabel en Toledo (1488) y Granada (1501) (Novísima, IX, XIII, I).

La Ley II de dicho Título es de Juan II en Valladolid (1442), reiterada por Carlos I allí (1523), sobre prohibición de extraer moneda para la Corte del Santo Padre ni otras partes; la Ley V es de Juan I en Palencia (1388), los Reyes Católicos en Madrigal (1476), reiterado por Carlos I en Madrid (1528) sobre dichas prohibiciones; la Ley VI de Enrique II en Burgos (1377), Juan I en Guadalajara (1390), los Reyes Católicos en Toledo (1480) y Murcia (1488) se refiere al modo en que debe y puede sacar moneda fuera del reino a entender en sus negocios; la Ley VII es también de Enrique I en Burgos (1377), en el mismo sentido, al igual que la VIII de los Reyes Católicos en la vega de Granada (1491), en Zaragoza (1498), Alcalá (1503), reiterada por Carlos I en Madrid (1534) y Felipe IV en Madrid (1631) y la Ley IX se ocupa de que no se lleve dinero de las provincias Vascongadas a la raya de Francia y Gascuña para comprar géneros. Todo ello pone de manifiesto una enorme preocupación de tipo mercantilista y proteccionista en esta materia. Los títulos XIV y XV se ocupan de reglamentar la extracción de ganado caballar y mulas, y de ganado en general, granos y aceites. El

XV de la seda y lana, etc., y arrancan de Enrique II en Burgos (1377), pasando por los demás Trastamaras hasta adentrarse en la Edad Moderna. En tal sentido, Enrique IV, en Madrid (1468), con referencia a Guipúzcoa, se compromete a que ninguna parte de ella pueda ser enajenada de la Corona real, ni pueda tener en ella extranjero alguno maravedís situados en esa provincia (369).

3. Prohibición de ejercer cargos públicos

En el ámbito local, la regla básica es que sólo los vecinos pueden ejercer los cargos de Justicia y Gobierno. Por el contrario, los oficiales del rey en la ciudad pueden ser extraños a ella, y -en concreto- los corregidores deben serlo. En cambio, en muchos casos los reyes son extranjeros, por el advenimiento de dinastías foráneas, aunque emparentadas con los antiguos reyes y herederas de ellos. En estos casos, aparecen Ministros extranjeros, que son rechazados por los nacionales.

En el Fuero General de Navarra se sienta (I, I, I) que, cuando obtuviera la Corona un extranjero, no podría traer consigo más de cinco extranjeros para darles baillías u otros oficios (id. en "Fueros del Reino

(369) "Nueva Recopilación de los fueros, privilegios, buenos usos y costumbres, leyes y órdenes de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa", reimpresa en Tolosa por Andrés de Gorosabel, año 1867, pág. II, VI, pág. 24. Fue publicada por primera vez en 1696, por orden de Carlos II, y confirmada por Felipe V en 1702.

de Navarra desde su creación hasta su feliz unión con el de Castilla" (Chavier, 1, 7, 4); ni a los vascos ni a los franceses. Se afirma por Häbler que el antecedente está en un acuerdo tomado en Aragón en 1137, cuando este reino empezó a ser gobernado por el conde de Barcelona, y que se utilizó en Navarra en 1234 en situación análoga, con el advenimiento de Teobaldo I. Dentro de la Corona de Aragón este criterio se ha mantenido con rigidez, pero concebido el territorio como una unidad: una constitución catalana ("*Constitutions e altres drets de Cathalunya*", 1, 68, 10, 13) fijó que si Aragón no derogaba en el término de un año el fuero que prohibía a los extranjeros los oficios públicos, los aragoneses serían privados de los mismos en Cataluña. Las Cortes de Zaragoza obtuvieron del rey que los aragoneses ocupasen determinadas plazas en los Consejos centrales y territoriales de la Corona; se reconoció el derecho del rey a nombrar a naturales o extranjeros para los cargos públicos, pero se exigió que un aragonés fuese designado para alguno de los virreinos u otros cargos. El incumplimiento por el rey sería contrafuero. Tales aragoneses deberían ser naturales, no naturalizados. Las Cortes de Barcelona de 1493 revocaron la Constitución hecha en Monzón, por la que se negaba el goce de oficios en Cataluña (370). Juan II en Madrid (1419), Tordesillas (1420) y Palenzuela (1425) reservó la provisión de oficios perpetuos en naturales o vecinos (Novísima Recopilación, VII, V, II).

En Valencia, Juan I el Cazador prohibió en Montesa que

(370) M. Arjona Colomo, obra citada, pág. 410.

determinados cargos (Gobernador, Portantbeus, Bayle, Alcalde) no podían ser desempeñados por quien no fuera originario, domiciliado o heredado, lo que se complementa por Alfonso V (1417) con la determinación de exigir en cuanto a habitantes y heredados una residencia mínima de diez años, con la sola excepción de los naturales o habitantes de Aragón y Cataluña. En los "Fueros, observancias y actos de corte del reino de Aragón" (371), se recoge el acuerdo de 1423 de que los extraños al reino no puedan tener oficio público en él (Juan II lo reitera -1461 y 1469-, e igual ocurrirá en las Cortes de Zaragoza de 1642).

4. Documentación requerida

Los salvoconductos son librados a favor de extranjeros concretos, dirigidos a los súbditos y oficiales del reino, para comunicarles el "guiaije", que comprende al extranjero, sus sirvientes y acompañantes. Se asegura a las personas, los bienes, el libre tránsito, la habitación y el comercio. El salvoconducto podrá ser renovado pero, con un plazo suficiente, estaba puesto bajo la "*regiam fidem publicam*", y se expedía aunque fuese innecesario por existir paz entre los príncipes "*per maior cautela et abundamente*".

La Ley XXXVI, Título XII, Libro IV del Espéculo, confirmada por la Ley XVIII, Título XVIII, de la Partida III, habla de las "*cartas de*

(371) Publicados por P. Salvall y S. Penén, 2 tomos, Zaragoza, 1866.

encomienda e defendimiento" a los "omes de otros Regnos", para que anden salvos y seguros por todas las partes de su reino, con mercaderías y todo lo que trajeren, dando sus derechos donde los tuvieren que dar, y no sacando cosas vedadas del reino, para que ninguno sea osado de hacerle "tuerto ni fuerza, ni demás, ni de contrallarle ni de prenderle", si no fuere por su deuda misma, o por fianza que él hubiere hecho.

En lo que atañe a los embajadores, en el Código de las Partidas (VII, XXV, IX) se concede seguro a los enviados que vengan a la Corte, aunque sean moros y aunque vengan de tierra de enemigos, sin que puedan ser demandados por deudas contraídas con los de su propia tierra, antes de venir al Reino (lo que figuraría en la Novísima Recopilación, III, IX, VI).

5. Relaciones Iglesia-Estado

Durante los siglos VIII al XI la confusión de poderes se acentúa, si bien no repercuten en España los problemas de la guerra de las "investiduras".

En el siglo XII, los Reyes de las diferentes monarquías españolas aceptan las ideas de Gregorio VII sobre la supremacía de la Iglesia; en algunos casos se denominan "caballeros de San Pedro", enfeudan su reino a la Santa Sede (Portugal, en 1144; Aragón, en 1204); y se obligan a una

ayuda recíproca y al pago de tributos a la Iglesia.

Más adelante las relaciones se complican, pues en el caso de Aragón, éste pretende romper esa relación, y la intervención de Pedro III el Grande en Sicilia provoca su excomunión, hasta el punto de que el papa ofrece el reino a quien quiera conquistarlo, lo que no sucede.

Acerca de la elección de obispos, desde fines del siglo XIII, en Castilla y Aragón el nombramiento es hecho por el papa, a ruego del rey, mientras que antes los cabildos tenían mayor intervención. En relación con el tema de este estudio debe destacarse que son nombrados con frecuencia extranjeros, absentistas de sus sedes, de las que se limitan a percibir las rentas con las consiguientes quejas.

Un aspecto muy importante de esta materia es el denominado "Real Patronato de los Reyes de Castilla en todas las Iglesias de estos reynos y modo de entender en la elección de los Prelados". Así, la Ley I del Título XVII, Libro I de la Novísima Recopilación (que coincide -según ella- con el Auto I, Título VI, Libro I, de la Nueva Recopilación), recoge la Ley III, Título III y la Ley II, Título VI del Libro I, del Ordenamiento de Alcalá de Alfonso XI (año 1348), que literalmente dice:

"Costumbre antigua es en España, que los Reyes de Castilla consientan las elecciones que se han de hacer de los Obispos y

Perlados, porque los Reyes son Patrones de la Iglesia: y costumbre antigua fue siempre, y es guardada en España, que quando algún Perlado o Obispo finare, que los Canónigos e otros cualesquier, á quienes de Derecho y costumbre pertenece la elección, deben luego hacer saber al Rey por mensagero cierto la muerte de tal Perlado ó Obispo que finó; e antes de esto no puedan, ni deben elegir el tal Perlado ó Obispo: e otrosí, desde el tal Prelado ó Obispo que fuere elegido como debe, y confirmado, fué y es costumbre antigua, que antes que haya de aprehender posesión de la Iglesia, deben venir por sus personas a hacer reverencia al Rey: y por esto rogamos y mandamos a todos los Arzobispos e Obispos, e otros Perlados qualesquier, e a todos los Cabildos de las Iglesias catedrales, que agora son, y serán de aquí adelante, que guarden a Nos, e a los Reyes que después de Nos vinieren, la dicha costumbre y derechos que en esta razón tenemos; y que no sean osados de atentar ni hacer las tales elecciones, sin que primeramente nos lo hagan saber, y Nos sobre ellos veamos y proveamos como cumple a nuestro servicio: e si en otra manera lo hiciesen, y lo susodicho no guardasen, habríamos por ningunas las tales elecciones, y procederemos sobre ello como cumple a nuestro servicio, porque el nuestro derecho sea siempre conocido y guardado".

No obstante, en la edición del Ordenamiento de Alcalá publicado por Ignacio Jordán de Asso y del Río, y Miguel de Manuel y Rodríguez (372), tales leyes no coinciden en absoluto con la materia referida, lo que haría sospechar que sea una superchería de la Novísima Recopilación, si fuese ésta la única discordancia entre ésta y dicha edición del Ordenamiento. Unicamente en la Ley LVIII del Título XXXII (en tal edición no aparecen Libros) se dice que es costumbre antigua que, cuando muriese algún obispo, los canónigos o los otros a los que en

(372) J. Ibarra, Madrid, 1774.

Derecho y costumbre pertenece la elección, deben hacer saber la muerte al rey, para que, después de confirmado y consagrado, antes de tomar posesión, vaya a hacer reverencia al rey. En nota a pie de página (373), los comentaristas citados aluden a que Alfonso XI tomó parte en cubrir las vacantes de León y Toledo; así como que las Cortes de Madrigal (1476) y de Toledo (1480) establecieron esta regalía, confirmada por Adriano VI en bula de 1523. La cita de la Nueva Recopilación se refiere al Patronato y recoge una disposición de Felipe II de 1565.

Aparece en Castilla (en la segunda mitad del siglo XIII) y en Aragón (en la primera del XV) la institución del "pase regio", en cuya virtud los reyes prohibían la publicación de las bulas pontificias que no estimaban convenientes. Por otro lado, en Cataluña se prohíbe la aplicación del Derecho canónico y del romano en los Tribunales Civiles.

A título incidental se impone una referencia somera a los denominados "Matrimonios regios con impedimento". En el terreno disciplinario, si leemos -por ejemplo- las "Memorias de las Reinas Católicas de España", del P. Enrique Flórez de Setién, vemos cómo las personas reales contraían matrimonio, a pesar del impedimento de consanguinidad, y sin esperar a que llegase la dispensa, lo que unas veces sucedía y otras no. En el primer caso, se puede citar a los propios Reyes Católicos, que estaban vinculados entre sí, como descendientes de la misma casa de Trastámara.

(373) 140-141.

Dentro del capítulo de las relaciones Iglesia-Estado, pasamos a ocuparnos de unas leyes de tono restrictivo referentes a beneficios eclesiásticos a que ya antes hicimos referencia. La Ley XVIII, Título III del Libro I de las Ordenanzas Reales de Castilla (Montalvo) dice: "D. Enrique II en Burgos. Año de MCCCCLXXV. El rey D. Juan I en Burgos, a Era de MCCCCI. D. Enrique IV en Santa María de Nieva, año de 1476. D. Fernando y Doña Isabel en Madrigal y en Toledo, 1480. *-Porque antiguamente, por los reyes nuestros progenitores, fue ordenado en Cortes, que ningún extranjero que no fuese natural de nuestros reynos y señoríos, no pudiese haver prelacías, ni beneficios en las Iglesias de los dichos nuestros reynos, y sobre ello hovieron supplicado a Nuestro Sancto Padre. Y nos viendo la dicha ordenanza ser justa y provechosa a nuestros Reynos: así porque los dichos extranjeros nos serbirían a las Iglesias por sí mesmo como debían, y se perdería la devoción de los naturales del Reyno. E otrosí porque se sacaría de cada día mucho oro y moneda de las rentas de las dichas prelacías y beneficios fuera de nuestros Reynos: de que se seguirían grandes carestías y daños en ellos. Por ende, nos confirmamos y aprovamos las dichas Leyes: y otorgamos suplicación para nuestro Sancto Padre: para que plega a su Sanctidad de no proveer los Obispados, ni otras Dignidades ni Beneficios Eclesiásticos a personas extrangeras, que no sean naturales de nuestros Reynos: pues que en ellos ay muchas personas idóneas, buenas, letradas y pertenescients para las tales prelacías y beneficios. Y pues que esto es servicio de Dios y de la Sancta Iglesia y honra de nuestros Reynos, pero que si tubieren privilegios de naturaleza, que puedan haver los tales beneficios*".

Por su parte, la Ley XIX, Título III del Libro I (El rey Enrique IV en Ocaña, año de MCCCCLXX. El Rey y la Reyna en Madrigal) revoca las cartas de naturaleza dadas a los extranjeros. Esta curiosa y extensa disposición fundamenta la exclusión de los extranjeros de los beneficios eclesiásticos, como privilegio merecido por los reyes españoles por su lucha contra los árabes y, al mismo tiempo, por haber en estos Reinos personas dignas, hábiles y merecedoras por ciencias y cirtud de aquéllos.

"...E otrosí reciben en sus casas por sus familias y servidores muchos hombres menesterosos, y críanse en sus casas y házense en ello hombres muchos huérfanos, y ponen al estudio a sus parientes, y casan parientas y otras personas pobres: de lo qual todo no gozan nuestros naturales, quando los beneficios Eclesiásticos de nuestros reynos se dan a los estrangeros".

"...Sácanse para ellos moneda de oro de nuestros reynos, en grandísimo daño y pobreza dellos. "Crece este desorden, de forma que no hay cardenales españoles cerca del papa, por lo que "Revocamos...qualesquier cartas de naturaleza que fasta aquí haremos dado a qualesquier personas ...que verdaderamente no son nuestros súbditos y naturales, por donde les havemos dado facultad para haver dignidades, o qualesquier beneficios eclesiásticos en nuestros Reynos; y las que sobre ello diéremos a qualesquier estrangeros".

Señalan una excepción: *"quando por alguna muy justa y evidente causa debiéremos dar la tal carta de naturaleza...averiguada por los Grandes y Perlados y las otras personas que con nos residieren en el nuestro Consejo".*

De todo ello mandan noticia al Papa, suplicándole la revocación de las cartas de naturaleza y la provisión de los beneficios por los naturales.

III. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

Como dice M. Torres Campos (374), las Partidas contienen las primeras disposiciones de Derecho internacional privado, aunque muy vagas. Ordena una Ley que los que son del señorío de legislador deben obedecer sus leyes, y también los de otro que pleiteasen, o contratasen o delinquieren en él; que no tenga fuerza de prueba la ley o fuero de otra tierra, salvo en cuestiones entre hombres de ella sobre pleito o contrato que hubiere tenido lugar allí, o en razón o cosa mueble o inmueble en aquel lugar situada. En cuanto al régimen de los bienes en el matrimonio, debe preferirse la costumbre del lugar donde se contrae, a la de la tierra donde se trasladan después los cónyuges.

Encontramos en las Siete Partidas dos disposiciones que demuestran que a los extranjeros no les estaba vedada la facultad de pedir que se les administrase Justicia. La Ley II, Título I de la Partida VII dice: "*Quién puede acusar. Acusar puede todo omne que non es defendido por las leyes de nuestro libro*". Sin que en la larga lista de impedidos de acusar aparezcan los extranjeros. Por su parte, la Ley II, título XXIV de la Partida III dice: "*Puede pedir merced todo ome que fuere libre*".

Ley XV, título I de la Partida I decía: "*Todos aquellos que son del*

(374) "*Elementos de Derecho Internacional Privado*", 2ª edición, Madrid, 1893. pág. 41.

señorío del facedor de las leyes, sobre las que él pone, son tenudos de las obedescer a guardar, e juzgarse por ellas, e no por otro escrito de otra ley fecha en ninguna manera: e el que la ley face es tenuto de la facer complir. E eso mismo decimos de los otros que fueren de otro señorío, que ficieren el pleyto, o postura, o yerro en la tierra do se juzgare por las leyes: ca maguer sean de otro lugar non pueden ser escusados de estar a mandamiento dellas, pues que el yerro ficeron onde ellas han poder: e aunque sean de otro señorío, non pueden ser excusados de se juzgar por las leyes de aquel señorío, en cuyas tierra oviesen fecho alguna destas cosas. E si por ventura ellos fueren rebeldes que non lo quisieren facer de su voluntad, los jueces o justicias los deben constreñir por premiar que lo fagan, así como las leyes deste nuestro libro mandan. Otrosí decimos que está bien al facedor de las leyes en querer vivir según las leyes, como quier que por premia non sea tenido de lo facer".

El excesivo territorialismo de esta ley está atenuado por la interesante Ley XV, Título XIV de la Partida III: "...E si por aventura alegase ley, o fuero de otra tierra, que fuere de fuera de nuestro señorío, mandamos que en nuestra tierra non haya fuerza de prueba; fueras ende en contiendas que fuessen entre omes de aquella tierra, sobre pleyto o postura que oubiesen fecho en ella, o en razón de alguna cosa mueble o rayz de aquel lugar". "La entonce magüer estraños contendiessen sobre aquellas cosas antel juez de nuestro Señorío bien pueden recibir la prueba, o ley o el fuero de aquella tierra que alegase antel que deve se por ella averiguar e deliberar el pleyto." Como se ve, las ideas estatutarias tuvieron muy escaso efecto en

nuestros ordenamientos jurídicos, al contrario que en Italia y en otros lugares de Europa (375). Ver, más adelante, pág. 360.

El "Usatge" 136 (376) dispuso que los forasteros que litigasen debían ser atendidos inmediatamente y preferidos a cualquier otro en el despacho de sus negocios.

La Ley I, del Título V del Libro II del Fuero Real dice qué días son feriados, en los que nadie puede ser "*costreñido de entrar en pleito...si non fuer pleito de morador fuera de nuestros regnos*", lo que Conde y Luque (377) interpreta como una prueba de consideración al extranjero, y que realmente no aparece tan claro, pues se incluye al mismo tiempo el supuesto de "*...si non fuer ladrón o mal fechor de quien se deba a facer*".

Las limitaciones a la capacidad procesal del "extranjero local" provienen de la necesidad de estar arraigado. El Código de Tortosa ordena que el extranjero demandante preste una fianza especial. Por el contrario, contra los extranjeros se pueden tomar prendas, exceptuados los "*prohomes*" de otra ciudad (3, 1, 31; 1, 6, 2). La incapacidad procesal

(375) Véase, por todas, la obra de C. Storti Storch, "*Richerche sulla condizione giurídica dello straniero in Italia dal tardo Diritto comme all'eta preusitaria. Aspetti civilistici*". Dr. A. Giuffrè Editore, Milán 1990.

(376) F. Valls Taberner, "*Los Usatges de Barcelona*", estudios, comentarios y edición bilingüe (latín-catalán). Departamento de Historia del Derecho de Málaga, Promociones Publicaciones Universitarias de Barcelona, 1984.

(377) Obra citada, pág. 336.



del extranjero se confunde con la del que no tiene casa en la villa (fuero de Teruel, 135, 143) (378).

En principio, los fueros locales desconocen al forastero, o no le reconocen derechos. Este exclusionismo se ha superado en el fuero de Viguera (1199): "*Et los omes albarranos que ovien entre si pleyto deles en juycio le juez como a sus vecinos faría*". La prueba de testigos suele estar vinculada a la vecindad. En el fuero de Viguera (379), incluso el señor de la villa debe cumplir el requisito de la vecindad para probar contra un vecino.

El fuero de Logroño (380) exige que los testigos del forastero sean de la villa. El de Arguedas sigue una regla más generalizado: que un testigo sea de fuera y otro de la villa. Existió un procedimiento sumario en favor de los extranjeros si son comerciantes, recogido en un documento del rey de Aragón. Cuando el extranjero demanda al nacional, debe hacerlo ante el Tribunal de éste, según otro documento análogo.

Al abordar esta materia, Conde y Luque (381) opina que la

(378) Publicado por M. Gorosch, *Leges Hispanicae, Medii Aevi*, Stockolm, 1950.

(379) *Fuero de Viguera y Val de Funes*, edición crítica por J. M^a Ramos y Loscertales, Universidad de Salamanca, 1956.

(380) T. Muñoz y Romero, obra citada, I, pág. 334.

(381) Obra citada, pág. 329.

igualdad jurídica entre extranjeros y nacionales se relevaba en la Administración de Justicia, sobre todo en Castilla, ante los jueces territoriales nombrados por los señores que decidían los pleitos civiles y penales, mientras que los reyes se reservaban las apelaciones y también decidían los conflictos que surgían entre unos y otros señoríos.

En lo que atañe a la transmisión de ciudades, villas, lugares y heredades a extranjeros, el Ordenamiento de Alcalá, Ley III, Título XVII (382), tras referirse a las donaciones a los vasallos, naturales del reino y moradores en él (lo que excluye a los de fuera) sienta: *"...Et declaramos que lo que se dice en las Partidas, o en los fueros, fue así ordenado en algunos Ordenamientos de Cortes, que aunque estas cosas sean nombradas en el privilegio de la donación, que non valen, o que non duren sino en la vida del rey, que le dio; que se entiende, e ha lugar en las donaciones e enajenaciones que el rey face a otro rey o regno, o persona de otro regno, que non fuere natural, o morador en su sennorio, ca tal donación, nin otro enajenamiento de cualquier manera que sea, porque se tomaría en grant danno e mengua del regno, non lo puede fa er el rey, u otro alguno de su sennorio, e si lo ficiere, non vale, nin deba durar, nin es tenudo el rey que lo fi o, nin sus herederos, nin el regno a lo guardar, nin consentir a otro de su sennorio que lo faga"*.

Por último, resulta de interés apuntar que se prohíben las represalias en personas y mercancías de fuera del reino por deudas que

(382) Edición de Jordán de Asso y De Manuel, pág. 66.

no fuesen a favor del rey o señor o dueño de la tierra (Ley II, Título XVIII del Ordenamiento de Alcalá (383), confirmado en Madrigal por los Reyes Católicos (Novísima, XI, XXXI, XI).

A su vez, también se decretó la inembargabilidad de los navíos por deudas de fletes u otras de las tierras de donde son, de otras tierras, u otros reinos, que venga a traer mercaderías, de los mercaderes, según Ley LI, título XXXII de dicho Ordenamiento (384), confirmado por Pedro I (Valladolid, 1351), y Enrique IV (Salamanca, 1465) (Novísima, XI, XXXI, IV).

IV. SITUACIONES ESPECIALES.

1. Aspectos generales

Se ocupa el Profesor Gibert de los extranjeros calificados: mercaderes, romeros y peregrinos, embajadores, personas con protección especial del Rey; derivada de relaciones internacionales: por hospitalidad local; en favor de los comerciantes, tratados de paz.

Pero, ante todo, debemos referirnos al personalismo de las leyes,

(383) Id., pág. 29.

(384) Ib., pág. 136.

que lleva a casos tan complejos como el de Toledo, en el que, después de conquistada, regían cinco derechos: el Fuero Juzgo para los mozárabes, el Derecho de Castilla para los conquistadores, el de los francos, el Corán para los moros, y el Talmud para los judíos.

Más arriba nos hemos hecho eco de las discusiones doctrinales acerca de la territorialidad y personalidad del Derecho. El examen de los textos legales medievales nos lleva a inclinarnos por la primera interpretación, tanto en la Alta como en la Baja Edad Media (385): existe una especial prevención para que no se apliquen leyes emanadas de otros entes políticos. No obstante existen excepciones: en un orden de exposición, debe mencionarse en primer lugar la ya citada Ley XV, Título XIV, Partida III, en que se admite la invocación de la ley de otra tierra, en los casos en que se trate de pleitos entre hombre de la misma sobre asuntos desarrollados en ella, o sobre cosas sitas en aquel lugar, que supone la aplicación por el juez nacional del Derecho extranjero, mientras que el "Liber Iudiciorum" implicó -en el caso de los telonarii- la aplicación por el juez extranjero del derecho extranjero. Dentro de este apartado, hay que reiterar la convivencia de diversos ordenamientos en una misma ciudad, como en Toledo, castellanos, mozárabes, moros y judíos.

En segundo lugar, la existencia de extranjeros privilegiados, a los

(385) A. García Gallo, *"Curso de Historia del Derecho Español"*, I, Madrid, 1947, pág. 161 y 248.

que, de forma generalmente aislada, se les aplicaban tratos favorables: tal el caso de los mercaderes, romeros y peregrinos, embajadores, los titulares de salvoconductos, los protegidos por convenios de hospitalidad local... (386).

En tercer lugar, se ha de mencionar la situación de grupos a los que se les aplica todo un sistema de normas, como el de los judíos, los moros y los egipcianos (de carácter desfavorable), del que nos ocupamos con detalle a continuación; mientras que también se da con diversa intensidad según las épocas, el fenómeno de los francos, no sólo como grupos a los que dentro de un municipio se les permite aplicar su Derecho, sino también como un elemento que llega a influir en el español por su aparición, bien en Cataluña, bien a través de la fundación de conventos, o por su importancia en las peregrinaciones a Santiago.

2. Judíos y Moros

Se pregunta también el profesor Gibert si judíos y moros son extranjeros. En la Edad Media -dice- no existe la noción unitaria del Estado, sino la dualidad rey y reino. No pertenecen al reino, en ninguna de cuyas instituciones participan: Cortes, Consejos, Ejército, Municipios; pero sí pertenecen al rey; son sus siervos (fuero de Cuenca, 29, 33; Libro

(386) R. Gibert, "*Los extranjeros en el antiguo Derecho español*", en "*L'Etranger*", RSJB, IX, 1958, 2, pág. 162-170.

de los fueros de Castilla, 107). Como otros dominios del rey han sido puestos en manos de un señor o de un concejo: los judíos y moros de Palencia han sido encomendados por el rey a un obispo; los concejos leoneses y castellanos asumen la protección de la comunidad local de judíos; en los fueros se equiparan cristianos, moros y judíos; quedan huellas de una protección jurídica interior y de penas más graves.

A los judíos no se les puede considerar como extranjeros, puesto que no son ciudadanos de un Estado propio y -este razonamiento es aún de mayor fuerza- porque al ir naciendo, generación tras generación, en nuestro país, sometidos a la jurisdicción del mismo, no cabe duda que eran súbditos de nuestros reyes, si bien sometidos en parte a distintas leyes debido al cuidado que inspiraba su religión. No procede, por tanto, incluirlos entre los extranjeros, dado que no lo son en realidad hasta que son expulsados en 1492, momento en que dejan de ser vasallos de nuestros reyes. En todo caso, y como ya dijimos antes, su constante movilidad los hizo ser unos súbditos "diferentes". Son los que llama V. L. Simó Santonja (387) "extranjeros interiores", locución expresiva, que nos hace recordar el título de una obra en prosa de Lope de Vega, "El peregrino en su patria". No obstante, ni las diferencias de religión, ni de raza, los hacen extranjeros, al ser súbditos de nuestros reyes. Por otro lado, con la aparición de los mahometanos se producen nuevas

(387) Obra citada, pág. 111.

inmigraciones de judíos (388).

Con motivo de la invasión musulmana pasaron a la Península gran multitud de gentes que tenían puesta de antiguo su morada en las regiones de Africa y, entre ellos, numerosos judíos, que provenían tanto de familias asentadas en las comarcas occidentales de Africa, como en otros puntos del mismo Continente, pero no venían únicamente junto con los mahometanos los judíos de Africa, pues también llegaron otros israelitas, en número importante, oriundos o naturales de Siria y Palestina, y cuando habían pasado pocos años del comienzo de la invasión musulmana se produjo un acontecimiento inesperado que produjo extraordinaria expectación en los judíos, llamándoles vivamente su atención hacia Oriente, puesto que se decía que en tiempos de Teodosio el Menor había aparecido en Siria el verdadero Mesías, al comenzar el año 721. Quedaron desiertas muchas casas y heredades, con lo que Walí de Africa tuvo ocasión de aplicar para el Fisco inmensos tesoros ante la marcha de los judíos que salieron de España con el motivo expresado, aunque retornaron después a ésta nuevamente, y muy

(388) Seguimos, en lo fundamental, la obra de J. Amador de los Ríos, "*Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal*", Madrid, 1876; y la de Luis Suárez Fernández, "*Judíos españoles en la Edad Media*", Ediciones Rialp, Madrid, 1980. También tiene interés, por la época en que se escribió, el "*Discurso sobre el estado de los judíos en España*", de los citados Jordán de Asso y De Manuel, al final de sus comentarios al Ordenamiento de Alcalá. Información general, para contrastar con otros países, se puede encontrar en León Poliakov, "*Historia del antisemitismo*", Ediciones Siglo Veinte, Buenos Aires, s.a., en tres tomos, especialmente el primero, aunque las referencias a España son escasas.

diezmados. Por otra parte, en este tiempo permaneció abierta la misma a las tribus africanas que a numerosas familias de hebreos que vinieron a establecerse en nuestra Península, donde eran estimados por los oficios que profesaban y su buena conducta en el momento de la conquista; se dedicaban al comercio de las sedas y de los esclavos, tanto con los pueblos orientales como con los europeos, contribuían al aumento y prosperidad de la riqueza pública, y duplicaban las rentas del Erario, atrayendo hacia el suelo cordobés la contratación de naciones muy lejanas.

También eran prácticos en el cultivo de las partes industriales y ponían todo su empeño en conservar la antigua opulencia y el fausto de los visigodos. Eran aptos para el estudio de las Ciencias y las Letras, y se mezclaban a menudo en Academias, Bibliotecas y Escuelas, y contribuían de esta manera al engrandecimiento ilustre del Imperio de los Omeyas, y muy principalmente de la ciudad de Córdoba.

Por estos tiempos, según refiere El-Kartas en su Historia de los soberanos del Magreb y en los Anales de la ciudad de Fez, pasaron de España a Africa con las 8.000 familias sarracenas que iban a poblar la ciudad indicada gran número de judíos, a quienes les fue permitido establecerse mediante el pago de un importante tributo.

La distribución geográfica de los judíos en España es cuestión no estudiada de manera definitiva. En los primeros tiempos de la monarquía

asturiana no es de creer que se hayan asentado judíos en el actual principado de Asturias, puesto que los primeros reyes representaban el partido visigodo antigitano, y, por tanto, antisemita, sin que -por otra parte- esta región les ofreciese alicientes para su asentamiento. La primera referencia documental se encuentra en tiempos de Alfonso V de León, y se alude a ellos en los concilios de León (1020) y de Coyanza-Valencia de Don Juan- (1050) (389).

Ya dentro de la Reconquista debe destacarse el acogimiento que les presentó Alfonso VI de León a los judíos expulsados de los dominios musulmanes, aumentando con ello antiguas pueblas hebreas, o constituyendo otras como Trascala en tierras de Toledo, Frósmista en las de Valladolid, y Carrión de los Condes en las de Palencia. Era respetada en ellas la religión mosaica, sus sacerdotes, alcaldes y jueces designados por la aljama o consejo, constituyendo una especie de República, en la que todos trabajaban en pro de la comunidad sin que les fuera dado enajenar heredad alguna sin contar con el consentimiento de todos los pobladores, y en esta perpetua alternativa de prosperidad y desgracia de los judíos españoles, nuevas preocupaciones aparecen para los mismos con la venida de los almorávides y de los almohades, que los persiguieron, y obligaron a los judíos a volver su vista a otras partes, moviéndolos a traspasar las fronteras, y a establecerse en tierras de León y de Castilla bajo la protección de Alfonso VII, bajo la protección de los

(389) J. Uría Rúa: *"Noticias históricas sobre los judíos en Asturias"*, en *"Estudios sobre la Baja Edad Media Asturiana"*, Biblioteca Popular Asturiana, 1979, pág. 154.

Reyes cristianos, a cuyo albedrío quedaba sometida la existencia del pueblo errante, que empieza a asentarse en determinados puntos de Castilla.

Así, por ejemplo, vemos que la judería de Carrión era una de las más poderosas, sirviendo los de la zona de Palencia únicamente a los monarcas a cambio de los correspondientes tributos... La codicia del obispo y del cabildo de Palencia, ante la prosperidad de los judíos, solicitaban del monarca que les concediese el señorío de los israelitas, eximiéndolos de la jurisdicción real y ordenándoles que en lo sucesivo contribuyesen solamente como naturales vasallos al obispo y al cabildo con todo género de tributos.

De tal manera fueron creciendo la influencia y la estimación de los judíos en las regiones centrales de la Península. Por el contrario y a título de ejemplo, en 1170 el rey Alfonso y el conde Ermengol de Urgel donan a los Hospitalarios un judío y un sarraceno en Lérida, y hay otros también cedidos al Temple, a la Iglesia, o a Monasterios o a particulares, o por ellos respectivamente (390).

Hasta tal punto se integran en las empresas de los reyes cristianos, que participan en algunas como la conquista de Mallorca, y también en la de Valencia, en virtud de pactos establecidos por el rey D. Jaime el

(390) F. Valls Taberner, "*Literatura jurídica*", prólogo y sistematización de M. J. Peláez y J. Calvo González, Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1986, pág. 37.

Conquistador; incluso en el propio reino de Castilla, en el que bajo Alfonso el Sabio llegan a ser considerados como cualesquiera vasallos en las cosas comunales, por eso en las conquistas de Sevilla y en las de Valentina y Alcalá del Rfo se dan grandes heredades a muchos judíos, a algunos de los cuales se puso en sus manos la administración de las rentas públicas. Continúa la misma política de acogimiento: bajo Alfonso X, se los pone al amparo de los concejos para que no reciban daño alguno, bajo Sancho IV se les invita que vengan a morar a sus villas donde eran pecheros, mandando a los concejos que los amparen y los defiendan.

Sobre las relaciones entre las dos razas -la cristiana y la judía- y aun a riesgo de pecar de macabros, cabe referirse a la escritura de foro entre el Monasterio de San Juan de Corias y los judíos de la puebla de Cangas en 1399, con destino a "fossario", y la localización de la "huerta de los judíos" de Oviedo, dedicada a cementerio, no lejos del solar que hoy ocupa el teatro Campoamor, cerca del campo de los "homes buenos", o sea, el Campo de San Francisco, lo que pone de relieve la separación más allá de la muerte de las dos razas, y el tono peyorativo que merecían los judíos (391).

En otros reinos españoles se produce por aquella época de principios del siglo XIV un deseo en los judíos del reino de Aragón de

(391) J. Uría Riu, "Notas para la historia de los judíos en Asturias", y "Cementario de los judíos ovetenses", en "Estudio sobre la Baja Edad Media Asturiana", Biblioteca Popular Asturiana, Oviedo, 1979, págs. 169 y 181.

pasar a otras tierras por estar incómodos del trato que allí recibían, y empiezan a abandonar en grandes masas las zonas de Aragón, Valencia y Cataluña, por lo que Alfonso IV rebaja los tributos a algunas juderías, contándose entre ellas la antiguamente floreciente de Zaragoza, y dictó disposiciones para que los judíos se conservasen en sus dominios, prohibiéndoles que sin su beneplácito y permiso variasen de domicilio. Igual situación se produjo en Navarra y, si bien fue seguida de medidas que les fueron favorables, en este reino fueron muchos los judíos que trataron de ausentarse.

Otra causa importante para las emigraciones de los judíos fue la aparición de la peste negra.

Para evitar dicha calamidad se marchaban los judíos del reino de Navarra, y pusieron venta a sus bienes usando el derecho que le había discernido D. Felipe de Evreux en el Amejoramiento del Fuero General; se dieron tanta prisa en vender sus heredades que el rey se vio forzado a mandar que ningunos, cristianos ni moros, fuese osados de comprar ni tomar por donación ninguna heredades alguna de judíos sin licencia del rey, a pesar de lo cual crecía también la emigración con tanta fuerza que llegó a extremos realmente increíbles, por lo que, para evitar tales circunstancias se tomaron nuevas medidas en favor de los judíos y se llegó a dispensarles algunas protecciones para atraerlos de nuevo a los estados navarros, y les animase a dedicarse a la abandonada labranza de sus tierras, sin embargo ni este empeño tardío de Carlos II ni el anhelo

con que la reina D^a Juana acudía como Gobernadora del reino a proteger los judíos, fueron eficaces. Expulsados de Calahorra y otras ciudades de Castilla, al aproximarse los judíos a Navarra y tratar de pasar de largo, la reina les brindó la entrada en sus dominios, y redujo la capitalización y el derecho de trabajo, declarando que no serían en ningún tiempo forzados los judíos a contribuir con las aljamas aún existentes, salvo respecto de la sisa del vino y de la carne, pero ni estas promesas ni las seguridades que se les dieron de no ser afligidos ni perseguidos por medio de censuras eclesiásticas, pudieron establecer la confianza en los israelitas que, vióse al cabo el mismo D. Carlos, necesitaba de acudir a los medios de rigor para cortar la situación, puesto que a finales del siglo XIV la importancia de la población hebrea en el reino de Navarra quedó limitada a las aljamas de Pamplona, Estella y Tudela.

Las represiones que padecieron en algunas circunstancias, como cuando la que produjo la gran matanza del año 1391, originaban nuevamente medidas para evitar la expatriación de los judíos, lo que demuestra lo útiles que eran dentro de la organización de los reinos cristianos; así, por ejemplo, en aquella circunstancia, pasados muy pocos días de la misma, se resolvían a fundar una nueva aljama que se institufía inmune, libre y exenta de cada una de las cargas y obligaciones que gravaron la destruida por el populacho, se creaba el colegio y la Universidad de los Rabíes con amplios fueros para gobernarse y regirse por sí mismos, y se autorizaba a todos los hebreos del reino a constituir

la expresada aljama. Fueron muchos los privilegios que dieron los reyes en el mencionado año 1391 y siguientes a los judíos: los eximieron durante tres años de todo pecho de rama, donación graciosa o forzada, subsidio o pedido ordinario o extraordinario, los declaraban exentos de impuesto o prestación de las camas para las personas reales, familiares o domésticos, les quitaban el cargo de la manutención de los leones y de las demás fieras tanto de las guardadas en Barcelona como en las otras partes, por cinco años; se les daba también el privilegio de que ninguna autoridad se mezclase en los asuntos de la judería, incluso el ejercicio de la usura, aunque excediera ésta del tipo máximo señalado por las leyes durante los citados cinco años, y sólo deberían conocer de los pleitos de los judíos sus jueces privativos, bajo pena de cien florines de oro. En concreto, estas medidas se aplicaron en el reino de Valencia, en Castellón, Játiva, Burriana y Sagunto.

De la misma manera se tomaron en Castilla precauciones ante las persecuciones populares; por ejemplo, bajo Enrique III, para remediar las circunstancias nacidas de las catástrofes del año 1391, temerosos de las persecuciones de aquellas épocas se dirigieron los judíos a Granada, Málaga, Loja, Guadix y Almería, los del Condado de Niebla y la Extremadura española, los de Castilla y de León fueron hacia Portugal, los de las aljamas de Córdoba, Cádiz y Sevilla se trasladaron a Granada y Jaén y a las Comarcas de los Vélez y de Lorca.

Por eso, Enrique III el Doliente les aseguraba su protección y

conminaba con el anuncio de severos castigos a los que osasen turbar el sosiego o atentar contra las propiedades de los judíos, con lo que logró por el momento que los de Córdoba permaneciesen en sus moradas. No cabe duda que las persecuciones habían originado numerosos cambios de residencia de este pueblo, eternamente errante, sin conseguir un cómodo asentamiento porque las villas y ciudades de Portugal no veían con ojos tranquilos el acercamiento de las comunidades hebreas, lo que originó suspicacias entre los portugueses de forma que el 30 de septiembre del año 1400 se expedía en la ciudad de Braga un Edicto por el que se mandaba que a voz de pregonero se hiciese público en todo el reino la preocupación que originaba la conducta de los israelitas, y se daba poder a la Justicia de las ciudades donde existían comunas de judíos a fin de que se metiesen en las juderías con sus familias y sus bienes, vedándoles salir de ellas durante la noche sin cortapisa y sin distinción, y los que osasen quebrantar los preceptos serían dados por siervos a voluntad del rey, y perderían por añadidura todos sus bienes.

Es curioso destacar que, mientras en las regiones centrales de la Península se había desarrollado un terrible odio contra los israelitas, incluso los convertidos al Cristianismo, por el contrario, en las zonas del Norte se procuraba reformar y aun conservar las decaídas aljamas, y en estos ires y venires se pasan los siglos XIV y XV con altibajos y movimientos migratorios, originados unas veces por el temor a la represión de los judíos, seguidos de movimientos favorecedores el asentamiento de los últimos, los cuales llegaban pronto a intervenir en

la vida de las villas y ciudades incluso de forma tan acusada que provocaba suspicacias y envidias de los cristianos, que originaban nuevas persecuciones y nuevos movimietos de esta raza.

Dentro de esta historia se puede destacar que los Procuradores de las Cortes de Toledo solicitaban y los Reyes Católicos la daban por ley del reino que todos los judíos de los dominios castellanos, ya fuesen vasallos de la Corona, ya de señorío, obispado, abadía u organismos militares o morasen en villas, fuesen forzados a vivir reclusos en barrios separados de los cristianos, porque de la continua conversación y vivienda mezclada se seguían grandes daños e inconvenientes, se disponía el nombramiento de personas fiables y seguras para que en términos improrrogables señalasen dónde debían establecerse las juderías, y si en estos barrios no existiesen sinagogas, autorizaba a estos diputados para señalar casas o edificios a tal fin o para edificarlas de nuevo, con la intervención de las respectivas aljamas; estas leyes eran generalmente obligatorias incluso para los señores de behetrías y abadengo, para los Comendadores de las Ordenes y los Alcaldes de las villas y ciudades, y caso de desobediencia, perderían todos los maravedís que en cualquier manera tuviesen en los libros reales aún por especiales privilegios los judíos que fuesen hallados fuera de la jurisdicción de cada aljama vivienda o zona respectiva.

Nuevamente toman parte los judíos, especialmente algunos muy distinguidos, en la financiación y organización de las últimas etapas de

la Reconquista, y sin embargo no les esperaba un galardón en pago de tales merecimientos, cuando en principio parecía que iba a ocurrir lo contrario, puesto que Fernando e Isabel mandaban en 11 de febrero de 1490 a todos los judíos que vivían en la ciudad de Almería y en todas las otras ciudades y villas y lugares del reino de Granada que gocen de lo mismo que los mudéjares siempre que sean naturales del mencionado reino, y añadían en 25 de noviembre de 1491 que los judíos naturales de la ciudad de Granada y el Albaicín, de sus arrabales y de otras tierras, que entraran en este partido y asiento, gozasen del mismo, pero cuando todo parecía prometer a los hebreos una nueva era de prosperidad, no se habían cumplido aún tres meses de la rendición de la corte de Boabdil firmaban Isabel y Fernando el edicto de expulsión de 31 de marzo de 1492, que señalaba que todos los judíos y judías estantes y moradores en los señoríos y dominios de los Reyes Católicos, ya fuesen naturales ya extranjeros, en el plazo de tres meses que terminarían el fin del venidero junio, deberían salir con sus hijos, criados y familiares, de cualquier edad y condición, de todos los referidos estados, con pena de muerte y confiscación de hacienda quedaban conminados cuantos, bajo cualquier pretexto tornasen a pisar el territorio español, y se les imponía la pérdida de bienes y toda merced a cuantos ciudadanos, caballeros, magnates y prelados que les diesen amparo o cobijo; transcurridos el término prefijado, se les autorizaba a los judíos a vender, trocar o enajenar libremente sus bienes, muebles y raíces exceptuadas, sin embargo, las sinagogas.

Varias son las hipótesis que se han barajado para determinar las causas que provocaron la expulsión. Luis Suárez Fernández (392) las enumera, citando a los que las propugnaron: la codicia de los Reyes Católicos (opinión tradicional), pero la rechaza porque los israelitas ricos conservaron sus bienes mediante el bautismo, u obtuvieron un permiso especial para llevarlos; la necesidad de apoyarse en el patriciado urbano para gobernar, al que hubo que hacer esa concesión (S. Haliczzer), pero las ciudades eran entonces un elemento débil dentro del sistema político; la victoria de la nobleza feudal sobre la clase más identificada del capitalismo comercial (H. Kamen), lo que no exacto, puesto que los grandes señores mantenían a sabios judíos en sus Cortes; la existencia de un clamor popular contra los judíos (Américo Castro), pero lo cierto es que se daba más en los sectores inferiores de la sociedad que en los más elevados.

Suárez Fernández recoge las tesis de M. Kriegel y de M. Beinart de que es la Inquisición la que, denunciando antes el peligro que suponía para la fe cristiana, la existencia de la Comunidad judía, la que arranca a Fernando e Isabel la decisión final. Pero, como dice aquel autor, la Inquisición ya no es un órgano de la Iglesia, sino un instrumento político creado por los Reyes Católicos al servicio de su concepción del Estado, por lo que es posible que su establecimiento fuese ya una concesión a las demandas hechas, llevando al final a la Monarquía a lo que es un

(392) Obra citada, pág. 257-271. En ella se contiene una minuciosa bibliografía sobre la materia.

"máximo" religioso.

Hostigados de esa manera abandonaron los dominios de Castilla y de León y salieron por Benavente, Zamora, Ciudad Rodrigo, Valencia de Alcántara y Badajoz hacia Portugal; por las ciudades de Rioja pasaron a Navarra y los de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se embarcaban en Santander y Laredo. Otros se encaminaban a Cádiz, Puerto de Santa María, Málaga y Cartagena con el mismo fin que los que dejaban sus casas en los reinos de Toledo y Murcia, en el Campo de Calatrava y en los obispados de Cuenca y Sigüenza; por los puertos de Valencia, Tortosa, Tarragona y Barcelona se daba salida a los de la Corona de Aragón y se dirigían unos a Africa, otros a Nápoles y Venecia, Grecia y Rumanía, hasta penetrar en los dominios del Gran Turco. A 440.000 almas hicieron subir algunos cronistas el número de los expatriados, exceptuando los que murieron en tales calamidades o abrazaron el Cristianismo.

Según otros, ascendieron sólo a 170.000. Por los puertos de Andalucía salieron 3.000 familias de las ciudades fronterizas, pasaron a Portugal 27.000, 20.000 penetraron por Ciudad Rodrigo y por Valencia de Alcántara, Badajoz y Elvas 25.000.

El día 1º de agosto del año 1252 de la creación, dicen algunos escritores judíos, salieron de España, tierra donde vivieron sus padres, al

pie de 2.000 años, 300.000 personas (393).

En estas circunstancias también llegaron numerosos de ellos a Navarra, y preocupadas las villas por la situación que se amenazaba, se dirigieron a los reyes D. Juan de Labrit y D^a Catalina, en petición de que no autorizasen en aquellos reinos el establecimiento de los expulsados y alcanzaron en el año 1498 la reproducción del Edicto de expulsión de los judíos, si bien no fueron muchos los que salieron del Reino, porque casi todos se convirtieron al Cristianismo, y, según dicen los cronistas, con perseverancia, puesto que los castigados por la Inquisición eran advenedizos de otras partes.

Por el contrario, en Portugal, al menos en los primeros tiempos, la política de los Reyes fue de protección de los israelitas que se trasladaron en aquellos momentos al país vecino, si bien bajo Alfonso V se cambió de conducta y continuaron también en dicho reino las persecuciones.

Otros intentaron trasladarse a Africa tomando la ruta de Orán; sin embargo, descubrían las velas del Corsario Fragoso, terror por aquellos días del Mediterráneo. Se adelantaba el Rabí Leví ha Cohn para ofrecer al pirata hasta 10.000 ducados para que les dejase desembarcar libres y seguramente, sin embargo, temeroso el Rabí de la conducta que seguiría

(393) Según L. Suárez Fernández, la cifra aceptable como población judía máxima total, sería de 160.000 personas, aunque él se inclina por rebajarla a 100.000, de las que salió la inmensa mayoría; obra citada, pág. 272.

el corsario, levó anclas y se dirigió hacia Arcilla, cogiéndolos una ruda tormenta y echándolos sobre las costas de España, llegando a Cartagena hasta diez y siete navíos, y se perdieron con la gente que llevaban los tres restantes. Algunos de ellos, en número de unos ciento cincuenta saltaron a tierra para volver a sus hogares; la flota volvió de nuevo al mar, pero de nuevo tomaba puerto en Málaga casi destrozada por las tempestades.

Iguales avatares sufrieron los que se habían embarcado en Gibraltar, Valencia y Tortosa, que se dirigieron a las playas de Arcilla, entonces bajo el dominio del rey Juan de Portugal, pero más tarde, asaltados y atropellados víctimas de todos los excesos, fueron casi diezmados, otros corrieron a pedir clemencia en los pueblos del Norte de Francia, en Italia y en los dominios de Constantinopla, que se llenaron de familias judías, se establecieron en Marsella, Tolón, Perpignán, y Tolón; Nápoles y Génova les abrían sus puertos; Saboya, Florencia y Roma los acogían en sus recintos; Ferrara y Venecia les brindaban su protección y amparo; Ragusa, Salónica y Corfú les daban amigable tránsito para Constantinopla y El Cairo. Igual ocurría en otras poblaciones como Bayona, Burdeos y Nantes en Francia, Londres en Inglaterra; Bruselas, Aquisgrán, Leiden y Amsterdam en los Países Bajos; Sala Copenague, en Suecia y Dinamarca; Hamburgo, Nueremberg, Laisin y Berlín en Alemania.

Frente a la mayoría de los autores, que encuentran muy dura la

medida de expulsión de los Reyes Católicos, está la postura de J. Uría Rúa (394), que dice que la política prudente y sabia de aquéllos evitó los problemas que se presentaron en otros lugares durante las Edades Moderna y Contemporánea; y agrega que tal vez no se ha meditado bastante el beneficio que aquella medida reportó a la nación.

Descubierto el Nuevo Mundo por Colón, también se trasladaron al suelo americano gran número de judíos amparados por el nombre y bajo la apariencia de cristianos, y siempre hostigados por las persecuciones del Santo Oficio, mientras que, por el contrario, el papa Alejandro VI había abierto por segunda vez las puertas de Roma a los conversos de Aragón y de Castilla, reconciliándolos con la Iglesia y en su jurisdicción, bajo la condición de que no pudiesen volver a la Península Ibérica sin permiso ni licencia de sus reyes.

Con lo que antecede queda trazado un cuadro con los movimientos de entrada y salida de los judíos en los reinos cristianos, según los diversos avatares, unas veces favorables, otras adversos, por que pasaron a lo largo de los siglos hasta llegar al Edicto de expulsión de 1492.

Parece ahora conveniente, una vez hecha la reseña precedente, que sirve para poner de relieve cómo nunca llegó a realizarse una asimilación de la raza judía con las demás que habitaban en la Península,

(394) "*Noticias históricas sobre los judíos en España*", en obra citada, (394) pág. 153 y sts.

profundizar en las normas que, de forma sucesiva, se fueron promulgando para regular su "status".

Del lado de acá de las fronteras de la Reconquista y en la época de las cartas pueblas y de los fueros municipales, en unas y en otras se encuentran referencias a los judíos.

Figuran los judíos en la carta puebla de Castrojeriz (395), otorgada por el Conde de Castilla Garci González en el año 974 con las mismas condiciones que fueron otorgadas a los restantes pobladores de la villa, e igual aparecen los decretos del Concilio de León (396), celebrado en el año 1020, bajo la autoridad de Alfonso V, los cuales alcanzaron la fuerza de Ley para todo el reino.

En el fuero de Sepúlveda y en la confirmación del fuero de Nájera (año 1076) (397), en las capitulaciones de Toledo (1085), en la Carta de los fueros de León (1109) (398), en el fuero de Miranda de Ebro (1099) (399), y en el Privilegio de los mozárabes

(395) T. Muñoz y Romero, obra citada, pág. 37.

(396) Ibid., pág. 73.

(397) Ibid., pág. 287.

(398) Ibid., pág. 94.

(399) *Fuero de Miranda de Ebro*, edición crítica, versión y estudio por F. Cantera Burgos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, 1945.

toledanos (400), se daba una gran amplitud a los derechos reconocidos a los judíos, y aunque no siempre alcanzaban la absoluta igualdad con los demás pobladores, en algunos casos eran considerados como tales.

La carta fuero de Toledo (401) extendía a todo el reino de León los derechos concedidos a los hebreos en el mencionado Concilio.

En el fuero de Sepúlveda (402), que luego se extendió por otras muchas e importantes villas no sólo de Castilla, que fue romanizado a principios del siglo XIV, se castigaba la herida del judío por cristiano con cuatro maravedís, mientras que imponía al judío que hiriese al cristiano el pago de diez, sin admitirle el juramento que el primero otorgaba. La muerte del cristiano causada por el hebrero se castigaba con la vida del último y pérdida absoluta de bienes, cuya tercera parte se llevaban los alcaldes, mientras que la del hebreo se pagaba con cien maravedís, con lo que se apreciaba una fuerte distinción.

El fuero de Nájera castigaba el homicidio de los judíos de la misma manera que el de los infanzones y el de los monjes, y lo mismo establece

(400) T. Muñoz y Romero, obra citada, pág. 360.

(401) Ibid., pág. 360.

(402) Publicado por Juan de la Reguera Valdelomar, Madrid, Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798; y *Los Fueros de Sepúlveda*, edición crítica y apéndice documental por Emilio Sáez; estudio histórico-jurídico por Rafael Gibert, Segovia, 1983.

para las heridas (403).

También es de destacar la denominada "*Carta inter cristianos et judeos, de foris Illorum*" de Alfonso VI (404), documento que según Amador de los Ríos merece el sobrenombre de peregrino y acaso único en la época de que nos ocupamos por la perfecta igualdad que establece en el Derecho y así como por las singularidades establecidas en materia de prueba. Designaba como único medio de lograr la verdad en los pleitos que ocurriesen entre cristianos y judíos, el juicio de la batalla de escudo y bastón o pértiga, prueba antes nunca usada en los Reinos de Asturias, León y Castilla, después mencionada en documentos populares. La victoria sobre el contrario, ya fuese contrario o hebreo, ponía término al litigio, y aunque uno como el otro podría nombrar persona que le sustituyese en la lid (bastonario), el derecho era esencialmente personal y apto en consecuencia para excitar el valor individual, restituyendo a la raza hebrea su dignidad en la conciencia del propio pueblo.

No obstante, tan notables mejoras en el terreno legislativo, no iban traducidas de análogas circunstancias en la vía popular, puesto que el pueblo cristiano condenaba y a veces envidiaba el creciente bienestar de los judíos; efectivamente, después de la derrota de Uclés, en la que perdió la vida el príncipe D. Sancho, sabida en Toledo, se excitaron las iras de la muchedumbre y las desataron contra los hebreos, ejecutando

(403) T. Muñoz y Romero, obra citada, pág. 287.

(404) Id., pág. 89.

una horrible matanza, saqueando los hogares e incendiando sus sinagogas.

Alfonso VII confirmó en 1118 a los mozárabes, castellanos y francos de Toledo (405) las inmunidades que habían sido otorgadas al poblarse la capital, previniendo que no ejerciese autoridad judicial alguna sobre los cristianos, judío ni converso y ordenando que los delitos de muerte cometidos en los hebreos fuesen juzgados por el Libro de los Jueces. Igual derecho concedía en 1130 a los pobladores de Escalona (406), fijando en 300 sueldos la multa impuesta al matador de un judío, y en el año 1133, al conceder a Guadalajara su fuero, otorgaba iguales normas.

Es muy de destacar que obligaba a los judíos la necesidad de ir en sus huestes militares con el rey, y les encomendaba dentro de la ciudad la recaudación de las rentas de la Corona.

En cuanto al fuero de Madrid (407) y al de Calatalifa (408), concedidos en los años 1140 y 1141 respectivamente, los derechos de los judíos eran más bien restringidos y contrastaban con las libertades

(405) Ibid., pág. 363.

(406) Ibid., pág. 485.

(407) *El Fuero de Madrid y los Derechos locales castellanos*, por G. Sánchez, Madrid, 1932.

(408) T. Muñoz y Romero, obra citada, pág. 532.

otorgadas a los judíos de Calatayud el año 1134, entre los cuales quedaban los judíos bajo el patrocinio de los señores de la tierra, se les declaraba igual derecho que a los cristianos y mudéjares en el comprar y en el vender, y se equiparaban la eficacia de su juramento; únicamente en cuanto al homicidio del hebreo, se conservaba en el fuero de Calatayud la antigua costumbre de imponer el matador convicto la multa de 300 sueldos, mientras que se siguió un criterio igualitario por Ramón Berenguer en el año 1142 al establecer el fuero de Daroca (409).

La tolerancia hacia mudéjares y judíos se manifiesta en el fuero de Tudela (410) por Alfonso I de Aragón (año 1.115), en el de Belorado (1.116) (411), en el de Caseda (412) y en el Carcastillo (1.124) (413), y se igualaban las condiciones personales de los mismos con los cristianos, pero sin reconocerles autoridad.

La situación en Cataluña puede resumirse como sigue:

Ante todo, debe destacarse el aumento de la población israelita en aquella zona, que ya era próspera y numerosa bajo la dominación

(409) Ibid., pág. 534.

(410) Ibid., pág. 420.

(411) Ibid., pág. 410.

(412) Ibid., pág. 410.

(413) Ibid., pág. 469.

visigoda; y, a medida que avanzaba la Reconquista, las localidades concedían protección a los hebreos dentro de sus muros; así ocurría en Ampurias, Gerona, Vich, Manresa, Barcelona, Cervera, Tárrega, Tortosa, Tarrasa y Lérida, y como siempre, tales beneficios provocan medidas más tarde represivas, como ocurre por ejemplo en el Concilio de Gerona en el año 1.068, en el que, al ver que la raza israelita estaba exenta del pago de los diezmos eclesiásticos, gozaba de facultad de adquirir libremente de los cristianos todo género de bienes, con perjuicio incluso para la Iglesia (puesto que de este modo se sustraían a su jurisdicción muchos de los bienes sometidos a tributación), ordenó en el Concilio que los compradores judíos quedasen obligados a contribuir a los diezmos de las parroquias en cuya demarcación radicasen los bienes adquiridos, de la misma forma que lo harían los compradores cristianos.

En cuanto al juramento en las causas criminales se conminaba a los judíos a prestar juramento a los cristianos, pero absolvía a éstos en todo caso del mismo deber respecto de los israelitas, y curiosamente por el contrario los igualaba en los pleitos civiles, dándoles la misma representación testimonial ante los Tribunales de Justicia. Dos testigos, uno cristiano y otro judío, bastaban por una y otra parte para producir entera prueba, con la circunstancia de que si ésta era favorable a los cristianos, debía jurar el judío, habiendo la misma obligación el cristiano en caso contrario, mientras que en la jurisdicción criminal aparecía la misma desconfianza que en las leyes anteriores, siendo confundidos los hebreos con los homicidas, hechiceros, ladrones, envenenadores,

sacrilegos, adúlteros, incestuosos, excomulgados, herejes y sarracenos, cuyo testimonio no podía ser recibido por los Jueces en causa contra cristianos.

Con referencia a la injuria al judío converso, era castigada en los Usatges (414) con multa de 20 onzas de oro de Valencia, y a medida que se implantaba el Código de los Usatges se aprecia cómo en los siglos XI y XII los judíos proseguían en las principales villas y ciudades de Cataluña, cultivando las artes industriales, el comercio y las ciencias, y empezaban a obtener lugar distinguido cerca de los príncipes y a la administración de sus rentas.

Es de destacar el fuero de Salamanca (415) dado por Alfonso VIII de León en el año 1.170, y anticipándose a lo que se otorgaría más tarde para Cuenca, los judíos alcanzaban el privilegio de ser tenidos en la misma condición de libertad que los demás vecinos de la ciudad, e igual para sus heredades rústicas y sus bienes urbanos, y también para ser igualados en materia de pruebas producidas ante los Tribunales de Justicia. Fernando II de León, al proteger a los judíos salmantinos, los encomendaba al concejo para que los amparase y defendiese con Derecho, y ponía la renta de 15 moravetinos como tributo.

(414) *Costumbres de Gerona*, edición preparada por E. de Hinojosa, I, "Usatges de Gerona", Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho, 1928.

(415) *Fuero de Salamanca*, por J. Sánchez Ruano, Salamanca, 1870.

En el fuero de Cuenca (416), tomando como modelo el de Teruel (417), Alfonso VIII, que daba entera libertad a los pobladores, impedía al judío toda potestad sobre los cristianos, les prohibía el ser Postagueros y Merinos, insistía nuevamente sobre la obligación de la separación de habitación, concedía a los hebreos igualdad en relación con los cristianos en toda compra y venta, señalaba a unos y otros los días que deberían acudir a los baños públicos, mandó que los pleitos mixtos se sentenciasen por dos alcaldes, uno cristiano y otro judío, no a la puerta de la sinagoga sino de la alcaicería, estableció el recíproco respeto a la propiedad en las formas del juicio y la probanza en materia de préstamos y deudas, y dio gran fuerza al juramento, definía la legítima usura (refrenando la codicia), e imponía la pena de 500 sueldos al matador del judío, mientras que el hebrero que diese muerte al cristiano debería pagar conforme al fuero privativo de este último si fuese convicto, y le salvaba de toda multa con el testimonio de doce israelitas; conforme a lo cual la situación de los judíos bajo el reinado de Alfonso VIII fue de lo más próspera y expansiva.

El Libro de los fueros de Castilla (418) permitía a los hijosdalgo que pudiesen tomar dinero de los pobladores judíos en forma de

(416) Edición crítica con adaptación del Fuero de Iznatoraf, de R. de Ureña y Smenjaud, 1935.

(417) *Fuero de Teruel*, publicado por M. Gorosch, *Leges Hispanicae*, Medii Aevi, Stockholm, 1950.

(418) Publicado por G. Sánchez, Barcelona, 1924.

hipoteca de bienes muebles o raíces, y el Fuero Viejo (419) daba al hidalgo la prerrogativa de poder vender y empeñar los bienes antes de verificada la entrega al judío, pero realizada ésta por el Alcalde competente para recabar sus bienes, debía hacer efectiva la cantidad prestada. Ordenaba el Fuero que no tuviese valor legal el testimonio de dos deudores cristianos en la determinación o responsabilidad de la deuda, y daba valor casi absoluto al juramento del judío prestado en la sinagoga respecto de la responsabilidad mancomunada de ambos. Los cristianos, hidalgos, magnates o ciudadanos quedaban obligados a responder en el término de diez días al emplazamiento de los acreedores judíos, debiendo pagar la multa de 60 sueldos al Alcalde o Merino, cada vez que, negada una deuda, fuese probada con la carta auténtica, pena en la que incurría también el judío si no producía legítimo testimonio o era vencido en juicio de que había cobrado antes lo prestado.

Las discordias nacidas de empréstitos hechos sobre prenda debieran dirimirse por medio de prueba judicial, cargando al cristiano con tanto y medio por año, caso de ser resuelto favorablemente al hebreo. Si se reclamaba de éste como hurtado cualquier objeto o joya depositada en su poder como prenda, debía jurar solemnemente si era o no robada, declarando al propio tiempo la cuantía que había dado sobre ella. Cuando el reclamante probaba en efecto que la joya o prenda era de su propiedad, debía sin más retribuírsela al judío, quien obtenía de nuevo su

(419) Con notas de los Doctores I. Jordán de Asso y del Río, y M. de Manuel y Rodríguez, Madrid, 1771.

capital, pero sin logro alguno.

También es de mayor interés la llamada "Concordia" del año 1.219 establecida por el Primado de las Españas con todos los judíos de su extensa diócesis, que fue autorizada por Fernando III (420), la cual establecía lo siguiente:

1º.- Que todo judío de edad de veinte años, o cerca, pagaría al arzobispo anualmente la sexta parte de un áureo sin excusa alguna.

2º.- Que todo judío casado, de cualquier edad, pagaría igualmente la referida sexta parte, exceptuadas sólo las mujeres.

3º.- Que toda duda relativa a la edad, sería resuelta por cuatro ancianos, adelantados de la aljama de Toledo, y dos de cualquiera otra sinagoga, a elección del arzobispo.

4º.- Que todos los judíos quedarían desde luego libres y absueltos del pago de las obligaciones y diezmos, impuestos por el concilio general Lateranense.

5º.- Que todas las heredades, que eran a la sazón propiedad de los judíos, serían comprendidas en esta concordia.

(420) J. Amador de los Ríos, obra citada, pág. 195 y sts.

6º.- Que toda venta hecha por el judío al cristiano, dentro de la diócesis, quedaría exenta y libre del diezmo.

7º.- Que toda venta hecha por el cristiano al judío, quedaría obligada al pago del diezmo.

8º.- Que las casas construídas o por construir, habitadas o por habitar, amuebladas o por amueblar, compradas o por comprar, serían exceptuadas del expresado pecho.

9º.- Que los ancianos o viejos de las aljamas quedarían obligados a responder de aquella nueva capitación, en tal manera que el arzobispo procedería sólo contra la Sinagoga, repitiendo ésta contra el judío que se negare al pago.

10º.- Que el cobro o colecta se haría en cada año, desde la fiesta de San Miguel a la de San Martín.

En los fueros de Valencia se prohíbe al judío que pueda comprar ni tener, aun por donación, siervo cristiano. Se prohíbe el trabajo en días festivos. Cuando los judíos huyan para ir con otro señor eclesiástico o seglar, no son absueltos de la anterior relación. Tenían su propia jurisdicción sometida a la apelación al rey. Se les prohíbe tener oficio público, bailío, ni cargo en el tribunal, aunque esta norma no siempre se cumplió.

En cuanto a las normas emanadas de Jaime I el Conquistador, estableció un rédito del 20 por 100 anual, y si pasasen dos años sin que el prestamista exigiese el pago de sus créditos o no presentase reclamación ante el Juez competente, perdería todo derecho a que los réditos llegasen a ser el doble del capital. Pedro I (1283) exigió un juramento en los préstamos con imposición de penas a los judíos que cometían fraudes haciéndose pasar por cristianos. Jaime II (1301) dictó normas en materia de prueba testifical y -de nuevo- de usura, exigiendo la intervención de Notario. Se regulan las juderías (Martín el Humano, 1403).

Aparte de todo ello, existen disposiciones para situaciones concretas, de Jaime I, Pedro I y Alfonso I, relativas a la protección de los judíos (de Játiva, Valencia y Murriedro), salvoconductos, etc. (421).

En los fueros de Valencia se prohíbe al judío que pueda comprar ni tener, aun por donación, siervo cristiano. Cuando los judíos huyan para ir con otro señor eclesiástico o seglar, no son absueltos de la anterior relación. Tenían su propia jurisdicción, sometida a la apelación al rey. Se les prohíbe tener oficio público, baillío, ni cargo en el tribunal, aunque esta norma no siempre se cumplió.

En esta época estas materias se regulaban en Aragón por diversas disposiciones, todas referentes al establecimiento de las diferentes villas,

(421) V. L. Simó Santonja, obra citada, pág. 33-50.

y se iniciaba la recepción del Derecho romano respecto del estado de las personas. Los judíos estaban puestos bajo el amparo del poder real, si bien les estaba permitido estar sometidos en vasallaje a un barón o infanzón, estándoles impedido que pudiesen usar una libertad absoluta, porque en ese caso perderían sus bienes y su vida. En cambio los vasallos de las Iglesias, Ordenes y Religiones tenían derecho a abandonar libremente sus domicilios.

En materia de bienes, no les era lícito vender posesión al fiado a los cristianos sin permiso del Bayle, como representante de la Corona, y previa escritura pública, cobraba el fisco la tercera parte de estos contratos, mientras que los celebrados entre judíos eran de todo punto libres y quitaba el Bayle toda intervención y derecho.

En lo que toca a la otra raza, para evitar la despoblación, en un primer momento los mudéjares son bien tratados, pero más tarde tienen, los establecidos en el campo, que soportar abusos de sus señores, por lo que se trasladan a "morerías" en las ciudades. Logran mantener su libertad religiosa y de comercio, a cambio del pago de ciertos tributos, aunque cada vez sufrían mayores restricciones, apartándolos del trato con cristianos, a usar determinados trajes, etc. (422).

Desde el momento en que el territorio en que vivían pasaba a

(422) A. García-Gallo, *"Curso de Historia del Derecho Español"*, 10ª reimpresión, Madrid, 1984.

poder de los cristianos, los que continuaban viviendo en él quedaban sometidos a los reyes cristianos, dejando de estarlo de sus antiguos señores. Estimamos, por lo tanto, que no aciertan plenamente Torres Campos y Orúe, cuando hacen referencia, sin matizaciones, a disposiciones sobre moros y judíos en sus estudios sobre extranjería. Pueden ser considerados como extranjeros aquéllos que no estaban bajo el poder real por vínculo de nacionalidad, y éstos creemos serían principalmente los comerciantes transeúntes -no los avecinados-, de cuya protección se ocupa Alfonso el Sabio, al mismo tiempo que de la de los mercaderes cristianos en las Leyes del Título VII, Partida V. Los demás, los domiciliados permanentemente en nuestro territorio, no eran sino grupos raciales, confinados en sus aljamas: morerías y juderías, gobernados por leyes especiales, a los que se toleraba mientras se estimaron importantes los beneficios que prestaba su actividad, pero siempre con grandes precauciones para evitar que de ello se siguiesen males contra la fe católica; y cuando los ideales religiosos se exaltaron es, precisamente, cuando se realiza la expulsión de los judíos y de los moriscos (ya bautizados en su día, pero que interiormente seguían profesando la religión mahometana), en los reinados de Isabel y Fernando y de Felipe III, respectivamente.

En cualquier caso (423), para otro autor lo cierto es que mozárabes y moros resultaban respectivamente extranjeros, puesto que aquéllos -aún sometidos- conservaban su primitiva nacionalidad. Todavía

(423) Conde y Luque, obra citada, pág. 316 y 317.

eran más auténticos extranjeros los que se establecieron en los diversos reinos de Taifas, ya que hubo egipcios en Lisboa, persas en Hucte, asirios en Granada, bereberes en casi todas las grandes ciudades, y había procedentes de Damasco y de Palestina en Córdoba, Sevilla, Niebla, Algeciras y Medina Sidonia.

En consecuencia, el territorio ocupado por los invasores se dividía en varios estados musulmanes independientes, poblados, por una parte, por la raza conquistadora (dividida en varias, más o menos regidas por el derecho islamita), y por otra, por los sometidos que se regían por el Fuero Juzgo y sus derivados. Toda esta variedad de derechos civiles no podía sino llevar en esos casos a un acusado personalismo de las leyes.

También Gibert aborda el problema de los judíos y los moros: los judíos aparecen cuando se reconquistan ciudades y con el desarrollo de la vida urbana; los moros cautivos de guerra son siervos; "el moro forro" es el que nunca perdió la libertad por haber capitulado, se mantienen como extranjeros en su tierra; unos y otros ocupan determinados barrios en las ciudades, con vestidos y señales, oficios y profesiones peculiares.

A moros y judíos se refieren las Leyes IX y XVII del "Espéculo", que determinan la forma de prestar juramento, conforme a sus religiones respectivas, sobre la consideración que merecían al legislador, encontramos en la Ley LXIII, título IV de la Partida I. *"Acaezca a las vegadas que los judíos e los moros se encuentran con el "Corpus Domini"*

quando lo llevan para comulgar a algún enfermo: e por ende decimos que cualquier de ellos, o otro que no fuere de nuestra Ley, o non la creyese, que se encuentre con el "Corpus Christi", que fará bien si se quisier humillar, así como facen los Christianos, porque ésta es verdadera fe, e non otra. Mas si esto no quisieren fazer, mandamos que se tuelga de la calle, por que pueda el Clérigo pasar por ella desembargadamente". Si a la tercera imposición de penas, más bien leves, vuelva alguno a delinquir, manda que le detengan hasta que el Rey resuelva. "E esto mandamos, por dos razones: la primera, porque los Judfos e los Moros no puedan decir que les fazen mal a tuerto en nuestro Señorío. La otra, porque los Jueces o los que obiesen esta justicia de cumplir en ellos, non se moviesen a fazerles mal por codicia a ver lo suyo, o por placer que oviesen a fazerles mal en los cuerpos, por razón de la malquerencia que han contra ellos. E esta pena sobredicha non se entiende si non de aquellos moros o judfos que son moradores los logares de nuestro Señorío. Mas si fuesen estraños, que viniesen de otra parte, e non sopiessen desto, non tenemos por bien que caigan en ella. Ca non merescen pena, fueras ende si alguno de ellos fuese sabedor e fiziese contra ello maliciosamente.

Sobre esto, también la Ley XX, Título XI, Partida III, manda que el judfo preste juramento ante el Juez en la Sinanoga, poniéndole las manos sobre la "tora" y sin invocársele a Cristo; y la Ley XXI, cómo ha de hacerlo el moro, compareciendo a la puerta de la mezquita, si la hay, con invocación de su Dios, y de Mahoma, su profeta.

La versión romanceada del "Liber Iudiciorum", es decir, el "Fuero Juzgo", regula la situación en la forma que queda recogida más arriba, al ocuparnos de la época visigótica.

Esta igualdad quiebra en el derecho penal; así, en la ley LXXXIII de las del Estilo, "...*más merece haber pena el judío, que fiere al cristiano: según derecho, mayor pena habrá el judío que fiere el christiano, quanto que es mayor el christiano que el judío*"; y añade en la Ley LXXXIV: "*E según derecho, no se debe dar tan gran pena al christiano que mató al moro o al judío, como el moro que mató al christiano*".

La Ley VIII de las "Leyes Nuevas" de Alfonso X el Sabio, tras sentar también un criterio igualitario: "... *manda el rey que así como judío non puede prender al cristiano por ningún deudo, que otrosí que el cristiano non pueda prender al cristiano, e que cada uno cate cómo da lo suyo, que lo non pierda*".

En cuanto a la población musulmana en territorio conquistado por los cristianos, en los primeros tiempos era muy limitada, al estar formada sólo por prisioneros de guerra convertidos en siervos ("*mauri capii*" o "*comparati*"). Desde finales del siglo XI se les empieza a reconocer la libertad, con autorización para conservar su religión, sus derechos y sus bienes, estando protegidos por los reyes ("*mauri pacis*"), por lo que su número empieza a crecer, si bien no se mezclan con los cristianos.

En la conquista de Valencia, Jaime I respetó la religión, las leyes y costumbres de los moros, si bien existió una constante vigilancia para que viviesen en las "morerías" o "vicus sarracenorum", sobre todo al producirse sublevaciones (Alazdrach, 1248, y también en 1254 y 1276) por Jaime I y Pedro el Grande. Se establecen disposiciones en materia de pruebas (Jaime II, 1301), esclavitud, venta de moros, ejecución de moros corsarios (Juan I, Montesa, 1389), y trato sexual entre las diferentes razas y prohibición de ocupar cargos públicos (424).

En la Baja Edad Media continúa, al principio, el buen trato, pero más tarde los habitantes en el campo padecen excesos por parte de los señores, lo que les lleva a vivir en las "morerías" (barrios apartados en las ciudades), en las que conservan su libertad religiosa y de comercio, mediante el pago de impuestos, aunque las restricciones aumentan con el tiempo, como eran no tratarse con los cristianos y utilizar trajes concretos (425). En esta época se calculan en 400.000 personas, antes de la conquista del reino de Granada (426).

(424) V. L. Simó Santonja, obra citada, pág. 59-70.

(425) A. García Gallo, *"Curso de Historia del Derecho español"*, I, 1947, págs. 143-144, 235.

(426) A. García Gallo, *"Manual de Historia del Derecho español"*, 10ª edición, 1984, I, pág. 717-718.

3. Francos

Tenemos, por otra parte, a los "francos", aquellos individuos, en su mayoría franceses, que se quedaban en España con ocasión de haber realizado una peregrinación a Santiago de Compostela. Estos parece que continuaban rigiéndose por sus leyes; favorecer la repoblación era la causa de este privilegio.

Conde y Luque (427) cita diversos supuestos de asentamientos de extranjeros, con motivo de la Reconquista: el barrio de San Germán, en Pamplona, se compuso de francos; también pertenecían a esta raza muchos de los pobladores de Logroño, Estella y otros sitios; Alfonso VI de Castilla les dio su fuero a los francos que le acompañaron en las conquistas, especialmente en la de Toledo. Como extranjeros relevantes asentados en España están Nuño Melquíades, fundador de Burgos, y el conde D. Ramón, primer marido de la reina Doña Urraca.

Para J. I. Ruiz de la Peña (428), la mayoría de los pobladores de los nuevos asentamientos en Asturias eran "francos", en el más amplio

(427) Obra citada, pág. 343.

(428) "*Las "polas" asturianas en la Edad Media*", Universidad de Oviedo, 1981, pág. 16 y sts.

sentido de la palabra. En esta región, para E. Benito Ruano (429), se da un tratamiento favorable a la extranjería. Como pone de relieve este mismo autor, son numerosos los extranjeros que toman parte, como mercenarios, o como cruzados (franceses, alemanes, ingleses, irlandeses y, sobre todo, suizos) en el final de la Reconquista (430).

4. Egipcianos

Según J. A. Tomás Ortiz de la Torre (431) componían una clase de personas que eran considerada, si no como extranjeros, al menos con un sentido de semi-extranjeras.

Los Reyes Católicos dieron una Pragmática en Medina del Campo (1499), confirmada por Carlos I en Toledo (1525) y en Madrid (1528 y 1534) (Novísima, 12, 16, 1), por la que se decretó la expulsión del reino siempre que anduviera vagando sin oficio conocido.

(429) "El desarrollo urbano. Ciudades y polas en Asturias", en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, XXIV, 1971, pág. 39 y sts.

(430) Benito Ruano, E.: "La participación extranjera en la guerra de Granada. Andalucía Medieval", tomo II, Actas del I Congreso de Historia de Andalucía (diciembre de 1976), 1978, pág. 303 y sts.

(431) "El régimen jurídico de extranjería en la España del siglo XVIII y la partición del extranjero en la industria nacional" (Proyecto de tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, mecanografiada, 1972, pág. 21).

Se les concedían ciento veinte días para salir del reino, a no ser que en ese plazo hubieren obtenido trabajo. De la lectura de la norma se desprende que lo que preocupaba era el grupo "vagando", no el individuo.

De ellos nos ocuparemos con más extensión en el capítulo correspondiente a la Edad Moderna, que es cuando se desarrollan las medidas referentes a este grupo social.

4. Los vaqueiros de alzada

No es éste el lugar para ocuparse de su particular condición social, pero sí cabe hacer referencia a su origen. Para Benito Acevedo y Huelves, en obra reeditada en 1915, su origen era celta. Félix Pío Aramburu y Zuloaga los suponía descendientes de los cristianos que Alfonso I trajo a mediados del siglo VIII, y que habían ocupado una posición inferior, próxima a la de los siervos, si bien esta última opinión carece de justificación. Para Ramón Menéndez Pidal (432), se trata de pueblos del Sur de Italia, que emigraron a Hispania desde Roma, en la República, para demostrar lo cual maneja varios argumentos toponímicos.

(432) "Pasiegos y Vaqueiros", en "Archivum" de la Universidad de Oviedo; y "A propósito de la LL y L latinas. Colonización suditálica en España", citados por J. Uría Riu en "Los vaqueiros de alzada y otros estudios (de caza y etnografía)", en "Biblioteca Popular Asturiana", Oviedo, 1976, pág. 132.

Es apoyado por Aibischer y Bertoldi. En todo caso, el problema queda por resolver, y es un ejemplo de la existencia de razas de origen oscuro existentes en España, y objeto de discriminación.

V. BALANCE DEL PERIODO

La división de la Historia en épocas es inevitable, pues no cabe concebir que miles de años hayan transcurrido bajo unas mismas características. El problema surge cuando se trata de fijar los hitos que diferencian las épocas históricas. Por otro lado, no se puede caer en la simplicidad de que el cambio se produce de ayer para hoy, de la noche a la mañana... Por eso, cuando se habla de las divisiones que entraña reconocer que la Historia tuvo períodos distintos, se incurre a sabiendas, de manera consciente, en un convencionalismo, puesto que se concreta en una fecha algo que es el resultado de un largo proceso, y al señalar a esta última se hace por entender que es ella la que mejor representa la maduración de una situación. Con ocasión bien reciente, así lo han entendido destacados historiadores (433).

(433) J. A. García de Cortázar: "Una mirada foránea sobre la Cataluña medieval con ocasión de su imilenario?"; J. M^a Salvach: "Sociedad tradicional y orígenes de Cataluña", y J. Sobregués: "Un milenario para Cataluña"; todos en "Cuenta y Razón", nº 36, abril-mayo 1988.

Lo anterior viene a cuento de la interpretación de F. Tomás y Valiente (434), de que la visión catastrofista del hundimiento de la monarquía visigoda se mantiene en un plano anecdótico y superficial; y aunque reconoce que no debe minimizarse la importancia y las consecuencias de la invasión y de la rápida ocupación islámica de la Península en sólo ocho años, entiende que esta visión simplista debe ser sustituida por otra más profunda y compleja, elaborada por la reciente historiografía, cuyas ventajas son dos: una, que permite entender la caída del 711 como punto crítico y terminal de un proceso iniciado decenios atrás; y otra, que nos delata la existencia de muchos elementos de continuidad por debajo de la ruptura política del año 711.

En el primer sentido -sigue diciendo dicho autor-, el reino visigótico estaba sumido durante el siglo VII en un imparable proceso disgregador. Desde otro punto de vista, después del 711 hubo nobles (Teodomiro, Ardabasto...) que conservaron su riqueza territorial, gracias a pactos con los invasores. Otros, como Pedro, "dux provinciae Cantabriae", lograron mantenerse semiindependientes. Existe una continuidad de lo hispano-godo, con el mantenimiento de fórmulas como el patrocinio, los arrendamientos rústicos de raíz romana, la explotación señorial de los grandes dominios en Al-Andalus... Además, se conserva la vigencia del "Liber Iudiciorum", si bien -reconoce- con profundas transformaciones derivadas de la pérdida de la unidad del reino godo.

(434) Obra citada, pág. 111.

Todo lo anterior es indiscutible, pero la situación -a nuestro juicio- exigiría todavía más precisiones:

En los terrenos conquistados, la Economía se reanima, obtiene gran desarrollo, la producción deja de ser exclusivamente agraria, y se explotan nuevos cultivos agrícolas y especies ganaderas. La industria dispone de una técnica superior a la visigoda. Se produce una explotación intensa de las minas.

Existe una gran circulación de personas y mercancías, tanto a través del comercio marítimo con Africa y Oriente, como por el que se realiza por tierra: Córdoba, y Sevilla después, son el centro de todos los caminos. Florecen importantes comerciantes que pertenecen a todas las razas, y que van y vienen a y de todas partes; son viajeros incesantes. Aparece una economía monetaria importante, y se desarrolla la Banca (sobre todo, por los judíos, cuya población aumenta).

Los visigodos que se someten a los musulmanes (mozárabes) conservan su religión, su Derecho, su espíritu nacional, sus costumbres, y gozan en un principio de la consideración de los invasores, que reconocen su cultura superior; aunque a mediados del siglo IX se pretende implantar la unidad islámica, por lo que los mozárabes huyen al Norte de la Península o reniegan de su fe ("muladíes").

Por el contrario, en la España cristiana, al haber quedado en manos de los invasores la mayor parte de las riquezas, la Economía es pobre, sólo agraria y ganadera, y hasta el siglo X la industria se reduce a lo más indispensable.

Se produce una situación de aislamiento, para la que no queda más solución que la autarquía. El apartamiento prácticamente total dura hasta el siglo X; y se empieza a romper con la navegación por el golfo de Vizcaya y por el Mediterráneo, y por la utilización de las viejas calzadas romanas. Lo importante es la posesión de la tierra, para su cultivo; la ganadería es secundaria.

Aparecen tarde las clases mercantiles, que acumulan dinero en metálico, pero la Economía monetaria no se da hasta el siglo X, y el crédito hasta el XII. El comercio originará más tarde sucesivas instituciones como el mercado (lugar donde se celebran compras y ventas, que se reúne una vez a la semana); el "azogue" (las tiendas que van quedando abiertas durante el resto de la semana); y las ferias (que se celebran una o dos veces al año).

El "Liber Iudiciorum" se aplica como Ley general en León y Cataluña; no en Castilla, Aragón y Navarra.

Como se ve, no puede ser más diferente la situación entre el Islam

y la España cristiana; esto no puede ser negado, y, además, ¿cabe, en rigor, buscar como causa más decisiva de la existencia de las dos caras de esta misma moneda, otra que la derrota de Guadalete, por muchos que sean los motivos que se anticiparon a esta situación y las circunstancias que pervivieron?

El propio Tomás y Valiente admite que ha existido una fragmentación del poder político, principal -aunque no única- causa de lo que Lalinde ha llamado "dispersión normativa". Junto a la de origen regio, aparece la señorial y también la propia de los núcleos vecinales ("ámbitos jurídicos autónomos").

Pero, junto a estos "órdenes" territoriales, de circunscripción distinta por su amplitud y situación, existió también una diversificación subjetiva por razón de las personas, con distinción basada en las creencias religiosas o en la raza, aunque la convivencia entre los componentes de todas ellas fuese a veces pacífica, lo que llevó de nuevo a la aplicación del principio de la personalidad del Derecho en función de aquellas creencias (cristianos, moros, mozárabes, moriscos, mudéjares, judíos), e -incluso- de su lugar de origen -"nación"-, como es el caso de los castellanos que fueron a repoblar Toledo (supuesto no único), que conservaban su antigua condición jurídica, junto con la de los miembros de las demás razas que allí coexistían.

La convivencia de nobles, burgueses y clérigos, cada uno con su "status", contribuye a completar el mosaico socio-jurídico, en especial en la Alta Edad Media, lo que produce una gran complejidad, realzada por el fenómeno de la repoblación de las tierras que se van recuperando a medida que la Reconquista avanza hacia el Sur, y que se hace necesario asentar una población sobre los nuevos territorios, como manifestación externa y hasta elemental -algo así como la "ocupación", forma originaria de adquirir la propiedad, pero en este caso presentada como exigencia externa más de Derecho público que de privado- de la soberanía.

Merece la pena detenerse en este fenómeno, para confirmar cómo se produjo de manera desigual entre las diferentes zonas.

En el valle del Duero, despoblado según Sánchez-Albornoz, se va produciendo la roturación mediante la "presura" (435). La despoblación general es admitida también por Herculano, Barrau-Dihigo y Pérez de Urbel; en contra, Menéndez Pidal, que niega la existencia de un total colapso demográfico (436). Numerosos pueblos conservan hoy todavía nombres que hacen referencia a los de los repobladores: "Pobladura",

(435) I. de la Concha Martínez, *"La presura. La ocupación de las tierras en los primeros siglos de la Reconquista"*. Madrid, 1946, antes publicado en el *Anuario de Historia del Derecho Español*, XIV, 1942-1943, pág. 322 y siguientes.

(436) J. A. Escudero, obra citada, pág. 314, se refiere a las diversas clases de repoblación: oficial, privada, familiar, monástica, por Ordenes militares, repartimientos reales...

"Pobladura de Las Regueras", "Pobladura de Aliste", "Quiroganes", "Bercianos de Aliste", "Gallegos del Rfo", "Bercianos de Valverde", "Pobladura de Valderaduey", "Población de Campo", "La Puebla de Valdavia", "Gallegos de Serruja", "Gallegos del Pan", "Gallegos de Altambros", "Gallegos de Sobrinos", "Asturianos", "Pobladura de Pelayo García", "Pobladura del Valle", "Pobladura de Sotierra", "Gallegos", "Villagallegos", tantas "Villanuevas"..., "Bercianos"... La procedencia de aquéllos era muy heterogénea y de diferente amplitud, en lo que toca a la tradición jurídica visigótica.

Ya es sabido que Toledo (Alfonso VI, 1085) se conquistó bajo el sistema de capitulación, con respeto del Derecho de los antiguos pobladores (musulmanes, judíos y mozárabes), luego compensado con el establecimiento de gran cantidad de castellanos y francos, lo que hace pasar de un principio personalista del Derecho a otro sistema basado en la unificación, de base mozárabe. A esto se une la gran importancia posterior de los dominios señoriales entregados a las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara.

En lo que se ha llamado los "Extrema Durii", o sea, la zona comprendida desde Toledo al Sistema Central, la repoblación se intensifica con la conquista de aquélla, con núcleos urbanos y amplios alfores, por lo que tiene mucha importancia el derecho municipal, en detrimento del nobiliario y eclesiástico.

En Andalucía, después de sofocada la revuelta de los mudéjares (1262-1264), se trajeron pobladores de León y de Castilla, con poco éxito, por lo que se implantaron "donadíos" o "heredamientos", a favor de miembros de la familia real, dignidades eclesiásticas, u órdenes militares. Los grandes latifundios nobiliarios proceden de finales del siglo XIII o del XIV.

En Cataluña, por lo general, retornan los "hispani", que se habían refugiado en la Cerdeña y la Septimania, por lo que eran continuadores de la tradición visigótica, y adquieren la tierra mediante la "aprisio" (Abadal), pero no se puede desconocer la existencia de una aportación franca (437).

La población del Valle del Ebro se incrementó con mozárabes (de 10 a 12.000, traídos de Andalucía por Alfonso I en 1125), francos, navarros, catalanes... Los cristianos ocuparon las ciudades y los moriscos fueron a vivir al campo, donde cultivaron las tierras.

La población musulmana huyó de Mallorca tras la conquista, o fue aniquilada o reducida a la esclavitud (Menorca). Los "repartimientos" se hacen entre los nobles catalanes que tomaron parte en la conquista.

(437) A. García Gallo, *"Curso de Historia del Derecho Español"*, 1947, I, pág. 132.

También se hacen asentamientos en Valencia por el mismo sistema del "repartimiento" entre catalanes y valencianos. Los musulmanes, aunque son expulsados, sí son sacados de las ciudades.

En Murcia se sigue un sistema mixto, en el que alternan pobladores castellanos y algunos catalanes y aragoneses, con "donadíos" a miembros de la nobleza y a las órdenes militares.

Con esto queda descrito lo variopinto de los orígenes de la población de los diferentes reinos.

La tesis más generalizada es que el "Liber Iudiciorum" persiste durante los siglos VIII al XII en los diversos reinos, tanto entre los mozárabes ("hispani") como en los terrenos reconquistados, si bien se va transformando, al impulso de muchas interpretaciones diferentes, públicas y privadas; se aplicó en especial el Derecho de familia y de sucesiones, pero no el político, el penal y el procesal (438). Para otro autor, la tesis debe matizarse (439): el "Liber" sigue siendo Ley general en León y Cataluña, en los lugares donde actuaban los reyes y algunos condes o abades; en el resto se aplica la costumbre, y no se utiliza en Castilla, Aragón y Navarra. De manera especial, fue muy importante la participación de los jueces, no sólo en la interpretación del Derecho, sino

(438) F. Tomás y Valiente, obra citada, pág. 127 y 128.

(439) A. García Gallo, *"Curso de Historia del Derecho Español"*, I, pág. 154

en su creación. Castilla y Navarra fueron tierras de "albedrío", y en cierto modo Aragón, en las que el Juez, ante la ausencia de norma, la crea y sienta el precedente para el futuro, por medio de "fazañas", que se acababan recopilando. No es éste el momento, y no somos nosotros quienes debemos sentenciar esta diversidad de criterios; pero lo cierto es que la abundancia de fueros, cartas pueblas, etc., demuestra la pujanza de estas fuentes del Derecho, frente al viejo "Liber".

Para García Gallo (440), en la Alta Edad Media el Derecho, en general, se aplica en un territorio a todas las personas que habitan en él, aunque señala excepciones a partir del siglo XI: supuesto de los pobladores de distinto origen, que vivían conforme a su respectivo Derecho (reiterado caso de Toledo: castellanos, mozárabes, francos, musulmanes y judíos). Entendemos que ese ejemplo ha de ser interpretado precisamente como eso, como una excepción muy poco frecuente, y que la regla general fue la territorialidad en la aplicación de la ley, tanto en esta época como en la Baja Edad Media. Pero en lo que sí están conformes, lo mismo dicho autor como Francisco Tomás y Valiente (441), es en la aplicación de la personalidad del Derecho en función de la religión, tanto a los moros dominados ("mauri pacis") como a los judíos.

(440) "*Curso...*", Madrid, 1947, t. I, pág. 144, 161 y 248, y "*Manual...*", pág. 237.

(441) "*Manual...*", pág. 117-118.

¿Cuál sería la regla en caso de conflicto de normas entre este cúmulo de fuentes territoriales, y de distinto origen? Para García Gallo (442), en caso de colisión entre el Derecho local y el territorial prevalece el primero. Las disposiciones reales se aplican con preferencia a las sentencias judiciales y a la costumbre, por lo que las ciudades procuran que los príncipes confirmen las últimas. Si las fuentes son de distinta fecha, prevalece la más moderna.

Quizá una solución, simple -si se quiere-, pero inevitable, haya sido que los detentadores del poder hayan consentido a los miembros de las diversas comunidades regirse por sus leyes particulares, pero, aunque las leyes no suelen abordar la cuestión, cuando surge la colisión de normas, se habrá seguido el principio territorial. Así, García Gallo (443) dice que estas situaciones no plantean en muchos casos situaciones de colisión de normas, porque éstas coinciden en los diferentes derechos. El problema importante es el de cuál sea el Tribunal competente, y se sigue el del domicilio del demandado (así, en el Fuero de Carcastillo: "Y los hombres de otras tierras que tuviesen juicios con los de Carcastillo, no les pidan más derecho en su concejo); y añade: "...posiblemente ante los jueces de las dos partes".

(442) *"Curso de Historia del Derecho Español"*, I, pág. 172.

(443) *"Manual de Historia del Derecho Español"*, Madrid, 1984, 10ª reimpresión, I, pág. 249.

En la vía extrajudicial, lo lógico será aplicar el Derecho que las partes convengan.

Si los derechos personales son distintos, faltan normas que señalen cuál ha de prevalecer. En Toledo y en Valencia, cristianos, moros, judíos, mozárabes y francos comparecen ante los Jueces de los primeros.

En la Baja Edad Media la regla "cunctos populos" hace que todos los sometidos al rey o al señor, sigan las leyes de éstos, pero la forma de los testamentos o las capitulaciones matrimoniales pueden guardar la de los interesados aunque se trasladen a lugar distinto (444).

Conviene, no obstante, destacar, en el Derecho valenciano, que frente al principio general de territorialidad, también se admitía la aplicación de la ley extranjera del lugar donde esté la cosa cuya posesión se disputa. En materia de delitos rige la ley de comisión, o en donde sean hallados los culpables (si son vagabundos), o la del domicilio cierto cuando se trate de acusados infames públicos. Para las herencias, será sólo foro competente el del lugar de la herencia, o el de la mayor parte de ella, o el del domicilio del causante, si es el fondo lo que se discute. En cuanto a contratos, el del lugar de su celebración o el del domicilio del demandado si en él se encuentra éste, a elección del demandante.

(444) *"Manual de Historia del Derecho Español"*, Madrid, 1984, 10ª reimpresión, I, pág. 250.

Con esto queda trazado un cuadro de la enorme diversidad de fuentes, y de la necesidad de analizar en la medida de lo posible cada una de ellas, para reconstruir la condición jurídica de los "extraños" (al lugar, más que al reino o núcleo político), en relación con los que, mejor que llamados "nacionales", deben ser llamados "vecinos", dado el estrechamiento del campo de aplicación del Derecho.

Ante esta fragmentación, ¿dónde quedaba la simplicidad de las fórmulas del "Liber Iudiciorum" visigótico?

El localismo jurídico trata de ser superado a medida que el poder real se ensancha en el espacio y se afianza.

Así, van apareciendo los "Usatges" de Barcelona (hacia 1060), luego extendidos a Urgel, Lérida, Tortosa, Rosellón, Cardena y Ampurias, Besalú, Mallorca y Cardena; a mediados del siglo XIII constituye el Derecho general de todo el principado de Cataluña.

También recopilaciones anónimas y privadas, como el "Fuero Viejo de Castilla", el "Libro de los fueros de Castilla".

Por otra parte, aparece la concesión del "Liber Iudiciorum", en su versión romanceada ("Fuero Juzgo"), otorgada a diversas localidades por Fernando III, y el "Fuero Real", pero que tampoco tuvo carácter general.

La obra más importante, en el terreno doctrinal, fue el "Código de las Siete Partidas", de Alfonso X el Sabio, aunque García Gallo dice que son obra posterior a la muerte del mismo, y no fueron promulgadas por Alfonso X, Sancho IV, ni Fernando IV; sólo por Alfonso XI, en el Ordenamiento de Alcalá, como Derecho supletorio (1348).

En otros lugares, deben citarse el "Fuero General" de Navarra (probablemente promulgado bajo el reinado de Teobaldo I, 1234-1253), los "Fueros de Aragón" (Jaime I, 1247), la "Costum" o "Fueros" de Valencia (1240).

Para García Gallo (445), al ser la sociedad medieval esencialmente cristiana, quedan fuera de ella los hombres de otra religión; situación que se conserva hasta el siglo XI. Los "mauri" y "judei" no forman parte de la "terra", y carecen de todo estatuto jurídico frente al resto de la comunidad, siendo en ocasiones considerados, a efectos de penar su muerte, como un animal.

Las capitulaciones iniciadas con Toledo (1085), Valencia (1094), Tudela (1119), y la Zona del Ebro por Alfonso I el Batallador, cambian de situación, por lo que los moros forman una aljama "comunidad", unidad directamente al rey, puesta bajo su "paz", por lo que estos moros se llaman "moros de paz" y conservan su libertad y su derecho.

(445) *"Manual de Historia del Derecho Español"*, Madrid, 1984, I, pág. 622.

En circunstancias análogas están los judíos, bajo la protección directa del rey.

Peor es la situación de los herejes (aunque los proteja Pedro II de Aragón, por razones políticas), por considerarlos elementos nocivos para la sociedad.

Parte III

EL EXTRANJERO EN LA EDAD MODERNA

Capítulo V

SITUACIONES Y ESTATUTOS DIFERENCIALES

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Según Lapradelle y Niboyet (1), a partir del siglo XVI se elabora un verdadero Derecho convencional especial aplicable a los extranjeros, que, bajo la cláusula de asimilación de los extranjeros a los nacionales y la del trato como nación más favorecida, se convertiría en Derecho común en todos los países civilizados. Citan en apoyo de su tesis los tratados de paz y alianza de 3 de abril de 1559 entre Francia y España, en los que se acuerda para los súbditos de las partes contratantes la libertad de entrada, de estancia y de salida, de celebrar negocios como los nacionales de cada Estado. Algunos tratados suprimen el derecho de aubana y acuerdan la libertad testamentaria (tratado de 1506 entre Francia e Inglaterra); otros autorizan a ejercer la religión de origen en los Estados contratantes (convención de 19 de marzo de 1641 entre España y Dinamarca, tratados de Westfalia, 1648); o proclaman la libertad de comercio (tratado de Munster entre España y las Provincias Unidas).

(1) Obra citada, pág. 7.

Un balance de la doctrina al respecto registra lo siguiente: para Francisco de Vitoria, el extranjero que se establece en un país se identifica jurídicamente por este solo hecho con el indígena, y debe soportar las mismas cargas y gozar los mismos privilegios que el ciudadano. Según Grocio (2), es necesario reconocer a los extranjeros el derecho de paso, de establecimiento, de adquirir cosas necesarias, de contraer matrimonio. Para Wolff (3) dice que pertenece a cada nación apreciar si es nocivo, o no, autorizar a los extranjeros y a sus mercancías el paso por las tierras y riberas y permitir establecerse por causas legítimas. Vattel (4) declara que el señor del territorio es dueño de fijar las condiciones bajo las cuales acuerda la entrada de los extranjeros, pero se compromete a protegerlos como a sus propios súbditos y a hacerles gozar, en lo que de él dependa, de una entera seguridad.

Por eso, la regla general en este período es consecuencia inevitable del "status" político imperante: al encontrarnos en la época de los Estados absolutos, serán sus reyes o gobernantes los que, en cada caso, y según las exigencias de la guerra o de la paz, de la economía, de la intransigencia o de la tolerancia religiosa, los que vayan desgranando una

(2) "*De iure belli ac pacis libri tres*", París, 1613, II, pág. 16 y sts.

(3) "*Institutiones iuris naturae et gentium*", cap. IV, parte IV.

(4) "*El Derecho de gentes o principios de la Ley natural, aplicados a la conducta y a los negocios de las naciones y de los soberanos*", por Mr. (Emer) Vattel, traducidos en castellano por D. Lucas Miguel Otarena, Madrid, Ibarra, 1822, tomo II, pág. 97.

serie de medidas que aborden la situación momento a momento.

II. UNA INCIPIENTE REGLAMENTACION.

1. Aspectos generales

Nos encontramos ante la existencia de una tardía serie de normas que regulan con detalle aspectos de la extranjería. Ello es así si se tiene en cuenta que tampoco figura en la Nueva Recopilación, mandada hacer por Felipe II (año 1567), y sólo cuando se publica, bajo Carlos IV (1805), la Novísima Recopilación de las Leyes de España, aparece recopilada en el Título XI del Libro VI ("De los vasallos", en la rúbrica de este último) la normativa referente a *"los extranjeros domiciliados y transeúntes en estos Reynos"*, constituido por nueve leyes, que arrancan de una dada por Felipe IV en forma de una pragmática del año 1623, dando permiso *"a los extranjeros católicos y amigos de la Corona para venir a exercitar sus oficios en estos Reynos"*.

Es de destacar que en su clásica obra, Jordan de Asso y De Manuel (5), antes de la promulgación de la Novísima Recopilación,

(5) *"Instituciones del Derecho Civil de Castilla"*, por los Doctores I. Jordán de Asso y Jordan de Asso y del Río, y M. de Manuel y Rodríguez, 1792.

plantean un resumen de lo que era la extranjería, que por su interés pasamos a transcribir:

"No han faltado poderosas razones á nuestros Legisladores para excluir á los estraños de los empleos publicos, y Eclesiasticos, y obligarles á ciertas cosas, que convienen para el buen gobierno. Por eso han dispuesto: I. Que no puedan obtener Alcaldías, Regimientos de Ciudades ó Villas, ni ser Regidores Jurados, l.2. y 27. tit. 3. lib. 7. Recop. II. Que no puedan obtener Beneficios, ni pensiones sobre estos, l. 14. 15 17. 18 y 25. tit. 3. lib. 1. Recop. III. Que no hagan donaciones, ni traspasaciones de Villas, Castillos, ó Jurisdicciones á su favor, l. 1. y 2. tit. 10. lib. 5. Recop IV. Que no se les dé posesion de Encomienda alguna. Aut. 6. tit. 3. lib. 1. V. Y para que estas leyes fuesen inviolables, prohibieron conceder naturalidad á los extranjeros, mandaron, que el Reyno no lo consienta, l. 36. tit. 3. lib. 1. Recop. VI. Que no puedan ser Corredores de Cambio, ni Mercaderías, l. 7. tit. 16. lib. 5. Recop. VII. Que no se les escuse la ignorancia de las Cédulas Reales, Pregones, Edictos, &c. sobre sacas, y entras de cosas vedadas registros, derechos de Aduana, &c. Bobadilla Polit. l. 4. c. 5. n. 71 Vease l. 15. tit. 1. part. 1. VIII. Que solo puedan usar de los vestidos, que traxeren contra Pragmatica de trages por espacio de seis meses, desde el día que entraron en España, l. 1. cap. 17, tit. 12. lib. 7. Recop IX. Que no anden por las calles Buhoneros estraños, Aut. un. tit. 20. lib. 7. X. Que no pudan tener carnicerías, panaderías, ni pescaderías en los pueblos, l. 2. tit. 3. lib. 7. Recop. XI. Pero no pagaran moneda forera, haciendo constar, que á lo menos moraron fuera del Reyno por tres años, l. 7. tit. 33. lib. 9. Recop.

"Baxo otra mas estrecha significacion entendemos también por extranjeros de una Provincia al que no es nacido en ella; y en este sentido prohibian antiguamente los Fueros de Aragon, que ningún extranjero obtuviese empleos, ni dignidades en el Reyno. Pero el Señor Phelipe V. Por Decreto de 7. de Julio de 1723. que es el Aut. 30. tit. 2. lib. 3. mandó que igualmente se admitiese en aquella Corona para los empleos qualquiera de los nacidos en los otros Reynos de Castilla, dexando en su fuerza la ley de Mallorca, que manda que ninguna que no sea Mallorquín obtener ignidad, o renta en su Iglesia, d. Aut.30."

2. Permiso para residir y ejercer oficios los extranjeros católicos y amigos; cónsules, etc.

El título XI del Libro VI de la Novísima Recopilación se llama: *"De los extranjeros domiciliados y transeúntes en estos Reynos".*

La Ley I (Felipe IV, 1642) dice: *"Permiso a los extranjeros católicos y amigos de la Corona para venir a exercitar sus oficios en estos Reynos. D. Felipe IV en Madrid en los capítulos de reformation de la pragmática del año 1623. Permitimos que los extranjeros de estos Reynos (como sean católicos y amigos de nuestra Corona), que quisieren venir a ella a exercitar sus oficios y labores, lo puedan hacer: y mandamos que exercitando actualmente algún oficio o labor, y viviendo veinte leguas de la tierra adentro de los puertos,*

sean libres para siempre de la moneda forera, y por tiempo de seis años de las alcabalas, y servicio ordinario y extraordinario, y asimismo de las cargas concejiles en el lugar donde vivieren; y que sean admitidos como los demás vecinos a los pastos y demás comodidades: y encargamos a las Justicias que les acomoden de casas y tierras, si las hubieren menester. Y los demás extranjeros, aunque no sean oficiales ni laborantes, habiendo vivido en este Reyno diez años con casa poblada, y siendo casados con mugeres naturales dél por tiempo de seis años, sean admitidos a los oficios de República, como no sean Corregidores, Gobernadores, Alcaldes mayores, Escribanos de Ayuntamiento, Corredores, ni otros de Gobierno, porque en quanto a éstos y a los Beneficios eclesiásticos dexamos en su fuerza y vigor lo dispuesto por nuestras leyes: y encargamos a las Justicias los acomoden en todo lo que se pudiere de casas y tierras para la labor, por el beneficio que se considera de asistencia con estas calidades" (Concuerta casi exactamente con la Ley LXVI, Capítulo V, Título IV del Libro II de la Nueva Recopilación).

La Ley II decreta: "*Facultad de residir en estos Reynos a los extranjeros católicos que tengan las calidades que se previenen; y expulsión de los que se hallaren sin ellas.- D. Felipe V en Madrid por Bando de 16 de junio de 1703.- Mando que todos los Ingleses y Holandeses, que no fueren católicos, y aunque lo fueran, si no tuvieran las calidades referidas en mi Real Decreto de 16 de abril del pasado año de 1701, a quienes por él se permite la residencia en estos Reynos de España en que fui servido resolver, "que a los católicos Ingleses y Irlandeses, que hubiere diez años que asistían en este*

Reyno, y a los que se hallaban casados con Españolas, se les concedía que pudiesen vivir en mis Reynos, comerciar y vender libremente y tener bienes rayces y de cualquier género, sin que se les pudiese perturbar por accidente alguno en sus personas y sus haciendas; con declaración de que en ningún tiempo pudieren gozar de otros privilegios que los naturales vasallos, reconociéndose qué bienes tenían, que fuese adquiridos los rayces por compra legítima, y no traspaso ni otra cosa que diese lugar al dolo de que pusiesen en su cabeza sus haciendas los que no deben gozar de este privilegio; en cuyo decreto por otra resolución a consulta de 6 de julio de dicho año de 1701 mandé se extendiere a los católicos de la Nación Holandesa, con expresión de que los de una y otra Nación, que fueren católicos, no deben gozar de otros algunos privilegios expresados en los capítulos de paces con aquellas Naciones, reputándose en todo caso como mis vasallos", salgan de ellos en el término preciso de quarenta días; y los que conforme a dicho decreto y resoluciones puedan hablar y residir en ellos, no tengan correspondencia ni inteligencia con las Naciones y vasallos de las Coronas enemigas a la de España, y que si la tuvieren directa o indirectamente en mi deservicio y de mi Corona, sean severamente castigados en sus personas y bienes con las más rigurosas penas establecidas por Derechos, leyes y pragmáticas de estos Reynos; y que sobre ello los Alcaldes de Casa y Corte, Alcaldes ordinarios, y demás Justicias de estos Reynos, a quienes toca y pertenece la observancia y cumplimiento de ellas, celen con el mayor cuidado que se requiere en materia de tan grave importancia a la quietud pública y gobierno de estos Reynos: y asimismo, que los Ingleses y Holandeses que estuvieren establecidos

y residentes en estos Reynos de España de diez y seis años a esta parte, tengan obligación de presentarse dentro de tercero día a la publicación de este Bando ante las Justicias de las ciudades, villas y lugares donde tuvieren sus casas y continua habitación y residencia, y justificar ante ellos con testigos fidedignos y de mayor excepción y atestación del Cura de la Parroquia en que residieren, de estar tenidos y reputados comúnmente por verdaderos católicos, y profesar nuestra santa Religión y santa Fe Católica, y de otra manera, que sean excluidos y mandados sacar de estos Reynos".

Según la Ley III: "Circunstancias que deben concurrir en los extranjeros para considerarse por vecinos de estos Reynos. - D. Felipe V por resolución a consulta de la Junta de Extranjeros de 8 de marzo de 1716.- Debe considerarse por vecino, en primer lugar qualquier extranjero que obtiene privilegio de naturaleza; el que nace en estos Reynos; el que en ellos se convierte a nuestra santa Fe católica; el que viviendo sobre sí, establece su domicilio; el que pide y obtiene vecindad en algún pueblo; el que se casa con muger natural de estos Reynos y habita domiciliado en ellos; y si es la muger extranjera, que casare con hombre natural, por el mismo hecho se hace el fuero y domicilio de su marido; el que se arrayga comprando y adquiriendo bienes y posesiones; el que siendo oficial viene a morar y exercer su oficio; del mismo modo el que mora y exerce oficios mecánicos, o tiene tienda en que venda por menor; el que tiene oficios de Concejo públicos, honoríficos, o cargos de cualquier género que sólo pueden usar los naturales; el que goza de los pastos y comodidades que son propios de los vecinos; el que mora diez

años en casa poblada en estos Reynos; y lo mismo en todos los demás casos en que conforme a Derecho Común, Reales Ordenes y leyes adquiriera naturaleza o vecindad el extranjero y, que según ellas, está obligado a las mismas cargas que los naturales, por la legal y fundamental razón de comunicar de sus utilidades; siendo todos estos legítimamente naturales, y estando obligados a contribuir como ellos; distinguiéndose los transeúntes en la exoneración de oficios concejiles, depositarías, receptorías, tutelas, curadorías, custodia de panes, viñas, montes, huéspedes, leva, milicias, y otras de igual calidad, y finalmente, que de la contribución de alcabalas y cientos nadie esté libre; y que sólo los transeúntes lo estén de las demás cargas, pechos y servicios personales, con que se distinguen unos de otros; debiendo declararse por comprendidos todos aquellos en quienes concurra qualquiera de las circunstancias que quedan expresadas".

La Junta de Comercio y Moneda, por Orden de 11 de enero de 1771, mandó que los malteses que quisiesen continuar ejerciendo el comercio al por menor, habían de otorgar escritura de renuncia al propio fuero y domicilio en el término de ocho días, avendándose como vasallos de S. M., y con obligación los que estuviesen casados en Malta de traer a sus mujeres en un año; que los que no quisiesen domiciliarse, sino tenerse por transeúntes, no pudiesen ejercer más que el comercio al por mayor y en grueso, y siempre con la obligación de traer géneros

de buena calidad y lícito comercio (6).

Otra Orden de la misma Junta de 18 de mayo de 1774 dice que los malteses que quisiesen avecindarse, deben afianzar su permanencia, pues está prohibido por las leyes salir los vasallos con su casa y familia sin real licencia, bajo pena de perder los bienes que dejasen en el Reino. Y, si avecindados en el Reino, mudasen su domicilio dentro de él, deberán repetir la fianza en todos los lugares en que tomaren domicilio; en caso contrario, no se les permitirá hacer el comercio, y se les cerrarán las tiendas (7).

Por R.C. de 6 de junio de 1773, el Rey concedió privilegio de exención del sorteo y servicio militar para el reemplazo del Ejército a los hijos de extranjeros industriosos, nacidos en España, sin embargo de ser considerados como naturales y vasallos, sujetos a las leyes y cargas públicas, como sus padres, siendo de primer grado, y con tal que vivan aplicados a los oficios de éstos, o que se ocupen verdaderamente en otra industria provechosa al Estado (8).

(6) "Códigos españoles, concordados y anotados", Imprenta "La Publicidad", Madrid, 1847-1851, tomo 8, pág. 256, nota 1.

(7) "Códigos españoles, concordados y anotados", Imprenta "La Publicidad", Madrid, 1847-1851, tomo 8, pág. 256, nota 2.

(8) "Códigos españoles, concordados y anotados", Imprenta "La Publicidad", Madrid, 1847-1851, tomo 8, pág. 256, nota 3.

Volvemos a la Ley IV (título XI, Libro VI de la Novísima): *"Modo de proceder las Justicias ordinarias en los Abintestatos de los Ingleses transeúntes que mueran en España, el inventario de sus bienes. -El mismo (Felipe V) en Madrid, por dec. de 20 de noviembre de 1724. -A resolución de consultas de la Junta de Dependencias y Negocios Extrangeros de 6 de marzo de 1723 y 9 de agosto de 1724 declaró el rey mi hijo, que en los abintestatos de los súbditos del Rey de la Gran Bretaña que murieren en estos dominio, que podrían los Cónsules y otros Ministros de aquel Reyno inventariar sus bienes y hacienda, papeles y libros de cuentas, y ponerlos en manos de dos o tres mercaderes, para que los guardaren para sus propietarios y acreedores; observándose en todo el art. 34 de la paz ajustada con Inglaterra en Utrecht, sin que pudiese extender esto en caso de morir con testamento: y que todos los súbditos de la Gran Bretaña fuesen comprendidos en él, mientras no constare estar avecindados y arraygados en estos mis Reynos, con ánimo de perseverar en ellos, o que el largo transcurso del tiempo lo tuviere así manifestado: y que esta declaración se debía entender salvando siempre el perjuicio de tercero, y sin prohibición a las justicias de estos Reynos para que precaviesen el expresado perjuicio; pues aunque los Cónsules Ingleses hicieren su inventario conforme al sentido literal del cap. 34 y a la declaración que queda expresada, no por eso priva a las Justicias ordinarias, preservando el Derecho de tercero, el hacer al mismo tiempo otro inventario del abintestato, para evitar ocultaciones y el perjuicio de tercero; embargando al mismo tiempo en los mismos hombres de negocios en quienes se hiciese el depósito por los Cónsules Ingleses, los caudales, libros y papeles,*



y poniendo edictos públicos, para que dentro del tiempo competente, conforme a los contratos del difunto abintestato, compareciesen los acredores a pedir sus créditos, o proponer las acciones que tuvieren: con declaración expresa de que, no compareciendo dentro de los términos asignados, se levantasen los embargos, para que los Cónsules libremente pudiesen remitir los bienes y papeles a los herederos del difunto abintestato, o a quien por Derecho se debieren: de cuya declaración he querido prevenir al Consejo para su inteligencia, y para que por él se expidan (como se lo mando) órdenes a todas las Justicias de los puertos, ciudades y parages, donde hubiere Cónsules y Vicecónsules de la Nación Inglesa, a fin de que lo tengan entendido, y hagan executar y practicar así en los casos que en adelante se pudieren ofrecer”.

Carlos III, por Cédula de 22 de mayo de 1783, mandó observar lo convenido con el Rey de Cerdeña, sobre la base de una absoluta reciprocidad en cuanto a la disposición de bienes por testamento, donación u otro acto válido, "recoger las herencias", por abintestato o testamento.

En nota a la Ley anterior se recoge el artículo 8 de la convención de 13 de marzo de 1769, en cuanto a las herencias de franceses transeúntes en España y viceversa.

Conde y Luque (9) presenta como digno de ser notado el concepto que el Derecho patrio tenía del orden público internacional, dado que una Real Resolución de 1791 declaró que, para evitar dudas y cavilaciones, se hiciera entender a los extranjeros que prestaran el juramento o que lo rehusasen, que el renunciar a toda relación y dependencia del país nativo debía entenderse en las materias políticas, gubernativas y de sujeción civil, pero no en las domésticas y económicas de los bienes y comercio de cada uno y de sus personas y familia; de donde, además de dibujarse el orden público, se establece una vez más el estatuto personal del extranjero.

La Ley VI (Carlos III, 1765) contiene el Reglamento sobre los requisitos para el establecimiento de Cónsules y Vicecónsules, exenciones y uso de sus facultades. La Ley VII prohíbe el registro de las casas de los comerciantes extranjeros por los dependientes de Rentas sin información "semiplena", o en los casos de vehemente y citada sospecha, sin que sea necesaria la citación de su Cónsul para que asiste. La Ley VIII habla de la formación de matrículas de extranjeros residentes en estos Reinos, con distinción de transeúntes y domiciliados; la IX determina las reglas que han de observar las Justicias para ejecutar la anterior, y la X la rectificación anual de las citadas matrículas.

Según la Ley VII, Título XXIII del Libro VIII dice : *"D. Carlos III*

(9) Obra citada, pág. 371.

por Céd. de 24 de marzo de 1777.-...Y si ocurriese que algunos maestros de reynos extraños, siendo católicos, pasaren a residir en qualquiera de los pueblos de estos dominios, y solicitaren ser admitidos en los Colegios y Gremios de sus respectivas artes u oficios, se observe y guarde la ley del Reyno que habla del asunto (Ley I, Título XI del Libro VI) y la Real Cédula de 30 de abril de 1772, sobre la incorporación y examen de los maestros de coches extranjeros o regnícolas: y que se practique con los meros oficiales extranjeros, que no vengán todavía aprobados de maestros, lo mismo que queda ordenado para con los españoles que pasen de un pueblo a otro. Todo lo qual se entienda sin embargo de qualesquiera ordenanzas municipales o de los gremios, de qualquier modo aprobadas, las quales se derogan como perjudiciales, al beneficio público en esta parte, quedando en su fuerza y vigor en lo demás que dispongan".

La citada R.C. es la Ley anterior, la VI, Título XXIII del Libro VIII de la Novísima: *"Incorporación al gremio de Madrid de los maestros de coches extranjeros y regnícolas, aprobados en sus respectivas capitales.* - D. Carlos III por res. a cóns. del Consejo de 13 de diciembre de 1771, Céd. del Consejo de 30 de abril de 1772.- *"...Y para que sirva de aliciente y seguridad a los artesanos diestros extranjeros, que quisieren establecerse en Madrid o en otra parte del Reyno a exercer sus oficios, de qualquier calidad que sean; mando que se les observen las franquicias que por estas leyes de estos mis Reynos les están concedidas, las quales renuevo en esta parte; con declaración de que gozarán de estas franquezas y libertad de derechos en*

qualquiera parte donde se establezcan, sin necesidad de vivir veinte leguas de la tierra adentro de los pueblos, como proviene el cap. V de la Ley final, Título IV del Libro II de la Recopilación (Ley I, Título XI del Libro VI de la Novísima), el qual derogo en esta parte..." La nota 4 de este Título dice: "En R. Resolución de 28 de julio de 1797 determinó S. M. que quando algún extranjero artista o fabricante declare establecerse en sus dominios, e hiciere constar la Junta de Comercio y Moneda o de los Intendentes de las provincias que está suficientemente instruido en alguna parte u oficio útil al Reyno, se le permita (no siendo Judío), establecer su taller, fábrica o laboratorio, sujetándose a las leyes civiles y eclesiásticas, caso de ser católico, y quando no, se dé aviso a la Inquisición, a fin de que no se le moleste por sus opiniones religiosas, siempre que sepa respetar las costumbres públicas".

Felipe V en Balsaín (1723) manda que, indistintamente y sin diferencia alguna, "puedan obtener los aragoneses, valencianos, catalanes y castellanos, Dignidades, Prebendas y Beneficios Eclesiásticos en qualquiera de dichos distritos y dominios míos, sin necesitar de dispensación o concesión de naturaleza. En quanto al reino de Mallorca tenían a su favor privilegio para no poderse admitir allí naturales de otros países (aunque sean los de la Corona de Aragón), al goce de piezas eclesiásticas (Novísima, I, XIV, V).

3. El Fuero de Extranjería y los Jueces conservadores

Del tema de los "Jueces Conservadores" se ha ocupado Rodrigo Recondo (10), aunque con anterioridad se había ocupado también de esta institución Enrique Pecourt García (11).

Recondo empieza por definirlos, diciendo que

"El Juez Conservador o protector de los extranjeros se presentaba como el "juez nombrado por el rey con jurisdicción privativa para conocer en primera instancia de ciertos litigios de los extranjeros transeúntes", y aun no constituyendo "una institución general, en cuyo caso hubiera tenido reglas fijas y uniformes, sino una práctica, aunque bastante frecuente, casuística y de privilegio", no encarnaba una institución aislada y única en su género sino que junto a los de los eclesiásticos, del Real Patronato, de minas y de montes, formaba parte de todo un sistema de conservación".

Aunque más adelante se hace referencia a la institución de los "Judices telonarii" del "Liber Judiciorum", Recondo interpreta que

(10) *"El Sistema del Fuero de Extranjería (Contribución al estudio histórico de la competencia internacional de los tribunales españoles)"*, publicado en "Estudios de Deusto", XXVI a XXVIII, 1978, 1979 y 1980, pág. 449-517, 383-420 y 173-213, respectivamente.

(11) *"Una institución singular en la Historia del Derecho Internacional Privado Español: el Fuero de extranjería"*, en "Estudios de Derecho Internacional Público y Privado, homenaje al Profesor Luis Sela Sampil", Universidad de Oviedo, 1970, pág. 883 y siguientes.

"El testimonio más antiguo que poseemos de la existencia de aquéllos, constituyen los "CAPITULOS de PRIVILEGIO concedidos a las ciudades confederadas de la HANSA TEUTONICA y a sus súbditos, ciudadanos y vecinos en los dominios de PORTUGAL, confirmados y ampliados por Su Majestad CATHOLICA para la ANDALUZIA y demás Reynos de CASTILLA", en Madrid a 28 de septiembre de 1607 (12) en los que se decía que,

"... Los Hanseáticos, que por razón del comercio van y vienen, o se detienen, y habitan en nuestro Reyno, no pueden ser presos, citados, condenados, ni juzgados en ningún Causa Civil, ni Criminal por ningún Magistrado, o Juez, sino solamente por aquel especial Conservador, y Juez, que les daremos".

Para E. Pecourt la figura del Juez Conservador tiene honda raigambre histórica: en el orden canónico, los antecedentes se remontan al siglo XIII, y hace suyo un texto de D.-L. Arrayola, P. Gómez de la Serna y J. M. Manresa (13), cuando dicen que ésta no fue una institución general, en cuyo caso hubiera tenido reglas fijas y uniformes; sino una práctica, aunque bastante frecuente, casuística y de privilegio ..."

Destaca Recondo que "ratio personal, lo que era ya fuesen ambos

(12) Es de Felipe III, aunque Pecourt dice que ya se habían concedido privilegios en este sentido por Carlos V y Felipe II.

(13) "Enciclopedia Española de Derecho y Administración o nuevo Texto Universal de la Legislación de España y de las Indias", tomo XII, Madrid, 1870, pág. 664-665.

litigantes hanseáticos, ya lo fuese uno solo, siendo en este caso indiferente que el otro litigante fuese regnícola o extranjero a su vez; sin embargo, las consecuencias que se derivaban de cada uno de estos supuestos eran diferentes, en el sentido de que si los litigantes eran ambos hanseáticos, y siempre que por exceder la suma juzgada de cien ducados, la apelación era posible, ésta había de hacerse ante la Hansa teutónica, mientras que si el pleito tenía lugar entre hanseático y otro extranjero, o entre aquél y nacional, la apelación debía de ser interpuesta ante el Consejo Civil de Sevilla, cuyo juicio era definitivo".

Además de esta función judicial, competía igualmente al Conservador, con preferencia sobre cualquier otro magistrado, en relación con los extranjeros, visitar sus casas y registrar sus tiendas, conducirlos a la cárcel cuando por razón de algún delito fuese necesario que ingresasen en ella, y, en fin, la ejecución de la cosa juzgada.

Por Real Cédula de Felipe IV, de 16 de marzo de 1645, complementada por otra de 19 de mayo del mismo año, el privilegio es ampliado en beneficio de los súbditos del rey de Inglaterra, residentes y comerciantes en las ciudades de Andalucía, en atención al servicio que ofrecieron de dos mil quinientos ducados de plata, en Zaragoza a 19 de marzo de 1645. Tendrán un Juez Conservador, en las ciudades de Sevilla, Málaga, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, el cual, además de velar por el cumplimiento y respeto de los privilegios, libertades y exención

concedidos, debería

"... apremiar y compeler a todas y cualesquier personas, de cualquier suerte y calidad que sean, que tocaren a la dicha nación, así en aquellas en que fueren reos convenidos, como en las que fueren actores, aunque las personas que los conviniesen y que de ellos fueren convenidos tengan cualesquier jueces privativos, así por asiento o contrato que hayan hecho, como por preeminencias o inmunidades que tengan porque de las dichas causas sólo ha de conocer privativamente el dicho juez conservador, y no otro juez o tribunal alguno, aunque sea por vía de exceso, ni de injusticia notoria, o en cualquier otra manera o forma".

Como consecuencia de que la Audiencia de Sevilla puso obstáculos a la citada Real Cédula, Felipe IV dictó otra de 9 de noviembre de 1645, confirmándola pero limitando su alcance: cuando los afectados fuesen "entre los de vuestra nación", actores o reos, en causas civiles o criminales; pero, cuando las causas fuesen con españoles o con otras personas de diferentes naciones, el privilegio se produciría cuando fuesen "civil o criminalmente reos convenidos, pero no cuando fuesen actores demandantes".

Al analizar los motivos de la creación de esta institución, destaca Recondo que la historia de la condición de los extranjeros en la sociedades precontemporáneas se nos presenta realmente, según dice Pradier Foedere, como une triste histoire.

"Bien es cierto que, en determinados momentos, nos encontramos con actitudes favorables y hospitalarias, pero éstas están lejos de constituir y representar una línea de conducta general, pues tienen lugar, tan sólo, en beneficio de ciertos grupos o tipos, relevándolos únicamente la existencia de un sistema pluralista en el que coexisten diversos estatutos de extranjería, y en el que el comunmente aplicable se caracteriza por su espíritu xenófobo, que tipifica así el comportamiento que en las sociedades antiguas y medievales se observaba respecto de aquellos sujetos extraños al grupo socio-político considerado. Esta inferior condición se traducía generalmente en el plano de lo judicial, por la imposibilidad de acceder a los tribunales ordinarios del Estado, para quienes la administración de justicia era una función exclusivamente nacional. Consideraciones de equidad y de justicia natural, el deseo de favorecer el tráfico mercantil y la vigencia en lo judicial, incluso en épocas de fuerte territorialismo, del principio de la personalidad del Derecho, darán lugar a que en distintas épocas y lugares vayan surgiendo, como paliativo, tribunales especiales de extranjeros tales como los *noachides* en Judea, y los *prostatés* en Egipto, ciertos funcionarios especiales en la India, el *polemarco*, los *nautodiques* y los *epagogos* en Grecia, los *recuperadores* y el *pretor peregrino* en Roma, los *telonarios* en España, las *courts of staple* y las *pie poudre courts* en Inglaterra, los *conservateurs des foires* en Francia, los *cónsules mercatorum*, en fin, en su diversas modalidades -vizconde, *podestá*, *baylío*, *rector*, *cónsul*, *alderman*, *gobernador*, *procurador*- en gran número de estados europeos

entre los siglos XII y XVI^a.

Fueron los comerciantes hanseáticos los primeros en disfrutar del fuero de extranjería, que se extendería a los británicos. En los años que se suceden desde entonces, este régimen de privilegio, al tiempo de ver confirmada su vigencia (extinta a raíz de las guerras intermedias para aquellos que ya disfrutaban de él), se aplicará a nuevos Estados, ya porque así se pactaba expresamente, ya, en la mayor parte de los casos, por el juego de la cláusula de la nación más favorecida que venía entonces a incluirse, acaso de manera un tanto rutinaria, en buen número de tratados. La Hansa Teutónica ve su privilegio confirmado por el Tratado de Münster de 1 de septiembre de 1647 (artículo 1^o) y por la Declaración de Madrid de 26 de enero de 1648 (art. 11, 15, 26 y 29), confirmado a su vez por el Tratado de Münster de 30 de enero de 1648 (art. 16). Gran Bretaña, por el Tratado de Madrid de 23 de mayo de 1667 (artículo 9), aplicado en los Capítulos concertados por la villa de Santander con diferentes comerciantes ingleses avecinados en la villa de Bilbao el 12 de septiembre de 1700 (artículos 4, 5 y 6); por el Tratado de Barcelona de 10 de julio de 1707 (artículo 2^o); por el de Utrech de 9 de diciembre de 1713 (artículos 1 y 15); por el de Madrid de 14 de diciembre de 1715 (artículos 2, 5 y 7); por el de París de 10 de febrero de 1763 (artículo 2); por el de Aix-la-Chapelle de 18 de octubre de 1748 (artículo 3); por el de Madrid de 5 de octubre de 1750, por el de Versalles de 3 de septiembre de 1783 (artículo 2). También es adquirido

este mismo privilegio por los Países Bajos, por el de Utrech de 26 de junio de 1714 (artículos 17 y 26), y por el de Aix-la-Chapelle de 17 de octubre de 1748 (artículo 3). Por Portugal, en virtud del Tratado de Lisboa de 13 de febrero de 1668 (art. 4), confirmado por el de Utrech de 6 de febrero de 1715 (art. 17); por el de París de 10 de febrero de 1763, por el de París de 24 de marzo de 1778 (art. 2). Por Francia, en virtud de la Declaración de Madrid de 6 de marzo de 1669 (artículo 6); por el del Escorial de 7 de noviembre de 1733 (artículo 12); por el de Aix-la-Chapelle de 18 de octubre de 1748 (art. 3); por el Pacto de Familia de París de 15 de agosto de 1761 (art. 24); por el de París de 10 de febrero de 1763 (art. 2); por el de Madrid de 2 de enero de 1768 (artículo 1). Por Austria, en los Tratados de Viena de 1 de mayo de 1725 (artículos 21, 30 y 47), y de 7 de junio de 1725 (art. 3). Por Dinamarca, por el Tratado de San Ildefonso de 18 de julio de 1742 (art. 10). Por Cerdeña y Hungría, por el Tratado de Aranjuez de 14 de junio de 1742 (art. 10). Por las Dos Sicilias, por el Pacto de París de 15 de agosto de 1761 (art. 24). Y por Toscana, por el Tratado de Florencia de 25 de julio de 1731 (art. 5).

A mediados del siglo XVIII empezó a aplicarse, no sólo a los súbditos de los Estados que tenían suscrito un tratado con España, en el que se estipulaba la concesión de tal privilegio, sino también, y a los súbditos de todas aquellas "naciones amigas" -como dice un autor anónimo- con quienes no mediaban pactos contrarios al expresado fuero.

Así, "se reconocía -dice Recondo- el beneficio del fuero, a los súbditos de la Sublime Puerta, ya que el tratado de Constantinopla de 14 de septiembre de 1782, si bien preveía en su artículo 5º el régimen aplicable a los pleitos de los españoles en Turquía, nada decía respecto de los litigios de los turcos en España contra otro español o extranjero no turco, silencio del cual se infería que los turcos estaban sujetos al derecho común de los demás extranjeros, es decir, que disfrutaban del fuero privilegiado."

Este mismo razonamiento era extensivo a los súbditos de la Regencia de Trípoli, equiparados a los turcos por el tratado de Trípoli, de 10 de septiembre de 1784 (art. 2 y 31), a los de la Regencia de Túnez sobre la base del Tratado de Madrid de 19 de julio de 1791 (art. 16 y 18); a los de Marruecos por el Tratado de 28 de mayo de 1767 (art. 12).

A este respecto tenemos ocasión de conocer el criterio del Tribunal Supremo de Guerra, Marina y Extranjería, el cual, en un informe de fecha 8 de febrero de 1745 se manifestaba así como sigue:

"... no siendo los derechos civiles de los extranjeros consignados en los tratados más que una explicación y aplicación de las reglas emanadas del derecho de gentes, parece que la falta de tratados no puede influir para que los súbditos de las potencias que se hallen en este caso dejen de gozar del fuero concedido a los demás extranjeros con quienes han mediado estipulaciones expresas, mayormente cuando el fuero como puramente personal no da derecho a

los demás privilegios, franquicias y exenciones estipuladas explícitamente en los tratados de comercio".

El régimen especial se convirtió en el general aplicable a los extranjeros en España, según Pecourt por la cláusula de la "nación más favorecida".

Según Recondo, la evolución alcanza en concreto los siguientes aspectos:

"a) Si bien, como ha quedado dicho, el fuero de extranjería se aplica cada vez más a mayor número de extranjeros por razón de la nacionalidad, se experimenta, en contrapartida, una reducción de los que de él se benefician por razón de las cualidades que, individualmente considerados, en ellos concurren. Es decir, que si en sus orígenes el fuero beneficiaba a los extranjeros "que por razón del comercio van y viene, se detienen y habitan en nuestro Reyno", a raíz de una Real Resolución de Felipe V de 8 de marzo de 1716, confirmada posteriormente por Real Decreto de 7 de julio de 1727 (Leyes V y VI del Título XI, Libro VI de la Novísima Recopilación), se empezó a distinguir entre extranjeros y avecindados y extranjeros transeúntes, estableciéndose una distinta condición para cada uno de estos grupos, interesando particularmente ahora, destacar el dato de que tan sólo disfrutaban del fuero,

"... los transeúntes que habitan, van y vienen a estos Reynos a comerciar por mayor, no los avecindados y arraygados en España; porque el privilegio que concedo a aquéllos no ha de transcender a éstos por ningún motivo, causa o razón que se ofrezcan, respecto de que las dependencias y litigios de los que están avecindados y arraygados en mis dominios tienen otra naturaleza, y deben seguir precisamente las reglas que mis vasallos y súbditos sin diferencia alguna".

b).- Señalemos también cómo, en virtud de Real Resolución de 8 de marzo de 1716, renovada por Real Cédula de 7 de julio de 1727, las apelaciones de las causas conocidas en primera instancia por el juez conservador, ya no se llevarán ante el Consejo Real, sino ante el Consejo de Guerra de Justicia que sentenciará sin ulterior recurso".

Y añade: "cabe resumir, a mediados del siglo XVIII, el fuero de extranjería, en las siguientes notas:

"A).- Que disfrutan de él todos los extranjeros en quienes concurre la cualidad de transeúntes, salvo aquellos que son súbditos de un Estado que tiene suscrito con España un tratado en el que se excluye expresamente el disfrute de tal privilegio.

"B).- Que el privilegio radica en que tales extranjeros tendrán un juez conservador que conocerá, además de velar por la observancia y respeto de los privilegios de que son acreedores, privativamente, en

primera instancia, de los litigios que se susciten entre extranjeros de la misma nacionalidad, de nacionalidades distintas o entre extranjeros y regnícolas, si bien en estos dos últimos supuestos tan sólo cuando el extranjero es parte demandada.

"C).- Que el juez conservador es un nacional del país nombrado por el Rey, según una fórmula preestablecida, a propuesta de la nación extranjera interesada.

"D).- Que de las apelaciones de las sentencias emitidas por el juez conservador conoce el Supremo Consejo de la Guerra.

"E).- Que el fuero se extiende tanto al ámbito civil como al criminal salvo las causas relativas a las rentas y derechos reales.

"F).- Se perdía el fuero de extranjería en las causas de contrabando, pleitos sobre negocios mercantiles, tráfico de negros, en los juicios de guerras y causas por delitos cometidos a bordo y en alta mar".

De esta institución se ha ocupado también J. Blanco Ande, en una tesis doctoral titulada "El fuero de extranjería en España" (14), que llega a conclusiones muy parecidas a las de los autores citados, en concreto

(14) Lefda el 19 de diciembre de 1975; aparece un resumen de ella en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, volumen 55, 1979, pág. 268 y sts.

Recondo, con la particularidad de afirmar que amparaba tanto a los extranjeros transeúntes, como a los domiciliados en España, lo que está en clara contradicción con el R. D. de 7 de julio de 1727 (Novísima, VI, XI, V y VI), transcrito más arriba; y en que no se hace eco de los intentos -desde luego, fallidos- de implantar en las Indias la figura del Juez Conservador.

4. La jurisdicción de los Tribunales de Guerra

No obstante lo que queda recogido, se superpone en el tiempo un nuevo sistema, que traslada la competencia para conocer de los procedimientos en que eran parte los extranjeros, a favor de la Jurisdicción Militar, produciéndose una situación que, desde nuestra perspectiva resulta confusa y en algunos casos hasta contradictoria con lo reflejado anteriormente, la cual -no obstante- sobrevivió en simultaneidad.

Por una Real Orden de 26 de agosto de 1758 queda establecida la competencia en primera instancia de los gobernadores militares, en calidad de jueces militares, para el conocimiento de las causas en las que estén interesados extranjeros transeúntes que disfruten del fuero de extranjería, correspondiendo la decisión en caso de apelación al Supremo Consejo de Guerra. Por Real Orden de 21 de mayo de 1760 se disponía

que en aquellas plazas en las que hubiere Capitanía General, sería éste el que, con inhibición del gobernador, ha de conocer los mencionados procesos, salvo en la plaza de Cádiz en la que, por R.O. de 1 de diciembre de 1761, confirmada posteriormente por otra de 15 de marzo de 1781, se atribuía privativamente el conocimiento al gobernador. En el mismo sentido se expresa la Real Orden de 15 de septiembre de 1775 dirigida al capitán general de Andalucía, para que no se mezcle en las causas de extranjeros que corresponden al gobernador de Cádiz, y también la Real Orden de 19 de diciembre de 1778 dirigida al comandante general interino de Galicia. En los pueblos en los que no hay tribunales militares,

"... deberán de acudir los extranjeros al jefe militar para que practique las primeras diligencias dando conocimiento al capitán general o gobernador en su caso para ulterior recurso del negocio, y, si no tuviese comandante y el caso fuese urgente por tratarse de algún delito grave de los no estipulados, podrá la justicia ordinaria sustanciar la causa hasta ponerla en estado de sentencia, remitiéndola al capitán general o gobernador para su ulterior curso y determinación".

La aparición de este segundo sistema no ha de inducir a pensar que la desaparición de la figura del Juez Conservador se produce de un día para otro, sino que, sin embargo, pensamos que no cabe señalar una fecha determinada, en la cual, en concreto, tal figura se haya extinguido, pues en las mismas fechas se aplican las dos fórmulas jurisdiccionales eran empleadas.

"La desaparición del juez conservador -dice Recondo- tuvo lugar paulatinamente, a lo largo, por lo menos, de un período de tres décadas, de tal manera que hubo de existir una época durante la cual las causas de los extranjeros transeúntes eran conocidas, según la nación que estuviese implicada, bien por la jurisdicción militar, personificada en los gobernadores militares y/o en los capitanes generales, bien por los jueces conservadores". En este sentido parecen expresarse también autores como Dou, Avecilla y Colón."

Cabe señalar, en tercer lugar, el distinto ámbito territorial de ambos fueros, pues, mientras el militar se aplica plenamente en Ultramar, no sucede así con el de extranjería, circunscrito a los territorios peninsulares. En cuanto a las Indias, el privilegio del fuero de extranjería se empezó a aplicar también, por considerarse "un medio de gobierno conveniente", aunque la Real Cédula de 17 de febrero de 1801, confirmada por las de 18 de febrero de 1803 y 12 de octubre de 1844, y la Real Orden de 2 de julio de 1847, prohibiesen su aplicación.

5. Matrículas de extranjeros

Carlos IV, por Real Resolución y Orden de 12 de julio de 1791 y Cédula del Consejo de 20 del mismo mes, dicta normas para la formación de matrículas de extranjeros residentes en estos reinos, con distinción del

transeúntes y domiciliados (Novísima, VI, XI, VIII).

Empieza por recordar que está mandado repetidamente que se matriculen los extranjeros transeúntes, y que se declara en las leyes y autos acordados los que se han de considerar por naturales o avecindados, y aunque se han practicado las matrículas en algunas partes, se sabe que no han sido exactas ni se han formado en todos los pueblos, por lo que manda observar diversos puntos:

Deberá empezarse por Madrid, para ver si están ejecutadas las matrículas de extranjeros, con distinción de transeúntes y domiciliados, con expresión de sus familias existentes en el distrito, con sus nombres, patria, religión, oficio o destino, y el objeto de permanecer en la Corte.

Los avecindados han de ser católicos, y hacer juramento de fidelidad a la Religión y al Soberano ante la Justicia, renunciando a todo fuero de extranjería, y a toda relación, unión y dependencia del país en que hayan nacido, y prometiendo no usar de la protección de él, ni de sus Embajadores, Ministros o Cónsules; todo bajo penas de galeras, presidio o expulsión absoluta de estos Reinos, y confiscación de sus bienes, según la calidad de las personas, y de la contravención. Los transeúntes serán notificados de no permanecer en la Corte sin licencia, reduciéndola a términos breves, proporcionados a la necesidad y perentorios; también se les notificará a los transeúntes que no pueden

ejercer las artes liberales ni oficios mecánicos sin avecindarse, por lo que no pueden ser mercaderes, ni vendedores por menor de cosa alguna, sastres, modistas, peluqueros, zapateros, ni médicos, cirujanos, etc., a no ser con licencia o mandato del rey; tampoco podrán ser criados o dependientes de vasallos.

A estas personas se les darán quince días de término para salir de la Corte, y dos meses para hacerlo de los reinos, o habrán de renunciar en el mismo término de quince días al fuero de extranjería, avecindarse y hacer el juramento expresado, con sujeción a las penas mencionadas.

También manda arreglar la entrada de extranjeros en los Reinos y en la Corte, y dejando en su fuerza los tratados que deban subsistir con las Potencias extranjeras, se examinarán las licencias y pasaportes, y se impedirá la entrada por otras partes distintas de las acordadas, sin licencia del rey. Los Virreyes, Capitanes generales y Gobernadores de las fronteras señalarán para los extranjeros que vengan con pretexto de refugio, asilo o hospitalidad u otro, las rutas o pueblos interiores en que se hayan de presentar los que diesen motivos justos para obtener licencias, donde esperarán la concesión o denegación de éstas; jurando entretanto sumisión y obediencia al rey y a las leyes del país, bajo las penas arriba expresadas (Novísima, VI, XI, VIII).

En 21 de julio de 1791 (VI, XI, IX), Carlos IV da una Instrucción

que contiene las Reglas (en número de 12), que deberán observar las Justicias para la ejecución de lo dispuesto en la Ley precedente, las cuales tienen el carácter de órdenes apremiantes a las Chancillerías y Audiencias, Alcaldes de barrio y Alcaldes del Crimen, Corregidores y Justicias. "Concluida la operación de matrícula, declaración y juramento de los que están avecindados y de los transeúntes que, por virtud de ella, se avecinden, pasarán las Justicias noticia expresiva al Corregidor del partido, y éste, a continuación, sin esperar a que estén completas, lo hará al Consejo, para que dé cuenta a S. M".

El estado o modelo que habría de cubrirse, expresaría: "Nombres.-Patria.-Estado.-Nombres y patria de sus mujeres.-Número de hijos.-Religión.-Oficio.-Años de residencia en estos Reinos.-Pueblos donde residen.-Avecindados o transeúntes.-De forma que según el Estado precedente son tantos los domiciliados; de éstos, tantos Franceses, tantos Ingleses, tantos Italianos, con inclusión de sus familias, todos los cuales han hecho el juramento prevenido en la Real Resolución de S.M. conforme a lo mandado por el Consejo: el número de transeúntes, también con sus familias, es el tantos, y de éstos, tantos Ingleses, tantos Italianos, a quienes se han hecho saber el término que se les ha pefijado, para que salgan de estos reinos".

Para desarrollar esta materia se dictaron las siguientes disposiciones (publicadas en notas a las Leyes VIII y XII del Título VI del Libro XI,

de la Novísima Recopilación): Circular del Consejo de 29 de julio de 1791: A los extranjeros que se presenten con legítimos pasaportes para retirarse a su país, no se les impida la continuación de su viaje hasta salir fuera del reino, por el tiempo previsto, siguiendo el camino en línea recta. Circular del Consejo de 29 de julio de 1791: En atención a que, entre los extranjeros establecidos de muchos años en estos reinos, había algunos empleados en la oficinas reales y establecimientos públicos, con sueldo, pensión o viudedad por S. M., se previno a las Justicias que, además de la matrícula y estado prevenidos en la Real Cédula e Instrucción, se remitiese lista separada de los de estas clases, con excepción de si habían prestado el juramento o excusándose de hacerlo; pero sin hacer novedad con ellos, hasta que S. M. resolviese lo que debiera ejecutarse. Real Resolución comunicada en Circular del Consejo de 1º de agosto de 1791: Para evitar dudas y cavilaciones, se hará entender a los extranjeros que la renuncia a toda relación, conexión o dependencia del país nativo, se entiende en las materias políticas, gubernativas y de sujeción civil, pero no en las domésticas y económicas de los bienes y comercio de cada uno, y de sus personas y parentela. Real Resolución inserta en Circular del Consejo de 3 de agosto de 1791: Insiste en que el juramento de los extranjeros que permanecieran en calidad de transeúntes se había de reducir a ofrecer la sumisión y obediencia al Rey y leyes del país. Real Orden de 21 de agosto de 1791: No se dirige la real intención a exigir un juramento general, puesto que a los extranjeros sospechosos que vengan a estos Reinos y especialmente

a la Corte, y más cuando no traigan objetos conocidos de sus tráficos y comercios, se les había mandado por órdenes particulares, o salir, o hacer el juramento de transeúntes, no siendo la sospecha muy vehemente. El juramento no es de fidelidad ni vasallaje, sino de pura obediencia y sumisión al soberano, y a las leyes de policía del país.

Declaraciones del Consejo de 31 de agosto de 1791 sobre varios puntos de la Instrucción:

Declaración 8: también deben jurar como transeúntes los demás a quienes se mande hacerlo por particulares resoluciones de la Superioridad, y los que entrasen en el Reino con el pretexto de buscar asilo, refugio o protección, que no sea de los contenidos en los tratados, por razón de comercio o intereses, especialmente si no usaren de los caminos y rutas generales dirigidas a los puertos y plazas de comercio.

Declaración 10: Para proceder a la imposición de penas, se ha de obrar judicialmente y con las pruebas y conocimiento de causa que previenen las leyes, consultando las Justicias ordinarias a los Tribunales superiores del territorio, como las mismas leyes mandan, antes de la ejecución de sus sentencias.

Circular del Consejo de 2 de setiembre de 1802 a los Capitanes Generales, Jefes de las fronteras y costas. Para la concesión de

pasaportes a los extranjeros que se introduzcan en el Reino con el objeto de "qüestar" u otros semejantes, se examinarán con el mayor cuidado y detención los papeles de identidad de sus personas...y el verdadero cargo y fin que traen.

Según Tomás Ortiz de la Torre (15), la fórmula del juramento, con la renuncia y la declaración de ser vasallo, se asemeja mucho a una adquisición de nacionalidad, pero sin que en modo alguno implique esto.

La mencionada fórmula era la siguiente (Novísima, VI, XI, IX, Regla 5): "Que jura observar la Religión Católica, y guardar fidelidad a ella y al Rey nuestro Señor, y quiere ser su vasallo, sujetándose a las leyes y prácticas de estos Reynos, renunciando, como renuncia, a todo fuero de extrangería, y a toda relación, unión y dependencia con el país en que nació; y promete no usar de la protección de él, ni su Embaxador, Ministro o Cónsules; todo bajo las penas de galeras, presidio o expulsión absoluta de estos Reynos y confiscación de sus bienes, según la calidad de la persona y de la contravención".

Cita dicho autor a Federico de Castro y Bravo (16), que distingue

(15) *"El régimen jurídico de extranjería en la España del siglo XVIII y la participación del extranjero en la industria nacional"*, pág. 67.

(16) *"Derecho Civil de España. Parte General"*, II-1, Madrid, 1952, pág. 380, nota 3.

entre "extranjeros" que continúan siendo tales y que -a diferencia de los transeúntes- son "vasallos e naturales", mientras que los propiamente "naturales" o españoles se diferencian terminologicamente como "naturales vasallos". Son estos "naturales" ("ex nativitate") los que tienen derecho de que se les reserven los oficios y beneficios, deben primaria y exclusiva fidelidad al Rey y al reino y pueden tratar libremente con las Indias. En otras disposiciones se les denomina "súbditos y naturales". (Ordenanzas Reales, II, XI, VI; Novísima Recopilación, VI, IV, I; I, XIV, I) o simplemente "naturales" (Novísima I, XIV, VII), mientras que a los extranjeros se les considera "vasallos y súbditos" (Novísima, VI, XI, V), "súbditos de la Corona" (Instrucción de 2 de septiembre de 1791), o simplemente "vasallos" (Regla 5 de la Instrucción de 21 de julio de 1791).

Con el fin de dar continuidad a esta política, se dicta la Real Resolución y Cédula del Consejo de 29 de noviembre de 1791 (Novísima, VI, XI, X), por la que se ordena la rectificación anual de las matrículas de extranjeros en todos los pueblos del Reino; de manera que "en los dos primeros meses del año próximo venidero, y en todos los siguientes perpetuamente, así en la Corte como en los pueblos del reino, se recorran y rectifiquen añadiendo o emendando lo que convenga conforme a las ocurrencias posteriores, las matrículas executadas en el precedente año; anotando las Justicias los extrangeros que hayan salido, los que hubiesen entrado o contravenido a la Cédula, órdenes y explicaciones publicadas, para proceder contra estos últimos, sin negligencia ni

contemplación, de que serán responsables; y de todo ello darán cuenta al mi Consejo, que me avisará lo que resulte".

Analiza Tomás Ortiz de la Torre (17) la repercusión de todas estas medidas. Y tomando en cuenta los datos de las obras de Solís (18) y de Antiñano (19), entre 1791 y 1801 la población extranjera de Cádiz decreció casi un 67 por 100, a pesar de que el comercio en manos extranjeras venía en aumento. Para el primero de los mencionados "todo parece indicar que (se debe) al impacto de las disposiciones de Carlos IV, precisando condiciones a los que quisiesen domiciliarse". Condiciones que, por lo demás -añade-, "parecen duras especialmente por la renuncia a la protección diplomática que debían hacer los extranjeros".

6. La repoblación

El profesor Gonzalo Anes ha estudiado, de manera profunda y exhaustiva, los problemas agrícolas en el antiguo Régimen, especialmente

(17) Obra citada, pág. 69.

(18) R. Solís, *"El Cádiz de las Cortes"*, Alianza Editorial, Madrid, 1969, pág. 62 a 64.

(19) *"Historia del Comercio con las Indias durante el dominio de los Austrias"*, Barcelona, 1917.

en el siglo XVIII (20).

Sintetizando en forma más que telegráfica sus diversas conclusiones, se puede decir lo siguiente:

En España se produjo una disminución de la población en el siglo XVII; por el contrario, en el siglo XVIII aumenta en más de un 50 por 100, especialmente en las ciudades, por causas no definidas hoy de modo pacífico entre los investigadores, aunque lo cierto es que la última epidemia de peste sufrida en España tuvo lugar entre 1648-1652, por lo que desaparece una causa muy importante de mortandad.

Aumentó también la demanda de los productos agrícolas, en beneficio de los grandes propietarios (la nobleza y el clero), con la consiguiente demanda de tierras; en paralelo, también tiene lugar la de productos manufacturados.

Las características de las fincas eran de lo más variado. Frente al minifundio del Norte, en Andalucía, según Olavide, no era grande el

(20) Véanse: "Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII", Ariel, Barcelona, 1969; "Las crisis agrarias en la España moderna", Biblioteca Política Taurus, Madrid, 1970; "El Antiguo Régimen: los Borbones", Alianza Editorial y Ediciones Alfaguara, Madrid, 1975; "En la España del siglo XVIII. Obstáculos para el crecimiento agrario", en "España a finales del siglo XVIII", Ediciones de la Hemeroteca de Tarragona, 1982; "Economía y Sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen", Ariel, Barcelona, 1988.

cortijo que tuviera sólo 2.000 fanegas (21).

La serie histórica de los acontecimientos aparece concretada (22).

Se empiezan a utilizar nuevas técnicas de cultivo. Aparecen y se extienden las Sociedades Económicas de Amigos del País (1761-1808). Se desarrollan los Pósitos, institutos de crédito rural. La preocupación privada y oficial es tan grande que culmina con la tramitación de un Expediente de Estudio de la cuestión para promulgar una Ley Agraria, sobre el que solicitó informe el Consejo de Castilla a la Sociedad Económica Matritense, y que fue redactado por Jovellanos (1795) en pieza doctrinal famosa (23).

Dentro de todo este cúmulo de preocupaciones e iniciativas destacan las referentes a la colonización interior como remedio para luchar contra los males de la agricultura, en lo que tan grande participación habían de tener los extranjeros, cuya presencia en España se estimula con diversas medidas. Veámos:

(21) *"El Antiguo Régimen: los Borbones"*, Alianza Editorial y Ediciones Alfaguara, Madrid, 1975, pág. 188.

(22) *"Las crisis agrarias en la España moderna"*, Biblioteca Política Taurus, Madrid, 1970, pág. 427-458.

(23) Véanse sus conclusiones en *"Economía e Ilustración"*, pág. 119-120.

Desde el punto de vista de nuestro estudio merecen citarse la Ley III, del Título XXII, del Libro VII de la Novísima Recopilación (Carlos III, en 5 de julio de 1767, que proyecta introducir 6.000 colonos católicos alemanes y flamencos en Sierra Morena, para lo que se había redactado una minuciosa Instrucción 25 de junio del mismo año, con 79 apartados referentes a aspectos tan variados como la elección de los lugares, que sean sanos y bien ventilados), el número de pobladores de cada uno, situación de las casas, superficies a entregar para la labranza, montes, viñedos, frutales, molinos, organización civil y eclesiástica, colocación de los de una misma lengua juntos, para que puedan tener Párroco de su idioma por ahora, sin perjuicio de promover casamientos con españoles de ambos sexos para incorporarlos lo más fácilmente en el Cuerpo de la Nación, pero que no sean por ahora naturales de los reinos de Córdoba, Jaén, Sevilla y provincia de La Mancha, para que éstos no se despueblen.

Se les darán instrumentos a los artesanos, y a cada familia dos vacas, cinco ovejas, cinco cabras, cinco gallinas y una puerca de parir.

Se conceden exenciones tributarias entre seis y diez años.

No podrán salir de los lugares respectivos a otros domicilios, sin real licencia, en término de diez años.

Se regulan las herencias, las enajenaciones, la inmigración de españoles de otras regiones, la educación de los niños, etc., etc.

Nos encontramos, pues, ante toda una institución propia del despotismo ilustrado.

La Ley IV de dicho Título y libro (18 de abril y 1º de mayo de 1768) admite colonos griegos, procedentes de Ajaccio (Córcega), con prevenciones sobre la conservación de su fe.

Todo esto forma parte de una política de colonización interior (pero no prevista para realizarla sólo a medio de extranjeros), en Ciudad Real, Extremadura, Alcudía (Mallorca) y Salamanca.

7. Recapitulación

Después del análisis efectuado, puede comprobarse la desaparición de la idea de extranjeros al reino y extranjeros a la ciudad y la de las diferencias de naturaleza entre los reinos de la corona de España. Como dice el profesor Gibert (24), el camino hacia una sola naturaleza política y la desaparición de la extranjería entre los reinos españoles ha sido lento y parcial, dura toda la Edad Moderna, y de él quedan huellas en

(24) Obra citada, en "L'Etranger", RSJB, IX, 1958, 2, pág. 155.

la existencia actual de los derechos forales, de transcendencia civil, pero con algunas consecuencias de Derecho Público. Esta última afirmación había de ser extendida hoy mucho más en contemplación del carácter autonomista de la vigente Constitución de 1978, pero ello se sale de este estudio.

Dentro de cada uno de los reinos de la Península, la legislación privativa rigió con carácter general territorial. Los derechos locales -salvo en el S. de Aragón y Cataluña- carecieron de vigencia, a excepción de normas relativas a contadas instituciones (25).

Las Leyes de Alcalá y de Toro ya habían dispuesto que los Fueros se aplicasen en lo que fuesen usados, lo que suponía tener que probar en cada caso su vigencia, o sea, que se convierten en costumbres. Se referían al régimen agrario o pastoril, de la vida interina de los pueblos o a algún aspecto del Derecho privado. La consecuencia es que desaparece la diferencia entre extranjeros al reino y extranjeros a la ciudad. En el orden práctico, dos cuestiones en torno a las cuales se plantea el tema de naturales y extranjeros son el paso de los no castellanos a Indias, y el desempeño de los cargos públicos por no nacionales.

(25) A. García Gallo, *"Manual de Historia del Derecho Español"*, 10ª reimpresión, I, pág. 101.

Aunque es posible que Fernando el Católico, como Gobernador de Castilla, autorizase en 1505 el comercio con las Indias a los aragoneses, en compañía de castellanos, de esta disposición no se encuentra rastro en las fuentes castellanas. Se discute si Carlos V dio licencia general de paso a las Indias en 1526 a todos sus súbditos no españoles. El título imperial de aquél (1520) caracterizó excepcionalmente a una época, e influyó en que, cuando viene a España como Rey, se rodee de ministros extranjeros, y se conceden cargos eclesiásticos importantes a ellos. Carlos V tiende a considerar sus dominios españoles como un todo.

En 1525, Carlos V considera naturales de las Indias a todos los súbditos naturales del Imperio. Felipe II es también partidario de la unidad, pero dentro de los límites nacionales (a los portugueses se les considera como extranjeros). Una Pragmática de Felipe II (1555) declaró que los navarros se tienen por naturales de Castilla, e igual se recoge en Real Cédula incorporada a la Recopilación de Navarra. En 1581, se autoriza el paso de navarros y aragoneses a las Indias y en 1680 al resto de los del reino de Aragón.

El conde-duque de Olivares, Ministro de Felipe IV, intenta realizar la unificación política, administrativa y civil de todos los reinos, mediante la denominada "Unión de Armas" (año 1625), por medio de la cual había intentado acertar algún camino por donde pudiese conseguir que los reinos de su Majestad fuesen entre sí "uno para todos, y todos cada uno",

... Buscando una "perpetua y firme unión de reino a reino", pero fue el temor de las clases gobernantes de Aragón, Cataluña y Valencia respecto de lo que se podía esconder tras las propuestas de Madrid lo que, pronto y también a la larga, impidió el éxito del proyecto (26). Más tarde tropieza con las sublevaciones de 1640 (Cataluña, Portugal, Aragón y Andalucía, estas dos últimas encabezadas por dos próceres del reino, los duques de Híjar y Medina-Sidonia, que no prosperan); sí consigue la independencia definitivamente Portugal, bajo el duque de Braganza, y temporalmente Cataluña, se une temporalmente a Francia con Luis XIII.

Por Decreto de 29 de junio de 1707 (Novísima, III, III, I) se declaran abolidos los fueros, privilegios, prácticas y costumbres de Aragón y de Valencia, reduciéndose a las Leyes de Castilla, si bien se restablecen las leyes "municipales" de Aragón y el Derecho privado (Decreto de 3 de abril de 1711; Novísima, V, VII, II). Sin embargo, se restablecen las leyes "municipales" de Aragón y el Derecho privado (Decreto de 3 de abril de 1711; Novísima, V, VII, II). Conforme al Real Decreto de 28 de noviembre de 1715 (Novísima, V, X, I), referente a Mallorca, en materia de proceder en las causas civiles y criminales, se observarán las pragmáticas antiguas, pero manda que en adelante cesen las costumbres y leyes que hablan de extranjería. Y por el 16 de enero de 1716

(26) J. H. Elliot, *"El conde-duque de Olivares, el político en una época de decadencia"*, traducción de Teófilo de Lozoya, Editorial Crítica, 1990, Capítulo VII, pág. 251-283. Esta iniciativa es destacada por J. A. Escudero, obra citada, pág. 653.

(Novísima, V, IX, I), relativo a Cataluña, cesan las prohibiciones de extranjería, "porque es mi Real Intención que en mis reinos las dignidades y honores se confieran recíprocamente a mis vasallos por el mérito, y no por el nacimiento en una provincia u otra". Todos estos Decretos, llamados de Nueva Planta, por afectar a la de los Tribunales y organismos de los reinos afectados, fueron originados por la situación originada ante la sucesión de Carlos II y la guerra de este nombre -a medida que se van elaborando- los textos resultan más maduros; en ellos se aprecia que el uso de la lengua es un motivo más de conflicto (27).

III. ABOLICION DE LA "EXTRANJERIA ENTRE REINOS". SITUACION DEL DERECHO INDIANO.

Como queda dicho, con el triunfo de Felipe V en la Guerra de Sucesión de Carlos II, los Decretos de Nueva Planta suprimen casi totalmente el Derecho Público de Aragón y Valencia (1707), Mallorca (1715) y Cataluña (1716), aunque respetan el Derecho Privado de dichos Reinos, menos el de Valencia. Según el profesor Gibert, las consecuencias de la "extranjería entre reinos" quedaron prácticamente abolidas (28). Por

(27) J. A. Escudero, obra citada, pág. 653 y sts.

(28) "Los extranjeros en el antiguo Derecho español", en "L'Etranger", RSJB, IX, 1958, 2, pág. 155.

Real Orden de 7 de setiembre de 1716 se desarrollaron las disposiciones anteriores, y se declaró que las concesiones de carta de naturaleza para extranjeros se despachasen por la Cámara de Castilla, debiendo ser de cuatro clases: la primera, absoluta para gozar de todo lo eclesiástico y secular sin limitación alguna; la segunda, para todo lo secular, sin comprender nada de lo eclesiástico; la tercera, para poder obtener cierta cantidad de renta eclesiástica en prebenda, dignidad o pensión, que no exceda de ella; y la cuarta, es para lo secular, y sólo para gozar honras y oficios, como los naturales, con excepción de cargos públicos. Para la concesión de las tres primeras, habría de preceder el consentimiento del reino, escribiéndose cartas a las ciudades y villas con voto en Cortes.

La condición de súbditos o vasallos es distinta de la de los naturales, puesto que la naturaleza determina el "ius sanguinis", mientras que la vinculación con el territorio deriva del "ius soli". Lo cierto es que los dos conceptos tratan de confundirse.

Capítulo aparte merece el examen de la extranjería en el Derecho indiano. La Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias contiene numerosas disposiciones sobre extranjeros (29).

La Ley I, Título XXVI del Libro IX manda que ningún natural ni

(29) *"Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, mandados imprimir y publicar por la Magestad Católica del Rey D. Carlos II, Nuestro Señor"*, 3 tomos, 4ª edición, Madrid, 1791, Imprenta de la Viuda de D. Joaquín Ibarra.

extranjero pase a las Indias sin licencia del rey, o de la Casa de Sevilla en los casos que le pudiese dar. La Ley XXXI se preocupa de que no pasen a título de mercaderes los que no lo fueren, y la ley LVI manda que el Gobernador del Paraguay no deje entrar por allí gente del Brasil.

El Título XXVII del Libro IX dice así: "De los extranjeros que pasan a las Indias y su composición, y naturaleza, que en ellas puedan adquirir para tratar y contratar". Ley I: "Que ningún extranjero ni persona prohibida pueda tratar en las Indias, ni pasar a ellas. - D. Felipe II en Valladolid, 27 de julio de 1592, D. Felipe III en Ventosilla en 1605 y otras fechas.- ...Que ningún extranjero... pueda tratar y contratar en las Indias ni de ellas a estos Reynos..., si no estuviere habilitado con naturaleza y licencia nuestra y solamente pueden usar de ella con sus caudales, y no los de otros de sus naciones..., y por sí ni por interpósitas personas, pena de perdimiento de las mercancías que contratasen y de todos los demás bienes que tuvieran y en la misma pena incurran los extranjeros que habitaren en las Indias y en ellas no estos Reynos trataren o contrataren sin nuestra licencia...".

La Ley II (Felipe II, 1569; Felipe III, 1616) manda que la Casa de la Contratación averigüe los extranjeros que cargaren en cada viaje, y que haya libro de los que tienen y no tienen licencias.

La Ley III (Felipe II, 1569) que los Oficiales Reales en las Indias

averigüen las mercaderías que los extranjeros llevasen en las Flotas y Armadas.

La Ley IV (Felipe II y la princesa Juana, Gobernadora, 1577) que los extranjeros, aunque lleven licencias, que no pasen de los puertos, y vendan en ellos sus mercaderías.

La Ley V (Felipe IV, 1621) que los Gobernadores de los puertos no dejen pasar tierra dentro a los comerciantes extranjeros.

La Ley VI (Felipe II y la Princesa, allí) que ningún extranjero rescate oro, ni plata ni cochinilla.

La Ley VII (Felipe III, 1614, y Carlos II en esta Recopilación) que en las Indias no se admita trato con los extranjeros, pena de la vida y perdimiento de bienes.

La Ley VIII (Felipe IV, 1645) que se procuren evitar las noticias que pueden adquirir y da los enemigos, mediante los extranjeros que viven en las Indias.

La Ley IX (Felipe III, 1602) que se procure limpiar de extranjeros y gente sospechosa en las cosas de la fe.

La Ley X (Felipe IV, 1621) que la expulsión no se entienda con Oficiales mecánicos. Que los que sirven plazas de soldados no gocen de sus excepciones, cuando se tratare de su composición.

La Ley XII (Felipe II, 1596) que se disimule la condición de los extranjeros cuando hayan prestado buenos servicios.

La Ley XIII (idem) que no se admitan a composición en las Indias sin orden del Rey, y que sean echados de ellas.

La Ley XV (idem) dice: "...Damos a veces comisión para que admitan a composición a los extranjeros (que hubieren pasado sin licencia) en las cantidades que parecieren justas".

La Ley XVI (idem) manda que no se compongan clérigos ni mujeres extranjeras.

La Ley XVII (idem), que con los extranjeros que tuvieran licencias litigadas para contratar en las Indias se use de moderación.

La Ley XXI (Felipe III, 1618) que los extranjeros compuestos sean retirados de los puertos: *"...Se les pueda dar licencia para estar, vivir y residir en nuestras Indias, donde quisieren, y tratar y contratar en ellas, sin pasar de lo prohibido, con que no residan en lugares y puertos marítimos,*

porque esto se ha de prohibir con graves penas, retirándoles adentro las leguas que pareciere conveniente...".

La Ley XXIV (idem) manda que no se compongan fuera de su residencia.

La Ley XXVI (Felipe II, 1596), que se haga justicia sobre los bienes de los extranjeros que quisiesen venir.

La Ley XXVII (Felipe III, 1620), que los nacidos de padres extranjeros en estos Reinos son naturales de ellos.

La Ley XXVIII dice : D. Felipe II en San Lorenzo 1596.- *Declaramos por extrangeros de los Reynos de las Indias y de sus Costas, Puertos e Islas adjacentes para no poder estar ni residir en ellas a los que no fueren naturales de estos nuestros Reynos de Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra, y los de las islas de Mallorca y Menorca, por ser de la Corona de Aragón".*

La Ley XXIX (Felipe IV, 1634) ordena que no se consienta que los portugueses en las Indias traten en Filipinas.

La Ley XXX (Felipe II, 1596), *que ningún extranjero venda mercaderías fiadas en estos Reinos a pagar en las Indias, ni de ellas se traiga*

cosa en su cabeza.

La Ley XXXI (Felipe III, 1608), *que para tratar y contratar en las Indias ningún extranjero sea tenido por natural, no teniendo las calidades que esta ley declara: D. Felipe III en Madrid, 2 de octubre de 1608.-...Es nuestra voluntad y mandamos que hayan vivido en estos Reynos o en Indias por tiempo y espacio de veinte años continuos: y los diez de ellos teniendo casa y bienes raíces, y estando casado con natural o hija de extranjero nacida en estos Reynos o en las Indias; y con estos tales no puedan usar ni gozar de este privilegio, si no se hubiere declarado primero por nuestro Consejo Real de Indias, al que han de ocurrir la información y diligencias que se ha de hacer entre las Audiencias de las Provincias donde residieren..., con citación de nuestros Fiscales".*

La Ley XXXII (Felipe III, 1618), en relación con la anterior, señala la cifra de 4.000 ducados en bienes raíces, "de que conste por escrituras".

Según la Novísima Recopilación (Carlos y Juana, 1523), "ningún extranjero trate en Indias" (2ª parte de la Ley, XV. título V. libro III).

En el terreno de los hechos, como pone de relieve A. Ballesteros Beretta (30), se produce una evolución en la que los hechos más

(30) "Historia de España y su influencia en la Historia Universal", 9 tomos, Salvat, Barcelona, 1918-1936, tomo IV, 2ª parte, 1941, pág. 631.

significativos son la concesión de salvoconductos a favor de extranjeros por Carlos V y la fijación de restricciones por Felipe II (en 1564 se excluye de pasar a América a portugueses y extranjeros en general, conservando el privilegio castellanos y aragoneses, lo que se reitera en 1591, y se concreta en 1596 a favor de los originarios de Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña, Navarra, Mallorca y Menorca). Pero, en la práctica, las disposiciones no se cumplían, y había extranjeros con nombre falso, como fue el caso de un turco de Esmirna, que regresó a Asia Menor después de amasar una gran fortuna. Como se ve, la política en el reinado de Felipe II se caracterizó por la negación de facilidades, y hasta hubo un intento de expulsión de los extranjeros, menos los que sirvieran oficios mecánicos, útiles a la República. Por su parte, el licenciado Zuazo defendió la inmigración.

La impresión que se obtiene de lo que queda reflejado es que la materia preocupaba a los gobernantes, como lo prueba la minuciosa reglamentación, y que el tono era de control y vigilancia, con leves alteraciones.

Según pone de relieve José Antonio Calderón Quijano (31), durante el siglo XVI, según los registros fidedignos de la Casa de la Contratación de Sevilla, que hoy se conservan en el Archivo de Indias,

(31) "*Hispanoamérica*", en "*Razón Española*", número 40, mayo-abril 1990, pág. 151-152.

sólo el 2,8 por 100 son extranjeros, del total de los emigrantes del Nuevo Mundo, y éstos fueron casi exclusivamente portugueses, italianos y flamencos.

Por el contrario, según datos recogidos por el profesor Boyd Bodman, los andaluces constituyen un 37 por 100, los extremeños un 16 por 100, los castellanos y leoneses un 35 por 100, y el resto las otras regiones peninsulares.

IV. *NATURALIZACION*

La naturaleza se determina por el hecho de la descendencia de padres naturales y nacer y habitar en la tierra (Así, en Navarra, hay precedentes medievales: Juramento de Felipe III de Navarra en las Cortes de Pamplona, 1329; Capitulación entre Juan (II) de Aragón y Blanca de Navarra, 1419; Constitución de la reina Margarita, Lugarteniente General de Alonso V, Cortes de Barcelona, 1422; Capitulación y Concordia entre Doña Juana (Enríquez), en nombre de su esposo Juan II y la Junta del Principado de Cataluña).

Para que los extranjeros se equiparasen a los nacionales, se expedían las cartas de naturaleza, si bien la condición de súbditos o

vasallos era distinta de la de los naturales. La naturaleza deriva de "ius sanguinis", mientras que el "ius soli" era un vínculo derivado del territorio. En 1525 Carlos V considera natural de las Indias a todos los súbditos del Imperio, pero la medida no tiene efectividad en la práctica.

Según Tomás Ortiz de la Torre (32), la posibilidad de que los extranjeros católicos pudiesen permanecer en el reino no llevaba consigo la facilidad de que pudiesen adquirir la condición de nacionales. Felipe V dicta una Real Resolución en 26 de agosto de 1715, en la que sienta que "en adelante, no se concedan estas naturalezas a extranjeros, si no es en caso de precisa necesidad; pero como este caso puede llegar, o por especiales méritos de algún sujeto determinado, o por no haber cosa proporcionada con que poder premiar sus servicios sino con algún oficio o dignidad, que pida para su goce posesión de naturaleza, entonces se pedirá su consentimiento a las ciudades y villas de voto en Cortes, para que libre y espontáneamente convengan en concederla así; bien entendido que la naturaleza absoluta es para un total incorporación en estos Reynos del sujeto de quien se concediese, para poder disfrutar todos y qualesquier oficios como si verdaderamente hubiese nacido en España, y la limitada una nueva aptitud para aquella determinada gracia que se concede a un extranjero para gozar pensión eclesiástica, con la condición de que resida en España, no se debe entender que por esta concesión está hábil el tal para otros oficios y dignidades, ni para el

(32) Obra citada, pág. 44.

mismo goce de la pensión, mientras no residiese en estos reynos..." (Novísima, I, XIV, VI).

En 1721, por resolución a consulta del Consejo, se ordenó que en los reinos de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca debería pedirse el consentimiento de las ciudades con voto en Cortes para el disfrute de la gracia de naturaleza que concediese el rey para que pudiesen disfrutar allí los extranjeros renta eclesiástica determinada; y cuando se concediese naturaleza absoluta o limitada, pero para todos los reinos de España, debería pedirse el consentimiento a las ciudades de voto en Cortes, tanto de los reinos de Castilla como los de Aragón.

La concesión se hacía por la Cámara sin necesidad de consulta, salvo si se trata de naturaleza para gozar rentas eclesiásticas, según adición de Felipe V en 1716 a la Instrucción de 1588.

Según los editores de "Los Códigos españoles concordados y anotados", la gracia de la naturaleza es "una habilitación de la persona extranjera para que pueda gozar y tener en estos reinos todos y cualesquier oficios, honores, dignidades, rentas y preeminencias que tienen los naturales, sin distinción ni diferencia alguna". Sus clases son cuatro:

La primera, absoluta para gozar de todo lo eclesiástico y secular



sin limitación alguna; la segunda, para todo lo secular; la tercera, para ciertas rentas eclesiásticas; y la cuarta, para lo secular, y sólo para gozar de honras y oficios como los naturales, exceptuando lo prohibido por las condiciones de millones (33).

Carlos III, por Real Resolución, a consulta de la Cámara, del año 1771 (Novísima, I, XIV, VII), determinó como norma aplicable no sólo al caso contemplado, sino con carácter general, que se declarase por naturales de estos reinos a los hijos de un guipuzcoano, empleado en el servicio de oficiales de la Secretaría del Ministerio en la Corte de Roma, y de mujer nacida allí, hija de español, previa licencia del Ministro. Se le concede la gracia "para los casos de que sus hijos se hallasen empleados, como lo está el padre, en mi Real Servicio, o que viniesen a establecer su residencia en estos Reynos; pero no para el de quedarse en Roma o en otro país extraño, sin estar empleados en mi servicio".

Según Tomás Ortiz de la Torre (34), el hecho de que el interesado pidiese la gracia demuestra ya que se seguía, el "ius soli", y por lo demás -continúa- esta aplicación del "ius sanguinis" es exigua: se aplica a los hijos de funcionarios al servicio del Rey en el extranjero, siempre que ejerzan semejantes servicios o que vengan a establecer su residencia en España, y además se disfruta con concesión real. De esto infiere el mismo

(33) "Códigos...", 8.7, Madrid, 1850, pág. 84, notas 4 y 5.

(34) Obra citada, pág. 61-62.

autor que los que fuesen así nacionalizados perderían la condición de españoles, si no venían a España a residir, o si continuasen viviendo en país extranjero abandonando el real servicio (Novísima, I, XIV, VII).

Por Real Provisión de 20 de diciembre de 1783, el Consejo concede un plazo de seis meses a los irlandeses católicos para dirigirse en súplica a los Arzobispos, Obispos y Cabildos eclesiásticos de España, con objeto de que se les asistiese con limosnas para reedificar las capillas que les habían destruido los metodistas, y las remitiesen al Vicario eclesiástico de Madrid, con la mayor reserva posible en evitación de perjuicios que a estos católicos podrían sobrevenir al tenerse conocimiento de esta ayuda. Se reitera lo anterior en Circular de 30 de julio de 1784 (35).

(35) "Códigos...", t.7, Madrid, 1850, pág. 145, nota 4.

Capítulo VI

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJEROS

I. DERECHO PRIVADO

1. Viajeros, romeros y peregrinos

Disposiciones posteriores a las de la Edad Media son : "Don Carlos y Doña Juana en Valladolid, 1523; Toledo, 1525; Madrid, 1528, 1534, 1549. Don Felipe II en Valladolid, 1588. Los que van en peregrinación a Santiago pueden pedir limonsa, yendo por su camino derecho, no andando vagabundos a pedir a otras partes, entendiéndose por camino recto yendo por lugares que están en el camino a cuatro leguas, poco más o menos, a una y otra parte del dicho camino. Y adviértaseles en la frontera, en los hospitales y en la Iglesia de Santiago". (Título XII del Libro I de la Nueva Recopilación, y Ley VI, Título XXX del Libro I de la Novísima).

En la Novísima Recopilación (I a XXX, I a V) se recogen las cinco leyes del Título XXIV del Libro IV del Fuero Real, de Alfonso X:

- Privilegio de seguridad, para que vayan y vengan en el reino, solos y en compañía, protegiéndolos contra cualquiera que pretenda

hacerles mal, asegurándoles la libertad de comprar las cosas que necesitaran y defendiéndoles contra los comerciantes que pretendiesen defraudarlos con el empleo de pesas o medidas falsas.

- Pueden "en sanidad como en enfermedad, disponer y ordenar de sus bienes por su manda y testamento, según su voluntad", imponiéndose penas para los que cogieren algo de los peregrinos, en vida o en muerte, o embargasen sus pertenencias. En caso de duda, "sea creído el romero, o compañeros que con él anduviesen".

- La negativa a pagar los daños sufridos por el romero en las posadas se sancionaba con el pago del doble del daño sufrido.

- Los romeros y peregrinos podían meter y sacar en el reino "palafrenes, trotones y vacas" (siempre que no hubiesen nacido en el reino), sin abono de tributos.

- En caso de fallecimiento abintestato, los Alcaldes debían enterrar al muerto con cargo a los bienes relictos, y el sobrante debían remitirlo al rey, para que acordase lo que estimare oportuno.

La Ley VII del mismo Libro y Recopilación (Felipe II, 13 de junio de 1590) prohíbe a los naturales del Reino andar en hábitos de romeros y peregrinos, y la Ley VIII (Carlos III, 24 de noviembre de 1776) regula

el examen de los papeles, estado y naturaleza de los mismos, imponiéndose a los contraventores las penas señaladas para los vagos en la Ordenanza de 7 de mayo de 1775, aplicándoseles al servicio de mar y tierra, si fueren hábiles, y recogiendoles en caso contrario en las casas de misericordia (Instrucción de Corregidores de 15 de mayo de 1788, capítulo 32).

Se condena con las penas de envío al servicio de mar y tierra a los hábiles, y a las casas de caridad a los que no lo fuesen, a los que no llevasen la documentación en regla o fuesen vagabundeando. Si fuesen eclesiásticos, se entregarían a la jurisdicción de los Ordinarios. En estas reglas estaban comprendidos lo mismo los peregrinos extranjeros como los naturales.

2. Comerciantes extranjeros y transeúntes

En los "Fueros de Guipúzoca", citados más arriba (36), se regula el "trato, comercio y navegación, en el Título XIX. El Capítulo I (sin fecha de referencia) permite que los de esta provincia puedan vender para Francia, Inglaterra y otras provincias del Norte, el *fierro* y *acero* que se labra en ella. En el Capítulo II se determina que los bastimentos que

(36) Obra citada, pág. 245 y sts.

trajesen de reinos extraños a Guipúzcoa, no puedan ser represados al tiempo de la venida, entrada y vuelta, ni tampoco las embarcaciones y bestias en que se trajesen. Es curioso, por lo tolerante, el contenido del Capítulo IV (que arranca de Felipe II en 1557 y 1558, y confirmado por Felipe IV en 1643 y 1646, y la reina gobernadora, Doña Mariana de Austria, en 1649, 1653 y 1675) y se reitera en el Capítulo V, lo que se hace extensivo a bastimentos de Bretaña (Carlos II, 1678), de permitir, en tiempo de guerra entre las Coronas de España y Francia, a los de Guipúzcoa el libre comercio de bastimentos y mercaderías no prohibidas con los de la provincia francesa de Labrit.

Carlos III dicta en San Lorenzo el 20 de noviembre de 1778 una Real Cédula, por la cual declara que, así como "los Cónsules, ni sus propias casas, no gozan de aquellos privilegios que sólo corresponden a los Ministros caracterizados por los soberanos, así los comerciantes extranjeros no tienen derecho más que a ser tratados con los mismos miramientos y consideración que se debe a un vasallo del Rey, nacional honrado, cuyo carácter y reputación están bien establecidos; de suerte que no se les moleste por ligeros motivos, sino precediendo una información semiplena, o en aquellos casos de vehemente y fundada sospecha, sin que sea necesaria la citación de su Cónsul para que asista" (Novísima, VI, XI, VII).

Mientras que la política comercial con las Indias estaba presidida

por ideas muy cerradas, por el contrario, fueron notables las facilidades dadas a los extranjeros en la Península, más por vía de concesión singular y privilegiada, que a través de tratados internacionales. Incluso, los favores otorgados a los comerciantes extranjeros llegaron a rebasar la igualdad entre ellos y los naturales. Así, Felipe IV en 1645 confirmó los privilegios que habían sido dados a los ingleses en Andalucía, los cuales desde el tratado de Utrecht en 1713 les fueron aumentados con la fórmula de "nación más favorecida", mediante el "navío de permiso" de 500 toneladas, y extendidos después a Alemania, Francia, las Provincias Unidas, Dinamarca y Portugal. Modelo de tales privilegios es el tratado de 1725 entre el rey de España y el Emperador de Alemania (37). Nuevamente contrasta la normativa convencional, formalizada en los tratados internacionales, con la que aparece en las medidas legislativas, que en algunos casos contenían medidas restrictivas, por exigencias de la guerra, por ejemplo; así, en la Ley II, Título XI, Libro V de la Novísima Recopilación, que se transcribe en el Capítulo V, II, 2, de la presente Memoria, puesto que en 1740 se implantan los "navíos de registro" que los particulares podían enviar en todo momento, mediante autorización individual. La apertura del comercio se manifiesta paulatinamente, pues centros comerciales tan alejados de los tradicionales con las Indias (como eran Sevilla y Cádiz), y ven concedidas facilidades para comerciar con

(37) Conde y Luque, obra citada, pág. 363.

América: tal ocurre con los puertos asturianos (38).

Decíamos más arriba que la política comercial con las Indias fue muy cerrada. Desde los primeros momentos se estableció que el comercio con las Indias fuese propio y exclusivo de los naturales de Castilla, León, Aragón y Navarra. La dureza se extremó por Felipe III y Carlos II, según se desprende de la ley VII, Título XXVII, Libro IX de la Recopilación de Leyes de Indias, que manda que "en ningún puerto ni parte de nuestras Indias Occidentales, islas y tierras firmes de los mares del Norte y Sur, se admita ningún género de tratos con extranjeros, aunque sea por vía de rescate o cualquiera otro comercio, pena de la vida y perdimiento de todos sus bienes a los que contravinieren nuestra ley".

En 1602, Felipe III, "porque crecen los inconvenientes de pasar a las Indias extranjeros, y rendir en los puertos y otras partes, y de algunos se ha experimentado que no son seguros en las cosas de nuestra santa fe católica, y conviene atender mucho a que no se siempre algún error entre los indios y gente ignorante; mandamos a los virreyes, Audiencias y gobernadores, y encargamos a los arzobispos y obispos que se correspondan, ayuden y procuren limpiar la tierra de esta gente, y los hagan echar de las Indias y embarcar en las primeras ocasiones a costa

(38) A. Menéndez González: *"Asturias y el comercio con América en el siglo XVIII"*, en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, nº 135, julio-septiembre 1990, pág. 541 y sts.

de ellos, poniendo siempre muy cuidadosa diligencia, de que nos avisarán".

Existió una excepción, ciertamente vergonzosa, que era la trata de negros, por medio de los "asientos" o contratos para venderlos, concedidos a casi todas las naciones: flamencos, genoveses, portugueses, ingleses y franceses, a cambio de pagar un tanto anual a la Corona de España.

Como dice Conde y Luque (39), causa asombro ver que en 1701 y 1713 se declara lícito el comercio de hombres, mientras se consideraba contrabando el de los objetos más viles: "No podrán desembarcar, introducir ni vender ninguna ropa, géneros ni facturas, debajo de ninguna simulación ni motivo, por grave que sea, ni comerciar ni vender otra cosa que no fueren los dichos esclavos negros, pena de la vida al que lo ejecutare (40). Estas contratas particulares cesaron en 1721 y un Real Decreto de 1788 declaró libre este comercio para españoles y extranjeros (41).

Carlos II (Ley I, Título I del Libro IX de la Novísima

(39) Obra citada, pág. 361.

(40) Obra citada, pág. 361-362.

(41) Obra citada, pág. 362.

Recopilación) en 15 de marzo de 1683 crea la Real Junta de Comercio en 1683, privativa para toda esta materia con inhibición de los demás tribunales, y Felipe V le entrega expresamente en 1707 todas las materias relativas a puntos de tráfico y comercio (ley 2); a ella se le agrega la Junta de Extranjeros en 21 de diciembre de 1748 (Ley VIII, Título I, Libro IX), a la que se le había encargado la confección de las matrículas de extranjeros (42). Larruga propugna la implantación del régimen de reciprocidad en materia arancelaria.

La Junta de dependencia de extranjeros era de las más importantes de la monarquía, pues formaba parte de Consejo de Estado. Se creó en 1714 (Real Decreto de 12 de marzo) para atender determinadas peticiones de la Corona de Francia, y se extinguió en 1717; no obstante, se restableció en 3 de noviembre de 1721 y subsistió hasta que Fernando VI agregó su cometido a la de Comercio, Industria y Minas. Se ocupaba de los asuntos que el rey le remitía, y solía tratarse de nombramientos de jueces conservadores y cónsules, asuntos de comercio y navegación y otros muy confidenciales.

Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que los transeúntes no

(42) E. Larruga Bonete, *Historia de la Junta de Comercio, Industria y Minas y Dependencia de extranjeros*, varios volúmenes manuscritos existentes en la Biblioteca Central del Ministerio de Hacienda; trabajo citado por G. Anes en *"El Antiguo Régimen: los Borbones"*, en *Historia de España, Alfaguara*, IV, 1975, pág. 201, y también Tomás Ortiz de la Torre, en su reiterada tesis, pág. 135.

pueden ejercer el comercio al por menor ni oficios. Son restrictivas las disposiciones a que nos referimos a continuación:

Los transeúntes no pueden ejercer el comercio por menor, ni las artes liberales y oficios mecánicos, ni emplearse en servicio alguno sin Real permiso; necesitan de licencia para residir en la Corte, y para su entrada en general en los reynos, previo el juramento, prohibición de ejercer oficios de mercaderes de vara, ni vendedores por menor de cosa alguna, sastres, modistas, peluqueros, zapateros, médicos, cirujanos, arquitectos, etc., y so las penas que se indican (art. 2 y 3, Ley VIII; art. 6, Ley IX. y not. 9. ib. del Título XI, del Libro VI de la Novísima).

Los extranjeros transeúntes, pero sin ejercicio de artes, destinos u oficios, no puedan venir a la Corte, ni permanecer en ella sin licencia por la Secretaría de Estado (art. 7. Ley IX, del mismo Título y Libro).

3. Industrias y oficios

Bravo (43) recoge la circunstancia de que, ocupado Felipe II en las guerras de religión, prescindía de otros intereses con grave perjuicio de nuestras industrias y del engrandecimiento material, lo que no impidió

(43) Emilio Bravo, *"Derecho Internacional Privado vigente en España"*, tomo I, Madrid, 1886, pág. 197.

que el comercio -por sí solo- trabajase con energía y atrevimiento. Así, unidas las villas de Bilbao, San Sebastián, Santander y Laredo, enviaban a Londres representantes que, directamente, y sin intervención ni conocimiento del Rey, pactaban con Inglaterra un tratado de comercio y navegación en toda regla, a través de un procedimiento desde luego anómalo, pero necesario. Estaban exentos del sorteo para el reemplazo los hijos de extranjeros industrioses en determinadas circunstancias (Real Cédula de 6 de junio de 1773) (nota 4, Título XI del Libro VI de la Novísima). En los pueblos donde hubiere fábricas, en los que hubiere oficiales que no profesasen la religión católica, se formará listas separadas con la especificación requerida (Ley IX, título XI, Libro VI de la Novísima).

Precedentes de iniciativas en orden a animar la industria se encuentra la petición de las Cortes de Toledo de 1559, de que se concediesen franquezas, privilegios y libertades porque, existiendo en España mucho hierro, acero, lana, seda y otras primeras materia, éramos, por contra, tributarios del extranjero de todos los objetos fabricados con ellas (44). Con anterioridad, las Cortes de Segovia de 1548 solicitaron "que viniesen a Castilla personas expertas de otros reinos para que, reconociéndola y examinando los ríos, viesesen todas las tierras que se podían regar y se hiciesen las obras necesarias para ello, con objeto de

(44) Conde y Luque, obra citada, pág. 355.

evitar la esterilidad de la tierra y la mucha hambre, de que se seguían grandes daños, pestilencia y desolaciones".

En este orden de cosas, es forzoso citar el "Discurso sobre el fomento de la industria popular, de orden de S. M. y del Consejo", redactado por encargo del Conde de Campomanes (45), en cuyo § XVII se habla de que "las artes provechosas que faltan en una nación, deben introducirse, y dotarse de maestros que las enseñen... *Es mejor introducir artesanos extranjeros que reducir nuestros labradores a puros artesanos...*"; y se aborda de frente el problema de la inmigración de los extranjeros al fin apuntado, y se pone el ejemplo de París, donde hay un número considerable de artesanos extranjeros, y en todos los demás parajes, en que florece la industria. *"Que sea natural o extranjero, nada importa, como se arraigue dentro de España. Si es ocioso, nos perjudica igualmente el natural como el extranjero, que intenta vivir a expensas del común... Ni por esto se debe impedir a los extranjeros que se dediquen al cultivo de nuestros campos; antes convendría emplearlos con preferencia en él. Los desertores, especialmente portugueses, serían unos colonos excelentes..."*. Como se ve, al menos en el terreno de las ideas, van cayendo los viejos prejuicios.

El espíritu renovador inspira la actuación de las Sociedades de

(45) Editado por A. de Sancha, Madrid, 1774, pág. CLVIII.

Amigos del País, que se extienden por toda la nación (46).

4. Derecho sucesorio

El Real Decreto de Felipe V, de 1724, regula las sucesiones de los ingleses.

En los abintestatos de los súbditos del rey de la Gran Bretaña que muriesen en estos dominios, podían los Cónsules u otros Ministros de aquel reino inventariar sus bienes, hacienda, papeles, y libros de cuentas, y ponerlos en manos de dos o tres mercaderes, para que los guardasen para sus propietarios y acreedores, observándose el artículo 34 del tratado de Utrech, sin que se aplicase al caso de morir con testamento. Esto se aplicaría a todos los súbditos de la Gran Bretaña mientras no estén avecindados, y todo ello sin perjuicio de tercero (Novísima, VI, XI, IV).

Continúa aplicándose el principio de posibilidad de testar y de recibir herencias, sin aplicación en España del derecho de aubana.

(46) Véase, por ejemplo, M. Ruiz Lagos, *"Ilustrados y reformadores en la Baja Andalucía"*, Editora Nacional, Madrid, 1974.

Además, la Ley XVIII, Título XX del Libro X de la Novísima Recopilación regula, según Cédula de Carlos III de 22 de mayo de 1783, la mutua sucesión en los bienes de los vasallos de esta Corona y la de Cerdeña, en condiciones de reciprocidad; y el art. 8 de la convención acordada en 13 de mayo de 1769, encarga a los Cónsules y Vice-Cónsules la liquidación de las herencias de los españoles en Francia y de los franceses en España, en los términos prevenidos en los artículos 33 y 34 del Tratado de Utrech.

Mientras tanto, en otros países el derecho de aubana seguía vigente, hasta finales del siglo XVIII; y en la isla inglesa de Jersey, en el canal de la Mancha, todavía continúa, particularidad que, por su rareza, no nos resistimos a recoger:

Una supervivencia del Derecho de aubana en el siglo XX

En efecto, en la isla británica del Canal de la Mancha, de Jersey, estaba en vigor una disposición recogida en los "Comentarios de Derecho Civil", tanto público como privado, observado en el País y Ducado de Normandía de Tarn'eus, cuya segunda edición, de la que nos servimos, hecha en París en 1573 (por Jacques de Puys, Librero Jurado, residente en la calle San Juan de Letrán, bajo el rótulo de la Samaritana), dice:

"Libro Segundo que trata del derecho y estado de las personas.

"Sobre los extranjeros no naturalizados. Cap. XII.

"Extranjeros no naturalizados son los extranjeros que no son naturales de este Reino pero que residen y viven en él: se les llama así como nacidos que son en otra parte. Cuando fallecen, el Rey tiene derecho a incautarse de sus bienes existentes en el Reino y los incorpora a sus posesiones, sin que los dichos extranjeros puedan disponer de ellos mediante testamento y sin que sus herederos legítimos puedan heredarlos. Pueden no obstante hacer donación de ellos, o bien disponer de ellos mediante contratos hechos entre personas vivas, como el señor Imbert afirma y como así se ha juzgado por los señores condes. Y si un extranjero que viva y tenga su residencia fuera del Reino hubiera adquirido algunos bienes en éste, sus herederos legítimos, aunque fuesen extranjeros, le sucederían en los dichos bienes puesto que tal adquisición no está hecha con numerario adquirido en dicho Reino, tal como dice el señor Papón (47). De modo semejante, si un extranjero de paso en el Reino falleciera en él, el señor Rebus (48) es de opinión contraria al señor Chassa (49), a saber que el Rey no heredaría los bienes que

(47) En el título del derecho de extranjería, libro 5, título 2.

(48) Bajo la rúbrica en las consis. párrafo 1, nº 37.

(49) En el tratado de las cartas de naturaleza en sus comentarios sobre las ordenanzas reales, Tratado 2, nº 8, Cartas de naturaleza.

aquél podría por entonces haber traído y dejado en el Reino, puesto que él no los habría adquirido en éste, y por ello deberían ser conservados para sus herederos, o distribuidos entre los pobres, según el auten. omnes peregrini, C., sobre las sucesiones. Esto de arriba (lo que acabamos de decir) tiene lugar si los dichos extranjeros carecen de cartas de naturaleza otorgadas a ellos por el Rey y mediante las cuales estén autorizados a adquirir, tener y poseer bienes en este Reino. Tales cartas, expedidas en forma de documento deben estar refrendadas y confirmadas por la cámara de cuentas, con obligación de pagar por ellas dinero contante al Rey, como ocurre con las cartas de nobleza y de legitimación. En tal caso, los tales extranjeros pueden tener herederos de los bienes por ellos adquiridos en el Reino, con tal de que tales herederos sean reíncolas (súbditos), nacidos en el Reino y de madre casada en el Reino. Y no hasta lo uno sin lo otro, como dice el mencionado señor Papon citando una sentencia de París, según la cual, en la sucesión de un difunto extranjero tuvo preferencia un primo del difunto a una hermana de éste y ello porque el primo era natural del Reino y residía en él, mientras que la hermana no tenía sino la calidad de residente pero había nacido fuera del Reino. Y ello a pesar de que la hermana se hubiera hecho naturalizar tras el fallecimiento de su hermano, lo que la Corte no tuvo en cuenta porque la sucesión estaría ya (aplicada) otorgada al primo, en cuyo perjuicio el Rey no había podido otorgar cartas de

naturaleza. Rebus (50) sin embargo, opina que si un extranjero reside y toma esposa en el Reino y tiene de ella hijos nacidos y residentes en él, los dichos hijos pueden en tal caso sucederle sin cartas de naturaleza, aunque diga lo contrario el señor Benedi y otros consuetudinarios, alegando para ello algunas sentencias de París, como hace también el mencionado Papon. Pero todos están de acuerdo en que los colaterales no sucederían (no podrían ser sucesores). Más arriba, en el título de los Obispos se ha dicho que los extranjeros no pueden disfrutar beneficios en este Reino".

En el momento presente la situación se ha atenuado, como se desprende de la información que hemos obtenido del Abogado S.C. Nicolle, Asesor Jurídico del Departamento de Oficiales de la Corona del "Attorney General's Chambers" (cargo equivalente a lo que sería el Abogado del Estado en España), quien en 16 de mayo de 1984 nos informa lo siguiente:

"La posición de un "aubano" o nacional no británico, en la "common law" era como sigue: Podía adquirir propiedades inmuebles en Jersey por compra o donación "inter-vivos", y podía disponer de la misma manera. En lo concerniente a la sucesión intestada, si había dejado herederos legítimos, nacidos en territorio británico, éstos podían heredar

(50) En el mismo lugar y tratado citados más arriba.

su propiedad; si no tenía herederos nacidos en territorio británico, su propiedad pasaba bajo un "ab intestato" a la Corona, o, en ciertos casos, al Señor de la tierra sobre el cual estaban situadas. Desde la abolición de los derechos señoriales en 1966, la propiedad de un "aubano", que ha muerto intestado y no había dejado herederos legítimos nacidos en suelo británico, sólo pueden pasar a la Corona.

"En 1916 quedó sentado en el caso de *Beakbane contra Blakbane* que un "aubano" no podía heredar "ab intestato" propiedades inmuebles situadas en Jersey.

"En lo que concierne a la sucesión testada, se considera generalmente que un "aubano" puede disponer de propiedades inmuebles sitas en Jersey por testamento y que puede también heredar tales propiedades, bajo los términos de un testamento.

"La posición anterior ha sido alterada en una cierta manera por la Ley de las Comunidades Europeas (Jersey), 1973, artículo 6 (2), de la cual resulta que, no obstante una norma legal en contrario, será legal que un nacional de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea herede derechos reales o personales a medios de un "ab intestato". El efecto de esta Ley es colocar a los nacionales de los Estados Miembros de la C.E.E. en la misma situación."

5. Navegación

En los "Fueros de Guipúzcoa" (51), en el Título XIX, Capítulo VII, se incluye una disposición de Felipe II en 1597 que autorizó a los que trajesen bastimentos a la provincia, para que puedan cargar sus navíos las dos terceras partes de trigo, cebada y centeno, y otra tercera de legumbres, y la cuarta parte de mercancías lícitas, y sacar en retorno de todo ello no sólo los frutos de la tierra, más también el dinero que procediese de ellos, precepto de gran transcendencia pues está en contra de la normativa general (v. Parte III, Capítulo VI, II, 2, de este trabajo), lo que se desarrolla en el Capítulo VIII (Felipe III en 1608 y 1609, y Felipe IV en 1647). Por otra parte, a falta de marineros naturales y vecinos de la tierra, sólo pueden tomarse extranjeros y hasta un máximo de la cuarta parte de las tripulaciones (Capítulo X, Felipe II en 1582). En fin, en el Capítulo X se reitera la prohibición general de "estos reinos" de que los extranjeros puedan hacer naos, ni ningún natural para los extranjeros.

Felipe V, en Madrid, a 23 de diciembre de 1716, regula la admisión en los puertos de España de las embarcaciones extranjeras, para prevenir el fraude y el contrabando, con base en el artículo 10 de las paces con Inglaterra del año 1667, y en el 20 de la paz de Utrech con los Estados

(51) Obra citada, pág. 257.

Generales del año 1714. Los Gobernadores, Superintendentes y Ministros de Hacienda y Contrabando de todos los puertos, pondrán a bordo de cada navío que llegare tres personas u oficiales de la Aduana, lo que se aplicará a los navíos o bajeles de cubierta, pero no para las embarcaciones menores, aunque usaren de bandera, las cuales deben ser visitadas y registradas inmediatamente de que lleguen al puerto (Novísima, IX, VIII, XI).

Carlos III, en el Buen Retiro, por Decreto de 14 de diciembre de 1760, y Cédula del Consejo de Hacienda del 17 del mismo mes y año, insiste en la observancia de la Ley precedente, con inserción del artículo 15 del tratado de paz con Inglaterra de 1667, y del 11 del de paz con Inglaterra de 1713.

En cuanto al primero, dice que sólo se confiscarán los bienes prohibidos, y no otros algunos, ni el delincuente incurrirá en otra pena fuera de ésta; salvo que saque fuera de la Gran Bretaña dinero o moneda propia de la provincia, lana o tierra para abatanar, y de España oro o plata labrada o por labrar; en cuyos casos, las leyes de los respectivos países tomarán su fuerza y debido efecto.

En desarrollo del segundo de los preceptos mencionados, se ordena presentar los manifiestos de carga en las veinticuatro horas de la llegada de los navíos a los puertos; seguidamente, los Administradores de Rentas

mandarán tres ministros a los barcos, para que vigilen no se alije ni descargue cosa alguna, a no ser con las guías de los Administradores. Cuando se encuentren en la costa bastimentos menores con tabaco y sal, a distancia de una o dos leguas, por el probable recelo de que se empleen en el fraude, se visitarán y se procederá contra sus patrones, maestros y marineros con arreglo a las leyes de estos Reinos; todo ello, en régimen de reciprocidad.

Las exenciones transcritas se practicarían, por ahora, con los navíos o embarcaciones del pabellón inglés, francés y holandés, pero no con las otras Potencias hasta que acrediten en el Ministerio de Estado estar comprendidas en los mismos tratados, o tenerlo particular; y los navíos de las demás Naciones, después de dar su manifiesto dentro de las veinticuatro horas de su llegada a puerto, serán visitados antes y después de haber hecho su descarga como tuvieren por conveniente los Administradores y ministros de Aduanas; y si se encontrase fraude de géneros, o contrabando de plata y oro, o más fardos que los manifestados, se confiscarán las embarcaciones y se procederá contra el capitán, patrón y marineros conforme como se hace con los propios vasallos (Novísima, IX, VIII, XII).

Con fecha 22 de enero de 1793 se comunicó, desde Aranjuez, a los Intendentes de Marina y Ministros de Provincias una Instrucción que contiene las reglas que han de observarse para admitir en la matrícula

embarcaciones de construcción extranjera, que pertenezcan a vasallos del Rey por vía de compra u otra legítima adquisición (Novísima, nota (2), a la ley anterior).

En la Ley V, Título VIII, Libro IX de la Novísima Recopilación se recoge la de D. Fernando y D^a Isabel por Pragmática en Granada de 3 de setiembre de 1500, y D. Carlos I en Valladolid en 1523, sobre prohibición de cargar mercaderías en navíos extranjeros, habiéndolos nacionales; y sobre tasación de sus fletes. Las penas impuestas (pérdida de las mercaderías) se acrecientan en la ley 6 del mismo título (pérdida de los maravedís de juro, tenencias y lanzas "que de Nos tuviesen"), dictada por D. Fernando y D^a Isabel en 1501 y D. Carlos y D^a Juana en 1523.

Carlos IV, en la Ley VII del mismo título (decreto de 13 de marzo y Cédula del Consejo de 13 de abril de 1790), renueva las anteriores leyes sobre gremios a los que construyan y aparejen buques mercantes, "siendo natural de ellos su dueño".

En la Ley IX (D. Fernando y D^a Isabel en Granada por Pragmática de 11 de agosto de 1501, y D. Carlos Y D^a Juana en Valladolid en 1522 y 1548), se prohíbe vender y empeñar a extranjeros los navios de naturales de estos reinos, bajo pena de pérdida de los mismos y del precio, y cada uno de ellos la mitad de sus bienes.

Una Pragmática de D. Fernando y D^a Juana en Sevilla y sobre-carta en Burgos (1511) establece la obligación para naturales y extranjeros de que las mercancías que saliesen del reino se cargasen en las naves mayores que hubiere en el puerto donde se efectuase la carta, y ello para fomentar la construcción de naves grandes, para mayor crecimiento de la flota (Novísima, IX, VIII, VIII).

La Ley X, siempre del mismo Título y Libro, dada en Toledo, en 1560, por Felipe II, recuerda la observancia de las leyes anteriores sobre preferencia de los navíos nacionales a los extranjeros.

La Ley XI recoge los artículos "10" de las paces ajustadas con Inglaterra en los años de 1667 y 1713, respectivamente, en los que se dispone que no sean visitados los navíos del Rey de la Gran Bretaña o de sus súbditos por los ministros o jueces de contrabando, y no se pongan hombres armados en aquéllos, aunque los oficiales reales y de la Aduana puedan estar en los navíos para reconocer que no se bajen mercancías sin pagar los derechos correspondientes.

Y también el artículo 20 de la paz de Utrech con los Estados Generales del año 1714 sobre posibilidad de los navíos de guerra de entrar y salir y "mantenerse a la "áncora" sin poder ser visitados en la carga, lo que ha de cohonestarse con evitar fraudes y contrabandos en los Reales derechos.

En la Ley XII se obliga, en virtud del artículo 11 del tratado de paz con Inglaterra de 1713, a los capitanes de los navíos "marchantes" que entrasen en algún puerto de España, con sus bajeles, a entregar a las veinticuatro horas de su llegada dos declaraciones de las mercancías que hubiesen traído: una al rector o comisario de las Aduanas y otra al juez del Contrabando.

II. DERECHO PUBLICO

1. Aspectos generales y penales

Los extranjeros avecindados en Barcelona pueden ser llevados delante del Veguer en acciones personales ("Constitutions y altres drets de Cathalunya", 1702, Libro 1, Título 28, Capítulo 1).

En el Título XXXVI del Libro XII de la Novísima Recopilación se indica el procedimiento de remisión de delincuentes a sus países, y de unos a otros reinos, de acuerdo con la Pragmática de D. Fernando y Doña Isabel en Madrid del 20 de mayo de 1499 (Ley III).

D. Carlos I ordena en Torquemada (1520) (Ley VI) que, puesto que los delincuentes del Reino de Navarra se refugian en Castilla y

viceversa, han de ser entregados por las respectivas Justicias, cuando exista petición o requerimiento para que sean juzgados en el lugar donde cometieron el delito. Aunque la norma se presenta como de Derecho interno, "pues el dicho Reyno (el de Navarra) es de mi Corona Real", lo cierto es que cuando los delincuentes de Navarra pasan a Castilla, "los delitos quedan impunidos", más bien parece por abandono o imposibilidad material, que por imposibilidad legal. Completada por la de D. Felipe II en el Escorial del 29 de junio de 1569 (Ley IV), que Tomás Ortiz de la Torre (52) entiende que es una norma interna y aclaratoria del convenio entre Castilla y Portugal de 1499, mientras que Quintano Ripollés (53) interpreta como un verdadero tratado internacional.

Régimen de privilegio supuso para los naturales, que los forasteros del Señorío de Vizcaya puedan ser presos por cualesquiera delitos, y en cualquiera tiempo, sin preceder llamamiento, lo que suponía prescindir de los trámites de la inculpación y procesamiento (54).

Por Real Orden de 11 de abril de 1779 y Cédula del Consejo de 13 de agosto de 1779 se ordena cumplir el tratado hispano-portugués de

(52) Obra citada, pág. 26.

(53) *"Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal"*, II, Madrid, 1957, pág. 174.

(54) *"Privilegios, franquezas y libertades del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya"*, Bilbao, 1865, Ley V, Título IX, folio 31. Hay reedición de 1977.

11 de marzo de aquel año: su artículo 6º es el relativo a la remisión de delincuentes, y se amplían los delitos comprendidos en los tratados y concordias antiguas del tiempo del Rey D. Sebastián y del artículo 18 del Tratado de Utrech de 6 de febrero de 1715, puesto que se comprenden "los delitos de falsa moneda, contrabando y deserción de los Cuerpos militares de mar o tierra (Novísima, XII, XXXVI, V).

Carlos IV, por Real Orden de 3 de marzo de 1797, expedida por la vía de Estado, dispone que *"al Marroquí delincente en estos reynos se remita con el sumario de su crimen, y entregue a su Gobierno para que lo castigue"* (XII, XXXVI, IX), que va en contra del criterio de territorialidad de la Ley VIII del mismo Libro y Título).

La Ley VII del Título XXXVI del Libro XII transcribe el convenio entre las cortes de Madrid y Versalles, sobre la recíproca entrega de delincuentes y malhechores que se pasen de un Reino a otro (D. Carlos III en San Ildefonso el 29 de septiembre de 1765).

La Ley VIII dice: *"Los extranjeros delinquentes en estos Reynos, o infractores de bandos públicos, sean procesados y castigados por las Justicias, sin remitirlos a sus Jueces"*. Con esto se introdujo, según M. Arjona Colomo (55), un principio fundamental del Derecho penal Internacional:

(55) Obra citada, pág. 410.

la jurisdicción de la ley del territorio para conocer de los delitos cometidos en él; y ello aunque sea a través del principio de reciprocidad, sin distinguir entre nacionales y extranjeros. Dice así:

D. Carlos III, por resolución a consulta de 1º y Céd. del Consejo de 24 de octubre de 1782: *"Habiendo llegado a mi real noticia, que en diferentes países extranjeros, quando alguno de mis vasallos, así soldados como paisanos, transeúntes o domiciliados en ellos, delinquen contra sus leyes y bandos públicos, se les forman procesos por las Justicias ordinarias, sentenciándolos e imponiéndoles las penas convenientes, sin remitir los delinquentes a los Tribunales Españoles; fui servido manifestar al mi Consejo la regla de reciprocidad, que estimaba se estableciese en estos mis Reynos, en los casos que ocurriesen con los extranjeros transeúntes y residentes en ellos: y habiéndome hecho presente su parecer con lo expuesto por mis Fiscales, en consulta de 1º de este mes, conforme a él he venido en mandar que todas las Justicias de mis Reynos y señoríos en sus respectivas jurisdicciones, siguiendo la regla de reciprocidad, procedan contra los extranjeros transeúntes o domiciliados, de qualquiera Nación, que delinquieren o infringieren los bandos públicos, y formándoles causa, e imponiéndoles las penas correspondientes conforme a las leyes del Reyno, Reales Pragmáticas y bandos públicos, del mismo modo que se executa con los naturales de estos mis Reynos, y sin permitir que se forme sobre ello competencia alguna".*

La Ley IX, por el contrario, determina que al marroquí delincuente

en estos Reinos, se le remita con el sumario de su crimen, y se le entregue a su Gobierno para que le castigue.

En la Ley V del Título XXXVI del Libro XII se recoge la observancia de los artículos 2 y 6 del tratado de amistad, garantía y comercio hecho con Portugal el 11 de marzo de 1778, conmutándose la pena de muerte que habría de imponerse a los desertores, por otra que no sea capital.

Se celebraron tratados de extradición con Francia en 1765 (56) sobre desertores para toda clase de delinquentes; con Dinamarca en 1767 para la mutua restitución de esclavos y desertores en la isla de Puerto Rico, y en las danesas de Santa Cruz, Santo Tomás y San Juan; y con Holanda en 1791, también sobre desertores y fugitivos de las respectivas colonias americanas (57).

Destacan también, dentro de este período, las medidas contra los vagos. Por Real Orden de 20 de mayo de 1786 se acordó hacer entrega a Portugal de desertores fugitivos y vagos, en régimen de reciprocidad; lo que no evitó problemas relacionados con el pago de los gastos

(56) Emilio Bravo, *"Derecho Internacional Privado vigente en España"*, Madrid, 1886, tomo I, pág. 8.

(57) Emilio Bravo, obra citada, pág. 10.

originados, a cuya regulación atendió la Real Orden Circular de 24 de junio de 1799 (58).

Carlos III, en Aranjuez, por Real Decreto y Cédula de 7 de mayo de 1775, mandó que fuesen comprendidos en las levass así los ociosos naturales de la ciudad o villa, como los forasteros y extranjeros, en quienes concurra la ociosidad (Novísima, XII, XXXI, VII). Para el mismo rey (Real Cédula de 25 de marzo de 1783) se comprenden entre los vagos los romeros que se extravían del camino, y vagan en calidad de tales romeros (Novísima, XII, XXXI, XIII), y añade en la misma Real Cédula que en cuanto a los vagos extranjeros aptos para las armas "...pueden servir útilmente en los regimientos de su respectiva lengua, que están al servicio de la Corona, pues por este medio se evitará el gasto de otro tanto número de reclutas; y los que no fueren de talla, deben seguir los destinos gradualmente acordados".

Por cierto, que los hijos de extranjeros dedicados a la industria, a pesar de ser considerados naturales y vasallos cuando hubieren nacido en el Reino, siempre que se aplicasen a los oficios de sus padres o a otra industria provechosa para el Estado, disfrutaban del privilegio de exención del sorteo y servicio militar, según la Real Cédula de 6 de junio

(58) "Códigos...", tomo 10, Madrid, 1850, pág. 132, notas 1 y 2.

de 1773, aclaratoria de la de 17 de marzo del mismo año (59).

En el apartado de las "prohibiciones concretas" cabe mencionar que Carlos II, en Madrid (1697), manda aumentar la vigilancia para que los extranjeros no puedan sacar caballos del reino, furtivamente, por el daño que se causa al ser grande el número de los mismos que se hallan en sus manos (Novísima, IX, XIV, V).

Existen determinadas prohibiciones, lo mismo para los extranjeros que para los naturales: Felipe III, en Pragmática de Madrid en 1614, declaró inhábiles a los pretendientes de Gobiernos, oficios de Administración de Justicia, Prelacias, Dignidades y Beneficios eclesiásticos que se valiesen, para conseguirlos, de dádivas (Novísima, III, XXII, III).

Carlos III prohibió por Cédula de 14 de agosto de 1768 que viniesen extranjeros a los Seminarios de Misiones, destinados en preparar Sacerdotes seculares, con destino a sus dominios de las Indias y de Asia (Novísima, I, XI, III). También prohibió a los eclesiásticos extranjeros, en el capítulo 32 de la Instrucción de Corregidores (Cédula de 15 de mayo de 1788), pedir limosna sin licencia de S.M. o del Consejo, ni internarse y vagar por estos Reinos (60); lo que se reitera en el capítulo 1 de la

(59) "Códigos...", tomo 8, Madrid, 1850, pág. 256, nota 4.

(60) "Códigos...", tomo 7, Madrid, 1850, pág. 146, nota 10.

Cédula de 24 de noviembre de 1778 (Novísima, I, XXVIII, XI). Vino a este fin el Patriarca caldeo con Breves papales para el Nuncio, y el Consejo mandó expedir una provisión para que pudiese pedir limonas durante dos meses; si bien, en consulta de 11 de abril de 1768 se reproduce que los Breves que no vengan dirigidos al rey, en lo sucesivo, no se admitan sin este requisito, y que los dirigidos al Nuncio se recojan, *"por exceder de sus facultades la concesión de permiso para qüestar en el Reyno"* (Novísima, XI, XXVIII, XI y nota 9). El Fiscal del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica ha de ser precisamente español y también el Auditor, según Breve de 26 de marzo de 1771, publicado por Real Decreto de Carlos III de 26 de octubre de 1773 (Novísima, II, V, I).

2. Aspectos tributarios y monetarios

En lo que concierne al pago de tributos, por Real Resolución Circular de la Comisión gubernativa del Consejo, de noviembre de 1804, con motivo de lo representado por el Presidente de ella, Gobernador del Consejo, sobre que los franceses establecidos en Valencia se habían negado a dar a los Comisionados de Consolidación las noticias que les habían pedido para el empadronamientos de la contribución de criados, S.M. declaró "que a los franceses domiciliados en España según auto acordado (nota 13, Título XVIII, Libro VI de la Novísima) y a los que

tengan trato en ella por más de un año, se les exijan todas las contribuciones y derechos que a sus vasallos, siendo solamente libres los que vengan de paso a asuntos propios".

En orden a la defensa de la moneda, se observa con nitidez que la prohibición de sacar moneda los extranjeros fue establecida por Juan I y Enrique III, y confirmada por los Reyes Católicos en Toledo (1480), Murcia (1488) y Granada (1501) (Novísima, IX, XIII, I). En el título correspondiente se recogen reiteradas disposiciones prohibitivas en tal sentido: Juan II (1442) y Carlos I (1523) (Ley II); el príncipe D. Felipe (1552) (Leyes III y IV); Juan I (1388), los Reyes Católicos (1476) y Carlos I (1528) (Ley V); Felipe IV, por Pragmática de 1624, insiste en la prohibición de sacar moneda o pasta de plata u oro sin licencia, o en excederse de lo autorizado, así como en la de que no entre, procedente de fuera del reino, moneda de vellón (Novísima, IX, XIII, X). En la Pragmática de 1628, el mismo rey prohíbe el otorgar licencia al fin expresado, estando permitido, en cambio, sacar y traer al reino mercaderías (Novísima, IX, XIII, XI), insistiéndose en una Pragmática de Zaragoza de 1642 en que se guarde esta ley, tanto por naturales como por extranjeros (61); Carlos III dio una Instrucción de 13 de diciembre de 1760, que contiene las Reglas para precaver la extracción de moneda por Cádiz y demás puertos marítimos del Reino, y en la número 12 de

(61) "Códigos...", tomo 9, Madrid, 1850, pág. 24, nota 3.

ellas se permite a todo capitán de embarcaciones de comercio extranjeras *"sacar un bolsillo una vez al día por los puertos de Sevilla, o del mar, de quatro a cinco pesos quando más, conforme a la Real Orden de 5 de febrero de 1754"*..., y cuando se hubiere de sacar más para la compra de víveres y caldos para refresco de sus embarcaciones, se había de solicitar autorización por el Cónsul respectivo al Gobernador Subdelegado de Rentas para que el Administrador general despache la guía oportuna (Novísima, IX, XIII, XII).

Y así, hasta veinte leyes recopiladas, lo que da medida de la transcendencia del problema, bajo el prisma mercantilista de la época. Los mercaderes extranjeros habían de llevar el precio de sus mercancías en otras mercancías, pero no en oro o en plata o en moneda.

Una pragmática de Zaragoza de 31 de agosto de 1642 (62) mandó observar esta norma, tanto a los naturales como a los extranjeros.

Carlos III, por Resolución y Cédula del Consejo de 25 de julio de 1784, estableció varias disposiciones que afectan a la materia, permitiendo a los viajeros, así naturales como extranjeros, que pasen a los reinos confinantes, las moderadas cantidades que, según la calidad de los sujetos

(62) Tomás Ortiz de la Torre, obra citada, pág. 21, que se toma de *"Códigos..."*, 9, pág. 239, nota 5.

y la distancia de los pueblos de sus destinos, regularán los Administradores de las Aduanas; y, en cuanto a los capitanes de embarcaciones extranjeras no les era permitido sacar en bolsillos más cantidad que la de cinco pesos en oro o plata moneda al regresar a sus buques (Novísima, IX, XIII, XIV).

3. Prohibición de ejercer cargos públicos. Situación especial de los Embajadores y Cónsules

En el testamento de Isabel la Católica se expone la conveniencia de que los gobernantes sean naturales de los reinos que dirigen, y encarga a su yerno Felipe el Hermoso que, para los oficios y empleos, nunca nombre a extranjeros. Prevención bien fundada, pues son conocidos los abusos que cometieron los flamencos que luego le acompañaron.

En cuanto al desempeño de cargos públicos por extranjeros, Fernando y Juana siguen en Burgos (1515), y Felipe III en Madrid (1590), la tónica prohibitiva señalada en la página 297 de esta Memoria. Por otra parte, Carlos y Juana en Valladolid (1523) prohíben tener y ejercer oficios públicos de gobierno de los pueblos a extranjeros de estos reinos, ni cambiarlos por otros semejantes (Novísima Recopilación, VII, V, III).

La prohibición de ocupar puestos de Embajador la acuerda D. Carlos en Valladolid (1523) y se renueva en Toledo (1525) y Madrid (1528) (Novísima, III, IX, I). En las Cortes de Barcelona de 1493 se había revocado la constitución de las de Monzón por la que se les negaba el disfrute de oficios en Cataluña. En 1553 se reitera la prohibición de que los franceses, aun casados en Cataluña, puedan obtener oficio real, se exceptúa a los hijos de franceses, nacidos y domiciliados en Cataluña. Los extranjeros no pueden tener oficios de jurisdicción en Cataluña ni en Mallorca e islas adyacentes, ni ser jueces ordinarios ("Constitutiones y altres drets de Cathalunya", 1702, Libro 1, Título 68, Ley 1). Los abusos de los extranjeros se reflejan en las Cortes de Valladolid de 1506, en las que hubo protestas por concederles cargos civiles y eclesiásticos. En las de la misma ciudad de 1518 se pide que los embajadores sean naturales de estos reinos, y se da la circunstancia de que acudieron personajes extranjeros a tomar parte en las deliberaciones y aun a dirigirlas, lo que motivó la protesta del procurador Zumel. En las Cortes, también de Valladolid de 1523, se pide que no se les concedan las tenencias de castillos y fortalezas. En las de Burgos (1515), Madrid (1590), se les prohíbe la obtención de cargos públicos y oficios (Novísima, VII, V, II y III).

En las Cortes de Pamplona de 1514, después de la conquista de Navarra por Fernando el Católico, se conformó el "fuero de los cinco bailíos". Carlos V otorgó que los extranjeros no tuvieran oficios ni

pensiones (1514) (leyes 5 a 7, Título 9, reiterado en 1580, ley 20.2, Título 9; 1583, ley 1, Título 8; leyes 7 a 9, Título 8). Se les aplican las mismas limitaciones que a los naturales, en materia de caza y pesca (año 1556, ley I, cap. 15, libro i, Tít. 7). Se les prohibió algún tiempo el comercio de tienda y se limitó el de lonja (1621, Id., Ley 6, Libro 3, Título 3). "*Los naturales navarros no sean tenidos por extraños en Castilla, sino por naturales, para los oficios, beneficios y cargos*" ("Fueros del reino de Navarra..." (Chavier) 1, 7, 12.

Nadie podía ejercer jurisdicción en el reino de Valencia, si es extranjero, y no natural de él, y domiciliado actualmente, aunque admitía matizaciones (63).

Por lo que respecta al régimen de los Embajadores, puede afirmarse que en contestación a consulta, Felipe V dispone en Madrid, el 25 de diciembre de 1716, y en relación con un incidente diplomático surgido con el Embajador francés que, en materia de inmunidad, se le diga que "está muy equivocado" pues, conforme a lo entendido y practicado desde el año 1684 con los Ministros de Príncipes en esta Corte, que es sólo desde las puertas adentro de su casa, y en régimen de reciprocidad, y le prohíbe el nombramiento de Alguacil y Escribano

(63) "*Tratado de la celebración de Cortes Generales del Reino de Valencia*", por el Dr. D. Lorenzo Matheu y Sanz, Madrid, por Julián de Paredes, 1667, pág. 68.

(Novísima, III, IX, V). El mismo rey manda en Aranjuez, el 15 de junio de 1737, en relación con el enviado extraordinario de los Cantones Católicos de Suiza, que la prerrogativa de los Ministros públicos, para no ser apremiados ni convenidos durante su Ministerio, ni estrechados con ejecuciones, se entiende sólo en cuanto a contratos anteriores a su "Legacía", y se suspenden por el tiempo de ella, pero no por las deudas, negocios y contratos particulares propios que durante el ejercicio de su Ministerio público han contraído (Novísima, III, IX, VI). Los Embajadores quedan sujetos a los bandos de policía, según la Real Orden de 27 de noviembre de 1784, dada a consecuencia de un incidente ocurrido al coche del Embajador de Venecia, fuera de la Puerta de Alcalá (64).

Carlos III, en El Pardo, por Real Orden de 30 de enero de 1787, y Carlos IV, en Barcelona, por Cédula de 6 de noviembre de 1802, sientan las reglas para la introducción de equipajes de los Embajadores y Ministros extranjeros; aclarando la norma de que gozaban de franquicia de derechos, durante seis meses, para la introducción de sus equipajes:

El plazo empieza a contarse desde la primera introducción. Estos equipajes, sellados en las Aduanas de entrada, serán conducidos a la Corte sin abrirlos, hasta que el Embajador o Ministro entregue una nota

(64) "Códigos...", tomo 7, Madrid, 1850, pág. 300, nota 3.

firmada de lo que contienen. Puesto en la nota por el Ministerio de Hacienda el "pase" o "entre", se hará el reconocimiento del equipaje "en una pieza separada y decente", pero nunca en las casas de los Embajadores, en presencia de la persona o personas que nombrase los mismos.

Se confiscarán los géneros que se hallasen con exceso en las notas. No habrá prórrogas del plazo de seis meses y, transcurrido el mismo, se pagarán los mismos derechos que las personas que residen en estos Reinos.

Está permitido introducir, además de los muebles, ropas y bienes de uso del Embajador, efectos de consumo, de manera moderada y sin abuso.

De todas estas reglas se da traslado a los Embajadores y Ministros españoles en el extranjero, "para que no pretendan otra gracia ni correspondencia que la recíproca", excepto que hubiere algún convenio particular (Novísima, III, IX, VIII).

Por Real Orden expedida por el Ministerio de Estado, inserta en Circular de 8 de agosto de 1799, dirigida por el de Guerra a los Capitanes Generales de Provincia y Gobernadores de Plazas, se les previene que, en los casos de acudir a ellos los Cónsules y Vice-Cónsules

de las potencias extranjeras, sobre asuntos de súbditos o ciudadanos de la Nación de que son agentes, contesten que no se hallan autorizados para recibir sus representaciones, ni menos para resolverlos, para lo que los Cónsules y Vice-Cónsules deberán acudir al Ministerio por medio de sus respectivos Embajadores o Ministros (Novísima, nota a la ley anterior).

Los requisitos para el establecimiento, facultades y exenciones de los Cónsules y Vice-Cónsules, se contienen en el Reglamento dado por Carlos III en El Pardo por Decreto de 1 de febrero de 1765, propuesto por la Junta de Comercio y Dependencia de Extranjeros de 30 de julio de 1763, que podemos sintetizar así:

Han de presentar la patente original, con su traducción en español.

Serán vasallos nativos del Príncipe o Estados que los nombre, excepto los Vice-Cónsules.

Unos y otros deberán impetrar la Real aprobación.

Serán calificados como nuevos agentes de su Nación, y gozan de fuero militar, como los demás extranjeros transeúntes.

Están exentos de alojamiento y de todas las cargas concejiles.

Si comerciasen al por mayor o menor serán tratados como cualquier individuo extranjero que haga igual comercio.

Las casas no gozan de inmunidad alguna, ni pueden tener en parte alguna la insignia de las armas del Príncipe o Estado que los nombre, si bien pueden poner en sus torres o azoteas señal que manifieste a los de su nación cuál es la casa de su Cónsul.

No pueden ejercer jurisdicción alguna, aunque sea entre vasallos de su propio Soberano, sino componer extrajudicial y amigablemente sus diferencias.

Por último, en lo que atañe a los Cónsules, en el Convenio con Francia de 13 de marzo de 1769 se estableció que los Cónsules, siendo súbditos del Príncipe que los nombra, gozarán de inmunidad personal, sin que puedan ser arrestados ni presos, excepto en el caso de crimen atroz, y en el que los Cónsules fuesen negociantes, puesto que entonces esta inmunidad personal debe solamente entenderse para deudas y otras causas civiles que no impliquen delito, o que no provengan del comercio que ejerzan por ellos mismos o por sus encargados (65).

(65) Emilio Bravo, obra citada, pág. 180.

4. Documentación requerida

En algún caso responde a la idea de comunidad cristiana, proyectada a la protección a los fugitivos de Oriente, ante los avances de los turcos. Fernando el Católico adopta a los miembros de la Orden de San Juan de Jerusalén, refugiados en Rodas (*"quam nostros vasallos et súbditos, in nostra protectione, salvaguarda et custodia"*).

"Modo de proceder a la concesión de pasaportes a extranjeros que entren a qüestar u otros fines semejantes" (Se regula en disposición recogida en nota 13 al art. 8, Ley IX, Título XI, Libro VI de la Novísima Recopilación) (Circular del Consejo de 2 de septiembre de 1802).

5. Relaciones Iglesia-Estado

Pasamos a ocuparnos de los beneficios eclesiásticos (preferimos tomar los textos directamente de la Novísima Recopilación, dado lo expresivo de sus términos, y la oportunidad del conocimiento íntegro de estas concretas disposiciones).

Título XIII, Libro I - De los beneficios eclesiásticos y requisitos para obtenerlos y servirlos.

Ley I.- D. Carlos y D^a Juana en Madrid (1543)

Prohibición de tener los extranjeros beneficios y pensiones en estos Reynos; y de las Bulas contrarias a esto, al Derecho de Patronazgo, y acerca de lo prevenido sobre los beneficios patrimoniales y Prebendas de oficio.

"Como nuestra intención ha sido siempre y será que los mandamientos de su Santidad Apostólica y sus Ministros sean obedecidos y cumplidos con toda reverencia y acatamientos debido, y así lo tenemos encargado...y así como es justo proveer en lo susodicho, lo es asimismo proveer en lo que por parte de los dichos nuestros Reynos nos es suplicado, en lo que tienen de razón y justicia, que se guarde y cumpla lo concedido por los Pontífices pasados a Nos y a los reyes nuestros predecesores, de gloriosa memoria...y así como en que no se derogue la preeminencia de nuestro real Patronazgo, ni el derecho de Patronazgo de Legos, ni lo concedido para que ningún extranjero de estos reinos pueda tener beneficios ni pensiones en ellos, ni los naturales de ellos por beneficio habido de tales extranjeros;...porque cualquier cosa que se proveyese por su Santidad y sus Ministros en derogación de las cosas susodichas...traería muy graves inconvenientes, y de ello podrían nacer escándalos y cosas que fuesen en deservicio de Dios Nuestro Señor, y nuestro daño, y de estos reynos y naturales de ellos: por ende mandamos a los dichos Perlados, Deanes y Cabildos, y Abades y Priors y Arciprestes...y a otros cualquier oficiales y personas legas que quando alguna provisión o Letras vinieren de Roma en derogación de los casos susodichos o de cualquier de

ellos, o entredichos, o ceración "a divinis" en execución de las tales provisiones, que sobresean en el cumplimiento de ellas, y no las executen, ni permitan ni den lugar que sean cumplidas ni executadas, y las envíen ante Nos o ante los del Nuestro Consejo, para que se vea y provea la orden que con rango que en ello se ha de tener; y no fagadas ende al, so pena de la nuestra merced, y de caer e incurrir los que fuesen perlados y personas eclesiásticas por el mismo fecho, sin que sea necesaria otra declaración alguna más de éste que aquí se hace en perdimiento de todas las temporalidades y naturaleza que en estos nuestros reynos tuviesen; y los hacemos ajenos y extraños ellos, para que no puedan gozar de beneficios ni Dignidades en ellos, ni de otras cosas de las que los que son naturales pueden y deben gozar según las leyes y pragmáticas de nuestros reynos, y los mandaremos echar de ellas; y a los legos que en esto fuesen culpantes en cualquier manera ... si fuesen Notarios o Procuradores, incurran en pena de muerte y perdimiento de bienes, y los otros legos en perdimiento de todos sus bienes, los cuales aplicamos dende agora a nuestra Cámara y Fisco, y demás de esto la persona sea a nuestra merced, y mandar hacer de ello lo que fueredemos servidos."

Ley II.- Los mismos (1532) y en Valladolid (1537)

Los Prelados no permitan a clérigos franceses ni otros extranjeros servir Beneficios, ni estar en sus Obispados, ni las consientan estar de morada, ni de estada en sus Obispados, salvo a las personas que fuesen

conocidas y calificadas; *"y lo mismo se haga a nuestra Corte"*.

Título XIV.- Libro I

Ley I.- Enrique II en Burgos (1377), Juan I en Burgos (1379), Enrique III en Tordesillas (1401), Enrique IV en Santa María de Nieva (1473), Fernando e Isabel en Madrigal (1476) y en Toledo (1480)

Revocación de las cartas de naturaleza dadas a extranjeros para obtener Prelacias, Dignidades y Beneficios del Reyno. Notorio es que en todos los reynos y provincias de cristianos o en la mayor parte de ellos, se usa y guarde inviolablemente de tiempo inmemorial acá, que los naturales de cada reyno y provincia hayan las Iglesias y Beneficios de ellos (V. Libro I, Título III, Ley XIV).

Ley II.- Fernando e Isabel en Toledo (1480), Carlos y Juana en Toledo (1525) y Felipe II en Toledo (1560)

Confirman la Ley anterior, y se revocan las cartas de naturaleza dadas a los extranjeros.

Ley III.- Carlos y Juana en Valladolid (1523), Toledo (1525) y Madrid (1528)

Se guarden las leyes precedentes y la Bula del Papa Sixto IV, en favor de los naturales de estos reynos (I, III, Ley XVI).

Ley IV.- Felipe IV en Madrid (1632)

No se den cartas de naturaleza ni las puede consentir el rey; ni gocen ventos eclesiásticas los extranjeros que no residan en estos reynos.

Ley V.- Felipe V en Balsain (1723)

Los naturales de los reynos de Castilla, Aragón, Valencia y Cataluña pueden obtener piezas eclesiásticas en ellos recíprocamente sin privilegios de extranjería; pero no en el de Mallorca (se basa en las Bulas de los Papas).

Ley VI.- Felipe V (1715)

No se concedan naturalezas de estos reynos sin pedir consentimiento a las ciudades y villas con voto en Cortes (puesto que está prohibido que los que no sean naturales de estos reynos no puedan tener oficios de veinticuatro, Regidores, Jurados, ni gozar pensiones, canongías, Dignidades ni otros qualquier Beneficios eclesiásticos.

Ley VII.- Felipe II en 1565

Cualidades del natural de estos reynos para que pueda tener beneficio eclesiástico en ellos.

"...ordenamos y mandamos que aquel se diga natural, que fuere nacido en estos reynos, y hijo de padres de ambos a dos, o a lo menos el padre, sea asimismo no nacido en estos reynos y demás de ello haya vivido en ellos por tiempo de diez años; con que si los padres, siendo ambos, o a lo menos el padre nacido y natural de estos reynos, estando fuera de ellos en servicio nuestro o por nuestro mandado, o de paso, y sin contraer domicilio fuera de estos reynos, hubieren algún hijo fuera de ellos, este tal sea habido por natural de estos reynos: y esto se entienda en los hijos legítimos y naturales, o en los naturales solamente; pero en los espurios disponemos y mandamos que las calidades que, conforme a lo suso dispuesto se requieren en los padres, hayan de concurrir y concurran en las madres".

Título XV, Libro I

Ley I.- Carlos y Juana en Toledo (1528)

Mandan que los extranjeros que de Nos y de los Reyes nuestros Predecesores tuviesen cartas de naturaleza para haber Beneficios en estos reynos, que sean obligados a venir a residir en el plazo de ocho meses, dada que fuesen poseídos, so pena de perderlos.

Mandan a los Prelados que no les den licencia a los clérigos franceses (No obstante, V. en Cartas de naturaleza y que el criterio era titubeante, puesto que Felipe III había dispuesto en 1616 que "la Cámara era competente para disponer sin consulta de naturaleza para extranjeros, como no sea para ventas eclesiásticas, que para éstas se ha de consultar (nº 4, 4, 2)

Título 14 del Libro I de la Novísima Recopilación

La Ley I, Título XXIII del Libro I prohíbe *"que tengan pensiones en los beneficios de estos Reynos, ni los naturales las consientan".- D. Carlos y Doña Juana en Madrid, por Pragmática de 20 de noviembre de 1539.-* *"Mandamos y declaramos que los extranjeros que por costumbre antigua y concesiones de los Sumos Pontífices y leyes de nuestros Reynos no puedan tener en ellos Prelacia, ni Dignidad, ni Préstamo, Calongía ni otro Beneficios eclesiástico, no puedan asimismo tener pensión sobre dichos Beneficios eclesiásticos en estos nuestros Reynos ni alguno de ellos; so pena que los naturales de nuestros Reynos que consintieren ser puestas tales pensiones o pensión sobre sus Dignidades, Calongías, Préstamos o beneficios a extranjeros, o puestas por ellos o por otros las pagaren o redimieren, o diesen renta o otro interés o emolumento alguno, por razón de haber los dichos Beneficios en los dichos extranjeros, por el mismo fecho sean habidos por extranjeros, y naturales de nuestros Reynos y pierdan todas las emporalidades y naturaleza que en ellos tuvieren; y los frutos de los tales Beneficios eclesiásticos, en que*

así consintieren pensión o extranjeros, sean secuestrados y no les acudan con ellos ni con las dichas pensiones o pensión, y se apliquen para los gastos de la guerra que contra los moros enemigos de nuestra Sancta Fe católica tenemos".

La Ley II (asimismo en el Título III del Libro I de la Nueva Recopilación) señala la pena de los naturales que reciban pensiones para acudir con ellas a extranjeros: D. Felipe en Madrid, 1578 y 1593.- *"Mandamos que las penas que están puestas por leyes de nuestros reynos contra los que consintieren pensión a extranjeros se entiendan a nuestros naturales que recibieren las tales pensiones en su cabeza para acudir con ellas a los dichos extranjeros". Estas penas están contenidas en la condición 90 del quinto género de millones: "...Que siempre que constare no ser los verdaderos poseedores y tenedores de las dichas pensiones y rentas eclesiásticas, "ipso facto" quedan desnaturalizados de estos reynos, para que en ningún caso ni acontecimiento puedan gozar ni gocen en todo ni en parte cosa alguna de los honores, franquicias y libertades que gozan los naturales de ellos".*

Por R.C. de 18 de enero de 1675, expedida por el Consejo de Indias, se prohibió pasar a las provincias de aquellos reynos a los griegos y armenios para pedir limosna en ellos, aunque tuviesen real licencia (Auto 4, Título XI del Libro I de la Nueva Recopilación).

Con ocasión de venir a España el Patriarca caldeo a pedir para

reedificar la única Iglesia de aquella nación, trayendo varios breves de S.S. dirigidos al nuncio, metropolitanos y obispos, el Consejo expidió una provisión para que en el término de dos meses, que se le permitía al Patriarca residir en Madrid o en Barcelona, le remitiesen los metropolitanos y obispos la limosna que su caridad les dictase, sin permitir la cuestación. Esto se hizo presente a S.M. en consulta de 11 de abril de 1768, exponiendo al mismo tiempo que se había hecho muy reparable que el Patriarca viniese sin Breve para el rey, sin preceder su real permiso y beneplácito, lo que se debía hacer saber al Patriarca y al papa. Esta consulta la devolvió S.M. diciendo : "Apruebo lo determinado por el Consejo, y he mandado prevenir lo conveniente a nuestro ministro en Roma".

En idéntico sentido, el Cap. 32 de la Instrucción de Corregidores, R.C. de 15 de mayo de 1788.

Como se puede ver, las normas eran restrictivas, en forma obsesiva.

Junto a los beneficios eclesiásticos, hemos de detenernos en la institución del Patronato. Lo anterior se confirma, y aun se acrecienta en la Ley IV del Título XVII del Libro I de la Novísima Recopilación (que coincide con la Ley I, Título VI, Libro I de la Nueva), promulgada por Felipe II en el año 1565 que versa sobre el "Patronato Real de todas las iglesias Catedrales de estos reynos, y presentación de sus Prelacias y

Abadías consistoriales", y que literalmente dice:

"Por Derecho y antigua costumbre, y justos títulos, y concesiones Apostólicas somos Patrón de todas las Iglesias catedrales de estos reynos, y nos pertenece la presentación de los Arzobispos y Obispos, y Prelacias y Abadías consistoriales de estos reynos, aunque vaquen en Corte de Roma".

El alcance de la Presentación se encuentra prolongado prácticamente hasta nuestros días (en que fue renunciado por el actual Monarca), dado que el convenio de 7 de junio de 1941 estableció la forma de ejercitar el derecho de presentación de las Sedes Arzobispales o Episcopales, sobre la base de que, en conversaciones entre el Nuncio Apostólico y el Gobierno, se confeccionaría una lista de un número de personas, de las que el Papa elegiría tres, que se comunicarían al Gobierno español, para que el Jefe del Estado presentase a uno de ellos.

Este Convenio fue incorporado al Concordato de 27 de Agosto de 1953 (artículo 7), habiéndose establecido antes, por Real Decreto concordado de 6 de noviembre de 1925 que cuando conviniese hacer el nombramiento de un obispo coadjutor con derecho de sucesión, correspondía a la Corona la presentación de la persona apta para el cargo, e igualmente para cambiar el carácter de obispo auxiliar por el de coadjutor con derecho de sucesión.

La Ley XI, del Título XVII del Libro I de la Novísima Recopilación contiene la instrucción dada por Felipe II en Madrid el 6 de enero de 1588, en la que se indica que cuando vaquen estos cargos, se le propongan las personas que parezcan más dignas para cada cosa, lo cual demostró la preocupación real por el ejercicio de esta práctica.

El Título XVIII del mismo Libro regula la Real presentación de las Prelacias de las Iglesias y provisión de piezas eclesiásticas.

Bajo la casa de Austria, el Regalismo es la característica más importante, por lo que, con independencia de sus creencias, Carlos V y Felipe II no respetan la independencia de la Iglesia, no sólo en cuestiones que por ser temporales podrían ser marginales (recuérdese el saco de Roma, por Condestable Borbón), sino en materias tan graves como las elecciones papales, para que fuesen elegidos candidatos adictos, llegándose a extremos tales como que el Cónclave excomulgó a Felipe II por simonía en 1590.

Los reyes reúnen "Juntas de Teólogos" que se manifiestan en contra de Roma y autorizan a tomar decisiones contra acuerdos de la Santa Sede. Un Consejo presidido por el Arzobispo de Toledo, tras amenazar con discutir la legitimidad del papa, pretende gobernar a España desde el punto de vista eclesiástico.

Se crea el Tribunal de la Nunciatura y se establecen los "recursos de fuerza"; se siguen examinando las bulas pontificias antes de su publicación, lo que constituye el "pase regio", el cual es reglamentado bajo Carlos I, de forma que deben ser examinadas por el Consejo de Castilla, y si estima que van en contra de los privilegios reales, se suplica al papa su reforma, y si no se consigue, se retiene y no se publican. La propia bula "In coena Domini", en la que se excomulga a los que retienen disposiciones pontificias, es retenida por Felipe II (Pragmática de Felipe II, de 20 de noviembre de 1569, Novísima II, III, V).

De nuevo, Carlos III da una pragmática en Aranjuez el 16 de junio de 1768, que regula el trámite de previa presentación en el Consejo de las Bulas, Breves y despachos de Roma (Novísima, II, III, IX).

Para la celebración de Concilios se requiere la aprobación del rey.

El tema del incremento de los bienes eclesiásticos que pasan a "manos muertas" es motivo de protestas de las Cortes, y en el siglo XVII se empieza a estudiar la posibilidad de su desamortización.

Con la colonización de las Indias, el papa concede el Patronato, o sea, el derecho de percibir todos los diezmos, con la obligación de dotar todas las Iglesias que se funden, y la facultad de presentar a los aspirantes a los beneficios eclesiásticos. Los reyes llegan a considerarse

"vicarios generales" del Pontífice, e impiden crear una Nunciatura en las Indias. La situación se agudiza bajo la Casa de Borbón, influida por las ideas galicanas de Francia, por lo que su forma más aguda, el jansenismo, se divulga por España. Como dice García Gallo, la Religión no es para ellos más que un arma política, un medio, no un fin primordial, como antes (y esto -añadimos- con las reservas que producen las situaciones que quedan recogidas).

Felipe V rompe con Roma en 1709 y destierra al nuncio, por haber estado el papa a favor del archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión. Se estudian medidas para establecer un patronato real, el afianzamiento de la regalía y la atribución a los obispos de la jurisdicción que se acusa haber sido usurpada por la curia Romana. Para salir de la situación, se gestionan diversos Concordatos por Macanaz, Alberoni, Rábago, el marqués de la Ensenada, Figueroa..., y se llega a uno definitivo en 1753 entre Fernando VI y Benedicto XIV. Pero bajo Carlos III las relaciones vuelven a enturbiarse, debiendo destacarse la disolución de la Compañía de Jesús por Clemente XIV, y su expulsión de España e Indias en 1767.

Se restablece el uso del "pase regio", ahora extendido a cuestiones de dogma, los recursos de fuerza, la obligación del Inquisidor General de publicar sólo las disposiciones apostólicas que permite el rey, se sustituye el Tribunal de la Nunciatura, por el de la Rota, formada por jueces españoles. La celebración de los Concilios queda bajo la inspección del

Fiscal de cada Audiencia, y los Alcaldes vigilan la adhesión al Monarca.

Al morir -en 1799- Pío VI, el Gobierno español, con la conformidad de parte de los obispos, interrumpe las relaciones de éstos con Roma, hasta que el rey no les comunique la elección del nuevo papa; mientras, algunas de las funciones de éste (dispensas matrimoniales y otras) son ejercidas por los obispos. Frente a la protesta del nuncio, se le da el pasaporte.

IV. SITUACIONES ESPECIALES

1. Los franceses. Sus oficios

El pueblo manifestaba su recelo hacia los extranjeros, que acaparan hasta el abuso los cargos públicos bajo Felipe el Hermoso, no siendo tampoco españoles algunos Ministros de los primeros Borbones; además de esto, la aversión popular era debida al buen trato que los Reyes dispensaban a los flamencos, italianos y alemanes que, dedicados a la industria o al comercio, se agrupaban en ocasiones por las calles en que residían (de Génova, en Sevilla; de Tudescos, en Madrid). En la época de Carlos II, los publicistas les acusan de monopolizar aquellas actividades. Italianos y flamencos formaron parte de la nobleza andaluza,

sin que por eso dejaran sus actividades mercantiles, llegando a alcanzar una envidiable posición social y económica, como los Colartes. En Cádiz había una colonia de armenios; y la alta Banca, que en el reinado de Carlos V estaba en manos de los alemanes, pasa a estar dominada después por los genoveses; 60.000 franceses había en España en 1680, de los cuales vivían en Castilla 16.000; se dedicaban a los oficios de buhoneros, pastores, labradores, aguadores, artesanos, mercaderes, etc.

Quevedo refleja en "El Buscón" el estado de ánimo general antes esta situación: "Topamos con un genovés, digo, uno de estos anticristos de las monedas de España".

2. Malteses, moriscos y judíos

"Los Malteses no pueden continuar su comercio de tienda abierta y por menor si no se avecindaren, dando las fianzas y con las demas cautelas que se expresan" (notas 1, 2 y 3 del Título XI, del Libro VI de la Novísima Recopilación).

Desde luego, los moriscos (moros bautizados) no pueden ser considerados como extranjeros, sino como súbditos objeto de regulación especial. Después de la conquista de Granada (1492), quedan moriscos en Castilla, Navarra, Vascongadas y algunos puntos de Aragón y

Valencia, y moros y mudéjares en estos países y en Cataluña.

En Cataluña se les expulsa, a los moriscos, como bandidos, desde 1512 ("Constitutions"..., 9, 18).

También en Navarra se les expulsa en 1549.

En Indias se ordena su devolución a la Península (Recopilación de Indias, VII, IV, V).

Después de fracasar los intentos para su conversión efectiva, su peligrosidad política, y la inquina entre ellos y los cristianos, pues siguen sin fundirse con éstos, determinan su expulsión, con pésimas consecuencias para nuestra economía (años 1608 de Valencia, 1609 de Castilla, La Mancha y Extremadura, y 1610 en Andalucía y Aragón).

En cuanto a los judíos, destaca Julio Caro Baroja (66) que así como los moriscos, una vez expulsados, dejaron de preocupar a los españoles, en cambio ocurre todo lo contrario con los judíos, también expulsados (1492), siendo objeto de especialísima vigilancia por la Inquisición. No es éste el lugar de hablar de su importancia en la

(66) "Los judíos en la España moderna y contemporánea", 2ª edición, abril, 1978, pág 13; el mismo, "Los moriscos del reino de Granada", 2ª edición, 1976.

formación de lo hispánico, ni de aludir a la polémica entre Américo Castro y Claudio Sánchez-Albornoz, pero sí conviene destacar cómo los descendientes de los judíos conversos llegan a ocupar los lugares más altos de la sociedad española (desde inquisidores y arzobispos, a corregidores, letrados, catedráticos, médicos, financieros e incluso capitanes, caballeros de los órdenes y títulos de Castilla), son rabiosos enemigos de sus antiguos correligionarios y orgullosos de su linaje. Lo cierto es que, a pesar de la expulsión, de la persecución inquisitorial, del ambiente oficial contrario, tienen un peso muy importante en la Historia de España en esta época, aunque sea bajo disfraz.

Es ésta una época en la que existe una obsesión por la limpieza de sangre, cuya prueba era precisa para demostrar la hidalguía, necesaria, a su vez, para ocupar determinados cargos o para ingresar en las ordenes militares, motivo -luego- para nuevos ascensos en la escala social y de influencias, con transcendencia, al final, también pecuniaria. No obstante, en determinados casos, las pruebas eran falsificadas.

Podemos detenernos en un caso sumamente significativo, como es lo que dice Madame D'Aulnoy en sus "Memorias de la Corte de España" (1.679-1.681) (67) de que a los judíos implicados en arduas empresas

(67) En *Viajes de Extranjeros por España y Portugal*, tomo II, siglo XVII, recopilación, traducción, prólogo y notas por J. García Mercadal, Aguilar, Madrid, 1959, pág. 1.174.

financieras no se les molestaba; tal el caso -dice- de D. Ventura Dionís, cuyo padre había dado 60.000 escudos para ser nombrado caballero de Santiago, y él mismo obtuvo del rey...el título de marqués (68), que le costó 50.000 escudos; su tío era uno de los judíos más famosos de Amsterdam. Todo eso se sabía en la Corte, como se sabía de otros muchos; pero en siendo ricos se contentaban con meterles miedo para obligarles a vaciar la bolsa y a rescatar sus vidas con dinero. Por ese procedimiento se obtuvieron grandes cantidades, y mientras se encontrasen en situación de poder entregar dinero, se salvaban del fuego por más de que lo mereciesen más que los otros."

Aparte de las obras citadas, de Amador de los Ríos y de Caro Baroja, el tema judío ha sido objeto de diversos trabajos (69), que demuestran su interés y vigencia, incluso después de la expulsión.

(68) En el "*Elenco de Grandezas y Títulos nobiliarios españoles*", Instituto Salazar y Castro (C.S.I.C.), 21ª edición, Madrid, 1988, aparece la concesión en 29 de julio de 1680 del título de marqués de Olivares a D. Ambrosio de Onís y Coutiño, regidor perpetuo de Valladolid, Caballero de Santiago.

(69) Felipe Torroba Bernaldo de Quirós, "*Los judíos españoles*", Toledo, 1977; Juan G. Atienza, "*Guía Judía de España*"; Altalena Editores, Madrid, 1978; Cecil Roth, "*Los judíos secretos. Historia de los marranos*"; Altalena Editores, Madrid, 1979.

3. Egipcianos

Se ratifica en 1525, 1528 y 1534 la Pragmática de los Reyes Católicos de 1499, de expulsión a los que vagasen en sin oficio conocido, y se confirma por Ley de D. Carlos y D^a Juana en Toledo (1539) y por Felipe II en 1560. En esta última disposición se determinan las penas a los que no tuviesen asiento fijo: a los comprendidos entre veinte y cincuenta años de edad, se les enviará a galeras para que sirviesen al remo durante seis años, quedando después libres y pudiendo ir a sus tierras. Los que estuviesen fuera de dichas edades, y los egipcianos (se les llamaba así por suponerseles procedentes de Egipto), seguirían sometidos a lo dispuesto en la Pragmática de Medina del Campo, o sea, a la pena de azotes (Novísima, XII, XVI, II).

Una Ley de Felipe II en Madrid (1588) señaló que los contratos en que intervengan los egipcianos, de compra-venta, sean celebrados con testimonio de escribano público, si no se entendería que la cosa era producto del hurto, "siendo castigados por ello, como si real y verdaderamente constase haberlo hurtado".

Una Cédula de Felipe III de 1619 (Belén, Portugal), que volvió a permitir el asentamiento, exigió que debía hacerse en pueblos de más de mil vecinos; en otro caso, tienen que salir del reino en el plazo de seis meses, sin poder volver, bajo pena de muerte. También les prohíbe tratar

en compras y ventas de ganados, ni usar traje, nombre ni lengua de egipcianos (Novísima, XII, XVI, IV).

Resulta curiosa la Pragmática de Felipe IV (1633), que insiste sobre el cumplimiento de lo anterior, y dice que muchos de los que se llaman egipcianos "ni lo son por origen ni por naturaleza, sino porque han tomado esta forma de vivir" (Novísima, XII, XVI, V).

Carlos II reitera el cumplimiento de lo recogido en Pragmática de 1692 (Novísima XII, XVI, VI) y promulga otra en 1695 en la que señala condiciones muy detalladas para los que se quedasen en el reino, lo que se reitera por otra de Felipe V (1717) y por Cédula de 1726 (Novísima, XII, XVI, VII).

Bajo Carlos III, se intenta sujetarlos a la vida civil.

Según Tomás Ortiz de la Torre (70), aunque nacidos en España, y no siendo, por tanto, extranjeros, no eran considerados enteramente como nacionales, y se pregunta si no late en esta norma un reconocimiento para el nombre de estatuto personal, según su uso (o su ley) en una nación extranjera.

(70) Obra citada, págs. 36 y 37.

En el siglo XVIII se producen varias disposiciones, para el cumplimiento de las dictadas anteriormente:

La Cédula del Consejo de 18 de agosto de 1705, confirmada el 10 de setiembre de 1708, permite *"a las personas que saliesen en su seguimiento poderles tirar como a enemigos y perturbadores de la pública paz y sosiego de nuestros Reynos y vasallos* (Novísima, XII, XVI, VIII).

Carlos III dicta la Pragmática-Sanción de 19 de setiembre de 1783 "para contener y castigar la vagancia y otros excesos de los llamados gitanos (Novísima, XII, XVI, XI), sumamente favorable, pues parte de que "no provienen de raíz infecta alguna", les manda que no usen de la lengua, traje y método de vida vagante, prohíbe a todos los vasallos que los llamen con las voces de gitanos o castellanos nuevos, bajo las penas de los que injurían a otros de palabra o por escrito, debiendo borrarse estas voces injuriosas y falsas de los documentos en que se hubieren puesto; los que abandonen *"aquel método de vida, trage, lengua o garigonza, sean admitidos a qualesquiera oficios o destinos, y a los que se lo contradijesen, se les multará la primera vez con diez ducados, la segunda con veinte, la tercera con el doble"*.

Concede el término de noventa días para que los "vagabundos" de

esta raza y de cualquier clase (71) se retiren a los pueblos de los domicilios que eligiesen, excepto por ahora la Corte y Sitios Reales, y abandonando el traje, lengua y modales de los llamados gitanos, se apliquen a oficio, ejercicio u ocupación honesta, sin distinción de la labranza y artes. Puesto que no han de emplearse sólo en ser esquiladores, ni en el tráfico de mercados y ferias, o posaderos o venta en sitios despoblados.

Pasados noventa días desde la publicación de esta Ley, en cada cabeza de partido procederán las Justicias contra los desobedientes: a los que habiendo dejado el traje, nombre, lengua o "gerigonza", unión y modales de gitanos, hubiesen dedicado domicilio, pero dentro de él no se hubiesen a oficio u otra ocupación, aunque no sea más que la de jornaleros o peones de obras, se les considerará como vagos y se les aplicará la ordenanza correspondiente, sin distinción de los demás vasallos.

A los que cometiesen delitos, habiendo dejado la lengua..., se les castigará y procesará como a los demás reos de iguales crímenes.

A los que continuasen vagando por caminos y despoblados, aunque

(71) Según Pérez de Herrera, citado por J. A. Escudero (obra citada, pág. 697), había 150.000 personas dedicadas a la mendicidad real o encubierta, o lindantes con la criminalidad.

sea con el pretexto de pasar a mercados y ferias, se les perseguirá y prenderá por las Justicias, formando proceso y listas de ellos, que se pasarán a los Corregidores, y éstos daran cuenta de su dictamen a la Sala del Crimen del territorio, la que, una vez verificada la contravención, mandará inmediatamente, sin figura de juicio, sellar las espaldas a los contraventores con un pequeño hierro ardiente, que se tendrá dispuesto en la cabeza del partido, con las armas de Castilla.

Con la pena del sello queda conmutada, por ahora y por la primera contravención, la de muerte que se le habrá consultado al rey, y la de cortar las orejas "a esta clase de gentes", que contenían las leyes del reino.

Quedan exceptuados los menores de diez y seis años, los que - aunque sean hijos de familia- serán apartados de la compañía de sus padres que fuesen vagos y sin oficio, y se les destinará a aprender alguno, o se les colocará en hospicios o casas de enseñanza.

Réstanos hablar de las peticiones de las Cortes y de algunas disposiciones reales desfavorables a los extranjeros, de los siglos XV, XVI y XVII.

Ya hicimos referencia al recelo del pueblo ante el beneficioso trato de que gozaban los extraños en la Península en la época de la dinastía

Austriaca; se suceden las peticiones de los Procuradores en las Cortes de 1520, 1525, 1528, 1551, 1559, 1607, 1608, 1610, con el fin de reducir los derechos de aquéllos, aunque sin obtener resultados de importancia. Nuevamente, en 1617 se pide que no se les den regimientos, y en 1631 que se les prohíba comerciar y disfrutar pensiones.

Además de estos proyectos que no llegaron a ser aprobados, hay disposiciones de los últimos Reyes Trastamaras, recogidas en las Ordenanzas de Montalvo y luego en la Nueva y Novísima Recopilaciones, referentes a que no se les den beneficios eclesiásticos a los extranjeros. Si bien dichas leyes tienen carácter restrictivo, no se puede decir que priven de derechos civiles a los no nacionales, por lo que su aplicación no supone una grave mutilación de la protección jurídica de que gozaron.

Citemos, por último, algunas órdenes reales, que menciona Ballesteros (72): en 1640 se les prohíbe que tengan carnicerías, pescaderías y panaderías; ya en 1552 se les había impedido ser corredores de cambios y mercaderías; adquirir embarcaciones españolas (1523 y 1548); ejercer el comercio al por menor (1523), cargar en naves extranjeras (1580) y arrendar los impuestos. Pero para juzgar de la eficacia de estas disposiciones baste decir que no las encontramos

(72) A. Ballesteros y Beretta, *"Historia de España y su influencia en la Historia Universal"*, 9 tomos, Salvat, Barcelona, 1918-1936, tomo IV, 2ª parte, pág. 632.

recogidas en las Recopilaciones y que fueron contradichas por otras de Felipe IV y Carlos II, e incluso de Felipe II.

Bajo los Borbones siguieron recibiendo el mismo trato benévolo; prueba de ello es que Felipe V concede en 1713 la naturaleza a los que asienten como mercaderes. El cardenal Alberoni les exime del pago de los consumos. El famoso aventurero barón (luego duque) de Ripperdá protegió a los que establecieron fábricas de hilados, paños y papel. El marqués de la Ensenada dio facilidades para la inmigración de obreros irlandeses. Con el Pacto de Familia vinieron muchos franceses que se beneficiaban del convenio recíproco de reconocimiento de los servicios prestados a uno u otro país.

Ballesteros cita el caso de un curtidor extranjero, establecido en Sevilla, que podía escoger los mejores cueros de Buenos Aires, cortar árboles en los bosques reales y proveer en exclusiva de botas y cinturones al Arma de Caballería; con razón decía el ilustre prócer duque de Villahermosa en su Diario que "era preciso abrir los ojos sobre los servicios de los extranjeros"; tanto era el predicamento y considerado que habían alcanzado los mismos.

4. Tratados internacionales

Después de las guerras se suele restaurar el estatuto normal del extranjero: así, en 1598, después de la Paz entre España y Francia; en 1648, después de la Paz de Westfalia. En el Tratado de Utrech se conviene que, si llegase a producirse un estado de guerra entre Inglaterra y España, no podían ser confiscados los bienes de los súbditos de uno en el otro; se le otorga a los ingleses los mismos privilegios que a los franceses, y se declaran abiertas las vías de justicia ordinaria en ambos reinos, a los respectivos súbditos. Igual ocurre con Portugal.

Han sido objeto de estudio aspectos muy importantes dentro del ámbito de la extranjería, como "Los principios de igualdad y reciprocidad en el Derecho español", por José Luis Iriarte Angel, en tesis doctoral presentada en la Universidad Autónoma de Madrid (año 1983) (73), a cuyas conclusiones nos remitimos, pero no sin recoger que sienta que se puede resumir que el principio de igualdad respecto del goce de derechos civiles por parte de extranjeros ha aparecido vinculado a sistemas políticos y corrientes ideológicas de corte liberal, sobre la base de la igualdad natural entre todos los hombres, si se ha de facilitar la libertad de comercio y emigración.

(73) Publicada luego en "Estudios de Deusto", Volumen XXXIII, enero-junio 1985, pág. 39 y sis.

Mientras que, por el contrario, el principio de reciprocidad ha aparecido históricamente ligado a sistemas conservadores o autoritarios, los cuales lo han propugnado al entender que la igualdad es contraria a los intereses de un Estado fuerte, ya que es un motivo de debilidad, provoca la indefensión de los emigrantes propios, aumenta la inseguridad en caso de contienda, y no es un principio de general aceptación como suscribieron sus defensores.

Del estudio de los antecedentes históricos del Derecho español de extranjería llega a la conclusión de que siempre ha existido en España una importante preocupación por parte del poder político de favorecer el asentamiento de extranjeros en nuestro territorio, como medio de estimular la atracción de capitales, tecnologías de más allá de nuestras fronteras y -lógicamente- esto implicó una actitud positiva hacia los extranjeros, que se materializó en el Derecho positivo, y provocó en gran medida que la Economía española dependiese de los mismos, para presentarse históricamente, en épocas ya muy recientes, el principio de igualdad frente al de reciprocidad.

A su vez, también es de destacar la tesis doctoral de José Antonio Tomás Ortiz de la Torre sobre "El régimen jurídico de la extranjería en la España del siglo XVIII y la participación del extranjero en la industria nacional", presentada en la Universidad Complutense de Madrid (1972), que va precedida de una introducción histórica, si bien se extiende de

manera considerable, como es natural, en el estudio propio del período a que se refiere la tesis. A ella nos hemos referido varias veces con anterioridad.

Llega a dos conclusiones generales; una de carácter negativo, respecto de nuestra situación interna en el siglo XVIII, y es la de que la industria española funcionó en su mayor parte gracias a la presencia del elemento personal extranjero; y la otra, de carácter positivo, según la cual puede sostenerse que el extranjero, tanto a través de normas generales internas o particulares y locales, como de reglas convencionales, recibe un trato que en modo alguno es inferior al establecido por el Derecho de gentes de la época, más bien podría decirse que lo supera, colocándose entre los Estados más acogedores.

Descendiendo a detalles de las conclusiones particulares, entre las derivadas de la reglamentación puramente interna merecen recogerse las relativas a los intentos de revocación de cartas de naturaleza a los extranjeros para impedirles la obtención de prelacías y beneficios, la obligación del registro de ganados que introdujesen los extranjeros en el reino, la protección de la propiedad del territorio nacional, oponiéndose a su adquisición por los extranjeros, e igualmente a que se sacase moneda del reino, a que adquiriesen navíos, a tener acceso a negocios públicos; a prohibir los puestos de embajadores, al comercio con las Indias, si bien con las atenuaciones conocidas; a la existencia de un

grupo de semi-extranjeros, como eran los egipcianos, sometidos a un régimen especial, al mantenimiento de la clásica protección total de romeros y peregrinos, a la sumisión del delincuente a los principios de extradición y de competencia del lugar donde se haya cometido el delito, a la posibilidad de acudir a los Tribunales, a la prohibición de represalias contra extranjeros por el concepto de deudas, a la gran importancia de la figura del Juez conservador, a la apertura de fronteras a operarios extranjeros, con la condición de que fuesen católicos, e incluso en algunos casos aunque no lo fuesen; a materias muy importantes como las relacionadas con la repoblación, especialmente en la zona de Andalucía, al derecho de establecimiento, si bien hasta fines del Siglo XVIII, no se establece una clara distinción entre extranjeros transeúntes y domiciliados, con obligación de la matrícula de los transeúntes.

Desde otro punto de vista, se refiere este autor a conclusiones que derivan de las reglamentaciones convencionales como consecuencia de la implantación en los Tratados internacionales de la llamada cláusula de "nación más favorecida", en la que se recogen preceptos relativos a entrada, residencia y comercio por tierra y por mar, derecho de propiedad de toda clase de bienes, igualdad en el pago de derechos y cargas, servicio de Procuradores y Abogados, secreto de libros de comercio y correspondencia, salvo el caso de prueba judicial, supresión total del derecho de aubana, no superación de los Impuestos sucesorios sobre los establecidos para los naturales, protección religiosa de

determinados grupos mientras no produjesen escándalos o cometiesen ofensas públicas, exención en algunos casos del servicio militar, exenciones e inmunidades a los Cónsules y jurisdicción de los mismos para conocer de causas entre mercaderes y capitanes de navíos extranjeros, y en los supuestos de hostilidades con su país el reconocimiento del derecho de venta de sus bienes y de salida del reino en un plazo que va desde un año y un día, hasta los dieciocho meses.

Existen también Tratados con potencias no europeas, principalmente los Estados norte-africanos, que se refieren a impuestos sucesorios, retirada en caso de guerra (reducido entre tres y seis meses), libertad de comercio, no concesión de la jurisdicción de Cónsules en el territorio español, con tendencia a obtener la protección del Estado nacional español en los territorios africanos más que a la concesión de derechos a estos extranjeros.

Por último, se impone una alusión a los denominados Convenios de hospitalidad, toda vez que en la Edad Moderna el Ayuntamiento de Santander concede beneficios a unos comerciantes ingleses, que vinieron a vivir allí, dejando Bilbao.

5. Derecho nobiliario. Hospitales y Colegios

En materia de títulos nobiliarios, la Ley I, Título XII del Libro VI de la Novísima Recopilación dice: "D. Felipe IV en Pragmática de 7 de agosto de 1636, Don Felipe III en la de 2 de julio de 1600, 5 de enero y 12 de abril de 1611....*Permitimos que se pueda llamar Señoría a los príncipes, duques, marqueses y condes extranjeros...*". Julio de Atienza (74) señala ciento veintinueve títulos extranjeros a los que se les concedió Grandeza de España y doscientos veinte títulos extranjeros de uso autorizado en España. Aparte de éstos, se han de tener en cuenta los concedidos a extranjeros por servicios a la nación española, como el ducado de Ciudad Rodrigo que lo fue por Real Despacho de 5 de febrero de 1812 al capitán general Sir Arturo Wellesley, entonces vizconde y luego duque de Wellington.

El Real Decreto de 24 de octubre de 1851 dispuso que los títulos extranjeros no atribúan los derechos y prerrogativas concedidos a los de Castilla y podrían usarse sin autorización, considerándose como títulos extranjeros hasta los concedidos por Carlos III siendo rey de Nápoles. Por el contrario, el artículo 17 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912 ordenó que los ciudadanos españoles que obtuviesen una merced nobiliaria de la Santa Sede o de un Gobierno extranjero deberían

(74) "Diccionario Nobiliario Español", Editorial Aguilar, Madrid, 1959.



solicitar para su uso en España la Real autorización.

En cuanto las pruebas de hidalguía de extranjeros "estantes en estos reynos", con la trascendencia fiscal que la misma suponía, la Novísima (XI, XXVII, XVIII) recoge la norma de la Reina de Bohemia, en nombre de Carlos I, en Valladolid (1551) de que, en esta materia se guarde el orden y forma que mandan las leyes y pragmáticas de nuestros reynos, y que se den requisitorias para hacer las pruebas en los de Navarra, Aragón, Valencia, Cataluña y Portugal, cuando los testigos se encuentren impedidos, pero que fuera de dichos reynos no se tramiten requisitorias.

Como dato interesante que prueba las facilidades dadas a los extranjeros para su establecimiento, es la creación de una serie de Hospitales o Iglesias destinadas especialmente a aquéllos: así, el Hospital de San Pedro Apóstol, de los Italianos, en Madrid, en la que intervino Felipe II (en 1580), el de San Antonio de los Alemanes (antes de los Portugueses) con participación de D^a Mariana de Austria; el de San Andrés Apóstol, o de los Flamencos, establecido en 1606; el Colegio de San Jorge o Seminario de los Ingleses, fundado en 1611; el Hospital de San Luis, Rey de Francia, a cuya fundación ayudó la reina D^a Isabel de Borbón, que data de 1615.

6. El Gobierno de España ante la Revolución Francesa

Parece oportuno hacer una referencia a las medidas tomadas en España para aislarse de los peligros que entrañaba para el régimen la expansión de la Revolución Francesa. Seguimos en esto al profesor Gonzalo Anes (75).

En un primer momento, las ideas de los revolucionarios no originan en España una reacción oficial contraria, de modo que se pueden recibir libros y atraer del extranjero a obreros, ingenieros y profesores utilizables; también pueden viajar por Europa los españoles "avanzados". En el primer aspecto, la "Enciclopedia Méthodique" circula con autorización hasta 1788 y fue grande la difusión de la obra de Voltaire, quizás porque las relaciones de la Corona y la Inquisición no eran buenas, pero en 1789, visto el cariz que tomaban los acontecimientos en el país vecino, las dos instituciones se ponen de acuerdo, y se dictan una serie de medidas restrictivas, como son una Real Orden de 18 de septiembre de 1789, que prohibió la entrada en España de estampas relacionadas con los acontecimientos de Francia, y otra de 1 de octubre del mismo año, que dispuso la detención en las Aduanas de las cajas, abanicos y telas alusivos a dichos acontecimientos. Antes (ya en 1787) se habían prohibido la importación de determinados impresos.

(75) *"Economía e Ilustración en la España del Siglo XVIII"*. Editorial Ariel, Barcelona, pág. 141 y sts.

Los revolucionarios reaccionaron con astucia que hoy nos puede parecer infantil, como puede ser utilizar los forros de los sombreros para introducir los papeles perseguidos, por lo que continúa la lucha entre el poder y los revolucionarios. Así, se dictó la Real Resolución de 24 de febrero y el Auto del Consejo de 12 de abril de 1791, por los que se limitó la publicación de periódicos al "Diario de Madrid", para evitar que se difundieran muchas "especies particulares"; y la Real Orden Comunicada de 25 de mayo de 1791, a los Directores Generales de Rentas, con ocasión de haberse introducido en las Indias relojes de faltriquera y cajas para polvo de tabaco en los que está gravada una mujer vestida de blanco con una bandera en la mano y alrededor la inscripción "Libertad Americana", por lo que se toman medidas prohibitivas; también la Real Cédula de 10 de septiembre de 1791, reiterando las de introducir cualesquiera cartas o papeles sediciosos y contrarios a la fidelidad o a la tranquilidad pública, todo lo cual no impide que, organizados los Clubs revolucionarios, se introduzca la propaganda a más y mejor. Lo que - vistos además la evolución de los acontecimientos franceses- se consolida en 1792 la alianza entre la Corona y la Inquisición, aconsejada por el conde de Fernán-Núñez, fruto de la cual es la Real Resolución comunicada al Consejo de Castilla de 17 de noviembre de 1792, sobre registros de libros y papeles en las Aduanas, en los que intervienen dos revisores, uno Real y otro Comisario de la Inquisición, aparte de medidas contra la entrada de folletos concretos.

En 1793 tiene lugar la ejecución de Luis XVI, con lo que -de modo inevitable- aumenta la agitación, pero el Gobierno trata de seguir ocultando los sucesos de Francia y, además, prohíbe la entrada de 3.000 ejemplares de la Constitución, de los que había algunos en Barcelona, "entre ciertos malos abogados que los leen con afición" (Real Orden de 4 de septiembre de 1793, así como la de 1 de diciembre de 1795, sobre prohibición de la entrada de artículos con alusiones a la Revolución, aunque ya en dicho año se habían reanudado las relaciones comerciales tras la Paz de Basilea, y otra Real Orden de 22 de mayo de 1798 en el mismo sentido).

Como consecuencia de la existencia en España de franceses, especialmente comerciantes, que simpatizaban con las ideas revolucionarias, se dicta la Real Cédula de 20 de julio de 1791, sobre formación de matrículas de extranjeros, que aunque es reproducción de otras anteriores, en esta ocasión persigue controlar las actividades de los franceses en España.

Con motivo de los avatares en la nación vecina, pasan a la nuestra una serie de eclesiásticos que, a pesar de que podían ser vistos como víctimas de la situación, sin embargo, inspiran recelo "...por las libertades del clero galicano, la diferencia de costumbres, máximas y genios que tienen de los españoles", por lo que los fiscales proponen aislarlos, y no siempre encontraron una acogida social favorable.

A pesar de las precauciones tomadas, el Gobierno no puede -como es natural- evitar que se conociesen los hechos que ocurrían al otro lado de los Pirineos, como consecuencia de lo cual circulan papeles anónimos, se fijan pasquines, tienen lugar alborotos provocados por simpatizantes de la Revolución, e incluso hubo algún amago de conspiración en 1795. Esta situación llega también a artesanos y campesinos, aunque los casos conocidos son aislados, lo que supone la difusión de las ideas revolucionarias procedentes de Francia, cuya acogida no se limita a un sector de "ilustrados" pertenecientes a las clases privilegiadas.

Como dice M. Artola (76), por una parte las fórmulas racionalistas del despotismo ilustrado perviven sin evolucionar, y junto a ellas ocupan un lugar en la obscuridad las doctrinas revolucionarias del liberalismo, que han contaminado a grandes capas de la población española. La situación se mantiene durante los veinte años del reinado de Carlos IV, pero el problema surgirá cuando la invasión armada envuelve toda la organización del Estado.

(76) *"Los afrancesados"*, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1953, pág. 25 y 26. Esta postura escondida coincide con la de los llamados jacobinos, demagogos y violentos, a los que se refiere G. Marañón en el prólogo de esta obra, que les atribuye mayor antigüedad que la del tiempo de la Revolución francesa, e incluso dice que la de Aragón en tiempos de Felipe II, fue una "verdadera algarada prejacobina".

IV.- BALANCE DEL PERIODO

El lapso de tiempo que ahora nos ocupa se caracteriza por contener una evolución que va desde partir de la ausencia de una sistemática legal en la materia hasta llegar a tener una bastante desarrollada en la Novísima Recopilación, y por pasar de una situación en la que las prevenciones contra los extranjeros eran abundantes a otra más elástica y realista.

En la Introducción decíamos que la Memoria termina prácticamente al final de la Edad Moderna, y exponíamos allí la justificación de las razones que nos impulsaron a ello, que damos ahora por reproducidas.

No obstante, nos parece conveniente dedicar aquí algunas líneas más hasta el momento en que, con el liberalismo, afloran soluciones más favorables a los extranjeros, para recoger los puntos más importantes del devenir histórico.

Ante todo, no se piense que el problema se resolvió en el siglo XIX en todos los lugares de forma tan general (77). En efecto, al lado

(77) J. C. Fernández Rozas, *"La banca extranjera en España. El acceso al ejercicio de la actividad bancaria por los extranjeros en el Derecho español"*, Oviedo, 1981, pág. 10-11.

de ordenamientos como el español, el italiano y el danés, que conceden una gran extensión al principio de equiparación entre el extranjero y el nacional, en Francia (básicamente en el Código de Napoleón) regía el principio de reciprocidad a base de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, mientras que en Alemania, Austria-Hungría y Suiza establecían la reciprocidad en las medidas legislativas; en Suecia-Noruega, hasta 1864, se prohibió cualquier tipo de actividad comercial realizada por extranjeros, y desde esa fecha fue precisa una autorización gubernamental; en los países sajones, en los que la hostilidad hacia el extranjero era tradicional, se atenúa esa postura en materia mercantil, en contacto con las repúblicas sudamericanas en las que el acogimiento del extranjero fue la regla general.

Volviendo a España, y antes de 1852, conviene detenerse en los siguientes hitos que constituyen los precedentes inmediatos del Real Decreto de Extranjería:

En la Constitución de Cádiz de 1812, se considera (artículo 19) ciudadano, al extranjero que gozando ya de los derechos de español, obtuviese de las Cortes, carta especial de ciudadanía, para lo cual debería estar casado con española y haber traído o fijado en España alguna invención o industria apreciable, o adquirido bienes raíces por los que pague una contribución directa o haberse establecido en un comercio con un capital propio y considerable, a juicio de las mismas Cortes, o

realizar hechos o servicios señalados en bien y defensa de la Nación (artículo 20) (78).

Son, asimismo, ciudadanos, los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en las Españas, que habiendo nacido en los dominios españoles no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo veintiún años cumplidos, se hayan vecindado en un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él una profesión, oficio o industria útil.

Un Decreto de las Cortes, de 28 de setiembre de 1820, concedió asilo seguro a las personas y bienes de los extranjeros.

Por Decreto de 15 de marzo de 1821 se dispone que "...todo extranjero, exceptuando el Cuerpo Diplomático, quede sujeto a la jurisdicción ordinaria..., aboliéndose para siempre el fuero militar de extranjería de que han gozado hasta ahora".

Según el Código de Comercio de 30 de mayo de 1829, los extranjeros que hayan obtenido la nacionalidad o la vecindad en España, por medios legales, podrán ejercer libremente el comercio con los mismos

(78) Sobre el estatuto del comerciante extranjero en el período, véase M^a Luisa Trinidad García, "*La condición jurídica del comerciante extranjero*", "Revista de Derecho Mercantil", núms. 189-190, 1988, págs. 487 a 496.

derechos y obligaciones que los naturales del Reino. Asimismo, los que no hayan obtenido el domicilio legal podrán ejercer el comercio en el territorio español de acuerdo con los tratados internacionales, y en el caso de existir éstos, tendrán los mismos derechos y franquicias de que gocen los comerciantes españoles en los Estados de donde procedan (artículos 18 y 19).

El primer trabajo legislativo en el que se aborda en el siglo XIX la cuestión de la condición del extranjero en España, y en particular su posición ante los Tribunales de Justicia, es el Proyecto de Código Civil de 16 de noviembre de 1836 (79), que presentó al Gobierno la Comisión compuesta por Don José Ayuso y Navarro, Don Eugenio de Tapia y Don Tomás Vizmanos, nombrada el 29 de febrero de 1834 con el fin de continuar la labor iniciada por Don Manuel María Cambronero, a la muerte de éste.

El proyecto es un compromiso entre la tradición jurídica española (a la que sigue y atiende distinguiendo entre dos categorías de extranjeros, y beneficiando, además, a los domiciliados con el principio de asimilación), y las modernas ideas liberales (al consagrar el principio de reciprocidad en el trato, cuyo juego comprende a los transeúntes.

(79) Para un estudio de los antecedentes del actual art. 27 del Código Civil, véase J. F. Lasso Gaité, *"Crónica de la codificación española"*, 4, *"Codificación civil"*, vol. II, Madrid, 1970.

Decía el artículo 32:

"Todo extranjero estará sujeto a las leyes de España con respecto a los bienes inmuebles que posea en territorio español; e igualmente, por contrato hecho o por delito cometido en el mismo territorio; y hallándose dentro de él, podrá ser demandado ante los Tribunales españoles por obligaciones que haya contraído fuera de España, aun cuando el demandante sea extranjero, a no ser que hubiere pacto en contrario. También obligan a todo extranjero las leyes sanitarias y de policía".

En la Constitución del año 1837 se consideran, en el artículo 1º, como españoles, a los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza, o los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la monarquía, mientras que se pierde la condición de español por adquirir naturaleza en países extranjeros y por admitir empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey.

La Constitución del año 1845 estableció, después de reconocer la posibilidad de obtener la nacionalidad española a los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza o ganado vecindad en cualquier pueblo de la monarquía, que una ley determinara los derechos que deberían gozar los extranjeros que obtuviesen carta de naturaleza o hubieren ganado vecindad.

Por Decreto de 19 de agosto de 1848 se autorizó la constitución de una Comisión General de Codificación, con la misión de "elaborar Códigos completos y en consonancia con las instituciones de su tiempo, la cual redactó un proyecto de Ley Constitutiva de los Tribunales", que fue elevado al Gobierno el 12 de junio de 1846. El proyecto fue elaborado sobre la base de las ponencias de Don José de la Peña Aguayo y de Don Manuel García Gallardo, vocales ambos de la Comisión, y con conocimiento del proyecto de Ley inserto en el voto particular de Don Domingo Vila. En él la competencia de los Tribunales en asuntos de extranjeros se establece sobre la base de dos ideas fundamentales: unificación de fueros y abolición del fuero civil militar (artículos 231 y 235), y regulación indirecta de la competencia judicial internacional por vía de equiparación del extranjero al ausente (artículos 217 y 218).

En el proyecto de Código Civil de 1851 se determinó (artículo 26) que "los extranjeros gozarán en España de los mismos derechos civiles que gocen en su país los españoles, salvo lo que dispongan las leyes especiales o los tratados"; es decir, se parte del principio de reciprocidad; que "todo español puede ser demandado en España por las obligaciones contraídas fuera del reino con un extranjero u otro español"; que "el extranjero puede ser demandado ante los Tribunales españoles por las obligaciones contraídas con un español en el reino, o que deben tener en él su ejecución; que "el extranjero puede ser demandado ante los Tribunales españoles por las obligaciones que ha contraído en país

extranjero para con un español" (80).

A aquella disposición constitucional obedece, sin duda, la promulgación del Real Decreto de Extranjería del año 1852, que desarrolla el artículo 1º de la Constitución de 1845.

En el capítulo I se definen los extranjeros y se clasifican en domiciliados o transeúntes.

En el capítulo II se contienen las disposiciones que han de observarse para el ingreso y residencia en España de los extranjeros (exigencia de pasaportes, solicitud de licencia de la autoridad civil superior de la provincia, formación de matrículas...).

El capítulo III se titula "De la condición civil de los extranjeros domiciliados y transeúntes; sus derechos y obligaciones". Examinemos su contenido: *Todos los extranjeros, así avecindados como transeúntes, tendrán derecho a entrar y salir libremente de los puertos y poblaciones de España, y de transitar con igual libertad en su territorio, sujetándose a las reglas establecidas por las leyes para los súbditos españoles, así*

(80) Véase J. L. Iriarte Angel, *"De la reciprocidad a la igualdad en el goce de los derechos civiles por los extranjeros: examen de su evolución histórica en el ordenamiento español (1808-1979)"*, "Estudios de Deusto", vol. XXXIII, 1985, págs. 39 a 76.

como a los reglamentos de puertos y de polidá (art. 17).

Podrán adquirir y poseer bienes inmuebles, ejercer industria y tomar parte en todas las empresas que no estén reservadas a los súbditos españoles (art. 18).

Los domiciliados podrán ejercer el comercio por mayor y menor y disfrutar de los aprovechamientos comunes del pueblo (art. 19).

Los transeúntes podrán ejercer el comercio por mayor (art. 20).

Están obligados al pago de contribuciones e impuestos que les correspondan por bienes raíces de su propiedad y por el ejercicio del comercio e industria (art. 21).

Los domiciliados deberán pagar los préstamos, donativos, y contribuciones ordinarias, de que estarán exceptuados los transeúntes, así como los impuestos municipales, vecinales y provinciales (art. 22).

Los domiciliados y transeúntes y sus hijos estarán exentos del servicio militar. No alcanzará esta excepción a los nietos, cuando sus padres hayan nacido ya en territorio nacional, aunque conserven la nacionalidad extranjera (art. 24).

Ningún extranjero podrá profesar en España otra religión que no sea la católica, apostólica y romana (art. 25).

No podrán participar en los derechos políticos ni obtener beneficios eclesiásticos, ni pescar en las costas de España ni hacer con sus buques el comercio de cabotaje (art. 26).

No podrán ejercer los derechos municipales en las elecciones para Ayuntamientos, ni obtener cargos municipales ni empleo en las carreras del Estado, si no renuncian expresamente, por sí y por sus hijos, la exención del servicio militar y a toda protección extraña en el servicio de sus cargos (art. 27).

En los abintestatos de los extranjeros la autoridad local formará el inventario de acuerdo con el Cónsul de la nación del finado (art. 28).

Están sometidos a las leyes y Tribunales españoles por los delitos cometidos en nuestro territorio y por el incumplimiento de las obligaciones que contraigan a favor de súbditos españoles en España o fuera de España (art. 29).

Conocerán en primera instancia de los pleitos y causas contra los extranjeros los gobernadores de las plazas marítimas y los capitanes generales en los demás puntos, y en la segunda y demás instancias el

Tribunal Supremo de Guerra y Marina (art. 30).

Quedan exceptuados los casos de contrabando, asuntos mercantiles, sedición, tráfico de negros, etc. (art. 31).

Y en el artículo 32 se les reconoce el derecho a que se les administre Justicia.

El Capítulo IV se ocupa de los buques extranjeros. Los buques pertenecientes a cualquiera de las potencias extranjeras podrán acogerse a los puertos españoles. Cuando lleguen por arribada forzosa serán auxiliados por las autoridades españolas sin más restricciones que las precisas para evitar el fraude o el contagio (art. 36).

Los buques mercantes extranjeros no podrán servir de asilo a los criminales españoles, reclamándose la extradición por la vía diplomática (art. 37).

Las autoridades de Marina proveerán en los casos de naufragio a lo necesario para el salvamento de las personas y de la carga, procediendo de acuerdo con el Capitán del buque y el Cónsul (art. 40).

CONCLUSIONES

Al término de este estudio es forzoso formular unas conclusiones y, como tales, presentamos las siguientes:

PRIMERA.- El estudio comprende prácticamente toda la historia del tratamiento de la extranjería en lo que hoy es España a lo largo de los siglos, desde los primeros tiempos hasta el Real Decreto de extranjería de 1852, con el objeto de tratar de llenar un vacío doctrinal existente a nuestro juicio, puesto que, aunque hay obras meritorias que abordan aspectos determinados de la cuestión, o en períodos concretos, sin embargo ninguna comprende toda -y concretamente referida al tema- la Historia de España.

SEGUNDA.- La división de los períodos se hace de acuerdo con una fórmula convencional, de Antigüedad (incluyendo la Epoca Visigótica), Reconquista y Edad Moderna, con unas referencias hasta llegar al Real Decreto de Extranjería de 1852, dado que sobre la materia posterior se han realizado ya numerosos estudios.

TERCERA.- En la Epoca Antigua, cuyos orígenes se pierden en los límites de los tiempos, ante la escasez de fuentes es preciso pensar que las normas que se observaban en el tratamiento de los extranjeros, serían "similibus paribus" a las de otros grupos sociales análogos de los que tenemos más conocimientos, y que, de alguna manera, y sin pretender hacerlo con carácter exhaustivo, hemos recogido.

CUARTA.- Las formas de contacto en aquella época entre indígenas y foráneos fueron, ante todo, el comercio, basado en el intercambio de cosas mediante trueque, para pasar, con la aparición del dinero, a la forma de la compraventa, y, después, a otras relaciones concretas como la explotación de las minas, abundantes en nuestro territorio, lo cual daría lugar a relaciones más o menos permanentes entre los nativos y los extranjeros.

QUINTA.- Más tarde aparecen los pueblos conquistadores que toman por la fuerza aquellos bienes que les interesan, especialmente los yacimientos para obtención de los diversos minerales como el oro, la plata, el plomo, el estaño, etc., y prototipo de los mismos son los romanos, los cuales respetaron el personalismo de los pueblos indígenas, en el sentido de que cada uno de ellos, es decir, hispanos por un lado y romanos por otro, se regían por sus normas privativas; pero para regular las relaciones entre los miembros de ambos pueblos fue preciso que se fuese creando -al igual que en otros lugares del Imperio Romano- un "ius gentium", Derecho elaborado por los pretores, que fue estableciendo una serie de instituciones que favorecen estas relaciones, basadas fundamentalmente en la equidad, y que alcanzan un gran progreso, de forma que se expanden por todo el mundo romano, y llegan a integrarse en el Derecho de los invasores, hasta que se atenúan sobremanera las diferencias por la concesión de la latinidad y de la ciudadanía romana, sucesivamente, a todos los que estaban dentro de las fronteras del Imperio Romano.

Fruto de todo esto es una progresiva romanización de los pueblos indígenas, a lo largo de la evolución de un fenómeno, que podríamos considerar inverso y paradójico en su inicio, en virtud del cual los naturales se convierten en extranjeros para los romanos, y al revés, para acabar los últimos implantando a todos sus normas.

SEXTA.- En las últimas fases de este período ya aparece el enorme papel preponderante de la Iglesia, que afecta a los esquemas políticos y que, de alguna manera, ha de hacerlo también al régimen de la extranjería, a lo largo de toda la Historia.

SEPTIMA.- En la Epoca visigótica nos encontramos con una gran población hispano-romana y una pequeña -aunque dominante-visigótica, que incluso va eliminando a otros pueblos bárbaros como los suevos, mientras se marchan los vándalos y los alanos, son vencidos los bizantinos, y se construye la unidad nacional, también sobre la base de la unidad religiosa, debiendo tenerse presente la gran importancia de los Concilios de Toledo, que intervienen de forma activa no sólo en la inspiración, sino también en la misma redacción de la legislación.

En este aspecto son de mencionar en esta época, dos disposiciones de enorme trascendencia; una, la que manda a los jueces que protejan con igual interés al hombre extraño que al propio súbdito, y otra que permite los matrimonios entre godos e hispano-romanos, todo lo cual supone la equiparación de los que ahora pasan a ser nacionales (los

segundos), con los inicialmente extranjeros (los invasores).

Por otra parte, aparece la norma referente a que los mercaderes de tierras extrañas se regulen, en cuanto a sus contiendas entre sí, por sus propias leyes, las que serían aplicadas por sus propios jueces.

A nuestra manera de ver, esta disposición, que se ha venido presentando como un ejemplo avanzado de reconocimiento de la extranjería, nos ofrece dudas acerca del altruismo de tal interpretación, por pensar que, más bien, era una forma de inhibirse los poderes públicos respecto de cuestiones que, en el fondo, no afectaban a su soberanía.

OCTAVA.- En esta época también aparece, con carácter muy acusado, la especial situación de los judíos, los que, si bien en un principio podían ser considerados como apátridas, no se puede negar que sean súbditos; por otra parte, dada su especial condición, son objeto de regulación constante en la atención y variable en el tratamiento, sobre todo en las últimas épocas del período, por las sospechas que plantean a causa de la religión que observaban, o habían observado, y de la raza a la que pertenecían. Su falta de vinculación a los sentimientos de los demás súbditos es evidente en todo momento, por lo que nunca se sienten solidariamente nacionales.

NOVENA.- Materia importante es la referente a si prevalecía el

principio personalista o el territorialista, en la aplicación de las leyes. Se parte de la idea, casi tópica y unánime, de que entre los pueblos bárbaros regía el sistema personalista, para convertirse la cuestión en objeto de discusión entre los autores, al referirse a nuestro país, pero habida cuenta de la idea de los visigodos de presentarse en algunos casos como herederos del Imperio Romano y sucesores de su religión oficial, puede llegarse a la conclusión de que se evoluciona de la aplicación de un principio personal a un principio territorial, es decir, que una misma Ley (el "Liber Iudiciorum") se promulga para ser aplicado a todos los pueblos, que prácticamente están fusionados al final de esta época.

DECIMA.- En cuanto a la Reconquista, este largo período arranca con la batalla del Guadalete, y termina con la conquista de Granada. Es innegable que, aunque ya existían causas de descomposición de la monarquía visigótica en sus últimas épocas y que, por el contrario, muchas facetas del régimen godo se mantienen en los primeros momentos de la invasión árabe, la derrota de la Laguna de La Janda supone un hito importantísimo, desde el momento en el que acaba con un régimen político, divide a España en dos, la de los vencedores y los vencidos, y provoca unas consecuencias en todos los ámbitos: en el económico, en el religioso y en el jurídico, que es el que nos ocupa.

En este punto, es preciso tener en cuenta que existe una continuidad de la idea visigótica, si bien la misma no se presenta hasta finales del siglo VIII con el Rey Alfonso II el Casto, ya que

anteriormente de lo que se trataba era de sobrevivir frente a los musulmanes, más que de teorizar o de filosofar acerca del régimen político; y con el matiz que se pone de relieve en la conclusión duodécima.

El "Liber Iudiciorum" es aplicado, pero solamente de forma parcial en el espacio, es decir, en el Reino de León, y en Cataluña, pero no en el resto de los territorios que se van reconquistando, y es objeto de numerosas alteraciones en la práctica.

UNDECIMA.- Aparece entonces como forma del Derecho, una muy importante que son los fueros o cartas pueblas, que en unos casos son donaciones o simples contratos en los que los reyes o señores feudales dan terrenos a determinadas personas (para que repueblen los recién conquistados), o a sus concretos sucesores; o en otros casos, los dan a cualesquiera otros habitantes.

Se da entonces con toda su crudeza, la distinción entre el "extranjero al reino" y el "extranjero a la ciudad", y se desarrolla tanto este concepto que, es más, se puede afirmar que el primero (el del "extranjero al reino") prácticamente desaparece o no existe en la práctica, y es sustituido por el segundo, de manera que cabe decir que existen diversas categorías de personas: una, la de los pobladores, que son aquellos que van a repoblar los terrenos recién conquistados, y a los que se les conceden toda clase de beneficios, incluso con olvido de delitos

que hubiesen podido cometer antes; otra, la de los hombres "extraños". Por otra parte, estos pobladores, una vez convertidos en residentes, se ocupan de asegurar sus beneficios frente a las personas que con posterioridad llegan al lugar en cuestión, vistos con suspicacia, y que son minusvalorados frente a los pobladores.

A su vez, y después de recoger este contraste, por otra parte muy natural dentro de un egoísmo propio de una sociedad tan elemental, existen diferencias entre los moradores de los villas o burgos, por pequeños que fuesen, y los aldeanos o integrantes de los alfores, todos los cuales también son objeto de minuciosas regulaciones, que no podemos recoger en el capítulo de las conclusiones, pero que son detalladas en los diversos textos que hemos transcrito, resumidas en la medida de lo posible y tratadas de interpretar en el capítulo correspondiente.

DUODECIMA.- Prácticamente no aparecen los "hombres de España" como personas que, efectivamente, pertenezcan a una nación, continuadora o no, de la idea gótica, puesto que, mientras que algunos reyes se titulaban "Imperatores Totius Hispaniae" u otras fórmulas semejantes, a los moradores de los diversos lugares no se les aplicaba la calificación de "hombres de España", ya que, si bien los primeros (en determinados casos, y en virtud de su pretendido Imperio), trataban de tener una supremacía sobre todo el territorio hispano, o sobre los demás reyes o señores feudales, en cambio la vinculación del hombre al

territorio era prácticamente sólo al del sitio donde moraba o desarrollaba su vida, y no existía proclamada una abierta posibilidad de ejercicio de sus derechos en el resto del reino.

DECIMOTERCERA.- A lo largo de este período van apareciendo sucesivas regulaciones sobre viajeros, romeros, peregrinos y mercaderes, sobre las sucesiones, con eliminación del derecho de aubana, protección en los casos de naufragio, establecimiento de convenios de hospitalidad, y otras situaciones concretas, como son (aparte de la aparición de la extradición), la facultad de pedir justicia y acusar, preceptos todos de tendencia favorable; mientras que hubo algunas prevenciones contra los extranjeros en cuanto la posibilidad de que adquirieran ciudades, ejercieran cargos públicos u obtuviesen beneficios públicos o eclesiásticos, pues es ésta materia que llega a ser verdaderamente preocupante para las Cortes, en sus cuadernos, y para los reyes que sancionan sus peticiones.

Al lado de éstas, aparecen situaciones especiales como son las de los judíos, los moros, los francos y los egipcianos, y determinadas normas penales.

DECIMOCUARTA.- La Edad Moderna arranca con los Reyes Católicos, bien se considere a su reinado como fin de la época anterior, o como principio de la que nos ocupa en este momento. Sin embargo, los reinos son totalmente reacios a su unificación efectiva, y la unión es

puramente personal (piénsese en el fracaso de la política del Conde-duque de Olivares), de manera que los naturales de uno son extranjeros en el otro, y es preciso que se produzca el traumatismo de la Guerra de Sucesión para que Felipe V, a través de los sucesivos Decretos de Nueva Planta, vaya concediendo la posibilidad de que los miembros de unos reinos ejerzan oficios, o sean considerados como naturales de los otros.

DECIMOQUINTA.- Por otra parte, sí aparecen, aunque de forma tardía, una serie de normas que regulan con detalle aspectos de la extranjería, en el siglo XVII y, sobre todo en el siglo XVIII con Felipe V y Carlos III, que se ocupan especialmente de lo referente a los comerciantes, a los extranjeros de paso y afincados, a la posibilidad de ejercer oficios, a la necesidad de que profesasen la religión católica los extranjeros aceptados, con excepciones muy contadas; al comercio con las Indias, admitiéndose incluso en algunos casos los no católicos; a las matrículas de los extranjeros, a la institución de los llamados Jueces Conservadores de extranjeros para regular sus problemas entre ellos, con una evolución de los mismos a la jurisdicción de los Tribunales de Guerra, y su agregación a los de Comercio.

Dentro del aspecto económico, las radicales limitaciones para el comercio con las Indias poco a poco se van rompiendo a través del Tratado de Utrech, que permite el comercio de negros y el envío de un barco anual para realizar el comercio; además aparecen figuras tan importantes como son la repoblación interior, especialmente en

Andalucía, con el asentamiento de colonos extranjeros, en la que cifraron grandes esperanzas los ilustrados, en orden a la posibilidad de poner tierras en producción, o de creación de fábricas para el "fomento de la industria popular".

Este aspecto ha sido objeto de los estudios que se citan (del Profesor Tomás Ortiz de la Torre y de José Luis Uriarte) en lo que toca a sus respectivas conclusiones, que se refieren de manera muy especial a lo que, por la vía de los tratados internacionales se fue logrando para el favorecimiento del establecimiento permanente de extranjeros para desarrollar actividades industriales y comerciales de los mismos en España.

Y siguen produciéndose soluciones favorables, como pueden ser los convenios de hospitalidad, las normas sobre el derecho nobiliario, el sucesorio, o el de navegación. En el aspecto negativo o -al menos- de control, las referentes a la remisión de delincuentes, al pago de tributos, la exigencia de pasaportes, la defensa de la moneda, la prohibición de obtener cargos públicos, aunque algunos extranjeros llegaron, sin embargo, a los puestos más importantes de la monarquía.

DECIMOSEXTA.- Capítulo especial merecen las relaciones entre Iglesia y Estado, pues, tanto nos encontramos con la insistencia en recoger las viejas leyes la prohibición a los extranjeros del disfrute de beneficios eclesiásticos, como aparece la figura del derecho de

presentación de los obispos por parte de los reyes.

Aunque éstos aparecían como profundamente católicos, y efectivamente lo eran, no tenían el menor ambage en entrar en guerra o colisión con los papas por cuestiones temporales; piénsese en las luchas de Carlos V con el papado, que dan lugar a situaciones tan violentas como el saco de Roma por el condestable Borbón, la reunión de Juntas de Teólogos que hacen frente a las disposiciones pontificias, e incluso a situaciones como la del "pase regio", que permiten el examen de las Bulas Pontificias, regalía condenada por la Iglesia en la Bula "In coena Domini" con la excomunión, lo que no impidió que fuese, a su vez, interferida por los propios reyes y, en concreto, por un monarca tan católico como fue Felipe II. Es decir, que eran creyentes sí, en cuanto a la fe, pero en lo que se refiere al acatamiento de las disposiciones pontificias en determinadas materias, especialmente las temporales, nuestros reyes hicieron frente a la autoridad de los papas manteniendo su propia independencia hasta extremos regalistas, lo que llega a afectar a la extranjería.

Existen también las disposiciones usuales sobre malteses, moriscos y egipcianos, que completan el cuadro.

DECIMOSEPTIMA.- Tras diversos intentos para favorecer su situación, se llega en 1852 a la igualdad entre extranjeros y nacionales, en el Real Decreto de extranjería de 1852, que excede del objeto de este

estudio.

DECIMOCTAVA.- Como resumen, a su vez, de estas Conclusiones, se puede decir:

a) El trato dado en España a los extranjeros es, en general, tolerante o benévolo con los mismos, sin que -al revés que en otros países- se den figuras como el derecho de aubana.

b) La idea religiosa para el mantenimiento de espíritu de los hispánico frente al exterior, permanece como una constante, desde la monarquía visigótica, pasando por la Reconquista y por la Edad Moderna, inspirada en los principios de la Contrarreforma; y que se reitera con ocasión de la Revolución Francesa.

c) Son muy contadas las excepciones de tolerancia ante extranjeros no católicos, y, en su caso, por causas económicas (agricultura, industria y comercio).

d) Por contra, los reyes se aprovechan de la fuerza que les da un Estado teocrático, para desarrollar su política y afianzar, cada vez más, su poder.

e) En relación con los dos apartados anteriores, no vacilan en enfrentarse al pontificado, cuando estiman cercenada su independencia

de actuación, y adoptan posturas regalistas.

f) Es con el liberalismo cuando, poco a poco, España va entrando dentro de las corrientes de la tolerancia, sustituyendo el régimen de reciprocidad (que había sido precedido por el de pura concesión unilateral), por el de equiparación del extranjero al nacional.

DECIMONOVENA.- Cerrando ahora, en las Conclusiones, el círculo iniciado en el Proemio de este estudio, se puede afirmar que el fenómeno de la extranjería ha existido en todos los tiempos y en todos los lugares, y que permanece vivo en nuestros días.

Distintas han sido las soluciones que en el sucederse de los siglos se le han ido dando a esta cuestión, pero este análisis de la misma a través de la historia de España no persigue presentar una simple pieza arqueológica, de museo, sino mostrar los variados matices que aquélla ha ido planteando a lo largo de los tiempos y a lo ancho de las tierras, es decir, ante lo variable de las situaciones.

Si además de un análisis histórico hubiésemos conseguido poner de relieve los aspectos más palpitantes del tema, nos daríamos por satisfechos, al objeto de alcanzar no sólo una panorámica del pasado, sino de formular facetas y de atisbar soluciones -por analogía, o por rechazo, según los casos- para los problemas de esta materia, en el presente y en el futuro.

RELACION DE MATERIALES UTILIZADOS

A) INDICE CRONOLÓGICO DE DISPOSICIONES TENIDAS A LA VISTA

- 506 "Lex Romana Visigotorum" (Breviario de Alarico).
- 653 Concilio VIII de Toledo. Capítulo II. Juramentos hechos en defensa del pueblo o de la patria.
- 654-681 "Liber Iudiciorum", Título Primero (Preliminar), 19 leyes, aprobadas en el Concilio IV (bajo Sisenando) a X, de Toledo, en el año 681.
- "Liber Iudiciorum", Título Primero (Preliminar, Ley VIII (cuarto Concilio de Toledo). Cuando el rey muere, ningún...hombre extraño debe hacerse rey.
- "Liber Iudiciorum", apartado VII del Título I, del Libro I. El juzgador debe cuidar al hombre extraño.
- "Liber Iudiciorum", I, II, IV. Se debe guardar la ley según la costumbre de la ciudad.
- "Liber Iudiciorum", II, I, I. Entrada en vigor del "Liber Iudiciorum".
- "Liber Iudiciorum", II, I, II. Sometimiento del rey a la ley.
- "Liber Iudiciorum", II, I, III. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
- "Liber Iudiciorum", II, I, VIII. No aplicación de las leyes extrañas ni de las romanas.
- "Liber Iudiciorum", II, I, IX. Que no se presente al juez ningún otro libro de leyes que éste.
- "Liber Iudiciorum", II, I, XI. El juez sólo puede juzgar dentro de su competencia.
- "Liber Iudiciorum", II, I, XII. Respeto a la cosa juzgada.
- "Liber Iudiciorum", III, IV, XVIII. Incluye a los clérigos entre los ministros del príncipe.
- "Liber Iudiciorum", IX, I, X. Situación del siervo que es vendido dos veces en tierra extraña.
- "Liber Iudiciorum", IX, II, IX. Obligación de defender al reino contra los enemigos, incluso de los que hubiesen venido de otra tierra.

"Liber Iudiciorum", XI, III, I. De los negociantes de Ultramar. Protección de la compra hecha a mercader. Leyes III y IV.- Prohibición a los mercaderes de llevar siervos fuera del reino.

"Liber Iudiciorum", XI, III, II. Los mercaderes extranjeros, si tienen algún pleito entre sí, deben responder ante sus jueces y por sus leyes.

"Liber Iudiciorum", XI, II, XVII. Prohibición a los cristianos de hacerse judíos o moros.

"Liber Iudiciorum", XII, I, III, facultad de los obispos para amonestar a los alcaldes que hagan "algún tuerto".

"Liber Iudiciorum", XII, II, III a XVII y XII, III (bis), I a XXVIII. Regulación del régimen de los judíos.

- 824 "Fueros de Brañosera", dados por el Conde Mario Núñez.
- 941 Donación del Monasterio de Javilla por los Condes Fernán González y Doña Sancha y sus hijos, al abad y monjes de Cardena.
- 974, 8 de marzo Fuero breve de Castrojeriz, otorgado por el conde García Fernández, y confirmado por Fernando III en 1234.
- 1020 Concilio XX de León.
- 1025 Carta de franquicias otorgada por Berenguer Ramón I, conde de Barcelona.
- 1045 Donación de las villas de Villafría y Orbaneja al Monasterio de Cardena por Fernando I.
- 1061 Licencia concedida por Ramón Berenguer I, conde de Barcelona, a Guillermo Lobatón.
- 1063 Privilegios del Monasterio de San Martín de Tera, en el Obispado de Astorga.
- Carta de población de Longares, dada por el Obispo de Nájera D. Gómez y el Prior y Monjes del Monasterio de Albelda.
- 1065 Carta de población de S. Anacleto, dada por el obispo de Nájera D. Gómez.
- 1068 Carta de franquicias concedida por Ermengol IV, conde de Urgel, a los habitantes del Valle de Lord.
- 1069, 27 de abril Fueros y privilegios de la iglesia y villa de Alquezar, otorgado por Sancho Ramírez.

1076, 17 de noviembre	Fuero de Sepúlveda, breve, otorgado por Alfonso VI, confirmando los que tenían en tiempos de Sancho el Mayor y los condes Fernán González, García Fernández y Sancho.
1077	Fuero de Jaca, otorgado por el rey D. Sancho Ramírez.
1080-1082	Fuero de Sahagún, dado por Alfonso VI.
1085, 18 de abril	Carta de franquicias otorgada por Lucía, condesa de Pallars, y Ledgardis, abadesa de Santa Cecilia de Elins, a los habitantes de Castellón.
1091, 5 de agosto	Fuero de Villavicencio. Fuero breve otorgado por Diego, abad de Sahagún.
1092, enero	Fuero de Arguedas, concedido por Sancho Ramírez, rey de Navarra y Aragón.
1092	Fuero de Logroño, dado por Alfonso VI.
1099	Fuero de Miranda de Ebro, otorgado por el rey Alfonso VI.
1100, octubre	Privilegio de población de Barbastro, dado por Pedro I de Aragón.
1102	Fueros de Caparrosso, dados por el rey Pedro Sánchez de Navarra.
1102-1105	Fuero de Santacara, otorgado por el rey Pedro Sánchez de Navarra.
1103, 19 de marzo	Fueros y privilegios de la ciudad de Burgos, concedidos por Alfonso VI.
1104	Fuero de Palenzuela. Fuero breve otorgado por Alfonso VI a los varones de la villa, confirmando los que tenían en los días del conde don Sancho. Es reproducido en una confirmación de Alfonso X que recoge asimismo las sucesivas confirmaciones de doña Urraca, Alfonso VII, Sancho III, Alfonso VIII y Fernando III.
1119, 12 de diciembre	Carta de población de Belchite, otorgada por Alfonso I el Batallador. Carta de franquicias concedida por Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, a los hombres de Tárrega.
1122, febrero	Fuero de Sangüesa, otorgado por Alfonso I el Batallador.
1126, 18 de junio	Fuero concedido por Alfonso VII a los pobladores del barrio de San Martín, de Madrid.
1127, 18 de agosto	Fueros de Tudela, dados por Alfonso I el Batallador.

- 1127? Fuero de Marañón. Fuero breve otorgado por Alfonso I de Aragón, con acuerdo de los tenentes Pedro Tizón y Pedro Momeiz.
- 1127, febrero Fuero del burgo nuevo de Alquezar.
- 1129, enero Fuero de Encisa, otorgado por Alfonso I el Batallador.
- 1129 Fuero de Carcastillo. Fuero otorgado por Alfonso I de Aragón.
- 1130, 4 de enero Fuero de Escalona, dado por Diego y Domingo Alvarez, en virtud de orden de Alfonso VII.
- 1131, 26 de diciembre Fuero de Calatayud, dado por Alfonso I el Batallador.
- 1133, septiembre Fuero de Caseda, concedido por Alfonso I el Batallador.
- 1135, 3 de mayo Fuero de Lara. Otorgado por Alfonso VII.
- 1139 Fuero de Colmenar de Oreja, otorgado por Alfonso VII.
- 1140 Fueros dados a Sahagún por D. Diego, abad del Monasterio.
- 1141, 21 de febrero Fuero de Calatalifa, dado por Alfonso VII.
- 1142 Carta de población otorgada por Gregorio, abad de Cuizá, con asenso del conde Ramón Berenguer IV.
- 1142, noviembre Fuero de Daroca. Fuero breve, otorgado por Ramón Berenguer IV, ampliado y reelaborado en época posterior.
- 1143, 22 de diciembre Fuero de Roa, concedido por Alfonso VII.
- 1144, 27 de febrero Fuero de Peralta. Otorgado por García Ramírez.
- 1149, 3 de septiembre Carta de franquicias otorgada por Bernardo de Tort, arzobispo de Tarragona y Roberto, príncipe, a los habitantes de Tarragona.
- 1149, 30 de noviembre Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y Príncipe de Aragón a los habitantes de Tortosa.
- 1149,30 de noviembre Tortosa. Carta de población otorgada por Ramón Berenguer IV.
- 1150, enero Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, Príncipe de Aragón, y Ermengol VI, conde de Urgel, a los habitantes de Lérida.
- 1151 Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a los habitantes de Vimbodi.
- 1152, 18 de diciembre Fueros otorgados a los burgueses de Sahagún por el rey Alfonso VII y el abad D. Domingo.

- 1153, 29 de abril Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a los habitantes de Ciurana.
- 1155, enero Fuero de Avilés, fuero breve otorgado por Alfonso VII, confirmando la concesión del fuero de Sahagún por Alfonso VI. Su parte dispositiva coincide casi en su totalidad con el fuero de Oviedo.
- 1155 Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a los habitantes de Cambrils.
- 1155 Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a los habitantes de Duas Aquas y de Vilaverd.
- 1155 Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, y Bernardo de Ort, arzobispo de Tarragona, a los habitantes del lugar de Espinavera, en Tarragona.
- 1157 Carta de población de Ermengol VII, conde de Urgel, y Bernardo de Estopaña y demás señores del lugar, a los habitantes de Abella.
- 1158, 11 de diciembre Carta de franquicias concedida por Iofredo, abad de Ripoll, a los habitantes de Tossa.
- 1158 Carta de población otorgada por Gerberto de Anglesola y otros freires templarios a los habitantes de Avinavita.
- 1158 Donación del lugar del Albiol, por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona.
- 1158 Donación del lugar de Alforja, otorgada por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona.
- 1159 Carta de población de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, a los habitantes de Prades.
- 1159 Carta de población otorgada por Guillermo de Torroja, obispo de Barcelona.
- 1159 Establecimiento de un Manso en territorio de Tarragona, efectuada por su arzobispo Hugo de Cervelló.
- 1160 Donación del lugar de las Gunyolas, en territorio de Olérdola, otorgada por los comendadores templarios Bertrand de Olost y Pedro de Torradella.
- 1161 Establecimiento del molino de Villarrodoná, en el Gayá, otorgado por Guillermo de Torroja, obispo de Barcelona.
- 1163, 13 de noviembre Carta de población de Agramunt, otorgada por los condes de Urgel, Ermengol y Dulcá.

- 1163 Donación de Villanova de Prades, efectuada por Alfonso I y Alberto de Castelvell.
- 1163 Carta de franquicias de Alfonso I, a los habitantes de Barcelona.
- 1163, 13 noviembre Carta de población de Ermengol VII, conde de Urgel, a los habitantes de Agramunt.
- 1164 Carta de población dada por Hugo de Cervelló, arzobispo de Tarragona, a los habitantes de Villa Constantina.
- 1164, abril Fuero de Estella. Confirmación por Sancho IV del fuero que se dice concedido por Sancho Ramírez. En su primera parte coincide con el de Jaca en la confirmación de éste por Ramiro II.
- 1166 Donación de un alodio en término del Castillo de Montblanch, por Ramón de Cervera.
- 1168 Donación del lugar yerno de Falsat, efectuada por Alberto de Castelvell.
- 1169, diciembre Fuero de Pontevedra, fuero breve otorgado por Fernando II de León.
- 1170, 11 de enero Carta de población otorgada por Ramón y Bernardo de Gavalgand y Berenguer de Cambriels, a los moradores de Alforja.
- 1171, 20 de noviembre Carta de franquicias concedida por Hugo, vizconde, y Poncio y Ramón de Cervera y Ramón de Torroja, a los habitantes de Esplugas de Francolí.
- 1171 Donación del lugar de Rocabruna, en Tarragona, por su arzobispo Guillermo de Torroja.
- 1173 Donación del lugar de Alforja, por Guillermo de Torroja, arzobispo de Tarragona, a Ramón de Gavalgand.
- 1174, 13 de julio Carta de población de Ermengol a los habitantes de Balaguer.
- 1175, enero Carta de población otorgada por Alfonso I a los habitantes de Vilanova de Prades.
- 1178 Carta de población de Alfonso I a los habitantes de Cambriels.
- 1178, 1 de mayo Fuero de Castrotorafe. Fuero breve otorgado por Pedro Fernández, maestre de Santiago, por mandato de Fernando II.
- 1180 Fuero de Medinaceli. Fuero breve elaborado por el concejo, con el beneplácito de Alfonso VIII.

1180, 12 de septiembre	Carta de población de Alfonso I a los pobladores de Sarreal.
1180?	Fuero de San Sebastián, otorgado por Sancho VI, aunque sin referencia.
1181, 1 de junio	Carta de franquicias otorgada por Bernardo, abad de San Feliú de Guixols.
1181, 30 de octubre	Carta de población de Alfonso I, a los moradores de Riu de Algars y Batea.
1182, junio	Carta de franquicias de Alfonso II a los habitantes de Puigcerdá.
Siglo XIII	Fuero de Alarcón.
Siglo XIII	Fuero de la Novenera.
Siglo XIII	Fuero de Viguera, redacción extensa, de carácter privado y anónimo, conocida como "Fuero de Viguera y Val de Funcs".
Siglo XIII	Fuero de Cuenca, fuero atribuido a Alfonso VIII.
Siglo XIII	Fuero de Teruel, fuero de la familia de los fueros de Cuenca, atribuido a Alfonso II de Aragón.
Siglo XIII	Fuero de Madrid, fuero elaborado por el concejo bajo el reinado de Alfonso VIII. Fue adicionado en época de Fernando III.
Siglo XIII	Fuero de Alfambra.
Siglo XIII	Libro de los Fueros de Castiella.
Siglo XIII	Fuero de Salamanca.
Siglo XIII	"Fuero General de Navarra", I, I, I. Cuando obtenga la corona un extranjero, no podrá traer consigo más de cinco extranjeros para darles bailios u otros oficios. "Fuero General de Navarra", Libro V, Título VI, cap. II. Equiparación de los peregrinos a los mercaderes. "Fuero General de Navarra", Libro III, Título XV, Cap. XXVII; Título XVII, Cap. I; Libro V, Título VII, Cap. IV. Peregrinos.
Siglo XIII	Fuero de Béjar. Fuero extenso de la familia de fueros de Cuenca, atribuido en su preámbulo a un rey Alfonso. Su contenido coincide parcialmente con el fuero de Sepúlveda.
1206, 13 de junio	Gerona. Carta de franquicias otorgada por Pedro II de Aragón a la ciudad y diócesis, ordenando seguir en los juicios la costumbre de

- la curia de Barcelona.
- 1239 Fuero de Brihuega, fuero otorgado por Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo.
- 1222-1227 Fuero de Coria.
- 1231, 12 de marzo Fuero de Cáceres. Confirmación por Fernando III de la carta de población y otros privilegios otorgados por Alfonso IX, que reproduce y amplía.
- 1233-1251 Fuero de Ubeda, en romance, de la familia de fueros de Cuenca, atribuido a Fernando III.
- 1241, 8 de abril Fuero de Córdoba.
- 1251, 13 de abril Fuero de Guadalajara. Privilegio otorgado por Fernando III.
- 1252-1255 "Fuero Real", Libro I (Preliminar) y I, VI, V. Carencia de fuentes jurídicas y obligación de aplicar este libro.
 "Fuero Real", II, I, I. Territorialidad de las leyes.
 "Fuero Real", II, V, I. Pleito de morador de fuera de los reinos.
 "Fuero Real", IV, XXIII, I a IX. De los romeros, reiterado en la Novísima, I, XXX.
 "Fuero Real", IV, XXIV, I. Naufragios.
- 1255 Fueros dados a la villa de Sahagún por Alfonso el Sabio.
- Alfonso X Anterior a las Partidas "El Espéculo", Preámbulo del Título IV. Quiénes son naturales.
 "El Espéculo", Ley XXXVI, Título XII, Libro IV. Salvoconductos a los hombres de otros reinos. Confirmado por la Ley XVIII el Título XVIII de Partida III.
 "El Espéculo", V, V, I. Ruptura de la unidad jurídica de España.
 "El Espéculo", XVI y XVII. Juramento de moros y judíos.
- 1263 "Las Siete Partidas", VI, I, XIII, XXX, XXXI y XXXII; Otorgamiento de testamento por extranjeros y peregrinos.
 "Las Siete Partidas", I, I, XV. Aplicación territorial de las leyes.
 "Las Siete Partidas", III, XVIII, XXIII. Cartas de encomiendo y

defendimiento a los hombres de otros reinos.

"Las Siete Partidas", V, VII, I a IX. Protección a los mercaderes.

"Las Siete Partidas", V, IX, VII. Naufragio.

"Las Siete Partidas", III, XI, XX. Forma de prestar juramento el judío.

"Las Siete Partidas", III, XI, XXI. Forma de prestar juramento el moro.

"Las Siete Partidas", IV, XI, XXIV. Donaciones por razón de matrimonio y traslado a otra tierra de costumbre distinta.

"Las Siete Partidas", III, XIV, XV. Aplicación de la ley personal.

1263 "Las Siete Partidas", VII, XXIX, I. Competencia para juzgar a los malhechores.

"Las Siete Partidas", I, XXIV, I a III. Peregrinos.

"Las Siete Partidas", IV, XXIV, II. Cuántas clases hay de naturaleza.

"Las Siete Partidas", IV, XXIV, V. Cómo se puede perder la naturaleza.

"Las Siete Partidas", IV, XXV, VII, VIII, X. Razones por las que puede el vasallo desligarse del señor; relaciones posteriores del vasallo y del señor; razones por las que el rey puede echar a los ricos omes.

"Las Siete Partidas", V, VIII, XXVII. Protección a los peregrinos. VII, XXV, IX.

"Las Siete Partidas", III, IX, IV. No pueden ser demandados por deudas contraídas con los de su propia tierra, antes de venir al reino. Confirmado en la Novísima Recopilación, III, IX, VI.

1272, 26 de
septiembre

Fuero de Miranda de Ebro. Privilegio otorgado por Alfonso X, confirmando los fueros por los que se regían en tiempos de Alfonso VIII y Fernando III.

1296, 23 de febrero

Fuero de Alcaraz.

Siglo XIII-XIV

Fuero de Molina de Aragón.

Principios del siglo
XIV (Fernando IV)

Leyes de Estilo. Ley LXXXIII. Mayor castigo al judío que al cristiano, que hiere a otro de la otra religión.

Leyes de Estilo. Ley LXXXIV. Mayor castigo al moro o al judío que mata al cristiano.

Leyes de Estilo. Ley CCVI. Régimen matrimonial de los mercaderes.

- 1347 Alfonso XI en Segovia y después Juan I en Valladolid. Novísima (XII, XXXV, I). Competencia para juzgar a los malhechores.
- D. Enrique II (sic) en Toro, con referencia a su progenitor D. Juan I en Segovia. Que los extranjeros que vinieren a vivir al reino sean excusados de pagar tributos por diez años: Está en la Novísima, VII, IV, VI.
- 1347, Alfonso XI Remisión de delincuentes. Novísima, XII, XXXVI. Todo el título está dedicado a esta materia (nueve leyes).
- 1348 Ordenamiento de Alcalá. Ley III, Título XVII. Prohibición de donación de ciudades y heredades a extranjeros. Novísima (III, V, VI).
- 1348 Ordenamiento de Alcalá, XVIII, II. Prohibición de represalias en personas o mercancías de fuera del reino. Confirmado en la Novísima Recopilación (XI, XXXI, XII).
- 1348 Ordenamiento de Alcalá. III, III, y I, VI, II. Nombramiento de obispos. Recogido en Novísima Recopilación, I, XVII, I.
- 1348 Ordenamiento de Alcalá. Ley LI, Título XXXII. Inembargabilidad de los navíos por deudas de fletes u otras de las tierras de donde son. Confirmado en la Novísima Recopilación (XI, XXI, IV).
- 1348 Ordenamiento de Alcalá, Ley III, Título XXVII, ratificado por Enrique IV en Córdoba (1455), incluido en la Novísima Recopilación (III, V, VI). Prohibición de las donaciones o enajenaciones del señorío y jurisdicción por los reyes a otros reyes o personas de otro reino que no sean naturales o moradores.
- 1356 Fuero Viejo de Castilla.
- 1377 Enrique II en Burgos, y en Toledo, 1378, (confirmado por Juan I en Guadalajara, 1390), y por Enrique III (Novísima, IX, XII, I a IV). Comercio de ganado.
- 1377 Enrique II en Burgos, confirmada por Juan I en Burgos, en 1379. Enrique III en Tordesillas (1401). Enrique IV en Santa María de Nieva (1476). Fernando e Isabel en Madrigal (1476) y en Toledo (1480). Revocación de las cartas de naturaleza dadas a extranjeros para obtener prelacías, dignidades y beneficios del reino. Novísima, I, XIV, I.

- 1390 D. Enrique en Burgos. D. Juan en Guadalajara (Ordenanzas Reales) (Ley IV, Título IX, Libro I). Protección de los peregrinos.
- 1395 Enrique III, en Madrid, 1395, confirmado por Enrique IV (Toledo, 1462), y los Reyes Católicos (Madrigal, 1476, y en Toledo, 1486), Novísima XII, XX, I a V. Usura.
- 1419 Juan II en Madrid, en Tordesillas, en 1420 y en Palenzuela, 1425. Prohibición de cargos públicos a extranjeros (Novísima, VII, V, II). Reiterado por Fernando y Juana en Burgos (1515) y Felipe III en Madrid (1590); y Carlos y Juana en Valladolid (1523) (Novísima, VII, V, II).
- 1423 Juan II de Aragón. Que los extraños al reino no puedan tener oficios en él (Fueros, observancias y actos de corte del reino de Aragón. Ratificado en 1461 y 1646.
- 1449 Juan II de Castilla, IX, IV, I de la Novísima Recopilación. Protección de los mercaderes que viniesen a comprar y vender.
- Todo el Título IV, del Libro IX de la Novísima Recopilación está destinado a regular la situación de mercaderes y comerciantes y sus contratos.
- 1480 Los Reyes Católicos en Toledo. Confirmado en Murcia en 1488 y en Granada, 1501. Novísima Recopilación, IX, XIII, I. Prohibición de extraer la moneda del reino y el oro y la plata en vajilla. Confirma, a su vez, leyes de Juan I y Enrique III, en sus cuadernos de Guadalajara.
- 1480 En el mismo sentido, Juan II (1442) y Carlos I (1523). Novísima, id. id. Ley II. Se reproduce por Juan II (1442), Carlos I (1523) (Id. Ley II, el príncipe Don Felipe (1552), Leyes III y IV, Juan I (1388), los Reyes Católicos (1476), y Carlos I (1528). Id. Ley V.
- 1480 Prohibición de beneficios eclesiásticos a extranjeros. Novísima, I, XIV, II. Iguales disposiciones de Carlos y Juana (1523, 1525 y 1528), Felipe IV (1632).
- 1484 Ordenanzas Reales de Castilla (De Díaz de Montalvo) (Ley XVI, Título VIII, Libro VI). Protección de los peregrinos.
- 1499 Pragmática de los Reyes Católicos en Medina del Campo sobre los egipcianos que vagasen sin oficio conocido. Confirmada en 1525, 1528, 1539 y 1560 (Carlos I y Juana y Felipe II). Novísima Recopilación, XII, XVI, II.
- 1500 Los Reyes Católicos. Carlos I, prohibición de cargar mercaderías en navíos extranjeros habiéndolos nacionales. Novísima, IX, VIII, V. Reiterado por Carlos I (1523), Carlos IV (13 de marzo de 1790). Ley VII del mismo Título, y en la Ley IX se prohíbe vender y

- empeñar a los extranjeros los navíos de naturales de estos reinos. (También los Reyes Católicos en Granada, 4 de agosto de 1501.
- 1514 Que los oficios y beneficios no se den a extranjeros. Leyes 5, 6, 7 y otras, título 9, reiterado en 1580. Ley 20, 2, título 9, y 1583. Ley 1, 7, 8 y 9 (Novísima Recopilación de las Leyes del Reino de Navarra).
- 1523, en Toledo Carlos y Juana, reiterado en Toledo, 1525; Madrid, 1534, y Felipe II en Valladolid, 1558. Protección a los peregrinos a Santiago de Compostela (Novísima, I, XXX, VI).
- 1523 Carlos I. Prohibición de ser nombrados Embajadores de estos reinos, y Madrid, 1528. Novísima, III, IX, I.
- 1528 Carlos y Juana en Toledo. Obligación de que los extranjeros que tuviesen cartas de naturaleza para disfrutar de beneficios vengan a residir en el plazo de ocho meses. Novísima, I, XV, I.
- 1532 y 1537 En Valladolid. Carlos y Juana. Los obispos no permitan a los clérigos franceses y otros extranjeros servir beneficios ni estar en sus obispados. Novísima, I, XIII, II.
- 1539 Carlos y Juana en Madrid. Que los extranjeros no tengan pensiones ni beneficios en estos reinos, ni los naturales los consientan. Novísima, I, XXIII, I.
- 1543 Carlos y Juana en Madrid. Prohibición de tener los extranjeros beneficios y pensiones. Novísima Recopilación, I, XIII, I.
- 1549 Juan I, en Guadalajara, los Reyes Católicos en Toledo, 1480, en Murcia, 1480 y en Granada, 1501.
- 1551 Carlos I y luego el príncipe Felipe, de hidalgas de extranjeros (Novísima, XI, XXVII, XVIII).
- 1552 El Príncipe D. Felipe prohíbe la saca de la moneda.
- 1557, 17 de mayo Felipe II y la Princesa Doña Juana Gobernadora en Valladolid. Que los extranjeros no pasen de los puertos. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, IV.
- 1557, 17 de mayo Felipe II y la Princesa Gobernadora en Valladolid. Que los extranjeros no traten en oro, ni plata ni cochinilla. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, VI.
- 1560 Felipe II en Toledo. Reiterando la obligación de usar navíos nacionales con preferencia a los extranjeros. Novísima, IX, VIII, X.

- 1561 Obligan a los extranjeros las prohibiciones sobre caza y pesca (ley 1, cap. 15, libro 5, título 7. Novísima Recopilación de las leyes del reino de Navarra.
- 1565 Felipe II. Cualidades del natural de estos reinos para que pueda obtener beneficio eclesiástico en ellos. Novísima Recopilación, I, XIV, VII.
- 1565 Disposición de Felipe II sobre el Patronato de todas las iglesias y catedrales. Novísima Recopilación, I, XVII, IV.
- 1569, 29 de junio Felipe II. Castigo de delitos. Novísima, XII, XXXVI, IV. Remisión recíproca de delincuentes con Portugal.
- 1569, 4 de septiembre Felipe II en El Escorial. Que los Oficiales Reales de las Indias averigüen las mercaderías de Extranjeros, que se llevarán en Flotas y Armadas. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, III.
- 1569, 4 de octubre Felipe II en Aranjuez. Que la Casa de Contratación averigüe los Extranjeros, que cargaren en cada viaje, y haya libro de los que tienen y no tienen licencias. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, II.
- 1569, 20 de noviembre Retención por Felipe II de la bula "in coena Domini". Novísima Recopilación, II, III, V.
- 1588, 6 de enero Instrucción de Felipe II sobre la forma de proceder cuando vaquen los obispos. Novísima Recopilación, I, XVII, XI. El Título XVIII del mismo libro regula la presentación de las prelacías de las iglesias y provisión de piezas eclesiásticas.
- 1590, 13 de junio Pragmática de Felipe II, en El Escorial sobre Novísima Recopilación, Ley VII, Título XXX, Libro I, Prohibición a los naturales del reino de andar en hábitos de romeros y peregrinos.
- 1592, 27 de julio Felipe II en Valladolid. Que ningún extranjero ni persona prohibida pueda tratar en las Indias, ni pasar a ellas. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, I.
- 1596 Felipe II en San Lorenzo. Que declara los que son naturales de estos reinos, y no se comprenden en las comisiones de composición. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXVIII.
- 1596, 13 de enero Felipe II en Madrid. Que se disimule la condición de los extranjeros cuando hayan portado buenos servicios. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XIII.
- 1596, 13 de enero Felipe II en Madrid. Posibilidad de composición. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XIV.

- 1596, 13 de enero Felipe II en Madrid. De los nacidos y criados en estos reinos, hijos de padres extranjeros. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XV.
- 1596, 13 de enero Felipe II en Madrid. Que no se compongan clérigos, ni mujeres extranjeras. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XVI.
- 1596, 13 de enero Felipe II en Madrid. Licencias para contratar. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XVII.
- 1596, 13 de enero Felipe II en Madrid. Que los extranjeros, una vez compuestos, no se comprendan en otras comisiones, y solamente puedan comerciar en sus provincias. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XX.
- 1596, 13 de enero Felipe II en Madrid. Que se les haga justicia sobre sus bienes. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXVI.
- 1596, 13 de enero Felipe II en Madrid. Que los extranjeros naturalizados en estos reinos se puedan componer. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXIII.
- 1596, 13 de enero Felipe II en Madrid. Que no se compongan los extranjeros fuera de sus residencias. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXIV.
- 1596, 13 de enero Felipe II en Madrid. Que no se vendan mercancías fiadas a pagar en las Indias. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXX.
- 1598, 2 de diciembre Felipe III en Vaciamadrid. Que las cédulas de composición se entiendan con los que estuvieron; no con los que después entrasen en las Indias. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XVIII.
- 1598, 2 de diciembre Felipe III en Madrid. Que no se admitan a composición en Indias sin orden del rey. Reiterado en Ventosilla en 28 de octubre de 1606. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XII.
- 1602, 17 de octubre Felipe III en Ventosilla. Que se procure limpiar de extranjeros y gente sospechosa en las cosas de la fe. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, IX.
- 1608, 2 de octubre Felipe III en Madrid. Prohibición de tratar en Indias los extranjeros que no reúnan condiciones. Reiterado en 25 de diciembre de 1616. Felipe IV en Zaragoza en 22 de abril de 1645. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXXI.

Libro X, Título XXVII. Ley VII, prohibición de trato con extranjeros.

- 1608, 8 de octubre Felipe III en Madrid. Que no siendo las naturalezas despachadas por el Consejo de Indias, y para tratar en ellas, no excusen de las penas. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXXIII.
- 1614 Pragmática de Felipe III en Madrid. Declaró inhábiles a los pretendientes naturales o extranjeros, de cargos eclesiásticos y seculares, que se valiesen de dádivas para obtener beneficios. Novísima, III, XXII, III.
- 1614, 3 de octubre Felipe III en San Lorenzo. Que en las Indias no se admita trato con extranjeros. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, VII.
- 1618, 2 de junio Pragmática de Felipe III. Prohibición de introducir pistoletas. Novísima, XII, XIX, V, con referencia especial a los que se traigan del extranjero.
- 1618, 11 de octubre Felipe III en Madrid. Que los bienes raíces de la ley antes de ésta, sean cuatro mil ducados, de que conste por escrituras. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXXII.
- 1618, 10 de diciembre Felipe III en El Pardo. Que los extranjeros compuestos sean retirados de los puertos. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXI.
- 1618, 10 de diciembre Felipe III en El Pardo. Que los extranjeros encomenderos no hayan menester composición. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXII.
- 1619, 12 de diciembre Felipe III en Madrid. Que los compuestos legítimamente no se incluyan en la prohibición de extranjeros. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XIX.
- 1619 Cédula de Felipe III en Belen (Portugal) sobre asentamiento de los egipcianos. Novísima, XII, XVI, IV, y Pragmática de Felipe IV (1633), que insiste sobre lo anterior. Novísima, XII, VI, V, reiterada por Carlos II (1692), Novísima, XII, VI, VI, promulgándose otra detallada en 1695 y reiterada por Felipe V (1717 y 1726), Novísima, XII, VI, VII.
- 1620, 28 de marzo Felipe III en Madrid. Que los extranjeros solteros sean echados de los puertos. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXV.
- 1620, 14 de agosto Felipe III en San Lorenzo. Que los nacidos en Indias de padres extranjeros son naturales de ellos. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXVII.

- 1621 Prohibición a los extranjeros por algún tiempo del comercio de tienda y limitación del de lonja. Ley 6, libro 3, título 3 de la Novísima Recopilación de las Leyes del reino de Navarra.
- 1621, 18 de mayo Felipe IV en Madrid. Que la expulsión no se entienda con los oficiales mecánicos. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, X.
- 1621, 8 de agosto Felipe IV en Madrid. Que los Gobernadores de los puertos no dejen pasar tierra adentro a los comerciantes extranjeros. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, V.
- 1623 Pragmática de Felipe IV (Novísima, VI, XI, I, sobre permiso a los extranjeros católicos para residir).
- 1623 Novísima Recopilación. Título XI del Libro VI. Ley I, permiso a los extranjeros católicos y amigos para ejercitar sus oficios.
- 1624, 14 de octubre Felipe IV, por Pragmática, prohíbe sacar moneda o pasta de plata u oro, sin licencia, así como que entre moneda de vellón. Novísima, IX, XIII, X.
- 1627, 8 de octubre Felipe IV en Zaragoza. Que el declarar sobre los requisitos de extranjeros toca al Consejo y a las Audiencias las informaciones. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXXIV.
- 1628, 13 de septiembre Pragmática de Felipe III. Prohíbe dar licencia para sacar plata u oro, estando permitido, en cambio, sacar y traer mercaderías. Novísima, IX, XII, XI. Lo que se insiste en una Pragmática de Zaragoza en 1642.
- 1630, 7 de mayo Felipe IV en Madrid. Que los extranjeros que sirvieran en plazas de soldados no gocen de sus excepciones, cuando de trate de su composición. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XI.
- 1632 No se dan cartas de naturaleza para beneficios eclesiásticos. Novísima, I, XIV, IV.
- 1634, 10 de noviembre Felipe IV en Madrid. Que los portugueses de la India no traten en Filipinas. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXIX.
- 1636 Títulos nobiliarios. VI, XII, I, 14. Tratamientos.
- 1645, 31 de diciembre Felipe IV en Madrid. Que se eviten las noticias que puedan dar los enemigos mediante los extranjeros que viven en las Indias. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, VIII.

- 1651, 22 de diciembre Felipe IV en Madrid. Que no se admitan en los puertos los que fueren con patentes de Apresadores, no llevando despacho de la Casa de Contratación de Sevilla. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXXVI.
- 1652, 18 de marzo Felipe IV en Madrid. Que en los puertos de las Indias no se admitan navíos de apresadores y corsistas. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXXVII.
- 1667, 28 de abril Carlos II y la reina Gobernadora. Que los Virreyes, Audiencias y Gobernadores remitan a la Casa de Contratación todos los extranjeros. Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias, IX, XXVII, XXXV.
- 1675, 16 de enero Real Cédula del Consejo de Indias por la que se prohíbe pasar a las mismas a los griegos y armenios para pedir limosnas. Libro I, Título XII de la Nueva Recopilación.
- 1683, 15 de marzo Creación por Cédula de Carlos II de la Real Junta de Comercio (Novísima, IX, I, 1).
- 1697, 9 de septiembre Carlos II manda aumentar la vigilancia para que los extranjeros no saquen caballos del reino. Novísima, IX, XIV, V.
- 1703, 16 de junio Felipe V (Novísima, VI, XI, II). Facultad de los extranjeros católicos para residir en determinadas condiciones.
- 1705, 18 de agosto Real Cédula del Consejo de 18 de agosto, confirmada el 10 de septiembre de 1708, sobre persecución de los gitanos, Novísima, XII, VI, VIII.
- 1707, 15 de mayo Felipe V. Competencia de la Real Junta de Comercio. Novísima IX, I, II.
- 1707, 29 de junio Decreto de Nueva Planta, Aragón y Valencia (Novísima Recopilación, III, III, I).
- 1711, 3 de abril Decreto de Nueva Planta. Aragón. Novísima, V, VII, II.
- 1714 Creación de la Junta de dependencia de extranjeros, por R. D. de 12 de marzo. Se extinguió en 1717 y se restableció en 3 de noviembre de 1721, subsistiendo hasta que Fernando VI agregó su cometido a la Junta de Comercio, Industria y Minas.
- 1715, 26 de agosto Real Resolución de Felipe V sobre concesión de cartas de naturaleza, debiendo pedirse el consentimiento de villas de voto en Cortes. Novísima Recopilación I, XIV, VI.
- 1715, 28 de noviembre Decreto de Nueva Planta. Mallorca. Novísima, V, X, I.

- 1716, 8 de marzo Circunstancias que deben concurrir en los extranjeros para considerarse vecinos. Novísima, VI, XI, III.
- 1716, 16 de enero Decreto de Nueva Planta. Cataluña. Novísima, Recopilación, V, IX, I.
- 1716, 8 de marzo Felipe V (Novísima, VI, XI, III) Circunstancias para considerar vecinos a los extranjeros.
- 1716, 23 de diciembre Felipe V, regula la entrada en puertos españoles de barcos extranjeros. Novísima, IX, VIII, XI, y se recogen los tratados con Inglaterra de 1667 y 1713 sobre visita de buques ingleses y obligación de los capitanes de presentar un manifiesto.
- 1716, 25 de diciembre Felipe V dispone que la inmunidad de los embajadores es sólo desde las puertas adentro de su casa, y en régimen de reciprocidad. Novísima, III, IX, V.
- 1723 Felipe V en Balsaín. Los naturales de Castilla, Aragón, Valencia y Cataluña pueden obtener beneficios en dichos reinos recíprocamente, pero no en el de Mallorca. Novísima, I, XIV, V.
- 1724, 20 de noviembre Abintestatos de los ingleses transeúntes. Felipe V en Madrid. Novísima, VI, XI, IV.
- 1727, 7 de julio Felipe V. Real Decreto sobre fuero de los extranjeros (Novísima, VI, XI, V). Jueces conservadores.
- 1737, 15 de junio Felipe V, en Aranjuez, regula la imposibilidad de apremiar a los enviados extranjeros por los contratos anteriores a 'su legacía'. Novísima, III, IX, VI.
- 1748, 21 de diciembre Supresión de la Junta de Extranjeros y agregación a la de Comercio. Nota 7 a la Ley V, Título XI, Libro VI.
- 1758, 26 de agosto Real Orden sobre competencia de los gobernadores militares en causas de extranjeros.
- 1760, 13 de diciembre Instrucción de Carlos III para prohibir la saca de moneda del reino. Novísima, IX, XIII, XII.
- 1760, 14 de diciembre Real Decreto de Carlos III sobre aplicación de los tratados con Inglaterra de 1667 y 1713. Novísima, IX, VIII, XI.
- 1765, 1 de febrero Reglamento dado por Carlos III en El Pardo sobre cónsules y vicecónsules. Novísima, VI, XI, VI.
- 1765, 29 de septiembre Convenio entre las Cortes de Madrid y Versalles sobre entrega de delinquentes. Novísima, XII, XXXVI, VII (Carlos III). Castigo por las Justicias españolas de los delinquentes de estos reinos, sin

remitirlos a sus Jueces. Id., Ley VIII (Carlos III, 1782). Al delincuente marroquí se le remite con el sumario de su crimen, y se le entregue a un gobierno para que se le castigue. Id., Ley IX (Carlos IV, 1797).

- 1767, 5 de julio Proyecto de Carlos III de introducir como colonos alemanes y flamencos para repoblar. Novísima Recopilación, VII, XXII, III.
- 1768, 16 de junio Previa presentación de las Bulas y Breves Papales de los despachos de Roma.
- 1768, 18 de abril y 1º de mayo Repoblación interior. Admiten colonos griegos (Novísima, VII, XXII, IV).
- 1768, 16 de junio Pragmática de Carlos III en Aranjuez sobre la previa presentación en el consejo de las bulas y breves de Roma. Novísima Recopilación, II, III, IX.
- Devolución a la península de los moriscos que estuviesen en las Indias. Recopilación de Indias, VII, IV, V.
- 1768, 14 de agosto Cédula de Carlos III que prohibió que viniesen extranjeros a los seminarios de misiones. Novísima, I, XI, III.
- 1769, 13 de marzo Convención sobre las herencias de franceses transeúntes y viceversa.
- 1771, 11 de enero Condiciones para que los malteses ejerzan el comercio. Notas 1, 2 y 3 del Título XI del Libro VI de la Novísima Recopilación.
- 1774, 18 de marzo
- 1774, 18 de mayo
- 1771, 19 de junio Real Resolución de Carlos III. Son naturales los hijos de oficiales nacidos en el extranjero. Novísima, I, XIV, VIII.
- 1771, 13 de diciembre Real Cédula de Carlos III sobre incorporación de maestros de coches extranjeros. Ley VI, Título XXIII, Libro VIII de la Novísima Recopilación.
- 1773, 17 de mayo y 6 de junio Exención del servicio militar de los hijos de extranjeros nacidos en el reino. Nota 4, Título I, Libro VI de la Novísima.
- 1773, 26 de octubre Real Decreto de Carlos III, exigiendo que el Fiscal del Tribunal de la Rota de la Nunciatura y del Auditor sean españoles. Novísima, II, V, I.
- 1775, 7 de mayo Real Decreto y Cédula de Carlos III para que se incluyesen en las levas, los ociosos, naturales y extranjeros. Novísima, XII, XXXI, VII.
- 1777, 24 de marzo Real Cédula de Carlos III. Admisión de maestros de oficios, que sean católicos. Ley VII, Título XXIII, Libro VIII de la Novísima Recopilación.

1778, 24 de marzo	Decreto mandando se examinen los papeles de los peregrinos. Novísima, I, XXX, VIII.
1778, 20 de noviembre	Real Cédula de Carlos III sobre limitación de los privilegios de los Cónsules. Novísima, VI, XI, VII.
1778, 20 de noviembre	Prohibición del registro de las casas de los comerciantes extranjeros. Novísima, VI, XI, VII.
1778, 24 de noviembre	Carlos III. Examen de los papeles de los peregrinos (Novísima, I, XXX, VIII).
1778, 24 de noviembre	Prohibición de pedir licencia a los sacerdotes extranjeros (Novísima, I, XXVIII, XI).
1778, 19 de diciembre	Real Orden sobre causas de extranjeros.
1779, 11 de abril	Real Orden y Cédula, respectivamente, para cumplir el tratado hispano-portugués de 1779 sobre remisión de delincuentes. Novísima, XII, XXXVI, V.
1779, 13 de agosto	
1782, 24 de octubre	Los extranjeros delincuentes en estos reinos o infractores de Bandos sean procesados y castigados por las Justicias, sin remitirlos a sus Jueces. Novísima Recopilación, XII, XXXV, VIII.
1783, 25 de marzo	Real Cédula de Carlos III en la que manda se incluyan entre los vagos los romeros que salgan de su camino. Novísima, XII, XXXI, XIII.
1783, 22 de mayo	Real Cédula de Carlos III, reciprocidad con el vecino de Cerdeña en materia de disposición de herencias, Novísima Recopilación, X, XX, XVIII.
1783, 19 de septiembre	Pragmática sanción de Carlos III sobre la vagancia de los gitanos. Novísima, XII, XVI, XI. Penas de que serían objeto.
1783, 20 de diciembre	Real Provisión sobre los irlandeses que solicitaban la norma para la reedificación de iglesias (Libro I, Título XXVIII, nota 4). Reiterado por Real Circular de 30 de julio de 1784.
1784, 1 de julio	Resolución y Cédula del Consejo de Carlos III. Permite llevar a los viajeros naturales y extranjeros que pasen a otros reinos cantidades moderadas, y a los capitanes de embarcaciones extranjeras sólo se les permita sacar más que 5 pesos en oro o plata. Novísima Recopilación, IX, XIII, XIV.
1784, 27 de noviembre	Los embajadores quedan sujetos a los bandos de policía, según Real Orden de dicha fecha. Novísima Recopilación, III, IX, nota 3.

- 1787, 30 de enero Real Orden de Carlos III en El Pardo y Cédula de Carlos IV en Barcelona de 6 de noviembre de 1802. Reglas para la introducción de equipajes de los embajadores y ministros extranjeros. Novísima, III, IX, VIII.
- 1788, 15 de marzo Prohibición a los eclesiásticos extranjeros de pedir limosna sin licencia, ni internarse o vagar. Reiterado en la cédula de 24 de noviembre de 1778. Novísima, I, XXVIII, XI.
- 1790, 13 de marzo Decreto y Cédula de 13 de abril sobre buques mercantes nacionales. IX, VIII, VII.
- 1791, 21 de julio Recopilación de las leyes de los Reinos de las Indias. IX, XXI, I - Que ningún natural o extranjero pase a las Indias sin licencia.
31 - Que no pasen a título de mercaderes los que no lo fuesen.
CVI - Que el Gobernador del Paraguay no deje entrar gente del Brasil.
Libro IX, Título XXII - De los extranjeros que pasan a las Indias.
Ley I.- Que ningún extranjero o persona prohibida pase a las Indias.
Ley II.- Que la Casa de Contratación averigüe los extranjeros que cargue.
- 1791, 12 de julio Real Resolución de Carlos IV, e Instrucción de 25 de julio. Formación de listas en donde hubiese fábricas, en donde trabajasen quienes no profesasen la religión católica, Novísima Recopilación, VI, XI, VIII y IX.
- 1791, 12 de julio Real Orden y Cédula del Consejo de 20 del mismo mes, Formación de matrículas de extranjeros, transeúntes y domiciliados. Novísima Recopilación (VI, XI, VIII).
- 1791, 29 de julio, 1 de agosto, 3 de agosto, 21 de agosto, 31 de agosto Desarrollo de leyes del Título XI, Libro VI de la Novísima.
- 1791, 29 de noviembre Real Resolución y Cédula del Consejo. Rectificación anual de las matrículas de extranjeros, Novísima Recopilación, VI, XI, IX.
- 1791, 3 de agosto Circular del Consejo.
- 1791, 21 de agosto Declaraciones del Consejo sobre la Instrucción.
- 1793, 22 de enero Instrucción para la matrícula de las embarcaciones de construcción extranjera. Novísima, nota (2), a la Ley IX, VIII, XII.
- 1797, 3 de marzo Real Orden de Carlos IV, sobre remisión de marroqufes. Novísima, XII, XXXVI, IX.

- 1797, 28 de julio Real Cédula de Carlos IV sobre extranjeros artistas o fabricantes, aunque no sean católicos, pero nunca judíos. (Nota 4, VIII, XXIII, VII).
- 1799, 8 de agosto Real Orden del Ministerio de Estado. Los Cónsules y Vicecónsules no están capacitados para tramitar de los asuntos de sus conciudadanos, debiendo acudirse a los embajadores o ministros. Novísima Recopilación.
- 1802, 2 de septiembre Circular del Consejo a los Directores Generales, Jefes de las fronteras y Cortes sobre pasaportes. Nota 13 a Libro VI, Título XI.
- 1802, 2 de septiembre Circular sobre modo de proceder a la concesión de pasaportes a extranjeros que entren a questar, nota 13 al artículo 8, Ley IX, Título XI, Libro VI de la Novísima Recopilación.
- 1804, noviembre Real Resolución Circular. Ordenó que a los franceses domiciliados en España se les exijan todas las contribuciones y derechos que a los vasallos. Novísima, VI, XIII, nota 3.
- 1812, 19 de marzo Artículo 19 y 20 de la Constitución de Cádiz. Consideración de ciudadanos a los extranjeros y sus derechos.
- 1820, 28 de septiembre Decreto de las Cortes sobre asilo a las personas y bienes de los extranjeros.
- 1821, 15 de marzo Sometimiento del Cuerpo Diplomático a la jurisdicción ordinaria.
- 1829, 30 de mayo Código de Comercio: ejercicio del mismo.
- 1821, 15 de marzo Sujeción a la jurisdicción ordinaria.
- 1836 Proyecto del Código Civil.
- 1837, 17 de junio Artículo 1º de la Constitución. Condiciones de los extranjeros para ser considerados como españoles.
- 1845, 23 de mayo Artículo 1º de la Constitución. Posibilidad de obtener la nacionalidad española.
- 1851 Proyecto de Código Civil.
- 1852, 17 de noviembre Real Decreto de Extranjería.

B) CUERPOS LEGALES

- "Lex Romana Visigotorum", edición por G. Haenel, Leipzig, 1849.
- "Liber Iudiciorum", en "Monumenta Germaniae Historica", Hannover, 1902.
- "Fuero Juzgo o Libro de los Jueces", cotejado con los más antiguos y preciosos códices por la Real Academia Española, Ibarra, Madrid, 1815.
- "Las Siete Partidas, del sabio Rey don Alfonso el Nono (sic)", nuevamente glosadas por el Licenciado G. López, del Consejo Real de Indias de su Majestad, Salamanca, 1555, por Andrea de Portonaris.
- "Ordenamiento de leyes que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año 1348", publicada... por los Doctores D. I. Jordán de Asso y del Río, y D. M. De Manuel y Rodríguez, Madrid, 1774.
- "Ordenanzas Reales de Castilla", recopiladas por el Dr. A. Díaz de Montalvo, glosadas por el Dr. Diego Pérez, Madrid, 1777.
- "Recopilación de las Leyes destos Reynos, hecha por mandado de la Magestad Católica del Rey don Felipe Segundo, nuestro señor", Madrid, 1640.
- "Tomo tercero de Autos acordados, que contiene nueve libros por el orden de títulos de las Leyes de Recopilación", Madrid, 1745.
- "Novísima Recopilación de las Leyes de España", mandada formar por el Señor Don Carlos IV", impresa en Madrid, 1805.
- "Los Códigos españoles anotados y concordados", Madrid, "La Publicidad", 1847-1851.
- "Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, mandados imprimir y publicar por la Magestad Católica del Rey D. Carlos II, Nuestro Señor", 3 tomos, 4ª edición, Madrid, 1791, Imprenta de la Viuda de D. Joaquín Ibarra.

- *Libro de los Fueros de Castilla*, publicado por G. Sánchez, Barcelona, 1924.
- "*Fuero Real del Rey D. Alfonso el Sabio*", copiado del Códice del Escorial...y cotejado con varios Códices de diferentes Archivos, por la Real Academia de la Historia; de orden y a expensas de S. M., Madrid, 1836.
- "*Colección de Fueros Municipales y Cartas-Pueblas*", por T. Muñoz y Romero, Tomo I, Madrid, 1847. Ediciones Atlas, Madrid, 1977.
- "*Fuero Viejo de Castilla*", con notas de los Doctores D. I. Jordán de Asso y del Río, y D. M. de Manuel y Rodríguez, Madrid, 1771.
- "*Fueros, observancias y actos de corte del reino de Aragón*", por P. Savall y S. Panén, dos tomos, Zaragoza, 1866.
- "*Constituions y altres drets de Cathalunya*", 1702.
- "*Novísima Recopilación de las leyes del reino de Navarra, hechas en sus Cortes Generales desde 1512 hasta 1716*". Oficina de Joseph Joachim Martínez.
- "*Fueros del reino de Navarra desde su creación hasta su felicísima unión con el reino de Castilla*" (Chavier), 1686.
- "*Les Fueros de Alcaraz y Alarcón*", Edición synoptique par J. Roudil, Professer a l'Université d'Amsterdam, París, 1968.
- "*Fuero de Alfambra*", publicado por M. Albareda y Herrera, 1925.
- "*Fuero de Avilés*", según el Discurso pronunciado por D. A. Fernández-Guerra y Orbe, en la Real Academia Española (año 1865), en el que figura su correspondencia con el Fuero de Oviedo.
- "*Fuero de Béjar*", publicado por J. Gutiérrez Cuadrado, Universidad de Salamanca, 1974.
- "*Fuero castellano de Béjar*" (siglo XIII), Preliminar, transcripción y notas por A. Martín Lázaro, Madrid, 1916.

- "Fuero de Brihuega", publicado por J. Catalina García, Madrid, 1887.
- "Los Fueros de Cáceres. Su Derecho Público", Tesis doctoral de P. Lumbreras Valiente, Cáceres, 1974.
- "Cartas de población y franquicia de Cataluña", por J. M^a Font Rius, Madrid-Barcelona, 1969.
- "Fuero de Coria", estudio histórico-jurídico por J. Maldonado y Fernández del Torco, Madrid, 1949.
- "Fuero de Cuenca", edición crítica con adaptación del Fuero de Iznatoraf, de R. de Ureña y Smenjaud, 1935.
- "Fuero de Estella", según el Manuscrito 944 de la Biblioteca de Palacio de Madrid, publicado por G. Komér, Karlshamn, 1963.
- "Fuero de Guadalajara (1219)", edited by H. Kenston; Princeton University Press, U.S.A.; Les Presses Universitaires, París, 1924.
- "Nueva Recopilación de los fueros, privilegios, buenos usos y costumbres, leyes y órdenes de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa", impresa en Tolosa por A. de Gorosabel, año 1867.
- "Costumbres de Gerona", edición preparada por E. de Hinojosa, I, "Usatges de Gerona", Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho, 1928.
- "Fuero de Jaca", edición crítica, por M. Molho, Zaragoza, 1964.
- "Fuero de Jaca" (última redacción), publicado por J. M^a Ramos Loscertales, Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho, 1927.
- "Fuero de Miranda de Ebro", edición crítica, versión y estudio por F. Cantera Burgos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, 1945.
- "Fuero de Molina de Aragón", publicado por M. Sancho Izquierdo, Madrid, 1916.
- "El Fuero de Madrid y los Derechos Locales Castellanos", Edición de G. Sánchez, Madrid, 1932.

- "Fueros de Navarra, I. Fueros derivados de Jaca (Estella-San Sebastián)", por J. Ma Lacarra. Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1936.
- "Fuero General de Navarra", por D. P. Elarregui y D. S. Lapuerta, Pamplona, 1869.
- "Nueva Recopilación de los fueros, privilegios, buenos usos y costumbres, leyes y órdenes de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa", impresa en Tolosa por A. de Gorrosibel, año 1867.
- "Los Fueros de la Novenera", publicados por G. Tilander, *Leges Hispanicae Medii Aevii Upsala*, 1951.
- "Fuero de Salamanca", publicado por J. Sánchez Ruano, Salamanca, 1870.
- "Fuero de Sepúlveda", publicado por J. de la Reguera Valdelomar, Madrid, Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1798.
- "Los Fueros de Sepúlveda", edición crítica y apéndice documental por E. Sáez; estudio histórico-jurídico por R. Gibert, Segovia, 1983.
- "Fuero de Teruel", publicado por M. Gorosch, *Leges Hispanicae, Medii Aevi*, Stockholm, 1950.
- "Código de las Costumbres escritas de Tortosa", de R. Foquet, obra continuada por J. Foquet Marsal, Tortosa, 1910.
- "Fuero de Usagre" (siglo XIII), anotado con las variantes del de Cáceres, publicado por R. de Ureña y Smenjaud, A. Bonilla y San Martín, Madrid, 1907.
- "Fuero de Ubeda", estudio preliminar de M. Pescot y J. Gutiérrez Cuadrado, estudio paleográfico de Josep Trench Odena, edición y notas de Juan Gutiérrez Cuadrado, Universidad de Valencia, 1979.
- "Fori Antiqui Valentiae", edición crítica por M. Dualde Serrano, Madrid-Valencia, 1950-1957.
- "Fuero de Viguera y Val de Funes", edición crítica por J. Ma Ramos y Loscertales, Universidad de Salamanca, 1956.

- "El Manuscrito Español, 8331", de la Biblioteca del Arsenal de París, de J. Roudil, en "Vox Romanica", 122 (1963-64).
- "Privilegios, franquezas y libertades del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya", Bilbao, 1865.

c) BIBLIOGRAFIA

- Acuña Castrovisajo, F.: "La cultura en la Galicia Romana", Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos, Sada-La Coruña, 1976.
- Aguilar Navarro, M.: "Observaciones críticas en torno a la historia del Derecho privado internacional", "Anales de la Universidad Hispalense", vol. XIX, 1959.
- Alonso Cortés, N.: "Condición jurídica del extranjero en la Edad Media española", Valladolid, 1900.
- Amador de los Ríos, J.: "Historia Social, Política y Religiosa de los judíos en España y Portugal", publicada por primera vez en 1875 (precedida de unos "Estudios históricos, políticos, literarios, sobre los judíos españoles en España", 1848).
- Anes, G.: "Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII", Ariel, Barcelona, 1969.
- Anes, G.: "Las crisis agrarias en la España moderna", Biblioteca Política Taurus, Madrid, 1970.
- Anes, G.: "El Antiguo Régimen: los Borbones". Alianza Editorial y Ediciones Alfaguara, Madrid, 1975.
- Anes, G.: "En la España del siglo XVIII. Obstáculos para el crecimiento agrario", en "España a finales del siglo XVIII", ediciones de la Hemeroteca de Tarragona, 1982.
- Anes, G.: "Economía y Sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen", Ariel, Barcelona, 1988.
- Antiñano: "Historia del Comercio con las Indias durante el dominio de los Austrias", Barcelona, 1917.
- Arias Ramos, J. y Arias Bonet, J.A.: "Derecho Romano", 1984.
- Arias Villas, F.: "Lucus Augusti", Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos, Sada-La Coruña, 1976.

- Arjona Colomo, M.: "Nueva enciclopedia jurídica", Tomo IX, Barcelona, 1958. Voz "Extranjero"
- Arrayola, D.L., Gómez de la Serna, P., y Manresa, J.M.: "Enciclopedia Española de Derecho y Administración o Nuevo Texto Universal de la Legislación de España y de las Indias", Tomo XII, Madrid, 1870.
- Artola, M.: "Los afrancesados", Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1953.
- Atienza, Juan G.: "Guía judía de España", Altalena Editores, Madrid, 1978.
- Atienza, J. de: "Diccionario Nobiliario Español", Editorial Aguilar, Madrid, 1959.
- Aubry y Ran: "Cours de Droit Français d'après le méthode de Zacharie", París, 1897, 5ª edición, tomo I.
- Aymard, A.: "Les étrangers dans les cités grecques aux temps classiques", RSJB, Bruxelles, IX, "L'Etranger", I, 1958.
- Bacquet, J.: "Trois premières traictes", París, 1580.
- Ballesteros y Beretta, A.: "Historia de España y su influencia en la historia universal", nueve tomos, Salvat, Barcelona, 1918-1936.
- Barile, G.: "La fonction historique du droit international privé", "Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye", t. 116.
- Balil, A.: "Bracara Augusta y el conventus bracarum", Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos, Sada-La Coruña, 1976.
- Barrero García, A. Mª. y Alonso Martín, Mª. L.: "Textos de Derecho Local Español en la Edad Media", Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Ciencias Jurídicas, Madrid, 1989.
- Benito Ruano, E.: "El desarrollo urbano. Ciudades y polas en Asturias", en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, XXIV, 1971.

- Benito Ruano, E.: "La participación extranjera en la guerra de Granada. Andalucía Medieval", Tomo II, Actas del Primer Congreso de Historia de Andalucía (Diciembre de 1976), 1978.
- Bernard, P.: "Traité théorique et pratique de l'extradition", T. I, París, Rousseau, 1883.
- Bierzanek, R.: "Le statut juridique des étrangers dans l'antiquité greco-romaine", Mélanges Sefériades, vol. II, Atenas, Panteios Anotati, 1961.
- Blanco Ande, J.: "El fuero de extranjería en España", tesis doctoral leída el 19 de diciembre de 1975. Recensión en "Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid", volumen 55, 1979, pág. 269 y sts.
- Bravo, E.: "Derecho Internacional Privado vigente en España", tomo I, Madrid, 1886.
- Calderón Quijano, J. A.: "Hispanoamérica", en "Razón Española", número 40, marzo-abril, 1990.
- Cantarino, V.: "Entre monjes y musulmanes. El conflicto que fue España", Editorial Alhambra, 1978.
- Cantillo, Alejandro del.: "Tratados, convenios y declaraciones de paz y comercio que han hecho con las monarquías extranjeras los monarcas españoles de la casa de Borbón desde el año 1700 hasta el día, puestos en orden e ilustrados muchos de ellos con la historia de sus respectivas negociaciones", Madrid, 1843.
- Cardascia, G.: "Le statut de l'étranger dans la Mesopotamie ancienne", RSJB, Bruxelles, IX, 1958, "L'Etranger", I.
- Caro Baroja, J.: "Los judíos en la España moderna y contemporánea", 2ª edición, abril, 1978.
- Caro Baroja, J.: "Los pueblos del Norte", Editorial Txertua, San Sebastián, 1977.
- Caro Baroja, J.: "Los moriscos del reino de Granada", Editorial Itsmo, 2ª edición, 1976.
- Castro, A.: "España en su Historia (cristianos, moros y judíos)", Editorial Porrúa, México, 1948.

- Castro, A.: "La realidad histórica de España", Editorial Porrúa, México, 1954.
- Castro y Bravo, F. de: "Derecho Civil de España. Parte General. II-1", Madrid, 1952.
- Castro y Bravo, F. de: "Los estudios históricos sobre la nacionalidad (Apostillas y comentarios)", Revista Española de Derecho Internacional, vol. VIII, 1955.
- Castro y Bravo, F. de: "La legislación sobre la nacionalidad y el sentido nacional", en Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria, vol. VI, 1943-1945.
- Cejedor y Frauca, J.: "Vocabulario medieval castellano", Georg Verlag Hildesheim, New York, 1971.
- Concha Martínez, I. de la: "La presura. La ocupación de las tierras en los primeros siglos de la Reconquista", Madrid, 1946. Publicado antes en AHDE, XIV, 1942-1943.
- Conde y Luque, R.: "Derecho Internacional Privado", 2ª edición, refundida, Madrid, 1910, Tomo I.
- Conde y Luque, R.: "Historia jurídica del extranjero en España hasta la conquista árabe", Revista de los Tribunales, 1895.
- Conde y Luque, R.: "De la condición jurídica del extranjero en la Edad Media", Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1901.
- Despagnet, F.: "Précis de droit international privé", París, 1898.
- Díaz Borque, J. Mª.: "La vida española en el siglo de oro según los extranjeros", Ediciones del Serbal, Barcelona, 1990.
- "Discurso sobre el fomento de la industria popular de orden de S. M. y del Consejo"; imprenta de A. de Sancha, Madrid, 1774.
- Domínguez Lozano, P.: "Las circunstancias personales determinantes de la vinculación con el Derecho Local. Estudio sobre el Derecho Local Altomedieval y el Derecho Local de Aragón, Navarra y Cataluña (siglos

- IX-XV)", Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1988.
- D'Ors, A.: "El Código de Eurico", C.S.I.C., 1960.
 - D'Ors, A.: "El problema de la territorialidad del Derecho visigodo", en "Estudios visigóticos", Roma-Madrid, 1956, I.
 - Dorsinfig-Smets, A.: "Les étrangers dans la société primitive", RSJB, citado, I.
 - "Elenco de Grandezas y Títulos nobiliarios españoles", Instituto Salazar y Castro, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, veintiuna edición, 1988.
 - Elliot, J.H.: "El conde duque de Olivares. El político en una época de decadencia", traducción de Teófilo de Lozoya, Editorial Crítica, 1990.
 - Escudero, J. A.: "Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones político-administrativas", Madrid, 1987.
 - Espinar Vicente, J. M.: "Algunas consideraciones en torno al desarrollo histórico del Derecho internacional privado en la Grecia de las ciudades", en Revista de Derecho Privado, 1981.
 - Espinar Vicente, J. M.: "La extranjería en el sistema español de Derecho Internacional privado", Ediciones TAT, Granada, 1987.
 - Espinar Vicente, J. M.: "Los movimientos migratorios y su encuadre sistemático en el Derecho internacional privado", en Anuario de Estudios Sociales y Jurídicos, vol. VII, 1978.
 - Feenstra y H. Keompmaker. H.: "Le statut des étrangers aux Pays-Bas", en RSJB, citado, II.
 - Fernández Rozas, J. C.: "Los movimientos migratorios y la nueva configuración del tráfico externo", en Anuario del Instituto Hispano-Luso Americano de Derecho Internacional, vol. 8, 1987.
 - Fernández Rozas, J. C.: Recensión de la obra citada de Pilar Domínguez Lozano, en Revista Española de Derecho Internacional, XLI, 1989, II.

- Fernández Rozas, J. C.: "La Banca extranjera en España. El acceso al ejercicio de la actividad bancaria por los extranjeros en el Derecho español", Oviedo, 1981.
- Ferrer Peña, R. M.: "Los derechos de los extranjeros en España", editorial Tecnos, 1989.
- Flórez, P. E.: "Memorias de los Reinos Católicos de España", Madrid, Antonio Marín, 1767.
- Fustel de Coulanges, N. D.: "La Cité antique", traducción al castellano de M. Siges Aparicio, Madrid, 1920.
- García de Cortázar, J. A.: "Una mirada foránea sobre la Cataluña medieval con ocasión de su ¿milenario?", Cuenta y Razón, nº 36, abril-mayo, 1988.
- García de Enterria, E.: "El Derecho administrativo en el siglo XXI", en la revista jurídica "La Ley", número 2.603, 25 de octubre de 1990.
- García de Enterria, E.: "Turgot y los orígenes del municipalismo moderno", en Revista de Administración Pública, número 33, 1960.
- García de Enterria, E.: "Algunas reflexiones sobre el Derecho administrativo norteamericano (A propósito de una nueva exposición sistemática del mismo)", en Revista de Administración Pública, número 85, 1978.
- García de Valdeavellano, L.: "Historia de España. I. De los orígenes a la Baja Edad Media", segunda parte, tercera edición, Revista de Occidente, 1963.
- García Gallo, A.: "Curso de Historia del Derecho Español", 1947, I.
- García Gallo, A.: "Manual de Historia del Derecho Español", 10ª reimpresión, Madrid, 1984.
- García Gallo, A.: "Nacionalidad y territorialidad del Derecho en la época visigoda", en AHDE, XIII.
- García Gallo, A.: "La territorialidad en la legislación visigoda: respuesta al profesor Merêa", en AHDE, XIV.
- García Mercadal, J.: "Viajes de extranjeros por

España y Portugal", 3 Tomos, Aguilar, Madrid, 1952-1982.

- García Rives: "Condición jurídica de los extranjeros en Castilla y León desde el Fuero de León (1020) hasta el Código de las Siete Partidas". Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1920.
- García de Valdeavellano, L.: "La Historia de España. I. De los orígenes a la Baja Edad Media", segunda parte, tercera edición, "Revista de Occidente", 1963.
- Gaudemet, J.: "Le étranger au Bas-Empire", RSJB, citado, I.
- Gibert, R.: "La condición de los extranjeros en el antiguo Derecho español", RSJB, citado, II.
- Gillisen, J.: "Le status des étrangers à la lumière de l'histoire comparative", RSJB, citado, I.
- Gillisen, J.: "Le status des étrangers en Belgique du XIII^e à XX^e siècle", RSJB, citado, II.
- Gómez-Martínez, J. L.: "Américo Castro y el origen de los españoles: Historia de una polémica", Biblioteca Románica Hispánica, Editorial Gredos, Madrid, 1975.
- González Campos, J.D.; Fernández Rozas, J.C.; y Recondo Porrúa, R.: "Derecho internacional privado. Parte especial", Vol. I, Oviedo, Ojanguren, 1984.
- González Vicén, F.: "La crítica de Marx a la Escuela Histórica", en "De Kant a Marx (Estudios de Historia de las Ideas)", Valencia, 1984.
- Griollet, G. y Verge, Ch.: "Repertoire pratique de Legislation, de Doctrine y de Jurisprudence", Ed. Dalloy, París, tomo 5.
- Grocio, H.: "De iure belli ac pacis libri tres", París, 1613.
- Hernández Gil, A.: "Metodología de la ciencia del Derecho", Madrid, 1971, tomo I.
- Hinojosa, E. de.: "Obras", tres tomos (1948, 1955, 1973).

- Iriarte Angel, J. L.: "Los principios de igualdad y reciprocidad en el Derecho español", tesis doctoral publicada con el título "De la reciprocidad a la igualdad en resumen en el goce de los derechos civiles por los extranjeros: examen de su evolución histórica en el ordenamiento español (1808-1979)", en "Estudios de Deusto", Bilbao, Volumen XXXIII, enero-junio, 1985.
- Jandot Danjou, C.: "La condition civile de l'étranger dans les trois derniers siècles de la Monarchie", París, Sirey, 1939.
- Jordan de Asso, I. y de Manuel y Rodríguez, M.: "Instituciones del Derecho Civil de Castilla", 1792.
- Kirpatrick, R.: "Le statut des étrangers en droit anglais au cours des derniers siècles", en RSJB, citado, II.
- Lacroix : "Les étrangers à Delos pendant la période de l'indépendance", "Melanges Glotz", 1932, citado por H. Lewald, "Conflits de lois dans le monde grec et romain", Revue critique de Droit international privé", 1968.
- Lalinde Abadía, J.: "Los Fueros de Aragón", 1976.
- Lanza, P.: "Estradizione", Milan, Società Editrice Libreria, 1910.
- Lapradelle, A. de y Niboyet, J.P.: "Répertoire de Droit International", París, 1970, VIII.
- Larruga Bonete, E.: "Historia de la Junta de Comercio, Industria y Minas. Dependencia de Extranjeros", Varios volúmenes manuscritos existentes en la biblioteca central del Ministerio de Hacienda; trabajo citado por G. Anes en "El Antiguo Régimen: los Borbones", en "Historia de España", Alfaguara, IV, 1975.
- Lasso Gaité, J.F.: "Crónica de la codificación española", 4, "Codificación civil", volumen II, Madrid, 1970.
- López Ferreiro, A.: "Fueros municipales de Santiago y su tierra", Santiago de Compostela, 1875. Hay otra edición de Madrid, 1975.

- Madariaga, S. de.: "Españoles de mi tiempo", Editorial Planeta, Barcelona, 1974.
- Mañanes, T.: "Asturica Augusta y su convento jurídico", Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos, Sada-La Coruña, 1976, pág. 37 a 44.
- Maravall, J.A.: "El concepto de España en la Edad Media", Instituto de Estudios Políticos, 1964.
- Marniéra, E. S. de la.: "Le statut de l'étranger et le Marché Commun", publicado con ocasión del 57ème Congrès de Notaires, 1959.
- Marqués de Olivart: "Tratado de Derecho Internacional", II, Madrid, 1886.
- Miaja de la Muela, A.: "Derecho Internacional privado", Volumen II, parte especial, 10ª edición, revisada, Madrid, 1987.
- Mateu y Sanz, L.: "Tratado de la celebración de Cortes Generales en el Reino de Valencia", Madrid, por Julián de Paredes, 1667.
- M. D'Aulnoy: "Memorias de la Corte de España", en "Viajes de extranjeros por España y Portugal" tomo II, siglo XVII, recopilación, traducción, prólogo y notas por J. García Mercadal, Editorial Aguilar, Madrid, 1959.
- Meijers, E. M.: "L'histoire des principes fondamentaux du droit international privé à partir de moyen âge, spécialement dans l'Europe occidentale", R. des C.", t. 49 (1943-III).
- Mesa-Moles Martell, M. P.: "Las soluciones al tráfico externo en el Derecho romano". "Una oferta científica iushistórica internacional al Doctor J. M. Font i Rius por sus ocho lustros de docencia universitaria", Barcelona, P.P.V., 1985.
- Montesinos Ferrín, E. y Sánchez-Arcilla, J.: "Introducción a la Historia del Derecho", I, Dickinson, Madrid, 1988.
- Niederer, W.: "Centerum quaero de legum imperii romani conflictu", Revue critique de droit international privé, 1960.

- **Oppenheim, L.:** "Tratado de Derecho Internacional público", 8ª edición inglesa, a cargo de Sir Henschel, traducida por J. López Oliván y J. M. Castro-Rial, Ed. Bosch, Barcelona, 1961, tomo I, volumen I.
- **Orús y Arregui, J. R. de:** "Manual de Derecho Internacional Privado", Instituto Editorial Reus, 3ª edición, Madrid, 1953.
- **Pecourt García, E.:** "Una institución singular en la Historia del Derecho Internacional Privado Español: el fuero de extranjería", en "Estudios de Derecho Internacional Público y Privado, homenaje al Profesor Luis Sala Sampil", Universidad de Oviedo, 1970.
- **Pérez-Prondas, J. M.:** "Historia del Derecho español. Parte general", Ediciones Darro, Madrid, 1963.
- **Pillet, A. y Niboyet, J.P.:** "Principios de Derechos Internacional Privado", selección de la segunda edición francesa, traducida y adicionada con legislación española por Andrés Rodríguez Ramón, Instituto Editorial Reus, segunda edición, Madrid,
- **Firenne, J.:** "Le status de l'étranger dans l'ancienne Egypte", RSJB, citado, I.
- **Poliakov, L.:** "Historia del antisemitismo", Ediciones Siglo Veinte, Buenos Aires, s. a., tres tomos.
- **Préaux, C.:** "Les étrangers à l'époque hellénistique (Egypte-Délos-Rhodes)", RSJB, citado, I.
- **Priole, S. y Verge, ch.:** "Repertoire Pratique de Legislation, de Doctrine y de Jurisprudence", Ballez, París, 1913.
- **Quintano Ripollés:** "Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal", II, Madrid, 1957.
- **Ramos Loscertales, J. M.:** "Hospicio y clientela en la España celtica. Notas para su estudio", en "Emérita", X, 1942.
- **Ramos Loscertales, J. M.:** "La devotio ibérica. Los soldurios", en AHDE, I, 1929.
- **Recondo, R.:** "El Sistema del Fuero de Extranjería (Contribución de la competencia internacional de los

- tribunales españoles)", publicado en "Estudios de Deusto", XXVI a XXVIII, 1978, 1979 y 1980.
- Rizzo, V. N. : "Osservazioni sulla evoluzione del diritto internazionale privato nel medi evo", "Annuario di diritto internazionale", 1967/68.
 - Roth, C.: "Los judíos secretos. Historia de los marranos", Altalena Editores, Madrid, 1979.
 - Ruiz Lagos, M.: "Ilustrados y reformadores en la Baja Andalucía", Editora Nacional, Madrid, 1974.
 - Ruiz de la Peña.: "Las "polas" asturianas en la Edad Media", Universidad de Oviedo, 1981.
 - Salach, J. Ma : "Sociedad tradicional y orígenes de Cataluña", Cuenta y Razón, nº 36, abril-mayo, 1988, pág. 45-54.
 - Sánchez-Albornoz, C.: "El reino de Asturias. Orígenes de la nación española", Biblioteca Histórica Asturiana, Gijón, 1989.
 - Sánchez-Albornoz, C.: "España, un enigma histórico", EDHASA, Barcelona, dos tomos, 1973.
 - Sánchez-Albornoz, C.: "Orígenes de la nación española. Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias", Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, tres tomos, 1972-1974.
 - San Isidoro de Sevilla: "Las Etimologías", edición bilingüe de José Oroz, Manuel Marcos y Manuel C. Díez, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1982.
 - Sharer, I. A.: "Extradition in International Law", Manchester, University Press, 1971.
 - Simó Santonja, V. L.: "Estatuto de los extranjeros en el antiguo Derecho valenciano", Ediciones de la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, 1973.
 - Sobrequés, J.: "Un milenario para Cataluña", Cuenta y Razón, nº 36, abril-mayo, 1988, pág. 55-60.
 - Solís, R.: "El Cádiz de las Cortes", Alianza Editorial, Madrid, 1969.
 - Somoza García-Sala, J.: "Gijón en la Historia General

de Asturias", 1908, I.

- Storti Storch, C.: "Recherche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo Diritto come all'eta preusuitaria. Aspecti civilistici". Dr. A. Giuffr  Editore, Mil n, 1990.
- Stouff, L.: "Il principio della personalita delle leggi delle invasioni barbariche al secolo XII", "Diritto internazionale", vol. XXI, 1967.
- Sturm, F.: "Comment l'Antiquit  r glait-elle ses conflits de lois?", Journal du Droit international, 106  ann e, 1979, n  2.
- Su rez Fern ndez, L.: "Los judios espa oles en la Edad Media", Ediciones Rialp, 1980.
- Thieme, H.: "Die rechtss telling der Freuden in Deutschland ron 11. bis zum 18. Jahrhundert", En RSJB, citado, II.
- Thomson, E.A.: "Los godos en Espa a", traducci n de Javier Faci, Alianza Editorial, Madrid, 1971.
- Tom s y Valiente, F.: "Manual de Historia del Derecho espa ol", Madrid, Tecnos, 1981.
- Tom s Ortiz de la Torre, J. A.: "El r gimen jur dico de extranjer a en la Espa a del siglo XVIII y la partici n del extranjero en la industria nacional" (Proyecto de tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid), 1972.
- Torres Campos, M.: "Histoire de la condiction juridique des  trangers dans la legislation espagnoles", en "Journal de Droit International Priv " (Clunet), Paris, 1891.
- Torres Campos, M.: "Elementos de Derecho Internacional Privado", Madrid, 1893.
- Torres Rodr guez, C.: "Galicia sueva", Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, La Coru a, 1978.
- Torres Rodr guez, C.: " La conquista romana de Galicia", en "La romanizaci n de Galicia", Cuadernos del Seminario de Estudios Cer micos de Sargadelos, Sada-La Coru a, 1976.

- Torroba Bernaldo de Quirós, F.: "Los judíos españoles", Toledo, 1977.
- Trias de Bes, J.M.: "La condición jurídica del extranjero en España", en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, tomo 139, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1921.
- Trinidad García, M^a. L.: "La condición jurídica del comerciante extranjero", en Revista de Derecho Mercantil, números 189-190, 1988.
- Uría Riu, J.: "Estudios sobre la Baja Edad Media Asturiana", en "Biblioteca Popular Asturiana", Oviedo, 1979.
- Uría Riu, J.: "Los vaqueiros de alzada y otros estudios (de caza y etnografía)", Biblioteca Popular Asturiana, Oviedo, 1976.
- Valls Taberner, F.: "Literatura jurídica", prólogo y sistematización de M. J. Peláez y J. Calvo González. Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1986.
- Van den Wijngaert, C.: "The Political Offence Exception to Extradition", Deventer, Kluwer, 1980.
- Vareilles-Sommieres: "Le synthése du Droit International Privé", París, 1898.
- Vattel, : "El Derecho de gentes o principios de la Ley natural, aplicados a la conducta y a los negocios de las naciones y de los soberanos", traducida al español por Lucas Miguel Otarena, Madrid, Ibarra, 1822.
- Vázquez de Parga, L.; Lacarra, J. M^a; y Uría Riu, J.: "Las peregrinaciones a Santiago de Compostela", tres tomos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Medievales, Madrid, 1948-1949.
- Vera, V.: "Cómo se viajaba en el siglo de Augusto", Calpe, Madrid, 1925.
- Verplaetse, J. G.: "Derecho Internacional Privado", Madrid, 1954.
- Villers, R.: "La condition des étrangers en France

dans les trois derniers siècles de la Monarchie", RSJB, t. IX, "L'Etranger", II, Bruselas, 1958.

- Vives, J.: "Concilios visigóticos e hispano-romanos", edición preparada con la colaboración de Tomás Marín Martínez y Gonzalo Martínez Díaz, C.S.I.C., Madrid-Barcelona, 1953.
- Volterra, E.: "La perte du droit de cité d'après les juristes postclassiques", "Revue internationale des Droits de l'Antiquité", 1958.
- Volterra, E.: "Quelques problèmes concernant le conflit de lois dans l'Antiquité", "Annuario di Diritto internazionale", 1965.
- Visscher, F. de: "La condition des pérégrines à Rome, jusqu'à la Constitution Antonine de l'an 212", "L'Etranger", Recueils de la Société Jean Bodin, Bruxelles, I, pág. 195-208.
- Weiss, A.: "Traité théorique et pratique de Droit International Privé", II, Paris, 1894.
- Wieacker, F.: "Supuestos históricos y paradigmas de los ordenamientos jurídicos privados supranacionales", Revista de Derecho privado, 1982, pág. 899-911.
- Wolff.: "Institutiones iuris naturæ et gentium", cap. IV, parte IV.
- Yanguas y Miranda, J.: "Diccionario de antigüedades", Diputación Foral de Navarra, 3 tomos, Pamplona, 1964.